

STATE OF NEW YORK)
ESTADO DE NUEVA YORK) ss
)
COUNTY OF NEW YORK)
CONDADO DE NUEVA YORK)

CERTIFICATION/
CERTIFICACIÓN

This is to certify that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Spanish of the attached document.

Por la presente certifico que la traducción adjunta de inglés a español es, a mi leal saber y entender, traducción fiel y exacta del documento adjunto.



Carlos Hoyos, Project Manager/Gerente de proyectos
Geotext Translations, Inc.

Sworn to and subscribed before me/Suscrito y jurado ante mí

this 2 day of November, 20 12.

a los 2 días del mes de November de 20 12.



KENNETH ROBERT HETZEL
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 01HE6246823
Qualified in New York County
My Commission Expires August 15, 2015

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE NUEVA YORK

----- X
CHEVRON CORPORATION,

Demandante,

contra

STEVEN DONZIGER, THE LAW OFFICES OF
STEVEN R. DONZIGER, DONZIGER &
ASSOCIATES, PLLC, PABLO FAJARDO
MENDOZA, LUIS YANZA, FRENTE DE
DEFENSA DE LA AMAZONIA TAMBIÉN
CONOCIDO COMO AMAZON DEFENSE
FRONT, SELVA VIVA SELVIVA CIA, LTDA.,
STRATUS CONSULTING, INC., DOUGLAS
BELTMAN, ANN MAEST, MARIA AGUINDA
SALAZAR, CARLOS GREFA HUATATOCA,
CATALINA ANTONIA AGUINDA SALAZAR,
LIDIA ALEXANDRA AGUINDA AGUINDA,
PATRICIO ALBERTO CHIMBO YUMBO,
CLIDE RAMIRO AGUINDA AGUINDA, LUIS
ARMANDO CHIMBO YUMBO, BEATRIZ
MERCEDES GREFA TANGUILA, LUCIO
ENRIQUE GREFA TANGUILA, PATRICIO
WILSON AGUINDA AGUINDA, CELIA IRENE
VIVEROS CUSANGUA, FRANCISCO MATIAS
ALVARADO YUMBO, FRANCISCO
ALVARADO YUMBO, OLGA GLORIA GREFA
CERDA, LORENZO JOSÉ ALVARADO
YUMBO, NARCISA AIDA TANGUILA
NARVÁEZ, BERTHA ANTONIA YUMBO
TANGUILA, GLORIA LUCRECIA TANGUILA
GREFA, FRANCISCO VICTOR TANGUILA
GREFA, ROSA TERESA CHIMBO TANGUILA,
JOSÉ GABRIEL REVELO LLORE, MARÍA
CLELIA REASCOS REVELO, MARÍA
MAGDALENA RODRÍGUEZ BARCENES,
HUGO GERARDO CAMACHO NARANJO, JOSÉ
MIGUEL IPIALES CHICAIZA, HELEODORO
PATARON GUARACA, LUISA DELIA
TANGUILA NARVÁEZ, LOURDES BEATRIZ
CHIMBO TANGUILA, MARÍA HORTENCIA

11 Civ. 0691 (LAK)

DEMANDA MODIFICADA

SE REQUIERE JUICIO ANTE
JURADO

VIVEROS CUSANGUA, SEGUNDO ÁNGEL :
AMANTA MILÁN, OCTAVIO ISMAEL :
CÓRDOVA HUANCA, ELIAS ROBERTO :
PIYAHUAJE PAYAHUAJE, JAVIER PIAGUAJE :
PAYAGUAJE, DANIEL CARLOS LUSITANDE :
YAIGUAJE, BENANCIO FREDY CHIMBO :
GREFA, GUILLERMO VICENTE PAYAGUAJE :
LUSITANTE, DELFÍN LEONIDAS PAYAGUAJE :
PAYAGUAJE, ALFREDO DONALDO :
PAYAGUAJE PAYAGUAJE, TEODORO :
GONZALO PIAGUAJE PAYAGUAJE, MIGUEL :
MARIO PAYAGUAJE PAYAGUAJE, FERMIN :
PIAGUAJE PAYAGUAJE, REINALDO :
LUSITANDE YAIGUAJE, LUIS AGUSTÍN :
PAYAGUAJE PIAGUAJE, EMILIO MARTÍN :
LUSITANDE YAIGUAJE, SIMON LUSITANDE :
YAIGUAJE, ARMANDO WILFRIDO PIAGUAJE :
PAYAGUAJE, y ÁNGEL JUSTINO PIAGUAGE :
LUCITANTE, :

Demandados. :

----- X

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	1
LAS PARTES Y TERCEROS PERTINENTES QUE NO SON PARTE DE LA ACCIÓN	4
Demandante	4
Los Demandados RICO	4
Co-conspiradores que no son parte de esta acción.....	7
Los Demandados restantes.....	13
COMPETENCIA SOBRE EL ASUNTO Y COMPETENCIA TERRITORIAL.....	15
JURISDICCIÓN EN RAZÓN DE LA PERSONA	15
FUNDAMENTOS DE HECHO DE LAS RECLAMACIONES	22
A. Antecedentes	22
1. TexPet participa en el consorcio petrolero estatal del Ecuador y negocia ser exonerado de responsabilidad civil como contraprestación por una reparación especificada.....	23
2. Los abogados estadounidenses de los demandantes conciben un juicio sin fundamentos contra Chevron en Ecuador	32
B. Los conspiradores están corrompiendo el proceso judicial para extorsionar un pago de parte de Chevron	36
1. Presión sobre la corte de Lago Agrio y fabricación de pruebas	38
a. Aplicación de tácticas de presión y colusión con funcionarios gubernamentales ecuatorianos	38
b. Aprovechándose de un poder judicial ecuatoriano debilitado y cada vez más corrupto	44
c. Manipulación y falsificación de las conclusiones de sus propios peritos para corromper el proceso de inspección judicial.....	48

	<u>Página</u>
(i) Persuasión de un perito para que produzca resultados parcializados y falsos	50
(ii) Presentación de informes periciales falsificados	53
d. Arreglo del nombramiento de Cabrera como perito para el examen pericial global y redacción secreta de su informe presuntamente “independiente”	57
(i) Semanas antes de que la corte designara a Cabrera, los Demandados RICO se reunieron con él para planear su informe pericial “independiente”	58
(ii) La corte nombró a Cabrera como “perito del examen pericial global” “independiente”	62
(iii) Mientras Cabrera orquestaba simulacros de inspecciones, los Demandados RICO y sus co-conspiradores redactan secretamente su informe.....	64
(iv) El Informe “Cabrera”: El fraude repetido de los Demandados RICO	75
(v) Las adhesiones fraudulentas de los Demandados RICO de su “Informe Cabrera” y obtención de otras adhesiones mediante declaraciones falsas	80
(vi) Pagos de los Demandados RICO a Cabrera por trabajo que este no realizó.....	84
(vii) El intento de los Demandados RICO de sanear el “Informe Cabrera”	86
2. Colusión con la República del Ecuador para formular falsos cargos contra los abogados de Chevron	89
3. Lanzamiento de ataques públicos contra Chevron sobre la base de declaraciones engañosas y mentiras para forzarle a pagar.....	96
a. El fraudulento bombardeo mediático.....	96
b. Presentación falsa del Informe Cabrera como “independent” y “neutral”	103

c.	Los Demandados RICO hacen declaraciones falsas a funcionarios del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales de EE.UU.	107
d.	Los conspiradores intentan manipular el precio de las acciones de Chevron para obligara un acuerdo favorable	111
e.	Los Demandados RICO acusan falsamente a Chevron de asesinato para generar escándalo y forzar a que Chevron pague.....	117
C.	La Campaña de mentiras y Obstrucción de los conspiradores en los tribunales de los EE.UU.	119
1.	Intentos de obstruir los procedimientos de presentación de pruebas de Chevron presentando declaraciones falsas y engañosas ante tribunales de distrito y de apelación de EE.UU.	120
a.	Las manifestaciones iniciales falsas de los Demandados RICO a los tribunales de EE.UU. de que ellos no tenían relación alguna con Cabrera ni papeln alguno en la preparación del “Informe Cabrera”	122
b.	Las declaraciones falsas y engañosas posteriores de los Demandados RICO en un intento de justificar y excusar su conducta emergente.....	128
2.	Realización de declaraciones falsas para engañar a los tribunales de Nueva York en relación con las solicitudes del Artículo 1782 de Chevron y otras ccciones	137
3.	Obstrucción de procedimientos judiciales mediante la corrupción de testigos, la retención de documentos y la formulación de declaraciones falsas ante este Tribunal	140
D.	Chevron ha sufrido daños significativos como consecuencia de la conspiración de los Demandados RICO, y la ejecución de la sentencia corrupta en el Litigio de Lago Agrio profundizaría el daño	144
	PETITORIOS.....	154
	PRIMER PETITORIO	
	(Violaciones de la ley RICO, Artículo 1962(c)).....	154

SEGUNDO PETITORIO

Página

(Conspiración para violar la ley RICO, Violación del Artículo 1962(c))..... 172

TERCER PETITIO

(Fraude)..... 174

QUARTO PETITORIO

(Interferencia ilícita con el Contrato)..... 176

QUINTO PETITORIO

(Entrada sin autorización en propiedad ajena)..... 177

SEXTO PETITORIO

(Enriquecimiento ilícito)..... 179

SÉPTIMO PETITORIO

(Conspiración civil) 180

OCTAVO PETITORIO

(Violaciones del Art. 487 de la Ley Judicial de Nueva York)..... 182

NOVENO PETITORIO

(Solicitud de Sentencia Declarativa de que la Sentencia por la Corte de Lago Agrio contra Chevron no es exigible ni reconocible judicialmente) 183

PETITORIO..... 186

La demandante Chevron Corporation (“Chevron”) mediante esta Demanda Modificada contra los Demandados enumerados a continuación alega lo siguiente:

INTRODUCCIÓN

1. En el curso de varios años, el demandado Steven Donziger y sus codemandados y co-conspiradores han buscado extorsionar, defraudar y de otras maneras perjudicar ilícitamente a la demandante Chevron por medio de un plan que concibieron y sustancialmente ejecutaron en los Estados Unidos. Este plan ha sido llevado a cabo por una empresa con sede en los Estados Unidos que comprende, entre otros, a abogados estadounidenses de los demandantes, dirigidos por Donziger; consultores estadounidenses en asuntos medioambientales, dirigidos por Stratus Consulting, Inc., Ann Maest y Doug Beltman; sus colegas ecuatorianos, dirigidos por Pablo Fajardo y Luis Yanza; y sus organizaciones de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía y Selva Viva. En este documento, se refiere conjuntamente a estos co-conspiradores como los “Demandados RICO”.¹ Sus co-conspiradores en la empresa incluyen, entre otros, estudios jurídicos y abogados estadounidenses, tales como Joseph Kohn de Kohn Swift & Graft, P.C., Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP, Motley Rice LLC y Patton Boggs LLP; “activistas” ambientalistas de los Estados Unidos, tales como Atossa Soltani, Amazon Watch y Rainforest

¹ Cuarenta y siete de los 48 individuos ecuatorianos nombrados en el encabezamiento de la demanda de Lago Agrio también son nombrados como demandados en la presente (la excepción es uno que ha fallecido). Hayan o no estos 47 individuos estado activamente involucrados con los actos corruptos descritos en esta Demanda Modificada, o hayan o no tenido conocimiento, o debido tener conocimiento, de ellos, se ha emprendido el Litigio de Lago Agrio y múltiples actos en los tribunales de los Estados Unidos en nombre suyo, así como en nombre del Frente de Defensa de la Amazonía, por los otros demandantes o por aquellos que actúan en común acuerdo con ellos o de parte de ellos. Por consiguiente, son indirectamente responsables por los actos ilícitos civiles de sus agentes, emprendidos en nombre de ellos, no pueden de ninguna manera beneficiarse de una sentencia obtenida en forma corrupta, y cualquiera reparación que obtenga Chevron mediante esta acción o por otros medios legales se aplica en forma igual a estos 47 individuos ecuatorianos quienes, por lo tanto, estarían necesariamente actuando de acuerdo común con sus agentes corruptos.

Action Network; consultores en relaciones públicas de los Estados Unidos, tales como Karen Hinton; y financistas adicionales tales como Russell DeLeon y el Burford Group.

2. El objetivo final de la empresa es crear suficiente presión sobre Chevron en los Estados Unidos para extorsionar a la compañía a que pague para detener la campaña en su contra. Los Demandados RICO han buscado infligir el máximo “daño a [la] reputación [de Chevron]”, poner “presión psicológica personal...[sobre] sus altos ejecutivos”, entorpecer las relaciones de Chevron con sus accionistas e inversores, provocar investigaciones de los gobiernos estatales y federal de los Estados Unidos y de esa manera forzar a la compañía a que pague un arreglo.

3. Para efectuar este plan, los Demandados RICO y sus co-conspiradores iniciaron un litigio engañoso en Lago Agrio, Ecuador (el “Litigio de Lago Agrio”), afirmando que solicitaban una indemnización monetaria en daños y perjuicios por los “derechos colectivos ambientales” de las “comunidades” “afectadas” para reparar una supuesta contaminación de petróleo en la región Oriente del Ecuador. El Litigio de Lago Agrio fue dirigido y financiado principalmente desde los Estados Unidos por residentes de este país, tales como Donziger y Kohn. En la tramitación del Litigio de Lago Agrio, los Demandados RICO y sus co-conspiradores participaron en una serie de actos corruptos. Por ejemplo, presentaron en el Litigio de Lago Agrio pruebas inventadas en forma de informes periciales a nombre de un consultor estadounidense sobre asuntos medioambientales, el Dr. Charles Calmbacher, que este no preparó ni aprobó. También presionaron a un consultor estadounidense en asuntos medioambientales, David Russell, para que generara una cifra por daños y perjuicios inflada de US\$ 6.000 millones, la que nunca presentaron en Lago Agrio; en vez de eso, hicieron alardes sobre dicha cifra ante la prensa y, a través de la co-conspiradora Amazon Watch, la presentaron a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos en un intento de provocar una investigación en conformidad con la ley Sarbanes-Oxley. Además, hicieron arreglos para la designación de Richard Stalin Cabrera Vega (“Cabrera”) como el perito único de la corte ecuatoriana para llevar a cabo un “peritaje global”. Se reunieron entonces secretamente con Cabrera para planear su

informe y, en los Estados Unidos, escribieron secretamente para Cabrera el informe y sus anexos que este adoptó “casi literalmente”. Los consultores radicados en los Estados Unidos, que son parte de los Demandados RICO, redactaron “observaciones” que pretendían criticar “el trabajo y conclusiones del perito”, aun cuando ellos mismos habían escrito el informe inicial, y entonces secretamente redactaron las respuestas “de Cabrera” a sus propias “observaciones”, incrementando su falsa evaluación de los daños y perjuicios a más de US\$ 27.000 millones. Además, los Demandados RICO han adoptado una estrategia para intimidar a los jueces ecuatorianos, a quienes han descrito como “toman[do] decisiones de acuerdo a quién temen más, no de acuerdo a lo que establecen las leyes”, y coludieron con la República del Ecuador para lograr que se presenten cargos penales falsos contra los abogados de Chevron.

4. Para presionar a Chevron en los Estados Unidos, los Demandados RICO han citado estas pruebas inventadas, el informe supuestamente “independiente” de Cabrera y estos cargos penales inventados en declaraciones falsas al Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, agencias regulatorias estatales y federales, incluida la Comisión de Valores y Bolsas, los medios estadounidenses y los accionistas de Chevron, entre otros. También han hecho declaraciones falsas en los tribunales de los Estados Unidos en un intento de encubrir sus fechorías y obstruir los esfuerzos de Chevron para obtener la presentación de pruebas. De hecho, cuando los procesos de presentación de pruebas en los Estados Unidos estaban a punto, el pasado mes de marzo, de requerir la divulgación de la colusión de los Demandados RICO con el perito Cabrera designado por la corte ecuatoriana, los Demandados RICO trataron de retrasar que la verdad saliera a la luz. Como uno de los abogados ecuatorianos le dijo en esa oportunidad al Demandado Donziger, “los efectos” de la divulgación “son potencialmente devastadores en Ecuador (aparte de destruir el juicio, podemos ir todos tus abogados a la cárcel)”. El abogado estadounidense estuvo de acuerdo, admitiendo en una extraordinaria serie de correos electrónicos internos que “pareciera entonces que no sólo Cabrera y los demandantes pueden ser acusados de ‘fraude’ con respecto al informe Cabrera, sino también Stratus puede ser señalada como conspiradora activa”. Sin disuadirse, sin embargo,

Donziger y otros abogados estadounidenses se confabularon entonces para “limpiar” el escándalo Cabrera presentando a la corte de Lago Agrio el pasado mes de septiembre nuevos informes periciales que en gran medida se basaban en el fraudulento Informe “Cabrera”, pero que incrementaban la indemnización por daños y perjuicios solicitada a US\$ 113.000 millones.

5. La conducta de los Demandados RICO viola la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas, artículos 1961 y siguientes del Título 28 del Código de los Estados Unidos [RICO, por sus siglas en inglés], con actos previos de extorsión, fraude por uso del correo y medios electrónicos, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y corrupción de testigos, entre otros. Además, la conducta de los Demandados constituye fraude según el derecho consuetudinario, enriquecimiento injusto, interferencia intencional con contratos, violación de derechos relativos a bienes muebles y asociación ilícita civil, entre otros. Como consecuencia, la mala de conducta de los Demandados otorga derecho a Chevron a una orden de protección judicial que impida que los Demandados intenten hacer cumplir la sentencia que emane del proceso en Lago Agrio, Ecuador; a una sentencia declaratoria de que la sentencia de Lago Agrio es inejecutable; a la indemnización por daños y perjuicios; y a otras reparaciones.

LAS PARTES Y TERCEROS PERTINENTES QUE NO SON PARTE DE LA ACCIÓN

Demandante

6. La Demandante Chevron Corporation (“Chevron”) es una sociedad mercantil de Delaware con sede social ubicada en 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583. Por lo tanto, Chevron tiene ciudadanía de Delaware y California.

Los Demandados RICO

7. Los Demandados enumerados en los párrafos 8 al 17, inclusive, son los individuos que se han confabulado para participar en un patrón de actividades organizadas de extorsión, cada uno de los cuales ha cometido numerosos actos delictivos como parte de su plan para defraudar y extorsionar a Chevron, y cada uno de los cuales ha participado en la operación

o dirección de la empresa criminal. En este documento, se hará referencia a estos Demandados como los “Demandados RICO”.

8. El Demandado Steven Donziger (“Donziger”) es en la actualidad un abogado “consultor” del Frente de Defensa de la Amazonía en el Litigio de Lago Agrio y, según él se ha descrito a sí mismo como, “la persona principalmente responsable por organizar y supervisar el equipo”. Donziger es un individuo domiciliado en Nueva York, Nueva York, donde tiene la intención de residir de manera indefinida, y por lo tanto es ciudadano del Estado de Nueva York. El ejercicio de jurisdicción sobre Donziger en este Distrito es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 25, *infra*.

9. El Demandado The Law Offices of Steven R. Donziger es un negocio de propiedad individual ubicado en 245 W. 104th Street, #7D, Nueva York, Nueva York 10025, y es por lo tanto ciudadano del estado de Nueva York. El ejercicio de jurisdicción sobre el estudio jurídico The Law Offices of Steven R. Donziger en este Distrito es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 26, *infra*.

10. La Demandada Donziger & Associates, PLLC, es una sociedad profesional de responsabilidad limitada ubicada en 245 W. 104th Street, #7D, Nueva York, Nueva York 10025, y es por lo tanto ciudadana del estado de Nueva York. El ejercicio de jurisdicción sobre Donziger & Associates, PLLC es razonable y apropiado en este Distrito por las razones establecidas en el párrafo 26 *infra*.

11. El Demandado Pablo Fajardo Mendoza (“Fajardo”) es el procurador judicial del Frente de Defensa de la Amazonía así como el supuesto el procurador judicial de los demandantes nombrados del Litigio de Lago Agrio. Fajardo es un individuo con domicilio en el Ecuador, donde tiene la intención de residir indefinidamente, y es por lo tanto ciudadano del Ecuador. El ejercicio de jurisdicción sobre Fajardo es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 28, *infra*.

12. El Demandado Luis Yanza (“Yanza”) es cofundador del Frente de Defensa de la Amazonia y es o ha sido el gerente general de la Demandada Selva Viva. Yanza es un individuo

con domicilio en el Ecuador, donde tiene la intención de residir indefinidamente, y es por lo tanto ciudadano del Ecuador. El ejercicio de jurisdicción sobre Yanza es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 29, *infra*.

13. El Demandado Frente de Defensa de la Amazonia, alias el Amazon Defense Front o la Coalición de Defensa de la Amazonia (el “Frente” o el “Front”), es una organización “sin fines de lucro” que pretende representar a los “demandantes” en el Litigio de Lago Agrio. El Frente es el “beneficiario” y “fiduciario” designado de un fideicomiso exigido por la sentencia en el Litigio de Lago Agrio (el “Fideicomiso de la Sentencia”), y pretende administrar el producto de la sentencia entablada contra Chevron. El Frente es una organización sin fines de lucro constituida de conformidad con las leyes del Ecuador, con oficinas ubicadas en el pueblo de Nueva Loja (Lago Agrio) en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. El Frente es por lo tanto ciudadano del Ecuador. El ejercicio de jurisdicción sobre el Frente es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 30, *infra*.

14. La Demandada Selva Viva, alias Selva Viva CIA, Ltda. (“Selva Viva”) es o era una sociedad de responsabilidad limitada ecuatoriana con una oficina ubicada en calle Shirys 1240, Tumbaco, Ecuador. Selva Viva es por lo tanto ciudadana del Ecuador. El Demandado Frente creó Selva Viva para administrar los fondos para el litigio. El Demandado Frente controla Selva Viva, el Demandado Donziger es o ha sido el presidente de Selva Viva y el Demandado Yanza es o ha sido el gerente general de la misma. El ejercicio de jurisdicción sobre Selva Viva es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 31, *infra*.

15. La Demandada Stratus Consulting, Inc. (“Stratus”) proporcionó diversos servicios de consultoría en temas del medioambiente a los Demandados RICO, y estuvo involucrada en la producción del informe pericial supuestamente “independiente” presentado en el Litigio de Lago Agrio. Stratus es una sociedad mercantil privada constituida en Colorado con sede social en 1881 Ninth Street, Suite 201, Boulder, Colorado 80302, y es por lo tanto ciudadana de Colorado. El ejercicio de jurisdicción sobre Stratus es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 27, *infra*.

16. El Demandado Douglas Beltman (“Beltman”) es Vicepresidente Ejecutivo de Stratus. Beltman es un individuo con domicilio en Colorado, con la intención de residir en dicho lugar indefinidamente, y es por lo tanto ciudadano de Colorado. El ejercicio de jurisdicción sobre Beltman es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 27, *infra*.

17. La demandada Ann Maest (“Maest”) es Científica Administradora en Stratus. Maest se domicilia en Colorado, donde tiene la intención de residir indefinidamente, y es por lo tanto ciudadana de Colorado. El ejercicio de jurisdicción sobre Maest es razonable y apropiado por las razones establecidas en el párrafo 27, *infra*.

Co-conspiradores que no son parte de esta acción

18. Ciertos otros individuos y entidades comerciales que no son parte de esta acción desempeñaron roles directos o indirectos en el plan para defraudar y extorsionar a Chevron. Los principales de estos individuos y entidades comerciales son los siguientes:

- a. Joseph Kohn (“Kohn”) del estudio jurídico Kohn Swift & Graf, P.C. es un abogado que fue abogado “consultor” del Frente de Defensa de la Amazonía en el Litigio de Lago Agrio y la principal fuente de fondos para dicho litigio y para muchas de las actividades ilícitas descritas en esta Demanda Modificada. Kohn es residente de Pennsylvania.
- b. Kohn Swift & Graf P.C. (“Kohn Swift”) es una sociedad profesional ubicada en One South Broad Street, Suite 2100, Philadelphia, Pennsylvania 19107. Kohn Swift ha financiado el Litigio de Lago Agrio como uno de sus “casos estelares” y otras actividades ilícitas de los co-conspiradores.
- c. Joshua Lipton (“Lipton”) es el presidente de Stratus y tiene su domicilio en Colorado. Junto con los Demandados RICO, Lipton coordinó y supervisó el uso de Stratus y otros recursos por parte de los Demandados RICO para escribir secretamente el Informe Cabrera a nombre de este y publicitar sus conclusiones. Para estos fines, Lipton se reunió con Donziger para discutir el plan de los

Demandados RICO para redactar porciones del Informe Cabrera y fue incluido en diversas correspondencias concernientes al trabajo de Stratus en escribir secretamente el Informe Cabrera en nombre de su presunto autor.

- d. David Chapman (“Chapman”) es Socio en Stratus y tiene su domicilio en Colorado. Chapman propuso a Donziger redactar el Informe Cabrera, trabajó con Lipton y los Demandados RICO para coordinar el uso de los recursos de Stratus para escribir secretamente el Informe Cabrera en nombre del presunto autor y participó en la posterior obstrucción de los esfuerzos de Chevron para descubrir pruebas del fraude en procesos ante tribunales de los Estados Unidos. Se reunió con Donziger para discutir el plan de los Demandados RICO para escribir secretamente el Informe Cabrera en nombre del presunto autor, firmó un informe de Stratus respaldando el Informe Cabrera y cometió perjurio en una declaración jurada en la que testificó que no tenía razones para creer que Stratus hubiera entregado producto del trabajo de la firma a Cabrera.
- e. William Powers (“Powers”) es un subcontratista de Stratus y tiene su domicilio en California. Powers era responsable de componentes del plan fraudulento de escribir secretamente el Informe Cabrera en nombre de su presunto autor; trabajó en dos anexos del Informe Cabrera y redactó porciones del informe ampliatorio de Cabrera.
- f. Amazon Watch es una organización “sin fines de lucro” con su sede social ubicada en 221 Pine Street, San Francisco, California 94104. Amazon Watch se encarga de diversos proyectos ostensiblemente en nombre de causas medioambientales y de derechos humanos en la cuenca amazónica. En relación con el Litigio de Lago Agrio, Amazon Watch utilizó su experiencia y recursos en relaciones públicas, con los medios y con autoridades gubernamentales para usar el Informe Cabrera y otras afirmaciones falsas y fraudulentas como la base para la campaña de presión pública de los Demandados RICO contra Chevron. Junto con

el Frente de Defensa de la Amazonía, Amazon Watch mantiene al menos uno de los sitios web de los Demandados RICO, chevrontoxico.com, y a través de ese y otros medios distribuye declaraciones falsas y engañosas como parte del plan de extorsión de los Demandados RICO. Kohn y Kohn Swift proveen importante apoyo financiero las actividades de Amazon Watch.

- g. Atossa Soltani (“Soltani”) es la fundadora y directora ejecutiva de Amazon Watch y, en calidad de tal, Soltani en repetidas oportunidades difundió declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio como parte del plan de extorsión de los Demandados RICO. También ha trabajado con Donziger, Yanza y otros Demandados RICO para coordinar la campaña de presión pública contra Chevron y para desarrollar la estrategia de los Demandados RICO para manipular la Corte de Lago Agrio por medio de la intimidación y la colusión con la República del Ecuador. Soltani tiene su domicilio en California.
- h. Rainforest Action Network (“RAN”) es una organización “sin fines de lucro” con su sede social ubicada en 221 Pine Street, San Francisco, California 94104. La organización se especializa en boicots, manifestaciones y otros medios de alto perfil para ejercer presión sobre las sociedades mercantiles a las que percibe como una amenaza para los bosques tropicales del mundo. En estrecha coordinación con Amazon Watch (con la que comparte la ubicación de sus sedes sociales), RAN ha organizado manifestaciones y boicots contra Chevron y difundido declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio. RAN también mantiene al menos uno de los sitios web, changechevron.org, a través del cual los Demandados RICO difunden declaraciones falsas y engañosas.
- i. Richard Stalin Cabrera Vega (“Cabrera”) es un ingeniero en minas y perito de la corte en el Litigio de Lago Agrio y se domicilia en Ecuador. Los Demandados RICO lograron su designación como perito judicial presuntamente independiente en el Litigio de Lago Agrio. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores le

pagaron por su colaboración para firmar un informe fraudulento escrito secretamente en su nombre por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y repetidas veces ha hecho declaraciones falsas con respecto a su independencia.

- j. Alberto Wray (“Wray”) es el anterior procurador de los demandantes del Litigio de Lago Agrio y tiene su domicilio en Washington, D.C. Wray anteriormente prestó servicios en la Corte Suprema del Ecuador y tiene contactos políticos importantes en dicho país. Los Demandados RICO han utilizado los contactos de Wray para lograr el inicio de investigaciones penales fraudulentas contra los abogados de Chevron.
- k. Cristóbal Bonifaz (“Bonifaz”) del Law Offices of Cristóbal Bonifaz [Estudio Jurídico de Cristóbal Bonifaz] fue procurador judicial de los demandantes en dos demandas que fueron radicadas en el Distrito Sur de Nueva York, *Aguinda contra Texaco, Inc.*, No. 93 Civ. 7527 (D.S.N.Y. 3 de noviembre de 1993), y *Jota contra Texaco, Inc.*, No. 94 Civ. 9266 (D.S.N.Y. 28 de diciembre de 1994). Bonifaz está domiciliado en Massachusetts. Hasta el año 2006, o alrededor de esa fecha, Bonifaz fue también un abogado consultor del Frente, y presuntamente de los demandantes nombrados, en el Litigio de Lago Agrio.
- l. Juan Pablo Saenz (“Saenz”) es un abogado ecuatoriano que afirma representar a los demandantes en el Litigio de Lago Agrio, y es un intermediario clave entre los Demandados Rico y la República del Ecuador. También ha firmado declaraciones falsas y engañosas radicadas en los tribunales de los EE. UU., incluyendo el Distrito Sur de Nueva York.
- m. Julio Prieto (“Prieto”) es un abogado ecuatoriano que afirma representar a los demandantes en el Litigio de Lago Agrio. Prieto fue un participante clave en la obstrucción de la actividad judicial de los Demandados Rico en los tribunales de los EE. UU., y propuso litigio y actividades de relaciones públicas en los Estados

Unidos que fueron emprendidos por los Demandados Rico para ocultar la evidencia de su maquinación fraudulenta.

- n. Karen Hinton (“Hinton”) es vocera del Frente en los Estados Unidos y se domicilia en Virginia. Hinton ayudó a los Demandados RICO en el desarrollo de su campaña de presión pública y, a menudo en concertación con Amazon Watch, es autora de comunicados y declaraciones de prensa de naturaleza falsa y engañosa acerca del Litigio de Lago Agrio para promover el plan de extorsión de los Demandados RICO.
- o. E-Tech International (“E-Tech”) es una firma consultora sobre asuntos del medioambiente ubicada en 231 Las Mananitas, Santa Fe, New Mexico 87501. E-Tech proporcionó diversos servicios de consultoría en asuntos medioambientales a los Demandados RICO y ayudó a estos a redactar en secreto al plan de trabajo de Cabrera, y coludió con este último de otras maneras.
- p. Burford Capital Limited, Burford Group Limited, Burford Group LLC, Burford Advisors LLC, y Treca Financial Solutions (conjuntamente, “Burford”) son entidades asociadas cuyo negocio es el financiamiento de litigios. Burford Capital Limited está registrada en la jurisdicción de Guernsey y cotiza en el Mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres. Burford Group Limited es también una sociedad mercantil de Guernsey, y lleva a cabo sus actividades en los Estados Unidos a través de su filial Burford Group LLC, que tiene su sede principal en 1185 Avenue of the Americas, New York, New York 10036. Burford Advisors también tiene su sede principal en 1185 Avenue of the Americas, New York, New York 10036. Treca Financial Solutions está registrada en las Islas Caimán, y es un instrumento de financiamiento establecido por Burford para canalizar el apoyo financiero a los Demandados Rico. Burford comenzó a trabajar con los Demandados Rico en 2009 y comenzó a financiar el Litigio de Lago Agrio en el año 2010.

- q. Russell DeLeon (“DeLeon”) es un amigo de la facultad de derecho de Donziger y un empresario cuyas actividades comerciales incluyen PartyGaming Plc, una empresa de juegos de azar en línea con sede social en Gibraltar. DeLeon ha financiado las actividades de los Demandados RICO por varios años, proporcionándoles más de US\$ 1.000.000 de apoyo, y ha hecho pagos directamente a individuos ecuatorianos, incluidos Fajardo y otros. DeLeon ha canalizado parte o todos estos fondos a través de Torvia Limited, una empresa constituida bajo las leyes de Gibraltar.
- r. Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP (“Emery Celli”) es un estudio jurídico ubicado en 75 Rockefeller Plaza, 20th Floor, New York, New York 10019. Emery Celli ha encabezado los esfuerzos de obstrucción de la justicia y encubrimiento de los Demandados RICO en los Estados Unidos, realizando numerosas presentaciones sin fundamento en oposición a los procedimientos de descubrimiento de pruebas de Chevron ante tribunales de los Estados Unidos con el fin expreso de retardar estos procedimientos y “ganar tiempo” para el plan delictivo de los Demandados RICO.
- s. Patton Boggs LLP (“Patton Boggs”) es un estudio jurídico con su sede social en 2550 M Street, NW, Washington D.C. 20037. Patton Boggs ha desarrollado la estrategia de los Demandados RICO para ir contra los activos de Chevron y sus filiales en todo el mundo sobre la base de la sentencia fraudulenta en Ecuador, y también ha sido instrumental en las actividades de encubrimiento y obstrucción de la justicia de los procesos de divulgación de pruebas de Chevron.
- t. Motley Rice LLC (“Motley Rice”) es un estudio jurídico con una oficina ubicada en One Corporate Center, 20 Church St., Hartford, Connecticut 06103. Motley Rice ha participado en la obstrucción de los esfuerzos de descubrimiento de pruebas de Chevron en los Estados Unidos.

- u. H5 es una sociedad mercantil del Estado de California con sede principal en 71 Stevenson St., San Francisco, California 94105. H5 ha participado en la planificación e implementación de la maquinación de los Demandados Rico, incluyendo la “limpieza” del Informe Cabrera y la obstrucción de los esfuerzos de presentación de pruebas por parte de Chevron en los EE. UU.

19. En todo momento pertinente para esta acción, todos y cada uno de los terceros nombrados en el párrafo 18 que no son parte de esta acción actuaron en concertación con uno o más de los Demandados RICO o como agente de estos y, además, como se describe en mayor detalle a continuación, se confabuló con uno o más de los otros Demandados RICO para llevar a cabo los actos que se afirman en este documento.

Los Demandados restantes

20. El Litigio de Lago Agrio fue aparentemente interpuesto en representación de 48 individuos ecuatorianos identificados,² a los que se hace referencia en este documento como los Demandantes de Lago Agrio. Durante todo momento relevante, los Demandantes de Lago Agrio han sido individuos con residencia en la República del Ecuador. Los Demandantes de Lago Agrio son aquellos individuos identificados en el Apéndice A de esta Demanda Modificada, el cual está incorporado mediante referencia como si fuese presentada en su totalidad en la presente.

21. Los Demandantes de Lago Agrio no solicitan reparación por daños individuales en la demanda radicada el Litigio de Lago Agrio, y las firmas de veinte de los Demandantes de Lago Agrio en el formulario de la escritura de poder presentada junto con la demanda en el Litigio de Lago Agrio son el producto de una falsificación. El Demandante Fajardo, en una declaración jurada presentada a este Tribunal en enero de 2011, ha afirmado que representa a los Demandantes de Lago Agrio como su procurador en el Litigio de Lago Agrio, y que está

² Uno de estos individuos, Esteban Lusitante Yaiguaje, ha fallecido y por consiguiente no se encuentra nombrado como demandante en esta causa.

autorizado para tramitar y defender sus intereses en otros tribunales nacionales y extranjeros. Según Fajardo, los Demandantes de Lago Agrio le dieron “el poder para representarlos” en el Litigio de Lago Agrio en 2006. En aquel entonces, ellos supuestamente firmaron documentos que le nombraban como su “procurador común”, lo cual le exigía “realizar todas las acciones legales correspondientes para defender los derechos de [ellos]” y le autorizaba “representarlos en relación con la Acción legal de Lago Agrio, y, si fuese necesario, delegar este poder a otros”. Posteriormente, en noviembre del 2010, “al menos cuarenta y uno (41)” de los Demandantes de Lago Agrio supuestamente firmaron poderes notarizados “afirmando” los “poder[es][de Fajardo] para representarlos en la defensa y búsqueda de sus intereses ante los tribunales en Ecuador y los demás países, incluyendo los Estado Unidos”. Además, en estos poderes, los Demandantes de Lago Agrio supuestamente “ratificaron y aprobaron cada una de las acciones realizadas hasta la fecha [por Fajardo] o por otras personas autorizadas por [Fajardo] para actuar en defensa de los intereses de los Demandantes [de Lago Agrio] en la Acción legal de Lago Agrio y en todas las demás acciones relacionadas”. En su declaración, Fajardo indicó que los Demandantes de Lago Agrio que firmaron los poderes en noviembre de 2010, “afirmaron que como abogado principal tengo la autoridad de crear y firmar contratos, contratar y consultar asesores legales, y designar mi poder a otros, de forma parcial o completa, para representar a los Demandantes [de Lago Agrio]”. También declaró que había contratado a varios bufetes de abogados estadounidenses para ayudar con la representación de los Demandantes de Lago Agrio, incluyendo Patton Boggs, Emery Celli y Motley Rice.

22. Independientemente de si los Demandantes individuales de Lago Agrio individuales tenían o tienen conocimiento del fraude que ha sido perpetrado en nombre de ellos por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, los Demandantes de Lago Agrio no pueden beneficiarse del fraude y de los actos corruptos perpetrados supuestamente en su nombre.

COMPETENCIA SOBRE EL ASUNTO Y COMPETENCIA TERRITORIAL

23. Este Tribunal es competente con respecto a los asuntos tratados en las reclamaciones de Chevron de conformidad con los artículos 1331 y 1332 del Título 28 del Código de los Estados Unidos y el artículo 1964 (c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. La primera pretensión de Chevron surge en virtud de los artículos 1961 y siguientes de Título 18 del Código de los Estados Unidos, como más plenamente se muestra a continuación. También existe una completa diversidad de ciudadanía entre las partes y el monto en controversia excede los US\$ 75.000, excluidos intereses y costas. Las reclamaciones de Chevron basadas en leyes estatales surgen del mismo caso o controversia que las reclamaciones basadas en las leyes federales, ya que todas las reclamaciones en esta acción surgen de un núcleo común de hechos operativos. Por lo tanto, este tribunal también tiene jurisdicción complementaria sobre las reclamaciones de Chevron basadas en las leyes estatales, de conformidad con el artículo 1367 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

24. Este Distrito es el foro apropiado para este caso en virtud del artículo 1391(b)(2) del Título 28 del Código de los Estados Unidos, dado que una cantidad sustancial de los acontecimientos que dieron lugar a esta acción ocurrieron en este Distrito, y también en virtud del artículo 1965 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

JURISDICCIÓN EN RAZÓN DE LA PERSONA

25. El ejercicio de jurisdicción sobre el Demandado Donziger es razonable y apropiado en este Distrito porque Donziger es ciudadano del Estado de Nueva York y porque lleva a cabo extensas actividades comerciales en dicho estado. Donziger es el propietario exclusivo del estudio jurídico Law Offices of Steven R. Donziger, que está ubicado y lleva a cabo actividades comerciales en Nueva York. A través de sus actividades en Nueva York, Donziger ha actuado como el cabecilla de la empresa para defraudar y extorsionar a Chevron, trabajando en estrecho contacto con los otros Demandados RICO en este caso. Para las reclamaciones de Chevron por violaciones del artículo 1962 de Título 18 del Código de los

Estados Unidos y de las leyes estatales de Nueva York, el ejercicio de jurisdicción sobre Donziger es apropiado de conformidad con el artículo 1965(a) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y el artículo 301 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York.

26. El ejercicio de jurisdicción sobre el estudio jurídico Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC, es razonable y apropiado en este Distrito porque Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC son ciudadanos de Nueva York, y porque llevan a cabo extensas actividades comerciales en ese Estado. Además, a través de las actividades de Donziger descritas anteriormente, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates PLLC han desempeñado un papel clave en la confabulación contra Chevron. Para las reclamaciones de Chevron por violaciones del artículo 1962 de Título 18 del Código de los Estados Unidos y de las leyes estatales de Nueva York, el ejercicio de jurisdicción sobre Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates PLLC es apropiado de conformidad con el artículo 1965(a) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y el artículo 301 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York.

27. Los Demandados Stratus, Beltman y Maest son todos residentes de los Estados Unidos. Para las reclamaciones de Chevron por violaciones del artículo 1962 de Título 18 del Código de los Estados Unidos, el ejercicio de jurisdicción sobre cada uno de estos Demandados es apropiado en este Distrito de conformidad con el artículo 1965(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. La justicia requiere la aplicación de las disposiciones del artículo 1965(b) del Título del Código de los Estados Unidos con respecto al envío de notificaciones judiciales en todo el país, dado que no hay ningún distrito en el cual todos los Demandados RICO pudieran ser de otra manera conjuntamente enjuiciados. Para las reclamaciones de Chevron conforme a las leyes del Estado de Nueva York, el ejercicio de jurisdicción sobre los Demandados Stratus, Beltman y Maest es apropiado de conformidad al artículo 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York. Por intermedio de sus agentes y co-conspiradores, los Demandados Stratus, Beltman y Maest han transado y continúan transando negocios en el Estado

de Nueva York, y hay un nexo sustancial entre el aprovechamiento intencional del foro en Nueva York por parte de los Demandados Stratus, Beltman y Maest y las reclamaciones de Chevron.

28. El ejercicio de jurisdicción sobre Fajardo es apropiado de conformidad con el artículo 1965(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y el artículo 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York. Fajardo ha transado negocios y participado en conducta ilícita en los Estados Unidos y en Nueva York que ha dado lugar en parte a las reclamaciones de Chevron. Entre otras cosas, Fajardo (i) se reunió con sus co-conspiradores en los Estados Unidos en múltiples ocasiones para planear la redacción secreta del Informe Cabrera en nombre del presunto autor, incluidos viajes a Nueva York para reunirse con Donziger y a Boulder, Colorado; (ii) actuó en los Estados Unidos y Nueva York para ocultar la confabulación y el fraude, incluso testificando falsamente en la causa caratulada *En el asunto de la Solicitud de Chevron*, Causa N.º 10 MC 00002 (D.S.N.Y. 6 de agosto de 2010) que Cabrera era “independiente”, a pesar de que conocía el papel que los Demandados RICO tuvieron en la designación de Cabrera y [en la preparación de] sus informes (*véase ibíd.*, Registro Procesal 31 en Anexo 46); (iii) solicitó y obtuvo fondos para el Litigio de Lago Agrio mientras se encontraba en los Estados Unidos y, según nuestro leal saber y entender, en Nueva York; e (iv) hizo que se comenzara en el Distrito Sur de Nueva York un caso en nombre de los Demandantes de Lago Agrio para que se suspendiera el arbitraje internacional que Chevron ha instituido de conformidad con el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (el “Arbitraje conforme al Tratado”), *Yaiguaje y otros contra Chevron Corp. y Texaco Petroleum Co.*, N.º 10 CV 316 (LBS) (D.S.N.Y. 14 de enero de 2010) (“*Yaiguaje*”). Fajardo también ha participado en actos intencionales, ilegales y/o ilícitos de cuyos efectos Fajardo estaba consciente y que quería que se sintieran en los Estados Unidos y en Nueva York. Por ejemplo, Fajardo ha (i) realizado una multitud de llamadas telefónicas y enviado correos electrónicos y otras formas de comunicación a sus co-conspiradores en los Estados Unidos y en Nueva York con el fin de planear y llevar a cabo su confabulación y fraude; y (ii) orquestado y participado en campañas en los Estados Unidos y en Nueva York para influir a funcionarios federales de los Estados Unidos,

funcionarios del Estado de Nueva York, analistas financieros, inversores y accionistas con el fin de extorsionar dinero de Chevron. También, como se establece en mayor detalle en este documento, los co-conspiradores y agentes de Fajardo han participado en actos intencionales, ilegales y/o ilícitos en los Estados Unidos y en Nueva York. Fajardo era consciente de los efectos de dichos actos en los Estados Unidos y en Nueva York; las actividades de los co-conspiradores y agentes de Fajardo eran para beneficio de este, y sus co-conspiradores y agentes trabajaron bajo la dirección, el control, y a pedido y/o en nombre de Fajardo al cometer esos actos.

29. El ejercicio de jurisdicción sobre Yanza es apropiado de conformidad con el artículo 1965(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y del artículo 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York. Yanza ha transado negocios y participado en conducta ilícita en los Estados Unidos y en Nueva York que ha dado lugar en parte a las reclamaciones de Chevron. Entre otras cosas, Yanza (i) se reunió con sus co-conspiradores en los Estados Unidos en múltiples ocasiones para planear la redacción del Informe Cabrera en nombre del presunto autor, incluidos viajes a Nueva York para reunirse con Donziger y a Boulder, Colorado; (ii) hizo que se transfirieran fondos dentro de los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Ecuador para fomentar las actividades ilícitas de los Demandados RICO; (iii) asistió a reuniones de accionistas de Chevron para intentar presionar a dichos accionistas y a la junta directiva de Chevron para fomentar la confabulación; (iv) solicitó y recibió fondos para el Litigio de Lago Agrio mientras se encontraba en los Estados Unidos y, según nuestro leal saber y entender, en Nueva York, de personas en los Estados Unidos y Nueva York, directamente y mediante otros medios a través de agentes con el propósito de llevar a cabo la confabulación y el fraude; (v) intentó ocultar la confabulación y el fraude haciendo declaraciones falsas y engañosas en los Estados Unidos y en otras partes; e (vi) hizo que se comenzara en el Distrito Sur de Nueva York el caso *Yaiguaje* en representación de los Demandantes de Lago Agrio para suspender el Arbitraje conforme al Tratado iniciado por Chevron. Yanza también ha participado en actos intencionales, ilegales y/o ilícitos de cuyos efectos Yanza estaba consciente y que quería que se sintieran en los Estados Unidos y en Nueva York. Por ejemplo, Yanza ha (i) realizado una

multitud de llamadas telefónicas, enviado correos electrónicos y otras formas de comunicación a sus co-conspiradores en los Estados Unidos y en Nueva York con el fin de planear y llevar a cabo su confabulación y fraude; y (ii) orquestado y participado en campañas en los Estados Unidos y en Nueva York para influir a funcionarios federales de los Estados Unidos, funcionarios del Estado de Nueva York, analistas financieros, inversores y accionistas con el fin de extorsionar dinero de Chevron. También, como se establece en mayor detalle en este documento, los co-conspiradores y agentes de Fajardo han participado en actos intencionales, ilegales y/o ilícitos en los Estados Unidos y en Nueva York. Yanza era consciente de los efectos de dichos actos en los Estados Unidos y en Nueva York; las actividades de los co-conspiradores y agentes de Yanza eran para beneficio de este, y sus co-conspiradores y agentes trabajaron bajo la dirección, el control, y a pedido y/o en nombre de Yanza al cometer esos actos.

30. El ejercicio de jurisdicción sobre el Frente es apropiado de conformidad con el artículo 1965(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y el artículo 301 y 301 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York. El Frente ha sido designado beneficiario y fideicomisario en el Litigio de Lago Agrio y se beneficiará de la sentencia fraudulenta que se emita contra Chevron. Yanza es el cofundador del Frente, Fajardo es un líder de la organización, y en todo momento pertinente a los asuntos tratados en este documento Yanza y Fajardo actuaban como co-conspiradores, agentes y/o alter egos del Frente en la perpetración de la confabulación y fraude contra Chevron. Por intermedio y a través de sus co-conspiradores, agentes y/o alter egos Yanza y Fajardo, el Frente ha transado negocios y participado en conducta ilícita en los Estados Unidos y en Nueva York de la que surgen en parte las reclamaciones de Chevron, como arriba se establece en mayor detalle. El Frente también ha participado en actos intencionales, indebidos, ilegales y/o ilícitos de cuyos efectos el Frente estaba consciente y que quería que se sintieran en los Estados Unidos y en Nueva York. Entre otras cosas, el Frente: (i) realizó una multitud de llamadas telefónicas, y envió correos electrónicos y otras formas de comunicación a sus co-conspiradores en los Estados Unidos y en New York con el propósito de planear y llevar a cabo su confabulación y fraude; (ii) mantiene o hace que se mantenga un sitio

web llamado www.texacotoxico.org intencionalmente dirigido a la audiencia estadounidense, a través del cual el Frente ha intentado ocultar la confabulación y el fraude mediante declaraciones falsas y engañosas y, según nuestro leal saber y entender, recaudó fondos de los Estados Unidos y de New York con el fin de llevar a cabo la confabulación y el fraude; (iii) solicitó y recibió fondos de personas en los Estados Unidos y en New York directamente y por otros medios a través de agentes con el propósito llevar a cabo la confabulación y el fraude; (iv) utilizó a Amazon Watch como su firma de relaciones públicas en los Estados Unidos para publicar declaraciones falsas y engañosas para ocultar la confabulación y el fraude; y (v) contrató a un cabildero radicado en Washington, D.C. para promover sus intereses propios y los de sus co-conspiradores ante el Congreso de los Estados Unidos. También, como se establece en mayor detalle en este documento, los co-conspiradores y agentes del Frente se han involucrado en actos intencionales, indebidos, ilegales y/o ilícitos en los Estados Unidos y en Nueva York. El Frente era consciente de los efectos de esos actos en los Estados Unidos y en Nueva York; las actividades de los co-conspiradores y agentes del Frente eran para beneficio del Frente; y sus co-conspiradores y agentes trabajaban bajo la dirección, el control, y a pedido y/o en representación del Frente al perpetrar esos actos.

31. El ejercicio de jurisdicción sobre Selva Viva es apropiado de conformidad con el artículo 1965(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y el artículo 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York. Donziger es o ha sido el presidente de Selva Viva, Yanza es o era el gerente general de Selva Viva, y en todo momento pertinente a los asuntos tratados en este documento Donziger, Yanza y Fajardo actuaron como co-conspiradores, agentes y/o alter egos de Selva Viva en la perpetración de la confabulación y el fraude contra Chevron. Por intermedio y a través de sus co-conspiradores, agentes y/o alter egos Donziger, Yanza y Fajardo, Selva Viva ha transado negocios y participado en conducta ilícita en los Estados Unidos y en Nueva York que dio lugar en parte a las reclamaciones de Chevron, como se establece en mayor detalle anteriormente. Selva Viva también ha transado negocios y participado directamente en conducta ilícita en Estados Unidos que dio lugar en parte a las

reclamaciones de Chevron. Los Demandados RICO usan o han usado a Selva Viva como un conducto para el financiamiento de sus actividades ilícitas en Ecuador. Selva Viva ha solicitado y recibido diversos pagos de parte de Kohn Swift en los Estados Unidos para financiar el Litigio de Lago Agrio, y algunos de esos pagos fueron posteriormente redirigidos a Cabrera desde una cuenta bancaria de Selva Viva. También, como se establece en mayor detalle en este documento, los co-conspiradores y agentes de Selva Viva se han involucrado en actos intencionales, indebidos, ilegales y/o ilícitos en los Estados Unidos y en Nueva York. Selva Viva era consciente de los efectos de dichos actos en los Estados Unidos y en New York; las actividades de los co-conspiradores y agentes de Selva Viva fueron para beneficio de esta; y sus agentes y co-conspiradores trabajaban bajo la dirección, el control, y a pedido y/o en nombre de Selva Viva al perpetrar dichos actos.

32. El ejercicio de jurisdicción sobre los Demandados de Lago Agrio es apropiado de conformidad con los artículos 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York debido a que los Demandantes de Lago Agrio han intencionalmente aprovechado el foro en Nueva York, presuntamente contratando abogados en Nueva York e instituyendo y de otras maneras participando en litigios relacionados en este Distrito. Los Demandantes de Lago Agrio, según se ha informado, han contratado al Demandado Donziger, un abogado de Nueva York, para que represente sus intereses en el Litigio de Lago Agrio. Además, según se ha informado, han contratado al co-conspirador Emery Celli, un estudio jurídico de Nueva York, para que les represente en litigios pendientes ante este Tribunal y en otras partes en los Estados Unidos. El 14 de enero de 2010, los Demandantes de Lago Agrio fueron los demandantes identificados en una acción presentada ante este Tribunal contra Chevron para suspender el Arbitraje conforme al Tratado que Chevron inició para obtener una reparación por las violaciones de la República del Ecuador de sus obligaciones de conformidad con el Tratado Bilateral de Inversiones entre los Estados Unidos y el Ecuador, acuerdos de inversión y el derecho internacional, y el no acatamiento por parte del Ecuador de la conciliación y liberación negociadas con respecto a la reparación del área de la antigua concesión. Véase *Yaiguaje*, N.º 10 CV 316 (LBS) (D.S.N.Y. 14

de enero 2010), Transcripción de la Audiencia, 10-11 de marzo de 2010. Los Demandantes de Lago Agrio también han intervenido en procedimientos presentados por Chevron al amparo del artículo 1782 de Título 28 del Código de los Estados Unidos ante este Tribunal (y en otros tribunales federales de distrito) mediante la presentación de diversas peticiones y escritos como “partes interesadas”. La participación de los Demandantes de Lago Agrio en el procedimiento al amparo del artículo 1782 ante este Tribunal hizo que el Sr. Juez Kaplan específicamente determinara que “se sometieron a la jurisdicción personal de esta Corte”. *En relación con la Solicitud de Chevron*, 10 MC 00001 (LAK) (D.S.N.Y. 22 de julio de 2010), Orden del 7 de septiembre de 2010 en la pág. 23. Existe un nexo sustancial entre el aprovechamiento intencional de parte de los Demandantes Lago Agrio del foro en Nueva York y las reclamaciones de Chevron conforme a las leyes estatales de Nueva York. Para dichas reclamaciones, el ejercicio de jurisdicción sobre los Demandados de Lago Agrio es por lo tanto apropiado de conformidad con los artículos 301 y 302 de la Ley y Normas de la Práctica Civil de Nueva York.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LAS RECLAMACIONES

A. Antecedentes

33. Esta Demanda Modificada detalla como un grupo de abogados estadounidenses de los demandantes, junto con co-conspiradores estadounidenses y ecuatorianos, se dispusieron a explotar fraudulentamente imágenes de degradación medioambiental en zonas rurales del Ecuador para extorsionar dinero de una empresa estadounidense de acuerdo con un plan delictivo. Muchas de las citas incluidas en esta Demanda Modificada fueron capturadas en escenas filmadas durante la preparación de *Crude: The Real Price of Oil [Crudo: El verdadero precio del petróleo]*, una película encargada por los Demandados RICO y sus co-conspiradores para fomentar su plan delictivo. Otras vienen directamente de los correos electrónicos, cartas y documentos de los mismos Demandados RICO.

1. TexPet participa en el consorcio petrolero estatal del Ecuador y negocia ser exonerado de responsabilidad civil como contraprestación por una reparación especificada

34. En 1964, Ecuador otorgó derechos de exploración y producción de petróleo (lo que se conoce como una “concesión”) en una parte designada de la región del Oriente del Ecuador a Texaco Petroleum Company (“TexPet”) y a la Ecuadorian Gulf Oil (“Gulf”), que entonces formaron lo que llegó a ser conocido como el consorcio. La empresa petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador (anteriormente conocida como la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana o CEPE), se convirtió en participante del consorcio en 1974, y el 31 de diciembre de 1976, se convirtió en propietaria mayoritaria del 62,5% del mismo.

35. Cuando el consorcio comenzó sus actividades de exploración, TexPet y Gulf acordaron que TexPet actuaría como operadora en representación de ambas compañías. Como operador, y de conformidad con los términos del Acuerdo de Operación Conjunta Napo de 1965 que regía el funcionamiento interno del consorcio, TexPet estaba “a cargo directamente de llevar a cabo las obligaciones de trabajo de las [p]artes y de cumplir con otros deberes” con el previo consentimiento y aprobación de estas. Cada una de las partes estaba obligada a proveer los gastos de operación y los fondos de inversión de acuerdo con sus intereses propietarios en el consorcio. TexPet estaba obligada a prestar servicios como operadora al costo y, en contraprestación a este servicio, iba a ser indemnizado y liberado por las partes con respecto a toda reclamación presentada por terceros que surgiera o estuviera relacionada con su desempeño como operadora.

36. Una vez que Petroecuador se incorporó al consorcio y después de que llegó a ser la dueña mayoritaria, TexPet continuó prestando servicios como operadora. Como dueña mayoritaria, sin embargo, Petroecuador contribuía con el 62,5 % de las inversiones y gastos de operación del consorcio y aprobaba todos los programas de trabajo y presupuestos anuales. Petroecuador retuvo la supervisión de las actividades de TexPet como operadora más allá de los ciclos presupuestarios anuales aprobando proyectos a medida que eran implementados y respondiendo a los pedidos mensuales de “fondos presupuestarios” con los fondos necesarios para los gastos de operación de cada mes.

37. TexPet continuó en su papel de operadora hasta 1990, momento en el cual Petroecuador tomó control de las operaciones. En 1992, cuando finalizó el contrato de concesión, Petroecuador se hizo cargo del 100% de la propiedad de los campos e instalaciones del antiguo consorcio. TexPet no ha operado ningún campo petrolífero en Ecuador desde 1990, y no ha tenido ningún interés propietario en ninguna operación petrolífera en Ecuador desde 1992. Desde 1992 al presente, Petroecuador ha sido la dueña y operadora exclusiva de la antigua área de la concesión.

38. Al concluir, las actividades del consorcio habían generado más de US\$ 23.000 millones. Sin embargo, la República del Ecuador retuvo el 97,3% de esa cantidad por medio de un conjunto de impuestos a la renta, regalías, contribuciones al consumo doméstico y la participación en las ganancias brutas de Petroecuador. El dinero generado por el consorcio representó más del 50% del producto bruto interno del Ecuador durante ese período.

39. Las utilidades totales de TexPet durante la existencia del consorcio fueron una pequeña fracción de las obtenidas por el Ecuador, menos de US\$ 500 millones.

40. Desde que se hizo cargo del control operacional en 1990, Petroecuador ha perforado 414 pozos nuevos, casi un 30% más que la cantidad de pozos que fueron perforados durante los 25 años de TexPet como operadora, y según fuentes de los medios ecuatorianos, fue responsable de más de 1.400 derrames reportados solamente entre los años 2000 y 2008. El historial medioambiental de Petroecuador ha impulsado al presidente actual del Ecuador, Rafael Correa, a comentar que Petroecuador “tiene un pésimo manejo ambiental”.

41. El Demandado Fajardo, antes de que se diera cuenta de que tal franqueza podría socavar los intentos de extorsionar a Chevron de los confabulados, también habló contra los antecedentes medioambientales de Petroecuador:

[Petroecuador] no es confiable porque lo que dice Petro[ecuador] es una cosa y lo que hace es todo lo contrario. Desde que salió inclusive Texaco de aquí, Petro[ecuador] ha producido más daños y mucho más desastres que la misma Texaco. Pero esto no es lo que están diciendo, jamás. Entonces en cada rato hay derrames, hay ruptura de tubos, hay contaminación de pantanos, de ríos, de

esteros en gran magnitud. Pero como es empresa estatal, como están la misma gente vinculadas con las leyes y todo, no hay quien diga nada.

42. Cuando Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990, TexPet consintió a un pedido del Ecuador de colaborar con Petroecuador para llevar a cabo una auditoría ambiental de los campos petrolíferos del consorcio. TexPet insistió, sin embargo, en que Petroecuador, como dueña mayoritaria del consorcio, compartiera la responsabilidad por toda reparación necesaria que la auditoría identificara, de la misma manera que las partes habían compartido todos los costos de operación. Ecuador reconoció que TexPet era responsable solamente por el 37,5% correspondiente a su participación de los costos de reparación por el impacto medioambiental de las operaciones del consorcio, y las partes reconocieron que TexPet no podía ser considerada responsable por el impacto medioambiental de las operaciones en los campos petrolíferos realizadas después de la terminación de sus derechos sobre la concesión en 1992.

43. En 1994, Ecuador públicamente rechazó las determinaciones preliminares del auditor conjunto independiente y amenazó con iniciar juicio contra TexPet por lesiones al medio ambiente ecuatoriano. Ecuador informó además a TexPet que Petroecuador no participaría con TexPet en la realización de las reparaciones medioambientales debido a que carecía del dinero necesario para financiar su parte del trabajo. Por lo tanto, en vez de identificar el trabajo de reparación a ser financiado conjuntamente, Ecuador insistió en que las partes identificaran un conjunto de obligaciones de reparación correspondientes a la parte de responsabilidad de TexPet.

44. El 14 de diciembre de 1994, o alrededor de esa fecha, Ecuador, Petroecuador y TexPet celebraron un memorando de entendimiento (“MDE”) en el que acordaron definir el “Alcance del Trabajo de Reparación Ambiental” de TexPet con respecto al medio ambiente “biótico” y “abiotico” y también lograron de TexPet un compromiso de “ejecutar los proyectos de compensaciones socioeconómicas, tendientes a solucionar los problemas...cuasados por las operaciones petroleras...”. Este esfuerzo compensatorio iría en beneficio no del gobierno en un sentido estricto, sino de la población en general. De hecho, en otras partes, el documento subraya

expresamente que estos proyectos tenían que “toma[r] en cuenta a los habitantes de la Región Oriental”. Como contraprestación, el MDE obligaba a Ecuador a “negociar[] la liberación total y completa de obligaciones de Texpet por los impactos ambientales derivados de las operaciones del Consorcio”.

45. El MDE promovió los deberes constitucionales del Ecuador con respecto a sus ciudadanos. De conformidad con el artículo 19(2) de la Constitución en existencia, la autoridad para reivindicar todo derecho medioambiental en nombre del pueblo ecuatoriano era un atributo exclusivo del gobierno del Ecuador. De acuerdo con el embajador ecuatoriano a los Estados Unidos, “Es *obligación* de la República intervenir en las cuestiones que afectan directamente el bienestar de sus ciudadanos, territorio y recursos naturales, y la soberanía misma de la República del Ecuador. El acuerdo recientemente firmado entre la República, Petroecuador y Texaco Petroleum Company, que fue revisado y respaldado por el Congreso ecuatoriano... demuestran la determinación de la República de cumplir con su obligación ”.

46. Por lo tanto, al tiempo que TexPet cerraba sus operaciones, un Comité Ambiental del Congreso del Ecuador insistió en que todo acuerdo de conciliación entre TexPet y Ecuador “indemnice y/o mitigue los efectos ambientales negativos que...produjo en la población ecuatoriana asentada en nuestra Amazonía”, y enfatizó que para ese fin TexPet tenía que proporcionar una compensación en las “áreas biótica, abiótica y socio económica”, y con un “ambiente de consenso, . . . tomando en cuenta a sus habitantes y autoridades de la zona”. TexPet y los representantes del Ecuador y Petroecuador “toma[ron] en cuenta” los comentarios y sugerencias del Congreso ecuatoriano. Políticos locales de la región del Oriente también desempeñaron lo que ellos veían como un “rol de liderazgo como parte interesada” en las “negociaciones para llegar a un acuerdo entre Texaco y el gobierno ecuatoriano sobre la reparación ambiental en la Amazonía”.

47. El Demandado Frente también participó activa y abiertamente en la negociación de esta conciliación entre TexPet y Ecuador. El Demandado Yanza, presidente del Frente, buscó una “audiencia” con el presidente del Ecuador “para exponer en forma directa...la situación” de

la gente de la región del Oriente a quien él pretendía representar, de manera tal que su situación “se tome en cuenta...el momento de firmar acuerdos con [TexPet]”. Yanza posteriormente presentó una “propuesta” de su grupo para definir el alcance del trabajo, que él afirmaba representaba un “amplio y esforzado trabajo por lograr consensos” entre la población. Reflejando esta colaboración con grupos como el Frente, funcionarios ecuatorianos recientemente repitieron, bajo juramento, que las negociaciones que condujeron a estos arreglos de conciliación estaban “abiertos a todos aquellos que quieran asistir”, y que miembros de muchas organizaciones medioambientales, incluido el Frente, de hecho estuvieron presentes. Estos funcionarios gubernamentales se vieron a sí mismos como los “facilitador[es]” de un diálogo abierto entre las comunidades y TexPet, y siguieron las órdenes del “Congreso Nacional a fin de tener en cuenta los problemas que los grupos amazónicos estaban atravesando”. Como consecuencia de este diálogo, los grupos ambientalistas estaban “detrás de todo lo que se estaba haciendo”, lo que condujo a un documento final que consideraba y tomaba en cuenta los intereses de los individuos y comunidades en las áreas de la concesión. Cuando el MDE fue abierto a la inspección del público, y mientras se definía el Alcance del Trabajo, el Frente fue uno de los grupos que escribió al Ministro de Energía y Minas para expresarle su “acuerdo [que] se siga el proceso de entendimiento [entre Ecuador y TexPet] y ejecución inmediata de los trabajos de remediación ambiental”.

48. De conformidad con los términos del MDE, el 23 de marzo de 1995, o alrededor de esa fecha, Ecuador, Petroecuador y TexPet firmaron un “Alcance del Trabajo” preciso que identificaba los sitios y proyectos en particular que constituirían las obligaciones de reparación de TexPet, de una manera compatible con los antiguos derechos de propiedad de TexPet sobre una tercera parte del consorcio. El “Alcance del Trabajo” requería la realización no solo de un vasto esfuerzo de reparación por parte de TexPet, sino también de diversos proyectos socioeconómicos, incluido el pago de US\$ 1 millón a un fondo de resarcimiento para “la rehabilitación de las zonas afectadas estableciendo conjuntamente con la población sistemas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, y...buscando elevar la calidad

de vida”. El Ministro de Energía y Minas recibió ese dinero, y se le encomendó que administrara el fondo “en beneficio de las Comunidades Indígenas de la Región Amazónica”. TexPet también financió el establecimiento de centros educativos y médicos en el Oriente, junto con “apoyo logístico” para esos centros tales como ambulancias y aeronaves.

49. A continuación de la firma del Alcance del Trabajo, el 4 de mayo de 1995, o alrededor de esa fecha, Ecuador, Petroecuador y TexPet firmaron un acuerdo de conciliación (el “Acuerdo de Conciliación de 1995”). En contraprestación por su exoneración de toda responsabilidad futura por impactos medioambientales, TexPet acordó realizar el “Trabajo de Reparación Ambiental” definido y proporcionar “compensaciones socioeconómicas” para las áreas afectadas. El Acuerdo de Conciliación de 1995 de inmediato “liber[ó], absolv[ió] y descarg[ó] para siempre” a TexPet de toda reclamación basada en “Impacto Ambiental” de las actividades del consorcio en sitios no incluidos en el Alcance del Trabajo y dispuso que TexPet quedaría liberado de todo “Impacto Ambiental” asociado con los sitios cubiertos por el Alcance del Trabajo al completarse la reparación prescrita en cada sitio. En otras palabras, debido a que continuó las operaciones de los campos petrolíferos, Petroecuador asumió toda la responsabilidad residual o futura, reconociendo tanto la parte de sus obligaciones con respecto al pasado, como antiguo dueño mayoritario del consorcio, así como su control sobre el futuro, como el único dueño y operador de allí en adelante.

50. La conciliación fue intencionalmente amplia. Se definió “Impacto Ambiental” como “[c]ualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa presente o liberada en el ambiente a tal concentración o condición, cuya presencia o liberación causa o tiene el poder de causar daño a la salud de los humanos o al medioambiente”. Reflejando la amplitud de la cobertura, la liberación “incluyendo, pero no limitándose, a consecuencias de todos los tipos de daños que el Gobierno o Petroecuador pudieran alegar con respecto a las personas, propiedad, negocios, reputaciones, y todos los otros tipos de perjuicios que se puedan medir en términos de dinero, incluyendo, pero no limitándose a transgresiones, molestias, negligencia, responsabilidad estricta, incumplimiento de garantía, o cualquier teoría o teoría potencial de recuperación”. Las reclamaciones

expresamente liberadas también incluían toda “causa de acción bajo el Artículo 19-2 de la Constitución Política [de 1978] de la República de Ecuador”, lo que, como se trató en el párrafo 43, *supra*, colocaba el “deber del Estado” de “tutelar la preservación de la naturaleza” y garantizaba a todos los ecuatorianos “[e]l derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. El Acuerdo de Conciliación de 1995 fue firmado por Abril Ojeda, Ministro de Energía y Minas del Ecuador; Federico Vintimilla Salcedo, presidente ejecutivo de Petroecuador; Ricardo Reis Veiga, vicepresidente de TexPet; y Rodrigo Pérez Pallares, representante jurídico de TexPet.

51. El Acuerdo de Conciliación de 1995 también obligaba a TexPet “a continuar las negociaciones” con ciertas municipalidades en la parte este del Ecuador que también habían interpuesto demandas en contra de la compañía. Mediante la presentación de demandas esencialmente idénticas, las municipalidades de Joya de los Sachas, Orellana, Shushufindi y Lago Agrio habían demandado cada una por separado a TexPet en 1994 para proteger “la salud de [sus] ciudadanos, a los ríos de [sus] comunidades”. Estas municipalidades afirmaban estar cumpliendo sus obligaciones cuasi soberanas de ayudar a la República a satisfacer sus obligaciones medioambientales para con todos los ciudadanos, y para ejercer su propia capacidad de “llevar a cabo actos jurídicos” necesarios para proteger las “necesidades colectivas de [su] comunidad” de los habitantes, especialmente aquellas necesidades concernientes a la salud y el medio ambiente.

52. Como contraprestación al financiamiento por parte de TexPet de los “obras de interés social” especificados, cada una de las demandas de las municipalidades fue conciliada en 1996, “eximi[endo], libera[ndo], exonera[ndo] y releva[ndo] para siempre ” de manera similar a Texaco y TexPet “de cualquier responsabilidad, demanda, exigencia, solicitud o reclamación, pasada, actual o futura, por cualquier y todo concepto relacionado con” las operaciones del consorcio, “de manera especial en lo relacionado con afectaciones que pudieren haberse ocasionado al medio ambiente en la referida jurisdicción cantonal de la Municipalidad”. Las partes también convinieron expresamente que “de conformidad con lo previsto en el Artículo

2386 [actual Artículo 2362] del Código Civil, la presente transacción surtirá para las partes el efecto de cosa juzgada en última instancia”. Cada uno de los acuerdos de conciliación manifestaba que el gobierno municipal había consultado “con las entidades y organizaciones que representan a la comunidad de sus habitantes” para elegir un proyecto de reparación apropiado. De acuerdo con las declaraciones juradas de los funcionarios gubernamentales pertinentes, cada uno de los acuerdos satisfizo “los intereses de La Comunidad y de sus ciudadanos con respecto a cualquier reclamo que pudieran tener contra TEXPET”. Todos estos acuerdos de conciliación fueron “apr[obados]...en todas sus partes” por las cortes ecuatorianas debido a que ellos “no contravi[nieron] a disposición legal alguna y comprend[ieron] todos y cada uno de los puntos planteados en la[s] demanda[s] [de las municipalidades]”.

53. Además de los gobiernos nacionales y municipales, dos provincias también conciliaron sus posibles reclamos contra TexPet en nombre de sus residentes y de los ecosistemas dentro de sus respectivos territorios. En 1996, el gobierno provincial de Sucumbíos consultó “con las entidades y organizaciones que representan a la comunidad de sus habitantes” para seleccionar un proyecto de reparación aceptable y evitar un posible litigio con TexPet. Finalmente exigió, “consideración a los intereses de la comunidad”, que TexPet financiara “obra de interés social”, *viz.*, “proyectos de ecoproducción provincial”. Un Consorcio de Alcaldes Municipales de la provincia de Napo también respaldó un contrato de conciliación que identificó sus posibles disputas con TexPet relacionadas con “la concesión hidrocarburífera”, y, especialmente, con “afectaciones o daños que pudieren haberse ocasionado al medio ambiente”. De la misma manera que sus contrapartes en Sucumbíos y a nivel nacional, dicho consorcio negoció y transó con TexPet para salvaguardar los derechos medioambientales y comunitarios. En este documento, se hace referencia de manera conjunta a estos acuerdos con las municipalidades como las “Liberaciones Municipales de 1996”.

54. De conformidad con los términos del Acuerdo de Conciliación de 1995 con Ecuador, TexPet seleccionó a Woodward-Clyde, una de las firmas de ingeniería medioambiental más grande del mundo en esos momentos, de una lista de contratistas aceptables para realizar los

trabajos de reparación provista por Ecuador. Woodward-Clyde llevó a cabo investigaciones adicionales de los sitios de pozos enumerados en el Alcance del Trabajo y preparó un Plan de Acción para las Reparaciones, que identificaba las piscinas específicas en cada sitio de pozos que requerían reparación de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo de Conciliación de 1995 y especificaba las medidas de reparación que se adoptarían en cada sitio. Ecuador analizó el Plan de Acción para las Reparaciones de Woodward-Clyde y llevó a cabo su propia investigación de los sitios para confirmar que era compatible con el MDE y el Acuerdo de Conciliación de 1995. En septiembre de 1995, Ecuador, Petroecuador, TexPet y Woodward-Clyde aprobaron y firmaron el Plan de Acción para las Reparaciones.

55. Entre octubre de 1995 y septiembre de 1998, Woodward-Clyde llevó a cabo todas las reparaciones requeridas por el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Plan de Acción para las Reparaciones en representación y a cuenta de TexPet. El trabajo de reparación fue seguido y supervisado por Petroecuador, los Ministerios de Energía y Ambiente y auditores externos. Durante este periodo, Ecuador emitió una serie de registros oficiales llamados “*Actas*” que certificaban la suficiencia de los trabajos de reparación que había supervisado y evaluado de forma continua. En total, TexPet gastó aproximadamente US\$ 40 millones (en dólares sin ajuste por inflación) en reparación ambiental y proyectos de desarrollo comunitario en Ecuador de conformidad con el Acuerdo de Conciliación de 1995, como contraprestación por las exoneraciones otorgadas por Ecuador.

56. El 30 de septiembre de 1998, Ecuador, Petroecuador y TexPet firmaron el *Acta Final* (el “Acta Final de Liberación de 1998”), que certifica que TexPet había cumplido con todas sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo de Conciliación de 1995, exonerando plenamente a TexPet de todas y cada una de las responsabilidades medioambientales que pudieran surgir de las actividades del consorcio, salvo por reclamaciones de lesiones personales individuales, tales como lesiones a personas o propiedad específicas, que las partes entendieron que no estaban cubiertas por la exoneración. El Acta Final de Liberación de 1998 fue firmada en representación del Ecuador por Patricio Ribadeneira, Ministro de Energía y Minas; en

representación de Petroecuador por Ramiro Gordillo, Director General Ejecutivo, y por Luis Alban Granizo, Gerente de Petroproducción; y en representación de TexPet por Rodrigo Pérez Pallares y Ricardo Reis Veiga.

57. La validez de estos acuerdos ha sido públicamente reconocida por la República del Ecuador, y, recientemente, también por los Demandantes de Lago Agrio. Como se destacó anteriormente, párrafos 45 y 50, *supra*, cuando se firmaron el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998, la República del Ecuador era la única persona jurídica con capacidad para representar y hacer valer reclamaciones jurídicas por daño ambiental. Ecuador, y solamente Ecuador, podía exigir reparación ambiental; los individuos podían hacer valer solamente reclamaciones por daños a propiedades individuales o lesiones personales. Por lo tanto, los acuerdos de conciliación de TexPet con Ecuador y las municipalidades y provincias afectadas exoneraban plenamente a TexPet de toda obligación o responsabilidad civil que pudiera haber existido por impactos ambientales como consecuencia de las actividades del consorcio, excepto por reclamaciones por lesiones personales individuales.

2. Los abogados estadounidenses de los demandantes conciben un juicio sin fundamentos contra Chevron en Ecuador

58. Ciertos abogados estadounidenses de los demandantes buscaron explotar cualquier daño ambiental en la región del Oriente y convertirlo en ganancias financieras caídas del cielo para ellos mismos. Estos abogados estadounidenses de los demandantes (incluidos el Demandado Donziger y los co-conspiradores Kohn y Bonifaz), trazaron un plan para usar la participación anterior de TexPet en el consorcio como la base para sacarle grandes cantidades de dinero a la sociedad matriz de TexPet, Texaco, Inc. (“Texaco”). Como dijo Kohn al describir sus motivos: “[A] final de cuentas, ser[ía] un caso lucrativo para el estudio”. Como lo describió Donziger: “Me recuesto y sueño... Miles de millones de dólares sobre la mesa. Una película, un posible libro”. En otras palabras, Donziger recibiría una ganancia caída del cielo y que lo haría “bastante rico”. De acuerdo con las estimaciones de Donziger, él pensaba que sus “mis propios honorarios ahora mismo serían de 200 m[illones]”.

59. En 1993 y 1994, estos abogados estadounidenses de los demandantes interpusieron dos demandas contra Texaco ante el Tribunal Federal de distrito de Nueva York, supuestamente en representación de clases de “30.000 residentes” del Oriente y “25.000 residentes” del Perú. Véase *Aguinda contra Texaco, Inc.*, N.º 93 Civ. 7527 (D.S.N.Y 3 de noviembre de 1993) (“*Aguinda*”) y *Jota contra Texaco, Inc.*, N.º 94 Civ. 9266 (D.S.N.Y. 28 de diciembre de 1994) (“*Jota*”). Estas acciones se desestimaron por diversos fundamentos que incluían jurisdicción inadecuada (*forum non conveniens*), respecto internacional mutuo y la ausencia de partes indispensables para la acción, Petroecuador y la República del Ecuador.

60. Debido a que Ecuador y Petroecuador habían liberado a TexPet de responsabilidad civil luego de las tareas de reparación efectuadas por la empresa, y debido a que las leyes ecuatorianas no permiten acciones de clase, los abogados estadounidenses de los demandantes requirieron la colaboración del gobierno para iniciar un juicio potencialmente lucrativo en el Ecuador. Los abogados estadounidenses de los demandantes no tenían ningún deseo de enjuiciar a Petroecuador o Ecuador por los daños que habían ocurrido, a pesar de su culpabilidad real, porque, como explicó el Demandado Donziger, “[E]l gobierno aquí probablemente nunca va a pagar cualquier sentencia. En contraste, Texaco puede pagar”. Para obtener el “cheque[] jugoso[]” que era, como lo expresó Fajardo, el objetivo final, los abogados estadounidenses de los demandantes llegaron a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano para permitir que dichos abogados entablaran una acción contra un objetivo conveniente de los Estados Unidos.

61. Los abogados estadounidenses de los demandantes acordaron no demandar a Petroecuador y aseguraron a la República del Ecuador que se beneficiaría de toda sentencia que se emitiera contra Chevron a cambio de apoyo gubernamental público y privado al caso de los abogados estadounidenses de los demandantes.

62. Los abogados estadounidenses de los demandantes presentaron al Procurador General del Ecuador promesas escritas de que no iban a interponer demandas contra la República del Ecuador o Petroecuador ni cobrar ninguna sentencia contra Ecuador en caso de que se les

fuera otorgada. Bonifaz manifestó “[S]i la corte estadounidense [en los casos *Aguinda y Jota*] encuentra culpable tanto a Petroecuador como a Texaco, nosotros no aceptaremos el tanto por ciento de la demanda que se le asigne [a Petroecuador]”. Y reconoció que los Demandantes de Lago Agrio se habían “comprometido mediante documentos legales a no demandar a Ecuador”.

63. Con ayuda legislativa, según se informa, de los abogados estadounidenses de los demandantes, Ecuador promulgó la Ley de Gestión Ambiental de 1999 (la “LGA”). Por primera vez, la LGA permitió que individuos privados presentaran reclamaciones por lesiones ambientales de carácter general que anteriormente podrían haber sido presentadas exclusivamente por el Estado. También extendió por primera vez a ciudadanos privados la capacidad de exigir el cumplimiento “derechos ambientales...colectivos” por daño ambiental. Sin embargo, estas acciones son privadas solamente en nombre, ya que la LGA dispone que las sentencias monetarias sean otorgadas a la “comunidad”.

64. Con un marco jurídico nuevo y altamente ventajoso puesto así en marcha, los abogados estadounidenses de los demandantes, unidos a y ayudados por otros Demandados RICO y sus co-conspiradores, presentaron en mayo de 2003 la demanda que inició el Litigio de Lago Agrio, *Maria Aguinda y otros contra Chevron-Texaco*, ante la Corte Superior de Nueva Loja, Ecuador. Como consecuencia de la LGA y el intento de los Demandados RICO de aplicarla de manera retroactiva, el Litigio de Lago Agrio tiene una estructura inusual. Los supuestos demandantes del Litigio de Lago Agrio son 48 individuos identificados, pero se desconoce si estos individuos dieron su consentimiento para que se radicara la demanda en sus nombres, ya que 20 de estas firmas fueron falsificadas en el mismo documento que se supone autoriza a los abogados ecuatorianos a presentar la demanda.

65. El Litigio de Lago Agrio no busca indemnización por daños y perjuicios por lesiones personales a los demandantes identificados, algo que, junto con reclamaciones por daños a la propiedad individual, es el único tipo de reclamaciones que puede ser presentado por individuos (*véase* el párrafo 57, *supra*). En vez de eso, basándose en la LGA, la demanda busca obtener los costos de reparación de “daños ambientales” definidos de una manera amplia, las

ganancias de los cuales no beneficiarán directamente a los Demandados de Lago Agrio. Los Demandados Donziger, Fajardo y los otros abogados e inversionistas estadounidenses y ecuatorianos, según se ha informado, esperan recibir hasta un 30% de la sentencia. La República del Ecuador, según se ha informado, espera recibir el 90% de los beneficios, aunque los Demandados RICO con la ayuda de Patton Boggs, H5 y otros co-conspiradores ya han trazado planes para “mantener los ingresos fuera de Ecuador”, colocando los fondos en un “fideicomiso” fuera del país bajo el control exclusivo de un fiduciario aprobado por ellos. Los Demandados RICO solicitaron que el Frente recibiera una cantidad adicional equivalente al 10% de la sentencia (un hecho que Donziger pensó sería “[m]ejor que no saben los de Chevron” debido a su preocupación de que “puede dañar [sic] la imagen” del litigio) y el tribunal de primera instancia concedió dicha solicitud en su sentencia. Los Demandantes individuales de Lago Agrio, por otra parte, no recibirán ninguna porción de la sentencia, y por lo tanto son a lo sumo demandantes nominales.

66. De hecho, los Demandados RICO están planeando controlar casi todo el producido de la sentencia, dejando fuera a los Demandantes de Lago Agrio, a la República del Ecuador y a Petroecuador y estableciéndose ellos mismos como una fuente de patrocinio a través de los miles de millones de dólares en contratos de reparación que serán adjudicados luego de la emisión de una sentencia adversa contra Chevron, en un país cuyo Producto Bruto Interno anual es de apenas un poco más de US\$ 64.000 millones. Por ejemplo, en un intercambio de correo electrónico con Fajardo y Donziger, uno de los co-conspiradores, Julio Prieto, destacó que “Petroecuador no es quien debe contratar con las empresas de reparación... Ese trabajo nos toca a nosotros”. Y cuando los Demandados RICO escucharon que la República del Ecuador podría estar considerando negociar con Chevron directamente, ejercieron presiones para que se cerraran esas conversaciones, urgiendo que ningún “representante del gobierno ecuatoriano se reúna personalmente con un representante de Chevron en esta coyuntura”.

67. La demanda de Lago Agrio no nombra como parte a la entidad que ha sido responsable del daño ambiental en la región del Oriente desde al menos el año 1992:

Petroecuador. De conformidad con su acuerdo de no presentar ninguna reclamación contra Petroecuador o la República del Ecuador misma, los representantes estadounidenses de los Demandantes de Lago Agrio hicieron que únicamente Chevron sea nombrada como la demandada en el Litigio de Lago Agrio, a pesar de que Chevron nunca ha tenido operaciones en Ecuador. (Años después de que TexPet cesara sus operaciones en Ecuador, una de las filiales de Chevron se fusionó con Texaco, la sociedad matriz final de TexPet. En virtud de esa transacción, Chevron se convirtió en accionista indirecto de TexPet.)

B. Los conspiradores están corrompiendo el proceso judicial para extorsionar un pago de parte de Chevron

68. El apoyo de la República del Ecuador, la manipulación de la LGA y la radicación del Litigio de Lago Agrio proporcionaron a los abogados estadounidenses la base para su esquema delictivo. Por intermedio de la conducta de su empresa delictiva, los conspiradores se dedicaron a inventar pruebas falsas y una “historia” irreal que repetirían ante todos los medios, ante el Congreso, ante organismos de investigación y administrativos federales y estatales, y con la cual buscarían asustar y engañar a los accionistas e inversores de Chevron. Todo esto fue hecho para promover su plan para coaccionar a Chevron para que realizara un pago masivo a la empresa delictiva. Como parte de este sistema, los conspiradores siguieron “aumenta[ndo]”, en las palabras de Donziger, su demanda. En el año 2003, pensaban que US\$ 6.000 millones era una cifra atrevida. En el año 2008, subieron sus apuestas a US\$ 16.000 millones, en seguida a US\$ 27.000 millones, y finalmente a unos exorbitantes US\$ 113.000 millones antes de obtener, en última instancia, una sentencia de \$18.200 millones en Lago Agrio.

69. El plan delictivo de los Demandados RICO consta de tres líneas de ataque principales. La primera, intimidar o corromper a la corte de Lago Agrio y obtener una sentencia fraudulenta contra Chevron basada sobre pruebas inventadas de responsabilidad civil. La segunda, coludidos con la República del Ecuador, procurar que se presenten cargos penales falsos contra los abogados de Chevron. La tercera, llevar a cabo una campaña masiva de presión pública diseñada para difundir información falsa y engañosa sobre Chevron y el Litigio de Lago

Agrio. Las líneas de ataque son intentos distintos pero, sin embargo, relacionados para presionar a Chevron para que pague a los Demandados RICO. Donziger ha reconocido incluso que los cargos delictivos y la campaña de presión *no* fueron simplemente formas de apoyo del Litigio de Lago Agrio, sino “otras cosas que están en juego más allá del caso legal”. El objetivo final, en las palabras de Donziger, es causar “daño a [la] reputación [de Chevron]”, poner “presión psicológica personal [sobre] sus altos ejecutivos” por medio de amenazas y ataques a través de los medios y forzar a Chevron a pagar una arreglo masivo.

70. Donziger ha explicado la manera en que los conspiradores funcionan para incrementar los costos para Chevron en todos los frentes hasta que se rinda a sus demandas de extorsión:

Pero la labor no termina simplemente porque esté en los EE.UU., para nada. Es decir, todavía es súper intensa. Uno simplemente está siempre buscando la forma de aumentar el efecto multiplicador e incrementar lo que Chevron tiene que pagar por no hacer nada. Entonces, ¿cuál es el costo? Se sabe que el costo es el presente. Es el riesgo de obtener un fallo por varios miles millones de dólares en el juicio...[e]s el costo de todo lo que ellos han tenido que aguantar de parte de los grupos de defensa ambiental. Es el costo de la reputación mancillada que tienen entre los medios.

71. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores no han mostrado ninguna señal de detener sus ataques. Por cierto, Donziger ha amenazado con tratar de ejecutar la sentencia fraudulenta que se obtenga en el Litigio de Lago Agrio en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones extranjeras, destacando que “Chevron opera en más de 100 países y tiene numerosos petroleros que circulan por las aguas del mundo y atracan en diferentes puertos . . .”. En una charla reciente, Donziger afirmó que los conspiradores están formando un equipo jurídico para “confiscar activos, confiscar embarcaciones”, dondequiera en el mundo que las filiales de Chevron desarrollen operaciones, aunque los Demandantes de Lago Agrio previamente dijeron a este Tribunal que la defensa de Chevron contra cualquier sentencia de la Corte de Lago Agrio debería restringirse a la ley de reconocimiento de Nueva York. De la misma manera, Fajardo ha advertido que el plan de los Demandados RICO es confiscar activos de Chevron en los Estados

Unidos para ejecutar la sentencia. Y Donziger también ha manifestado que el plan de los conspiradores es no detenerse con Chevron y Ecuador sino repetir el esquema delictivo una vez tras otra: “tomar los honorarios profesionales que ganemos en este caso y, y hacer más casos como este en distintos lugares con, bueno el mismo equipo, si es posible”.

1. Presión sobre la corte de Lago Agrio y fabricación de pruebas

a. Aplicación de tácticas de presión y colusión con funcionarios gubernamentales ecuatorianos

72. Un aspecto central del plan de los Demandados RICO y sus co-conspiradores para defraudar y extorsionar a Chevron es el hecho de que el poder judicial del Ecuador ha desarrollado corrupción y debilidad sistémicas, además de otros defectos y limitaciones significativos. Los conspiradores son conscientes de este hecho, y han buscado explotarlo. De acuerdo con Donziger, “[L]a corte está ahora disponible, lista para ser tomada y accesible”. Donziger ha alardeado de que, a diferencia del caso en los Estados Unidos, el “jueg[o]” es “sucio” y “casi no hay reglas” en Ecuador. Donziger y sus co-conspiradores han buscado en repetidas oportunidades capitalizar la debilidad de la judicatura ecuatoriana, amenazando con violencia, intimidando jueces y usando contactos políticos para obtener decisiones judiciales en su favor sobre la base del temor de los jueces de sufrir repercusiones en vez de los hechos o el derecho. Es más, Donziger le encargó a uno de sus co-conspiradores que: “prepar[e] un plan detallado con los pasos necesarios para atacar al juez por medio de las vías legales e institucionales, y por cualquiera otra vía que te puedas imaginar”. Atacar al juez era necesario porque, como lo expresó Donziger: “[L]a única manera de que la corte nos respete es que nos teman y...la única manera que nos teman es si creen que tenemos el control de sus carreras, sus trabajos, su reputación, es decir, su capacidad para ganarse la vida”. Este temor y la “[p]resión permanente al Juez y a la corte” es esencial para el plan de los Demandados RICO y sus co-conspiradores para obtener “una rápida determinación”. Con ayuda desde los más altos niveles

del gobierno ecuatoriano, los Demandados RICO y sus co-conspiradores se aseguraron que la corte de Lago Agrio fallara en contra de Chevron, lo cual, a la larga, así sucedió.

73. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores no ven a la empresa en la que participan como una demanda. Como Donziger ha explicado, el litigio “no es un caso judicial”, sino una “batalla política que se está librando a través de un caso judicial”. En otras palabras, Donziger y sus co-conspiradores sabían que “lo que tenemos que hacer es poner la política en orden . . . [porque] la única forma en que vamos a tener éxito es si el país se entusiasma acerca de sacarle esta suma de dinero a Texaco Por eso hay que jugar con esos . . . temas, [con] esos sentimientos que la gente tiene”. De una manera coherente con esta estrategia, Donziger y los otros Demandados RICO saben que su “éxito” no tendrá nada que ver con la tramitación del Litigio de Lago Agrio sobre la base de los fundamentos del caso, sino que más bien dependerá de usar ese “litigio” como un vehículo o pretexto para atacar a Chevron en los medios y ante organismos gubernamentales de Estados Unidos y ante los accionistas y forzar a la empresa a pagarles un chantaje. En las propias palabras de Donziger, los conspiradores han manejado el Litigio de Lago Agrio como una “riña callejera, en un combate litigioso sin cuartel” en la cual él y sus co-conspiradores aparentemente están “[a punto de] enfrentar[se] a puñetazos con nuestros oponentes o sacando nuestras armas”.

74. Donziger ha reconocido que los Demandados RICO y sus co-conspiradores usan “tácticas de presión” para influir e intimidar a la judicatura ecuatoriana. Donziger admitió que tales tácticas son “algo que jamás harías en los Estados Unidos...Pero en Ecuador, tú sabes...así es como se juega, es sucio”. Donziger declaró además que “aquí casi no hay reglas” y que “el único idioma que yo creo que este juez va a comprender es el de la presión, intimidación y humillación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a ponerlo en su lugar...Creo que hoy vamos a asustar al juez”. Estas tácticas de miedo son efectivas, de acuerdo con Donziger, porque los jueces ecuatorianos “no son muy inteligentes” y “toman decisiones de acuerdo a quién temen más, no de acuerdo a lo que establecen las leyes”. De hecho, cuando un asociado le sugirió a Donziger que ningún juez dictaría una sentencia en contra de ellos porque

“[I]o matarían”, Donziger replicó que, aunque en realidad podría ser que no mataran al juez si dictara sentencia en contra de ellos, “él cree que sí...Lo cual es igual de bueno”. Como un colega le dijo a Donziger, “[E]l único modo que ganaremos este caso es si el juez piensa que él será empapado con gasolina y quemado si falla en contra nuestra”. Donziger manifestó que este comentario no le sorprendía. Donziger afirmó además: “[Los jueces] no es que tengan que tener suficiente inteligencia como para entender la ley, mientras entiendan la política”. Y de acuerdo con Donziger, “ningún juez pueda fallar en contra nuestro y sentir como que puede salirse con la suya en términos de su carrera”. Estas amenazas son aún más realistas dada la violencia generalizada en la región Oriente del Ecuador. Es más, Fajardo ha reconocido que asesinos a sueldo en el Oriente matarían a cualquiera por un pago de apenas US\$ 60, y la región es conocida por albergar elementos del grupo terrorista FARC.

75. Como parte de su estrategia para intimidar y coaccionar a la corte de Lago Agrio, los Demandados RICO y sus co-conspiradores tramaron reclutar lo que llamaban su propio “ejército privado”, un “grupo especializado” asignado a “para vigilar a la corte”, para lo cual, “si...necesitamos armas, podemos proveer de armas”. De acuerdo con Fajardo, era “necesario” para los Demandados RICO y sus co-conspiradores “organi[zar] marchas de presión en la corte y vigilancia” que serán “un poco agresivas” para “darle una lección a la corte”. En una reunión en la que se trató el tema del “ejército privado”, los Demandados Donziger y Yanza, junto con la fundadora de Amazon Watch, Soltani, y Kevin Koenig, el coordinador del programa para el norte de la Amazonía de Amazon Watch, discutieron sus planes para organizar y financiar intentos de “para controlar a la corte, para presionar a la corte”. Donziger explicó que los conspiradores “queremos enviarle un mensaje a la corte de que ya no se metan con nosotros—ni ahora, ni—ni después, ni nunca.” Destacó que, “nadie nos tiene miedo por ahora. Y, no vamos [a] ganar este caso hasta que nos tengan miedo. De eso estoy convencido”. En consecuencia, los conspiradores planearon “tomar control de la corte a través de una protesta masiva”, con el objetivo de “cerrar la corte por un día”. De acuerdo con Donziger, “[S]ólo después de eso deberíamos hablar con el juez acerca de lo que necesita hacer. El juez debe

temernos para que esto se mueva de la manera en que necesita moverse, y ahora mismo no hay temor, no hay un precio que pagar por no tomar esas decisiones clave”. Dándose cuenta de las ramificaciones de este plan, Soltani preguntó si un tribunal podía exigir la presentación de las videgrabaciones de la conversación, y aconsejó que: “sólo quiero que sepan que es—es ilegal conspirar para violar la ley”.

76. Haciendo caso omiso de estas dudas, los Demandados RICO y sus co-conspiradores pusieron en marcha su plan, organizando su “ejército” en manifestaciones en los sitios de inspección y en el mismo edificio de la corte, con el fin de confrontar y producir temor en la corte. Donziger describió una de estas acciones a Joe Berlinger, el director de la película *Crude*: “[N]uestro ‘ejército’ privado...ha sido muy eficaz. Ayer siguieron a un abogado de Texaco en el despacho de un juez y tuvieron un enfrentamiento. Esto es una parte crucial de nuestra estrategia que está permitiendo el avance del caso”. Durante los meses siguientes, el ejército privado de los conspiradores hizo numerosas apariciones en las inspecciones judiciales de los sitios ambientales, en el edificio de la corte y en las calles de Lago Agrio, siempre buscando recordar a la judicatura que esto no era un litigio, sino una “riña callejera”. En una de dichas manifestaciones en la inspección judicial de la Estación Sacha Sur, los Demandados RICO y sus co-conspiradores juntaron su “ejército” de manifestantes, a quienes el juez no permitió ingresar en la Estación debido al riesgo que esa gran multitud presentaría a las operaciones de la Estación. Cuando Donziger vio que lo que describía como su “ejército” no podría entrar, exigió que el propio “juez de mierda” viniera a la entrada y enfrentara él mismo a la multitud, y advirtió que “están provocando un incidente violento”. Aunque el “ejército” de los Demandados RICO y sus co-conspiradores fue rechazado en esta inspección, los Demandados RICO y sus co-conspiradores lograron su propósito de hacer saber a la judicatura que estaba siendo observada por un grupo potencialmente violento. En otro incidente, los conspiradores organizaron una protesta en la oficina del juez después de una inspección judicial cancelada. La intimidación fue exitosa, haciendo al juez “suda[r]” y “prometi[endo] que tomaría una decisión” para el día siguiente sobre una nueva fecha.

77. Los Demandados RICO también emplearon la extorsión para obtener lo que deseaban. Por ejemplo, los Demandados RICO, “[e]scribi[eron] una queja contra [el Juez] Yáñez [sic], pero nunca la presenta[ron], aunque le hicimos saber que podríamos presentarla si no se adhiere a la ley y a lo que necesitamos”. Y, en una lista de tareas que preparó en febrero de 2006, Donziger escribió, “[a]cusamos [al Juez] de caer en corrupción [sic] de Texaco; [p]edimos su salida”.

78. El plan de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de generar miedo en la judicatura fue solamente uno de los métodos utilizados para obtener ilegalmente una decisión favorable. Otro método incluyó numerosos intentos de personalmente influir, intimidar o negociar con el juez en el Litigio de Lago Agrio, a menudo a través de reuniones *ex parte*. Donziger describió dichas acciones como “cabildeo”. Donziger, por ejemplo, mantuvo numerosas reuniones con jueces que presidían el juicio, a menudo durante almuerzos en los hogares de los jueces, durante los cuales él “[a]provech[o] la situación para explicar [la] teoría del caso [de los Demandados RICO]”. Durante una de dichas reuniones, Donziger presionó sobre el juez la afirmación falsa de que “el muestreo de Texaco era una mierda”. Donziger también le pidió a sus co-conspiradores que se reunieran en secreto con el juez y argumentaran sobre el caso. Y de hecho, Fajardo y el Frente, la organización que se encuentra en posición para recibir una ganancia caída del cielo de la sentencia, se han reunido directamente con el juez, para presionar por los intereses de los conspiradores y obtener promesas de colaboración de parte del juez.

79. Los Demandados RICO hicieron todo esto porque creían que daba resultados. Una vez, uno de los co-conspiradores de Donziger sugirió que para lograr que el tribunal fallara a favor de ellos sobre un importante punto legal, “Quizas Pablo [Fajardo] pueda tener una de sus conversaciones a puertas cerradas”. En agosto de 2006, el co-conspirador Joseph Mutti informó a Donziger que “Luis [Yanza] informó que el juez parece estar retrocediendo en su postura sobre la cancelación de las inspecciones y esa presión debe estar recayendo en él. Por lo tanto, se resolvió que dos miembros de la coalición viajen a Lago la semana próxima para reunirse con el

juez. Esperanza ya se reunió con él dos veces esta semana, una vez fue acompañada de una delegación, de modo que ya está sintiendo la presión”. Los Demandados RICO no son los únicos observadores que hayan notado el impacto que han tenido estas tácticas. *The Economist*, por ejemplo, observó: “Juan Núñez, el juez de Lago Agrio, ... no ha escondido sus simpatías por los demandantes”.

80. No satisfechos simplemente con aplicar ellos mismos las presiones, y como parte de sus acuerdos previos con el gobierno ecuatoriano (*véase* párrafos 60-63, *supra*), los Demandados RICO y sus co-conspiradores también han reclutado a funcionarios gubernamentales ecuatorianos para presionar e intimidar a la judicatura para que falle en contra de Chevron. Como Donziger ha explicado la estrategia: “Podemos tener la mejor prueba del mundo, pero si no tenemos un plan político seguramente perderemos. Por otra parte, podemos [sic] prueba mediocre y un buen plan político y tener buenas probabilidades de ganar”. Donziger comprendió que para obtener lo que los co-conspiradores querían, él tenía que hacer “labores políticas en los niveles más altos para lograr que sucedan cosas como lograr que el gobierno, por ejemplo, asuma una posición en un caso que afecta a tus clientes”. Esto fue más sencillo debido al hecho de que, de acuerdo a Donziger, los co-conspiradores tenían “una relación estrecha” con “funcionarios gubernamentales ecuatorianos de alto rango” además de la “amplia influencia [del Frente] en Ecuador” y que “los líderes del Frente tienen acceso a ministros de gobierno e incluso al Presidente”.

81. La colaboración entre los Demandados RICO y la República del Ecuador es tan estrecha que un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ha concluido que era “un hecho establecido” que la República del Ecuador apoyaba a los Demandantes de Lago Agrio. La República del Ecuador recientemente afirmó en presentaciones judiciales que ha tenido un “un acuerdo de... interés común” formal con representantes de los Demandantes de Lago Agrio desde el año 2006. En pos de ese presunto interés común, los Demandados RICO y la República del Ecuador han coordinado de manera estrecha sus estrategias jurídicas y de relaciones públicas, tanto directamente como a través de los asesores jurídicos del Ecuador en los Estados Unidos.

Como parte de esta colaboración, los Demandados RICO han recibido ayuda, desde los niveles más altos del gobierno del Ecuador, de “aliados [quienes estaban] firmemente establecidos en la cima”. Por ejemplo, el mismo Donziger escribió una carta a nombre del embajador del Ecuador a los Estados Unidos, el Dr. Luis Gallegos, al periódico *The Wall Street Journal*.

82. Los Demandados RICO también han trabajado con Winston & Strawn LLP (“Winston & Strawn”), el estudio jurídico estadounidense contratado por el Ecuador para que les represente contra Chevron en procedimientos en los Estados Unidos. Los Demandados RICO han proporcionado información y otro tipo de ayuda a Winston & Strawn, incluso haciendo que Stratus proporcionara análisis científicos y Donziger ayudara con la redacción de documentos legales. Donziger, consciente de que este nivel de colaboración iba más allá de lo permisible, estaba preocupado de que pudiera llevar a Chevron a creer que los Demandados RICO y el gobierno ecuatoriano estuvieran juntos “en la cama”. Por lo tanto, al darse cuenta de que había sido fotografiado junto con un abogado de Winston & Strawn para un artículo periodístico, Donziger juró negar que el hombre en la fotografía fuera él. Sin embargo, Donziger reconoce que los Demandados RICO y la República del Ecuador han estado “ayudándonos bastante”.

83. Los Demandados RICO también han recurrido al gobierno para que *detenga* las reparaciones de Petroecuador, debido al impacto negativo que podrían tener sobre su plan. Por ejemplo, en 2009, en un correo electrónico a Donziger y otros conspiradores con el título de “PREOCUPANTE”, Fajardo advirtió que un periódico informaba que el gobierno estaba asumiendo la responsabilidad de la reparación, y, peor, que creía que costaría un monto “bajísimo”, US\$ 96 millones. Temeroso de que Chevron pudiera “d[ecir] por fin el Estado asumió su deber y va a limpiar lo que le corresponde”, Fajardo convocó a sus co-conspiradores para que actuaran. Donziger respondió en un mensaje de correo electrónico a Juan Sáenz, “Hay que ir a Correa para poner fin a esta mierda por una vez”.

84. Otros miembros del gobierno ecuatoriano han enviado también señales a la Corte de Lago Agrio de que el gobierno exigía que Chevron fuera hallado responsable. Como el Procurador General ecuatoriano, Diego García Carrión, le dijo a un periodista en agosto de 2008,

la postura del gobierno de Correa en este caso es clara: “La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron y no de Petroecuador”. Nuevamente, en mayo de 2010, el Procurador General García “deslindó cualquier responsabilidad de parte del Estado ecuatoriano en los daños ambientales que en la región amazónica cometió la petrolera estadounidense Chevron-Texaco”. Y en septiembre de 2009, el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, anunció: (i) el Litigio de Lago Agrio “tiene absoluta prioridad y esa sentencia tiene que ser tramitada cuánto antes”; (ii) el caso se trata de “una agresión contra el país entero”; y, (iii) en una señal directa a la Corte de Lago Agrio, Chevron, y no el Estado, tenía la responsabilidad plena de todos los daños.

85. No se llegó a este apoyo de manera independiente, sino a través de una colusión entre los Demandados RICO y la República del Ecuador. Ana Alban, en la oportunidad Ministra del Ambiente del Ecuador, se comunicó directamente con Donziger, y le aseguró que el gobierno estaba “dando el apoyo que podamos” a los Demandantes de Lago Agrio, recordándole que “trajimos al Presidente a la zona”, y asegurándole que ella tenía una “amistad muy cercana al Frente de Amazonía, que está trabajando conmigo, haciendo todo esto”.

86. El hecho de que el Presidente Correa y otros miembros del gobierno se hayan alineados con los Demandados y en contra de Chevron envía un mensaje claro a la judicatura ecuatoriana de que debe fallar que Chevron es responsable. Y envía un mensaje a Chevron de que debe pagar dinero a los conspiradores en la forma de una “conciliación” o enfrentar la sentencia fraudulenta e influida políticamente que los Demandados RICO tiene el propósito de tratar de ejecutar en los tribunales de los Estados Unidos o en otras partes.

b. Aprovechándose de un poder judicial ecuatoriano debilitado y cada vez más corrupto

87. Los Demandados RICO han podido influir en los procedimientos porque la independencia e integridad del poder judicial ecuatoriano se ha erosionado hasta el punto en que ahora es significativamente susceptible a estas tácticas y a presión externa y proveniente del

poder ejecutivo. De hecho, la presidencia ecuatoriana ejerce control de facto y poder casi autocrático sobre todas las instituciones ecuatorianas.

88. Diversas fuentes también confirman el dominio de los poderes políticos sobre la judicatura del Ecuador en los últimos años y la corrupción sistémica de la función judicial. Por ejemplo, los Indicadores de Ejercicio del Poder en el Mundo del Banco Mundial para el año 2009, compilados a partir de 21 fuentes independientes, clasificaron a Ecuador por debajo del 10° percentil de todos los países encuestados con respecto a las “normas de derecho”, un descenso del 31° percentil que ocupaba en el año 2003. El puntaje negativo del Ecuador es -1,28, lo que coloca al país por debajo de Corea del Norte (-1,25).

89. El Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado en marzo de 2010 también destaca que “siguen habiendo problemas graves” en el Ecuador con respecto a la “corrupción y denegación del debido proceso dentro del sistema judicial” y que la judicatura era “vulnerable a la presión externa y la corrupción”. De manera similar, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, publicado recientemente, el 15 de julio de 2010, describe el sistema judicial como uno que “prácticamente todo el mundo condena por su ineficiencia y sus malos manejos”.

90. Entre los medios utilizados por el Presidente Correa para controlar la judicatura se encuentra una política mediante la cual hizo que se emitiera un memorándum instruyendo a todos sus ministros que, si algún tribunal ecuatoriano prohíbe a su ministerio, y si el ministerio logra revocar el mandamiento judicial bajo apelación, el ministerio debe de inmediato demandar al juez que entabló el mandamiento judicial personalmente por daños y perjuicios.

91. Numerosos ejemplos de esta corrupción e influencia indebida se han manifestado en el Litigio de Lago Agrio. Mientras presidía el juicio, el Juez Núñez públicamente declaró que el Litigio de Lago Agrio había “demorado demasiado” inmediatamente después de un almuerzo de dos horas con el Presidente Correa, en el cual el Presidente se quejó de las demoras e insistió en “trámite expedito de casos que son de interés para el Ecuador”. El Juez Núñez se vio forzado a la larga a excluirse de la causa, no por su aparente sesgo, sino por motivo

de un escándalo de sollicitación de soborno en el cual fue captado en vídeo anticipando criterio contra Chevron.

92. Poco después de conocerse la historia de la sollicitación de soborno y de hacerse públicos los vídeos, el 2 de septiembre de 2009, el co-conspirador Juan Pablo Saenz escribió a Donziger y le aseguró que las “fuentes” del Frente “en el gobierno nos dicen que están activamente buscando [ecuatorianos involucrados en el escándalo], para cortarles la cabeza. Debemos enfocarnos en [los americanos envueltos] ya que esos son los títeres de Chevron. Correa y sus compadres se ocuparán del resto”.

93. Al día siguiente, el 3 de septiembre de 2009, el Juez Núñez radicó una petición para excluirse del Litigio de Lago Agrio. Al día siguiente, el Fiscal General Pesántez declaró públicamente que le había pedido al Juez Núñez que se excluyera “para evitar cualquier demora en el juicio”. Pesántez entonces añadió que Chevron había “probablemente causado importantes daños ambientales y también causado enfermedades” y confirmó que el gobierno del Ecuador esperaba recibir el 90% de la sentencia eventual contra Chevron.

94. Aunque Chevron radicó una petición para anular todos los fallos sesgados y políticamente motivados del Juez Núñez en el Litigio de Lago Agrio, la petición fue negada por el juez que reemplazó al Juez Núñez. Por lo tanto, las decisiones judiciales impropias y de mala fe del Juez Núñez continuaron empañando el Litigio de Lago Agrio y socavando los derechos de Chevron, tal como lo esperaban los Demandados RICO. Después de todo, la estrategia subyacente de los conspiradores ha consistido en que cuanto mayor sea el temor de Chevron de un fallo injusto en el fraudulento Litigio de Lago Agrio, más se convierte en blanco para un chantaje.

95. Con este telón de fondo de colusión y corrupción, los Demandados RICO han obtenido una sentencia a su favor y en contra de Chevron jugando el “jueg[o]” “sucio” y utilizando adulaciones para obtener favores de parte del gobierno ecuatoriano. Y todo esto es parte del plan de los conspiradores para convencer a Chevron de que pague, o sufra las consecuencias. Chevron ha iniciado un arbitraje internacional en virtud del Tratado Bilateral de

Inversiones, buscando reparación por las violaciones de la República del Ecuador de las obligaciones impuestas por el derecho internacional y del tratado por no respetar sus acuerdos contractuales. Los Demandantes de Largo Agrio y otras partes nombradas en esta Demanda Modificada no son ni pueden ser partes del Arbitraje conforme al Tratado, y Ecuador ha invocado inmunidad soberana contra las reclamaciones presentadas ante tribunales de los Estados Unidos.

c. Manipulación y falsificación de las conclusiones de sus propios peritos para corromper el proceso de inspección judicial

96. Al inicio del litigio, la corte de Lago Agrio ordenó que se realizara un proceso conocido como inspección judicial para evaluar los 122 sitios de producción petrolera del ex consorcio. Según el proceso convenido por ambas partes y por la corte, las partes nominaron peritos, que fueron designados por la corte, para investigar y emitir un dictamen sobre las condiciones de los sitios. La corte nominó un tercer conjunto de “peritos dirimientes” para que resolvieran las diferencias surgidas entre los peritos nominados por las partes.

97. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores creían que podían utilizar y corromper el proceso de inspección judicial para ventaja propia. Con ese fin, diseñaron una estrategia para “coreografía[r]” las inspecciones judiciales y para “crear conflicto, invitar a la prensa” a “entramparlos [a Chevron] en el conflicto”. Como lo expresara Donziger: “El objetivo de las inspecciones [era] ganar el caso legal, no producir un informe científico independiente”. Desde su perspectiva, el proceso de inspección judicial era “todo se trata de la política y discusiones y estupideces y espectáculo”. Parte de ese show era organizar una serie de manifestaciones en los sitios de las inspecciones judiciales — algunos de las cuales amenazaron con tornarse violentas (*véase* párrafo 76, *supra*)— para exhibir la fuerza y voluntad del “ejército” de los Demandados RICO y sus co-conspiradores y para dejarle claro al poder judicial que se lo estaba vigilando.

98. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también solicitaron y obtuvieron una providencia judicial para prohibirle a Petroecuador llevar a cabo actividades de reparación

en el área del ex consorcio. Fajardo explicó en detalle a sus colegas: “[Petroecuador está] alterando la prueba, y puede ser posible que cuando nuestros técnicos se dirijan en el PG a tomar muestras se pueden encontrar que la mayoría de los desechos han sido retirados. Eso nos puede complicar un poquito”. Fajardo explicó que era “urgente” que los Demandados RICO “coordin[en]” con Petroecuador “para que ellos desisten [remediar] hasta que podamos sacar la prueba nuestra necesaria”. En respuesta, Donziger advirtió a Fajardo “[t]engan cuidado con cartas escritas—mejor una consulta oral y informal[.] [N]o queremos que Texaco utilice tal carta para decir que estamos obstaculizando una remediación”. En otro correo electrónico enviado a Donziger y otros conspiradores, Fajardo expresó su preocupación de que el gobierno estaba asumiendo responsabilidad por las tareas de reparación, y que costarían una cifra “bajísim[a]” de \$96 millones. Posteriormente, los Demandados RICO recurrieron al gobierno para que los ayudara a clausurar las actividades de reparación.

99. En última instancia, el proceso de inspección judicial fue efímero. La primera y última vez que los peritos dirimientes emitieron un dictamen para uno de los sitios de la inspección judicial fue en febrero de 2006, en cuyo momento estuvieron de acuerdo con los resultados del perito de Chevron y concluyeron que la reparación de TexPet cumplió con las normas convenidas con Ecuador. Asimismo concordaron en que no había evidencia alguna de contaminación que presentara un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente.

100. Cuando los conspiradores comenzaron a ver que el proceso de inspección judicial no iba a proporcionarles la prueba instrumental que necesitaban para extorsionar el pago de Chevron, lo abandonaron y se abocaron a desarrollar sus propios antecedentes falsos y pruebas de hecho falsas, totalmente bajo su control. Al disponer de una serie de peritos remunerados a quienes presionaron, engañaron o reclutaron para su confabulación, los conspiradores crearon un expediente distorsionado y cada vez más descabellado y distorsionado, tras lo cual manipularon a la corte de Lago Agrio para que aceptara los antecedentes falsos como si se tratara del producto del análisis independiente.

(i) Persuasión de un perito para que produzca resultados parcializados y falsos

101. A fin de crear su primer punto de datos falsos, los Demandados RICO presionaron a su perito estadounidense, David Russell, a elaborar una estimación de daños exagerada y que continuaron “usa[ndo] para sacar una cifra que atemorice a Chevron y a sus inversores”, mucho tiempo después de que Russell enviara a Donziger una carta con una orden de cesar y abstenerse exigiendo que dejara de usar la estimación.

102. En el año 2003, Russell, quien fue contratado por los Demandados RICO para supervisar el proceso de inspección judicial para los Demandantes de Lago Agrio y para preparar un análisis de daños, estimó inicialmente el costo de la reparación en aproximadamente US\$ 6.000 millones. Según las propias palabras de Russell, la estimación se preparó en “muy corto tiempo, con solo una semana de revisión en la selva y con mucha influencia [de Donziger] en el modo de redactar”. A insistencia de Donziger, y como prueba de su fuerte influencia en el cálculo inicial de Russell, éste utilizó la opción de reparación más costosa disponible porque Donziger quería una estimación de daños “grande”. Incluso en ese caso, Russell dejó claro ante Donziger y otras personas que los datos cuantitativos “no ha[n] sido establecid[os]” y que él y su equipo “estamos en la etapa de cálculos aproximados”.

103. A medida que Russell continuaba con su trabajo, se dio cuenta de que la realidad de las pruebas no sustentaban su estimación de daños. Para el mes de diciembre de 2004, le dijo a Donziger “que Texaco puede estar en lo cierto cuando indica que la remediación se está llevando a cabo tal como fue diseñada, y está degradando el petróleo”. Dos meses más tarde le envió un informe actualizado a Donziger en el que explicó: “A partir de los datos que he visto hasta ahora, no estamos encontrando ninguno de los compuestos altamente carcinogénicos que uno espera ver cuando investiga las piscinas de petróleo”.

104. Después de que Russell preparara su estimación, se enteró de que incluso el trabajo de reparación que consideraba apropiado podía realizarse por un costo considerablemente menor y le escribió a Donziger en febrero de 2006 para exigirle que dejara de usar la estimación

infundada y exagerada de US\$ 6.000 millones. En su carta, Russell informó a Donziger que en base a la información que había obtenido después “no puedo más que afirmar que el cálculo de costos de 2003 es demasiado alto, por un margen importante, quizá, diez veces la cantidad real o más”. (Énfasis en el original.) Efectivamente, un año más tarde, otro de los co-conspiradores, Charles Champ, estimó que una reparación y proyectos sociales y de desarrollo afines podían llevarse a cabo por US\$ 1.000 millones, una cifra que, en sí misma, es ridículamente exagerada y fue calculada en base a parámetros de costo ficticios. Sin embargo, los Demandados RICO jamás divulgaron públicamente esta cifra exagerada debido a que era demasiado baja para sus fines ilícitos.

105. En la misma carta que exigía que cesara y se abstuviera, Russell se opuso al uso por parte de Donziger y de Amazon Watch de la estimación de US\$ \$6.000 millones en su solicitud ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (*Securities and Exchange Commission*, “SEC” [por sus siglas en inglés]) para que dicho organismo investigara a Chevron en virtud de la ley Sarbanes-Oxley por presuntamente haber “inexactitud en la declaración de responsabilidades”. Russell aclaró que “ese cálculo de costos ya no es válido, y si se me cita a testificar, declararé que los costos son mucho menores sobre la base del conocimiento que tenía a disposición en el momento en que finalicé el proyecto”.

106. Russell también recalcó en su carta que no deseaba tener más nada que ver con Donziger y el litigio que los Demandados RICO y sus co-conspiradores intentaban seguir contra Chevron:

¡No quiero asistir a los cortes de los Estados Unidos y no quiero verme involucrado en su demanda contra Texaco/Chevron!

No he preparado ningún otro cálculo de costos ni tengo la intención de hacerlo. Solo me interesa ver que el nombre de mi empresa y mi reputación no se vean perjudicados por la asociación continua con la demanda de Aguinda vs. Texaco. Si se me cita a declarar, diré la verdad de lo que sé sobre los costos existentes, de cómo se prepararon los cálculos de costos y cuáles serían las diferencias en los costos unitarios para la limpieza de la contaminación en Ecuador.

No me quiero meter en su camino ni en su demanda, pero al usar y abusar de los cálculos de costos desactualizados para atacar a Chevron, usted me sigue involucrando. El proyecto de Ecuador ha sido un capítulo triste en mi vida y no quiero volver a verme involucrado con usted ni con él de ninguna manera.

Varios comunicados de prensa recientes que usan el cálculo de costos de 2003, además de la última solicitud de Amazon Watch, me perjudican a mí y a mi empresa.

Obtenga un cálculo de costos nuevo generado en Ecuador. Deberá hacerlo según los términos de la Inspección Global, como lo exige la Corte de Ecuador. El cálculo de costos de 2003 es una bomba de tiempo que se le volverá en su contra, y muy mal si alguien toma las debidas precauciones.

(Énfasis en el original.)

107. Donziger no anduvo con rodeos al responder: “No me importa qué carajo diga ese tipo”. En una conversación con el co-conspirador Soltani de Amazon Watch, Donziger reconoció que el “precio” de la reparación “sólo sería una conjetura” y que el “cálculo aproximado” de US\$ 6.000 millones de Russell exageró considerablemente los costos reales de la reparación: “[E]l asunto de los seis mil millones de dólares ha salido a la luz. La realidad es que en base a lo que me está diciendo este tipo, costaría menos que eso. Bastante menos que eso . . . “. Y en un mensaje electrónico a sus co-conspiradores, Donziger reconoció que el “hecho de que [Russell] enviara esta carta implica una cierta cant. de peligro para nosotros”. No obstante, en una conversación posterior con los Demandados Fajardo y Yanza y otros, Donziger habló de pedir una suma más alta que los US\$ 6.000 millones para que una sentencia por un monto inferior pudiera mostrarse como favorable para Chevron: “Pero como concepto, yo pregunto ¿pedimos mucho mas de lo que realmente queremos como el táctica? ¿Pedimos ocho y esperamos tres, para que que [el juez] diga, ‘Texaco, mira, yo corté la gran parte.’”.

108. Y a pesar de que Russell le dijera a Donziger que su estimación era imprecisa y que “no quiero verme involucrado en” el Litigio de Lago Agrio, y a pesar de que Donziger le asegurara a Russell que dejaría de usar su trabajo, los Demandados RICO y su co-conspiradores siguieron utilizado la estimación de US\$ 6.000 millones exagerada y repudiada. Como lo explicó Donziger: “[D]ado que [los Demandados RICO] h[abían] estado trabajando con la cifra

de Russell todos estos años”, no seguir usando la cifra de US\$ 6.000 millones “[los] haría quedar como tontos”. Por ejemplo, Amazon Watch, exhibiendo la misma indiferencia por los hechos que Donziger, continuó promocionando la cifra de US\$ 6.000 millones mucho después de que Russell enviara a Donziger la carta con la orden de cesar y abstenerse. Los comunicados de prensa de Amazon Watch afirmaban que la compañía de Russell, Global Environmental Operations, respaldaba la estimación de daños de US\$ 6.000 millones a pesar de que Russell implorara a Donziger dejar de “abusar” el “nombre de [la] empresa [de Russell]” asociándolo con el Litigio de Lago Agrio. Por ejemplo, un comunicado de prensa del 20 de marzo de 2007, titulado “Corte de Ecuador acelera el juicio por US\$ 6.000 millones contra Chevron por contaminación de la selva amazónica” anunciado por Amazon Watch establece: “La única evaluación independiente de daños y perjuicios, realizada por la firma estadounidense Global Environmental Operations, calcula los costos de remediación en US\$ 6.140 millones, sin incluir daños personales a miles de residentes de la zona”. Al publicar este comunicado de prensa, los conspiradores mintieron al afirmar que un perito había estimado los daños en US\$ 6.000 millones cuando sabían que Russell había repudiado la cifra de US\$ 6.000 millones por “no es válido” y ser “una bomba de tiempo” más de un año antes. Donziger después confesó que no tenía otra base para la cifra de \$6.000 millones cuando se emitió el comunicado de prensa.

(ii) Presentación de informes periciales falsificados

109. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores no sólo presionaron a Russell a calcular una evaluación de daños cuantiosa e infundada, sino que también presentaron informes periciales falsificados bajo el nombre de otro de sus peritos estadounidenses, el Dr. Charles Calmbacher, los cuales contradijeron sus conclusiones de que no había hallado evidencia alguna de perjuicio.

110. En el año 2004, los conspiradores seleccionaron a Dr. Calmbacher como perito a cargo de su inspección y para que actuara en calidad de perito declarante de los Demandantes de Lago Agrio para cuatro de los sitios que serían inspeccionados.

111. Poco tiempo después de que el Dr. Calmbacher comenzara su trabajo en el campo, Donziger le informó a él y a los otros integrantes del equipo técnico que “[e]l objetivo es ganar el caso legal, no producir un informe científico independiente”. Para el gran disgusto de los Demandados RICO, el Dr. Calmbacher no acató esa advertencia cuando les informó a los Demandados RICO y a sus co-conspiradores que, en su opinión profesional, los sitios que inspeccionó no necesitaban remediación posterior y no presentaban un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente. Obviamente, eso no fue lo que deseaban escuchar los Demandados RICO y sus co-conspiradores. En efecto, Donziger había instruido al Dr. Calmbacher encontrar contaminación durante las inspecciones de los sitios.

112. Al Dr. Calmbacher le inquietaban las instrucciones de Donziger y el nivel de control que los Demandados RICO trataron de ejercer sobre su trabajo. Le preocupaban los métodos y el alcance del análisis que los Demandados RICO y sus co-conspiradores planeaban realizar en las muestras que ellos recolectaban. En su opinión, el análisis era insuficiente para verificar todos los aspectos del petróleo que, a su criterio, debían analizarse. No obstante, cuando el Dr. Calmbacher informó a Donziger de sus inquietudes, Donziger no les dio importancia y decidió proceder con el análisis limitado e inadecuado que ya había planeado.

113. Cuando quedó claro que los Demandados RICO y sus co-conspiradores no quedaron satisfechos con las conclusiones del Dr. Calmbacher, ellos presentaron ante la Corte de Lago Agrio muestras de la inspección judicial con el nombre “Laboratorio Selva Viva” en los formularios de cadena de custodia. Pero no existe ningún Laboratorio Selva Viva; en cambio, el “análisis” fue llevado a cabo (si es que dichas pruebas fueron realizadas alguna vez) en la habitación de hotel de los Demandados RICO y su equipo de co-conspiradores, y tomaron prestado el nombre “Selva Viva”— el mismo nombre del Demandado RICO que fue “cre[ado]” “simplemente como un mecanismo de traspaso para administrar fondos para el litigio ” en Ecuador— para imprimir falsa autenticidad a su fingida inspección. Los conspiradores sabían que dicha actividad no carecía de riesgos, y temían que el Dr. Calmbacher “va a informar la corte que el proyecto de Selva Viva es un fraude”.

114. En última instancia, los Demandados RICO y sus co-conspiradores decidieron que no necesitaban que el Dr. Calmbacher concordaran con su posición, y que si los hechos no fundamentaban su caso, entonces inventarían nuevos. Por lo tanto, después de que el Dr. Calmbacher comunicara sus hallazgos negativos a los Demandados RICO y a sus co-conspiradores, lo “despidieron, sin aviso o explicación alguna” y Donziger le ordenó regresar a los Estados Unidos. En ese momento, Donziger creía que “[Dr. Calmbacher] firmará los informes periciales, pero, es probable que debamos redactarlos en Quito”.

115. Sin embargo, Dr. Calmbacher expresó categóricamente que él sería quien “[r]edactaré los informes periciales” a pesar de sus diferencias con Donziger, porque necesitaba estar “en cumplimiento de mi obligación ante el tribunal y para mantener mi integridad profesional ante el tribunal ecuatoriano”. En un mensaje electrónico dirigido a Donziger, el Dr. Calmbacher dejó claro que los Demandados RICO no debían alterar ninguna de sus conclusiones del informe:

Asimismo, se me ha señalado que no es muy común que un perito permita a otros contribuir en la elaboración de un informe. Comentarios o la revisión es aceptable, pero el dictamen del perito y sus conclusiones son definitivos. Por consiguiente, no tengo, ni siento, obligación alguna de permitir a su equipo de ingenieros textiles y compinches [sic] asociados que revisen o corrijan mis informes. Estoy asegurado, como perito del tribunal, de que está completamente dentro de mi derecho redactar y presentar mi informe, independientemente de aquellos que me han propuesto para la designación de perito. Mi única obligación es decir la verdad, como yo lo vea, al tribunal, sin importar las consecuencias que ello pueda implicar para cualquiera de las partes.

116. Después de la reprimenda del Dr. Calmbacher, Donziger amenazó con retenerle el pago para presionarlo a redactar los informes de manera que fundamentaran las afirmaciones de los Demandantes de Lago Agrio. Donziger describió esta estrategia a Wray, Kohn y Bonifaz, pero también mencionó que si no se resolvía el problema, “estamos trabajando en un plan alternativo que explicaremos en persona”.

117. El Plan B ponía en ejecución la opinión de Donziger de que “[l]a ciencia tiene que servir a la abogacía, no la abogacía a la ciencia”. Los Demandados RICO y sus co-

conspiradores hicieron caso omiso de las conclusiones mismas del Dr. Calmbacher y se pusieron a fabricar informes que se presentarían a nombre del Dr. Calmbacher, hecho del que Chevron se enteró por primera vez durante la declaración testimonial jurada del Dr. Calmbacher de marzo de 2010, para la cual Chevron obtuvo una citación al amparo del Artículo 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

118. La dificultad para los Demandados RICO era cómo obtener la firma del Dr. Calmbacher en las conclusiones falsas que deseaban presentar como resultados del “perito”. Su solución fue enviar al Dr. Calmbacher los borradores preliminares del informe, que caracterizaban correctamente sus conclusiones, para que los revisara. Como los borradores parecían reflejar precisamente sus opiniones, el Dr. Calmbacher autorizó la presentación de los informes.

119. Acto seguido, los conspiradores convencieron al Dr. Calmbacher de entregar páginas de firma, junto con varias páginas en blanco con sus iniciales, a lo cual accedió, bajo el pretexto falso de que esas páginas extra se usarían para presentar los informes que ya había autorizado para presentación. A pedido de los conspiradores, el Dr. Calmbacher envió por servicio de entrega urgente a Ecuador un juego de esas páginas firmadas e inicialadas y envió un segundo conjunto directamente a Donziger en Nueva York.

120. No obstante, los informes que los Demandados RICO y sus co-conspiradores presentaron a nombre del Dr. Calmbacher no fueron los mismos que él autorizó presentar. En cambio, como parte de su Plan B, los Demandados RICO y sus co-conspiradores prepararon informes distintos y fraudulentos que expusieron incorrectamente las pruebas y concluyeron que los sitios inspeccionados presentaban un peligro para el medio ambiente y necesitaban remediación adicional. Los conspiradores imprimieron sus informes fraudulentos en las páginas que el Dr. Calmbacher había inicialado, utilizaron las páginas de firmas que él había entregado y presentaron los informes falsificados ante la corte de Lago Agrio.

121. Si bien desde entonces Chevron informó a la corte de Lago Agrio sobre los informes falsificados de Calmbacher, hasta la fecha la corte se ha rehusado a eliminarlos del expediente judicial o a tomar medidas correctivas.

d. Arreglo del nombramiento de Cabrera como perito para el examen pericial global y redacción secreta de su informe presuntamente “independiente”

122. Cuando Dr. Calmbacher se rehusó a cooperar en la confabulación para defraudar y extorsionar a Chevron y cuando los peritos dirimientes de la corte de Lago Agrio comenzaron a confirmar la falta de pruebas de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, éstos cambiaron de táctica. Al darse cuenta de que los peritos dirimientes neutrales no aceptarían sus pretensiones fraudulentas, los Demandados RICO y sus co-conspiradores solicitaron que la corte de Lago Agrio abandonara el proceso de inspección judicial que había sido convenido por las partes. En cambio, los conspiradores dispusieron que la corte de Lago Agrio creara un nuevo proceso de “examen pericial global” y consiguieron el nombramiento de un co-conspirador para ocupar el cargo de “perito del examen pericial global” presuntamente neutral, con el cual trabajarían en secreto para redactar su informe en su nombre. Hasta que Chevron descubrió la conducta fraudulenta subyacente de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, su plan parecía estar surtiendo efecto.

123. Los conspiradores propusieron a la corte de Lago Agrio que nombrara un único perito y que éste y su equipo llevaran a cabo la evaluación global del antiguo sector de la concesión.

124. A fin de implementar su confabulación, los Demandados RICO reunieron un equipo escogido cuidadosamente por los conspiradores, compuesto por científicos estadounidenses, ecuatorianos, ingenieros y otros peritos, quienes realizarían el trabajo que había sido encargado a Cabrera. Y luego de que el informe fue presentado, se dio a conocer que algunos de estos individuos eran integrantes del equipo ficticio de Cabrera.

125. En diciembre de 2006, más de dos meses antes de que Cabrera fuera designado por la corte, Donziger habló del plan de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de redactar en secreto el informe pericial “independiente” con el co-conspirador Soltani: “El juez va a nombrar a un fulano en el Ecuador, eh, para que sea el perito, pero en realidad, sabes, le vamos a apoyar con el trabajo—nuestra gente, E-Tech, quienquiera que decidamos usar”. Desde el punto de vista de Donziger, el perito “[enia] que jugar completamente con nosotros y permitirnos el liderazgo al mismo tiempo que proyecta la imagen de que está trabajando para la corte”. En efecto, durante ese período la pregunta fundamental para los demandantes era, como reflexionara Donziger, “cómo podemos controlar a este perito?”

(i) Semanas antes de que la corte designara a Cabrera, los Demandados RICO se reunieron con él para planear su informe pericial “independiente”

126. A principios del año 2007, los Demandados RICO y sus co-conspiradores pusieron en marcha su confabulación ampliada para defraudar y extorsionar a Chevron. El primer asunto que se abordaría era asegurarse de que la corte adoptara el nuevo proceso de “examen pericial global” propuesto por los Demandados RICO y sus co-conspiradores y que nombrara a Cabrera como perito del examen pericial global.

127. El 16 de enero de 2007, Fajardo informó que había estado en contacto con el juez de Lago Agrio en persona y que le había enviado un mensaje electrónico acerca de a quién nombrar como perito del examen pericial global. Luego Fajardo se dedicó a persuadir a Cabrera para que se uniera a la confabulación abusiva en una serie de reuniones secretas durante el mes de febrero de 2007. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores apelaron a Cabrera primero a nivel emocional, inculcándole “la importancia del caso, de lo que significa para la historia, de cómo podemos hacer algo que siempre se recordará, de lo que esto significaría para el país y para el mundo, etc”. También le dejaron en claro que se lo recompensaría económicamente. No sólo se le pagaría a Cabrera una suma considerable por su “trabajo”, monto que ascendió con el tiempo a por lo menos US\$ 263.000, sino que Donziger o uno de sus co-conspiradores

probablemente le dijeron a Cabrera lo que Donziger le había dicho a otro candidato a perito: “si él actuaba como perito global de la corte y los demandantes ganaban el caso, que él iba a tener un trabajo el resto de su vida al estar involucrado en la remediación”.

128. Habiendo convencido a Cabrera de adherirse a su conspiración y con la seguridad de saber que la corte seleccionaría a Cabrera, los conspiradores comenzaron a trabajar con él para planear la redacción del informe a cargo del equipo estadounidense encubierto que los Demandados RICO y sus co-conspiradores habían reunido. Este informe llegaría a convertirse en una descripción esencialmente ficticia de la región, que alegaba perjuicios masivos con datos o análisis válidos escasos o inexistentes como fundamento. Y Cabrera actuaría como la marioneta de los Demandados RICO y sus co-conspiradores.

129. El 3 de marzo de 2007 — dos semanas *antes* de que la corte designara a Cabrera — Donziger, Fajardo y Yanza se reunieron con Cabrera para planear el informe. También asistieron a esta reunión los integrantes del equipo estadounidense quienes colaboraban con los conspiradores para redactar en secreto el Informe de Cabrera, incluidos los Demandados Ann Maest, Richard Kamp de E-Tech International, y Charles Champ de Champ Science and Engineering.

130. En la sesión matutina de la reunión del 3 de marzo, Fajardo expuso una presentación en PowerPoint con detalles del plan para el Examen Pericial Global de Cabrera. Como parte de ese plan, Fajardo declaró: “Nuestra teoría legal es que Texaco es responsable de todo el daño existente, incluso el causado por Petroecuador”. Fajardo luego reseñó el plan para tratar con Chevron: “el principal problema de Chevron, ahorita, es que no sabe qué diablos va a pasar en el peritaje global. O sea, ellos no saben esto. Espero que ninguno de ustedes les cuente, por favor. [risas] [E]s un problema de Chevron”. Luego, Fajardo identificó seis pasos que los Demandados RICO debían seguir, concretamente: (1) el equipo debería “[m]antener la presión y la vigilancia permanente en la corte”; (2) el equipo debería asegurarse de “[q]ue el perito mantenga una permanente coordinación con el equipo tecnico y legal de los demandantes [de Lago Agrio]”; (3) “[e]l coordinador técnico de los actores [de Lago Agrio] debe estar a

tiempo completo en el proceso” y “[a]compañar al perito en el campo”; (4) “algún abogado . . . esté siempre en el campo para también proteger la actividad que se realice”; (5) el equipo debería “[d]ar las facilidades y apoyo necesario al equipo de campo”; y (6) el equipo debería “[a]poyar al perito en la redacción del informe”.

131. Fajardo dejó en claro que ellos eran los que en realidad redactarían el Informe Cabrera, para lo cual explicó: “Y aquí sí queremos el apoyo de todo el equipo técnico nuestro... de expertos, científicos, abogados, politólogos, para que todos aportemos en ese informe— o sea— vean . . . *la carga no va a ser del perito. La carga la llevamos entre todos*”. Alguien preguntó si el informe final iba a ser preparado únicamente por el perito Cabrera. Fajardo respondió que el perito tendría que “firmar en el informe y revisarlo. Pero nosotros... tenemos que aportar en ese informe”. La Demandada Ann Maest de Stratus añadió, con una sonrisa: “Pero Chevron, no” y todos se rieron.

132. Más tarde ese mismo día, los conspiradores hablaron del “plan de trabajo”, un documento preparado por los conspiradores y posteriormente presentado por Cabrera ante la corte ecuatoriana en su calidad de perito judicial independiente. Donziger propuso que él y los consultores radicados en EE.UU. formaran un “comité de trabajo” para presentar un “borrador de plan” con la meta de estar “más o menos ochenta por ciento, noventa por ciento al destino de un plan” en unos días. Mirando a Cabrera, Donziger luego dijo: “y Richard, por supuesto, es usted quien tiene que realmente estar cómodo con todo eso. Y también def—definimos el aporte que necesita el perito”. Donziger ha confesado bajo juramento que este plan de trabajo fue redactado por sus co-conspiradores y que Cabrera no reveló sus verdaderos autores.

133. La grabación de la reunión del 3 de marzo concluyó con un comentario de Donziger en el que dice que ellos podrían “aumentar esto hasta treinta mil millones en un día”. Donziger continuó diciendo que estaba exagerando – que en realidad esto ocuparía 90 días. Y, al fin de cuentas, los Demandados RICO y sus co-conspiradores “aumentar[on]” el estimado de daños en el Informe Cabrera a \$27.000 millones. Su plan de presentar sus teorías de responsabilidad y daños y perjuicios bajo el disfraz de un informe pericial “independiente” cuyo

contenido fuera dictado por la misma persona que iba a beneficiarse del pago extorsionado de Chevron estaba, por lo tanto, en estado bien avanzado.

134. Al día siguiente, el 4 de marzo, Donziger explicó cómo concretaría la meta de la conspiración a pesar de la ausencia de pruebas justificadas. Cuando la Demandada Maest y los otros consultores contratados por los Demandados RICO y sus co-conspiradores para redactar el Informe Cabrera le dijeron a Donziger que no había prueba alguna de que la contaminación de las piscinas se hubiera extendido a las aguas subterráneas aledañas, Donziger respondió: “Espere un segundo, usted sabe, estamos en Ecuador, okay, . . . Puede decir lo que quiera, y al final de cuentas, hay mil personas alrededor del edificio del tribunal, y se consigue lo que uno quiere” y “[e]n consecuencia, si tomamos nuestra evidencia existente sobre el agua freática, que efectivamente se encuentra directamente debajo de la fuente . . . [y] quisiéramos extrapolar basándonos nada más que nuestra, um, teoría”, entonces “[p]odemos hacerlo. Y podemos conseguir dinero por eso”. Continuó diciendo: “*Porque al final de cuentas, todo esto es nada más que mucho humo y espejos y mierda para el tribunal*”. Y cuando Champ adujo que “no hay suficiente información sobre esa agua freática” y que “el unico agujero en la remediación es el agua”, Donziger indicó al equipo de filmación que estaba grabando la conversación que dejaran de filmar, diciendo: “[A]llí hay otro punto. Tengo que demostrar . . . a esa gente, pero no puedo dejar que la cámara lo capte”.

135. Desde el primer momento, la estrategia de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, como se pusiera de manifiesto en primer lugar en el intercambio de Donziger con Fajardo sobre si convenía solicitar un monto aún más alto que la estimación de daños repudiada por Russell de US\$ 6.000 millones para que pareciera que la sentencia por un monto menor era razonable e incluso favorable en cierta medida para Chevron (*véase* párrafo 107, *supra*), era consignar una cifra absurda en concepto de daños para convencer al juez de adjudicar una cifra menor pero no menos descabellada. Donziger describió la meta a sus consultores: “Si tenemos una demanda legítima por cincuenta mil millones de dólares y ellos al final—el juez dice, bueno, no les puedo dar menos de cinco mil millones”. Explicó que una cifra inflada por daños

permitiría al juez decir que “Tex obtuvo una gran victoria. [T]umbaron el noventa por ciento de la demanda por daños y perjuicios”.

136. Donziger le restó importancia a otros comentarios de los consultores Champ y Kamp, quienes expresaron inquietud acerca de la reunión con Cabrera. Primero, Champ le dijo a Donziger: “Sé que debemos ser totalmente transparentes con Chevron en mostrarles lo que estamos haciendo”. Donziger respondió: “No, no”, y declaró: “[p]orque descubrirán todo lo que hacemos”. Continuó diciendo: “Nuestro objetivo es que no sepan una mierda . . . y por eso tienen tal pánico”. Luego, Kamp expresó intranquilidad acerca del proceso y le comentó a Donziger que “[t]ener al perito [Cabrera] allí ayer retrospectivamente . . . Eso fue bizarro”. En respuesta, Donziger le ordenó a Kamp: “No hable sobre eso” y “[e]sa es la forma en que funciona”. Donziger le dijo al equipo de filmación: “[E]so es extraoficial”.

137. Los cinematógrafos de *Crude* también tuvieron dudas sobre la relación estrecha que existía entre los Demandados RICO y sus co-conspiradores y Cabrera, y manifestaron que “[n]o entend[ían] por qué Chevron dice que el perito nombrado por el tribunal no es imparcial”. Los cinematógrafos le preguntaron a Fajardo por qué le estaba pagando a Cabrera, “¿[p]or qué Chevron no está pagando también al perito y por qué no tienen su propio perito[?]” Incluso para personas comprensivas sin capacitación en asuntos jurídicos, había algo de la relación que existía entre los Demandados RICO y sus co-conspiradores y Cabrera que parecía incorrecto.

(ii) La corte nombró a Cabrera como “perito del examen pericial global” “independiente”

138. A fines de febrero, para encubrir el hecho de que el juez planeaba nombrar al “perito del examen pericial global” por el que habían abogado los Demandados RICO, el juez llamó a Cabrera y pretendió solicitarle una recomendación de un perito. Pero para este momento, los Demandados RICO ya habían conseguido secretamente el nombramiento de Cabrera. En efecto, en su correspondencia interna, hablaron de los pasos que habían tomado para estar “100% seguro de que el juez designaría a Richard”, incluyéndose la denuncia con la que amenazaron al juez, a quien se la mostraron pero que nunca radicaron. Por lo tanto, cuando

Donziger temió que el llamado del juez a Cabrera significara que peligraba el nombramiento del “perito” escogido cuidadosamente por los Demandados RICO, Fajardo lo tranquilizó diciéndole que el llamado era simplemente “parte del complicado plan del juez para protegerse”. El 19 de marzo de 2007, la corte de Lago Agrio efectivamente nombró a Cabrera como perito del examen pericial global, disponiendo que Cabrera “responde[ría] por la totalidad del informe, la metodología utilizada, por la labor de sus auxiliares, etc.”

139. Cabrera, los Demandados RICO y sus co-conspiradores habían violado los términos del nombramiento de Cabrera antes de que hubiera sido nombrado, y continuarían haciéndolo durante su servicio como perito. Procedieron de esa manera aunque los Demandados RICO sabían, como lo ha admitido Donziger desde entonces, que la corte de Lago Agrio le había ordenado a Cabrera “actuara con absoluta objetividad” y “actuara con independencia de las partes”. No obstante, los Demandados RICO sabían que debían mantener la fachada de independencia. Para ello, al poco tiempo de que se nombrara a Cabrera, conspiraron para realizar “una cosa que pueda hacer Richard [Cabrera] CONTRA nosotros para probar su independencia”.

140. Cuando el 13 de junio de 2007 la corte de Lago Agrio le tomó juramente oficialmente a Cabrera en calidad de perito del examen pericial global, Donziger exclamó que: “el perito acaba de ser juramentado . . . ¡¡¡esta es una victoria enorme!!!” Asimismo, explicó en detalle que el acontecimiento era bueno para el caso de los Demandantes de Lago Agrio: “Tenemos que seguir presionando por todos los frentes, todo el tiempo. . . . [T]oda esta huevada sobre las leyes y los hechos . . . pero al final de cuentas, se trata de fuerza bruta [el nombramiento de Cabrera] tardó cinco meses . . . cinco meses de demora . . . y [el juez] nunca [lo] hubiese hecho si no fuera porque nosotros lo presionamos de verdad”. E indicó “la visita al juez la semana pasada fue una gran ayuda”.

141. En concordancia con la condición única y central de Cabrera como único perito de la corte en la cuestión de daños, incluida la responsabilidad, la corte de Lago Agrio dictó repetidas órdenes de que Cabrera debía mantener su independencia de todas las partes. Por

ejemplo, cuando la corte le tomó juramento a Cabrera en junio de 2007, éste debió prometer que desempeñaría sus funciones “con completa *imparcialidad e independiencia* de las partes”. Y el 3 de octubre de 2007, la corte de Lago Agrio ordenó a Cabrera “observe inflexiblemente una total independiencia respecto a las partes”. La corte asimismo explicó que “la posición de perito es de absoluta imparcialidad y transparencia respecto las partes y a sus abogados” y exigió a Cabrera que “observe y garantice . . . la imparcialidad de su trabajo y la transparencia de sus actividades”. Para ese entonces, los conspiradores estaban ya dedicados a pleno a planificar la redacción del informe presuntamente independiente de Cabrera, y, en efecto, es posible que la corte misma haya estado participando en la confabulación para ese entonces, y que haya estado dictando dichas órdenes simplemente para mantener las apariencias.

142. En noviembre de 2007, la corte de Lago Agrio ordenó que “todos los documentos que sirvan de soporte o fuente de datos para el trabajo que realiza el señor Perito, deben ser entregados conjuntamente con el informe. . . . [E]. Perito está obligado a citar en su informe todas las fuentes científicas, documento lógicas y legales que utilice en la elaboración de su trabajo”.

(iii) Mientras Cabrera orquestaba simulacros de inspecciones, los Demandados RICO y sus co-conspiradores redactan secretamente su informe.

143. En público, los Demandados RICO y sus co-conspiradores y Cabrera actuaban para mantener la ilusión de que Cabrera era un perito independiente. Durante una inspección, en un intercambio incluido en el documental *Crude*, Cabrera y Fajardo hicieron una gran demostración al rechazar una sugerencia del abogado de Chevron, Diego Larrea, para que se permitiera a los abogados de las partes sugerir a Cabrera qué muestras podría tomar para sus inspecciones (extracto tomado de *Crude*):

Cabrera: (Dirigiéndose al público) He sido designado para actuar como perito en el informe de evaluación global. A esta altura, soy la máxima autoridad en esta evaluación. Las muestras tomadas y los análisis hechos hoy serán los únicos válidos para este informe.

Larrea: (A Cabrera) Nos gustaría que considere la posibilidad de hacernos saber qué tipo de muestra se va a tomar en cada lugar...para que posteriormente podamos sugerir que otras muestras tomar...—

Fajardo: (Levantando la mano en protesta) Espere, espere, espere. . .

Larrea: De la misma forma en que Pablo dice...

Fajardo: no puede hacer eso.

Larrea: El perito puede inspeccionar el equipo para verificar si es visible... (A Fajardo) Es una solicitud. Puede rechazarla o aceptarla.

Fajardo: facultadlo que acordamos es que el perito tiene autoridad para decir lo qué va a hacer. Nosotros no podemos decir: “tomen muestras aquí y allá”. Disculpen, pero es algo que él tiene que decidir.

Cabrera: (A Larrea) Ustedes pueden efectuar sugerencias, pero yo no puedo trabajar de acuerdo con vuestros criterios. Yo decido dónde tomo las muestras, y es todo, señor abogado.

144. Desde ya, si bien el dúo entre Fajardo y Cabrera en el sitio de inspección se exhibió en forma prominente en el estreno de *Crude* en cines, las escenas eliminadas muestran que Fajardo no se estaba limitando simplemente a inspeccionar el equipo de Cabrera. En su sesión de un día entero unas semanas antes, Fajardo le había dicho a Cabrera exactamente bajo qué “criterios” trabajaría y cómo los asociados de Fajardo redactarían secretamente el Informe Cabrera en su lugar. Y cuando Cabrera acudió al campo para realizar las pruebas, Donziger dictó otros “criterios” bajo los cuales pretendía que Cabrera trabajara, como lo indicó en un mensaje electrónico dirigido a Yanza y a Fajardo: “Cuando vengo, re-analizamos el trabajo y el presupuesto con Richard y ajustemos con un equipo mucho más pequeño. . . o si lo hace, lo hace bajo el más estricto control con un número de muestras super-limitadas. Y, que cambiamos el enfoque a los datos en la oficina [sic]”. Los Demandados RICO también admitieron que seleccionaron los lugares donde Cabrera tomaría muestras. De hecho, según ha confesado

Donziger, Fajardo estaba en “contacto regular” con Cabrera –sin que Chevron lo supiera– mientras Cabrera supuestamente actuaba como el perito “independiente” de la corte.

145. En los Estados Unidos, ya se había puesto en marcha el proceso para redactar el Informe Cabrera. Justo después de la reunión de marzo con Cabrera, David Chapman, mandante de Stratus, envió un mensaje electrónico a Donziger para proponer que “la mejor forma de que esto funcione sería si Stratus hiciera gran parte del trabajo, aglutinando todos los elementos y escribiendo el informe”. Al poco tiempo, el 27 de abril de 2007, los conspiradores se reunieron en las oficinas de Stratus en Boulder, Colorado, para hablar de cómo iban a “aumentar esto hasta treinta mil millones”, tal cual lo expresó Donziger. En la reunión estuvieron presentes en nombre de Stratus el presidente Joshua Lipton, David Chapman, Preston Sowell y los Demandados Beltman y Maest. Los conspiradores finalmente adoptaron el enfoque sugerido por Chapman, permitiendo que Stratus tomara la iniciativa en la redacción del informe. Según lo confesó más adelante Donziger, Beltman, el líder de proyecto de Stratus contaba con “una buena medida de discreción”, incluyendo la autoridad para eliminar secciones del informe si Stratus no las podía completar a tiempo.

146. Los participantes de esta reunión también analizaron cómo podrían aprovechar el Informe Cabrera, una vez que se presentara ante la corte de Lago Agrio, como respaldo presuntamente independiente de la posición de ellos. Donziger habló de cuán importante y qué alcance debía tener el informe en su opinión: “También vemos que este caso tiene una mayor implicancia. Eh... Creemos que, eh..., esta es la clase de cosa sobre la cual a la gente le gustará leer, tú sabes, como este informe de daños, los académicos, la gente de tu especialidad, otros abogados”. Lipton respondió: “nos encantó el paquete completo”. Por consiguiente, Stratus celebró un contrato con Kohn Swift para prestar asistencia técnica, incluida la producción de informes y el apoyo en los intercambios con los medios de comunicación, en respaldo de la conspiración. El contrato inicial por valor de US\$ 125.000 se modificó varias veces para contemplar la creciente participación y honorarios de Stratus. Efectivamente, para el otoño de 2009, Stratus recibió al menos US\$ 1,1 millones en concepto de pagos por su función en la

confabulación delictiva. Donziger también le ofreció a Stratus una tajada, sugiriendo que podía obtener contratos para supervisar el trabajo de remediación una vez que los Demandados RICO obtuviesen una sentencia fraudulenta contra Chevron.

147. Las reuniones y las comunicaciones entre los conspiradores continuaron durante el curso de la preparación del informe de Cabrera. Durante el período anterior a la presentación del primer informe de Cabrera en abril de 2008, Stratus, Donziger, Kohn y los consultores ambientales intercambiaron cientos de mensajes electrónicos sobre las reseñas preliminares del Informe de Cabrera y los anexos propuestos, cronogramas para terminar los distintos anexos y en los que se hablaba de la revisión, el análisis y la traducción de los anexos incluyéndose “[n]ormas medioambientales”, “[i]mpactos ecológicos de la contaminación”, “[c]ostos de la limpieza de piscinas (adicionales)”, “[v]alor de la pérdidas de vidas humanas”, “[p]érdidas del hábitat en pozos y estaciones”, “[r]esumen de la remediación de TexPet”, “[r]esumen de datos históricos”, “[e]xtrapolación de datos” y “[t]oxicidad de los químicos de los sitios en los seres humanos”. (En el Apéndice B se incluyen mayores detalles sobre los mensajes electrónicos intercambiados en apoyo del ardid de conspiración para defraudar a Chevron, el cual se incorpora por referencia como si se consignara en la presente en su totalidad.)

148. Durante ese período, Donziger continuó presionando para que las cifras de daños fueran cada vez más elevadas, y explicó en un momento que una estimación de enriquecimiento ilícito “s[onaba] tremendamente bajo” e imploró que los consultores de Stratus no “d[igan] ni sug[ieran] nada que se aparte de las cifras [de los demandantes de Lago Agrio]”. Además, como otra forma de conseguir las cifras elevadas que deseaba — y lograr el máximo impacto del perito “independiente”— durante ese período Donziger sugirió a Stratus que “definir las normas de limpieza” y luego “proponer estas normas al Ministerio de Energía, que se encarga de fijar dichas normas y cuyo Ministro es amigo nuestro, para que el Ministerio las promulgue como decreto oficial antes de que termine el juicio”.

149. Los numerosos mensajes electrónicos intercambiados entre el equipo de Stratus y entre Stratus y Donziger eran necesarios porque, como lo explicó Beltman en un mensaje

electrónico del 22 de febrero de 2008 en el que exhortaba el apoyo de sus colegas de Stratus: “En las próximas 2 a 3 semanas tenemos que escribir lo que probablemente sea el documento técnico más importante del caso. El documento reunirá todo el trabajo de aproximadamente los últimos 15 años sobre el caso y hará recomendaciones para consideración de la Corte al dictar sentencia”. Y ese “documento técnico más importante del caso” era el Informe Cabrera mismo. Según Donziger admitió más tarde, “la idea general” era “que Stratus redactaría el informe de forma tal que pudiera ser presentado directamente a la corte ecuatoriana por el Sr. Cabrera”. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores se aseguraron de que pareciera que Cabrera en realidad había preparado el informe. Por ejemplo, en cierto momento Kohn corrigió a Beltman diciéndole que utilizara “1,000ppm en vez de 100” porque “Cabrera solamente usa 1000”.

150. A medida que Beltman, Donziger y otros tomaban las decisiones sobre el contenido de los apéndices del informe y cuáles incluir en última instancia, Beltman también se enfocó en terminar el borrador del informe mismo, con respecto a lo cual le escribió a Maest y otros sus colegas el 10 de marzo de 2008: “Ahora que los anexos están fuera del camino, tenemos el pequeño problema del informe mismo. Desafortunadamente, he estado muy ocupado en el asunto de los anexos para trabajar en él, y tiene que ser traducido y presentado en la Corte en dos semanas. Es un problema”. En efecto, Beltman mismo era responsable de redactar la mayoría del informe, mientras que los distintos anexos se asignaban entre los diversos empleados y consultores de Stratus y otros contratados por los Demandados RICO. Cuando terminó de escribir el borrador preliminar del Informe de Cabrera, Beltman se lo envió a Donziger, preguntándole si él estaba “haciéndolo correctamente en cuanto a tono, nivel de lenguaje, y contenido”.

151. Si bien Stratus fue el coordinador principal del trabajo dedicado al Informe Cabrera, también contribuyeron al informe otros integrantes del equipo de peritos radicados en EE.UU. reunido por los conspiradores, incluidos E-Tech International, Uhl, Baron, Rana & Associates, Inc. y 3TM Consulting aunque no se mencionaron sus aportes en el informe ni se divulgaron a Chevron. El Anexo S del Informe de Cabrera, por ejemplo, fue redactado por el co-

conspirador William Powers, quien trabajaba para E-Tech y era subcontratista de Stratus, y sus cálculos se utilizaron en el Anexo T. Richard Clapp, otro consultor contratado por Donziger y sus co-conspiradores, redactó uno de los anexos del Informe Cabrera. Y Stratus contrató los servicios de contratistas para preparar una extensa base de datos de muestreo, que los Demandados RICO conocían como la “Base de Datos de Selva Viva”, la cual fue revisada y modificada adicionalmente por los Demandados RICO y sus co-conspiradores en el Ecuador.

152. A medida que los distintos consultores terminaban sus segmentos del Informe Cabrera, Beltman se hizo cargo de la delicada tarea de traducir al español el informe escrito en inglés por los consultores estadounidenses. Tal como lo expresara Beltman más tarde, tratarían “nuestra versión original en inglés como si fuera una versión traducida” del trabajo de Cabrera. En marzo de 2008, Beltman mantuvo correspondencia con varias empresas de traducción y, en última instancia, trabajó mayormente con Translating Spanish, Inc. El 12 de marzo de 2008, Beltman envió, por correo electrónico con copia a Maest, el Informe Cabrera mismo — que contenía una introducción en la que se consignaba falsamente que “[e]ste informe fue elaborado por el Perito Ingeniero Richard Stalin Cabrera Vega, para proporcionar asistencia técnica profesional a la Corte”— para ser traducido al español a fin de ser presentado ante la corte de Lago Agrio. Además, a medida que Beltman y otros consultores de Stratus hacían cambios a su trabajo, enviaron nuevos anexos del informe para su traducción. Asimismo, los anexos críticos del Informe Cabrera que abarcaban los presuntos costos de remediación, las muertes excesivas por cáncer y otros componentes primordiales de lo que, en última instancia, constituiría un fraude de US\$ 27.000 millones, también fueron traducidos al español por indicación de Beltman apenas unos días antes de que fueran presentados fraudulentamente ante la corte de Lago Agrio, como si se tratara del trabajo propio del equipo de habla hispana de Cabrera a quien se le atribuiría su redacción. A fin de facilitar los preparativos finales, los Demandados RICO hablaron de alquilar una oficina en Ecuador también, pero Donziger recaló que debía estar “aislado” y que no podía ser una oficina compartida con aquellos que se sabía estaban afiliados con los Demandados RICO.

153. Antes de la presentación del Informe Cabrera, Beltman hizo el seguimiento para verificar que los “nombre[s]” de los consultores que en realidad habían redactado ciertos anexos fueran “saca[dos]” de los documentos que Cabrera presentaría al tribunal. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores determinaron “a quién Richard [Cabrera] atribuirá cada uno de los anexos” y no fue a los autores reales. Todas esas contribuciones fueron orquestadas por los conspiradores, quienes mantenían un cronograma general para identificar a cada segmento del informe, cuáles de los integrantes de los equipos haría el trabajo en concreto y a quiénes podían pública y fraudulentamente “atribuir[.]” cada uno en el Informe Cabrera presentado.

154. Durante este período de intensa redacción, los conspiradores no ignoraron por completo a Cabrera. En enero de 2008, Donziger, Beltman, Maest, Fajardo y otros se reunieron con Cabrera ya que los conspiradores se encontraban en la recta final de la redacción del informe. Cabe destacar que esta reunión se celebró en una residencia privada, y no en las oficinas de los conspiradores en Quito, con el propósito de que la reunión fuera secreta. Los Demandados RICO delegaron también varios aspectos del informe a autores nominales a quienes no se había identificado públicamente como colaboradores de los Demandantes de Lago Agrio, pero que, de hecho, eran asociados íntimos de los Demandados RICO. Los Demandados RICO mantuvieron una vigilancia estrecha y una mano firme sobre el trabajo de éstos. Por ejemplo, Luis Miguel García Aragón, a quién se le identificara luego como un integrante del equipo de Cabrera, tuvo un intercambio sostenido por correo electrónico con Beltman y Maest sobre la redacción de segmentos extensos del Informe Cabrera. El 22 de enero de 2008, Aragón envió un mensaje a Beltman que decía: “Estamos avanzando con nuestro modelo gracias a tu ayuda. Ahora te envío el correo por los documentos que me comentaste. ¿Recuerdas lo de la tasa de descuentos y eso? Agradecería que me los enviaras”. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también contrataron y trabajaron con otro asesor, Juan Cristóbal Villao Yopez, a quien se identificó más tarde en el Informe Cabrera presentado como integrante del equipo “independiente” de Cabrera, y los informes técnicos sobre las cuestiones de las aguas que

escribió como consultor remunerado para los Demandados RICO aparecieron en última instancia en el Informe Cabrera. Otro presunto integrante del equipo “independiente” de Cabrera es Ximena Echeverría, a quien se le diera a conocer como empleada de la Demandada Selva Viva, y quien trabajaba activamente con Stratus, hecho que nunca fue revelado a Chevron ni a la corte de Lago Agrio hasta que salió a relucir en las actuaciones de producción de prueba de Chevron en EE.UU. Por consiguiente, los Demandados RICO y sus co-conspiradores y el “equipo de Cabrera” eran la misma cosa.

155. Y fueron los Demandantes RICO y sus agentes quienes finalizaron el Informe Cabrera, hasta la última coma. Como máximo, Cabrera tuvo unas cuantas horas para ojear el informe y las 4.000 páginas de documentos justificativos, pero no hizo cambio alguno, y no pudo haberlo estudiado detenidamente – es decir, si siquiera lo estudió. La mayor parte del informe se redactó en inglés – un idioma que Cabrera no habla – y no se completó hasta mediados de marzo. Después de haberse terminado la traducción el día, o alrededor del día 18 de marzo de 2008, los Demandados RICO todavía tenían trabajo que hacer en el Informe Cabrera, lo cual motivó a que Beltman se quejara que se encontraban en un “aprieto[.]” con tan poco tiempo que quedaba. Los Demandados RICO y a sus co-conspiradores continuaron manteniendo el control del documento durante este tiempo, modificando el texto en español directamente, hasta la mañana del 31 de marzo, el día antes de que se presentara. Esa mañana imprimieron el informe y sus voluminosos documentos justificativos, los cuales entonces serían presentados a la corte de Lago Agrio al día siguiente por Cabrera – su autor solo de nombre.

156. No obstante, Cabrera, los Demandados RICO y sus co-conspiradores tenían la intención de difundir la mentira de que el informe era de Cabrera. Con ese fin, hicieron todo lo posible por ocultar la enorme cantidad de trabajo realizada por Stratus y otros, a pesar de la orden de la corte de Lago Agrio de que Cabrera presentara “todos los documentos que sirvan de soporte o fuente de datos” y “citar en su informe todas las fuentes científicas, documento lógicas y legales que utili[zó]”. Donziger admitió que “había una sensación general en nuestro equipo de que queríamos” “mantener...confidencial” el “hecho de que los demandantes habían escrito”

“partes del informe de Cabrera”. La ocultación de este hecho obedeció en parte a inquietudes manifestadas por algunos de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de que se los acusara por delitos penales en Ecuador si admitían haber redactado en secreto segmentos del informe presentado bajo el nombre de Cabrera.

157. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores jamás han divulgado, y aún no han admitido, ante la corte de Lago Agrio la relación que existía entre Cabrera y los Demandantes de Lago Agrio. En efecto, omitieron divulgar este hecho aunque, incluso en mayo de 2010, uno de los conspiradores, Ilann Maazel de Emery Celli, reconoció en una correspondencia interna que “ni Cabrera ni los demandantes divulgaron una propuesta de los demandantes que contenía borradores de parte del informe del experto escrito por Stratus”, y otro, Jonathan Abady de la misma firma, describió la relación como la “adopción integral del producto del trabajo de Stratus sin atribución”. Y Donziger mismo ha reconocido ahora que él “no cre[e]” que la declaración de autoría del Informe de Cabrera—“[e]ste informe fue elaborado por el ingeniero perito Richard Stalin Cabrera Vega”—“sea exacta” y que Stratus en última instancia le dio a Cabrera “una cantidad de material importante”, incluyendo “un informe real con anexos en nombre de Cabrera”. Aun así, los Demandados RICO no han reconocido la verdad. Tan recientemente como en enero de 2011, los Demandados RICO presentaron un escrito ante el tribunal del Tercer Circuito en el que declararon “[l]a corte ecuatoriana estuvo y está plenamente consciente de los contactos *ex parte* de los actores con Cabrera y la presentación de materiales al mismo—e inclusive, *invitó* dichos contactos y presentaciones”.

158. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores, en su intento por ocultar la verdadera autoría del Informe Cabrera y sus anexos, se enfrentaron a algunas situaciones de riesgo. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2008, Beltman le escribió al Demandado Donziger sobre un “[a]sunto urgente” que surgió cuando Karen Hinton, portavoz del Frente de Defensa de la Amazonía, quería entregar a un periodista el informe de Richard Clapp — el mismo informe que los Demandados RICO presentaron como anexo al Informe de Cabrera. De haberse hecho, se habría puesto al descubierto la verdad de que los Demandados RICO y sus co-conspiradores y

sus consultores en realidad redactaron el Informe Cabrera. Por eso, Beltman le dijo a Hinton que no usara el informe de Clapp, bajo el pretexto falso de que él “no est[aba] seguro de su pedigrí”, en lugar de decirle el verdadero motivo por el cual no se podía divulgar: que fue utilizado “como un Anexo” del Informe Cabrera. Ante la inquietud de no dejar rastros, Beltman advirtió a Donziger que “tenemos que tener mucho cuidado con esto”. Y más tarde, cuando los Demandados RICO y sus co-conspiradores temían que Clapp mismo divulgara inadvertidamente la verdadera autoría del Informe Cabrera durante una audiencia del Congreso, Donziger explicó los pasos necesarios para evitar ponerlos en descubierto: “Tenemos que hablar con Clapp sobre ese informe de cinco páginas y sobre cómo tenemos que limitar su distribución. NO PUEDE ser asentado en el Registro del Congreso como si hubiera sido escrito por [Clapp]”.

159. Sin embargo, en su apuro por terminar el Informe Cabrera y más tarde el informe ampliatorio, los Demandados RICO y sus co-conspiradores no fueron lo suficientemente precavidos. Después de presentado el Informe Cabrera, Beltman se dio cuenta de que un apéndice de dicho informe podía haber citado un informe redactado por Clapp. Según Beltman, el problema era que el informe citado *mismo* había sido usado luego textualmente como anexo del Informe Cabrera. Beltman se lamentó con un colega en un mensaje electrónico: “[q]ué maraña tan enredada . . .”, omitiendo el resto de la cita, “cuando en primer lugar tratamos de engañar”.

160. En otro esfuerzo por evitar que saliera a relucir la función de Stratus en la redacción del Informe Cabrera, Beltman intentó influir en el testimonio de los empleados de Stratus que podrían ser citados a testificar en un tribunal de EE.UU. Cuando Chevron presentó una acción judicial de conformidad con el Art. 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) para solicitar la producción de pruebas de Stratus, el personal de Stratus celebró una reunión a la que asistió todo el personal disponible en ese momento, incluidas algunas personas que habían sido citadas a declarar. Se impartió información al personal sobre las citaciones de Chevron y el Informe Cabrera y, Beltman, aprovechando la oportunidad de crear un relato sistemático pero engañoso, declaró falsamente ante los asistentes de la reunión que

Cabrera era un “experto independiente que presentó su propio informe al tribunal”. Durante esta y otras reuniones de personal, Beltman también tergiversó la función de Stratus en su declaración ante el personal de dicha firma. Explicó que Stratus simplemente había “prepar[ado] una serie de análisis técnicos” que se habían entregado a Cabrera “para ayudarlo a preparar el informe” y omitió divulgar el hecho de que Beltman y otros consultores de Stratus eran los autores del informe que Cabrera presentó como propio.

161. Fajardo y Donziger también debatieron cómo responderían a las acusaciones de que “Cabrera utiliza exactamente, o casi exactamente, las mismas palabras que pusimos en nuestros escritos”. Fajardo ofreció la solución “[s]encillo” de inventar una historia de que los Demandados RICO presentaron material a Cabrera después de que advirtieron algunos errores en los cálculos y cifras del informe y que Cabrera adoptó ese material presentado por ellos. Tal como lo expresó Fajardo: “No existe problema de fondo, solo hay que explicarlo”.

162. Fajardo y Donziger también concibieron formas para ocultar su conducta creando direcciones de correo electrónico especiales y nombres secretos a ser utilizados en la planificación y discusiones de sus maquinaciones. Fajardo, por ejemplo, le dijo a Donziger que no utilizara su propia cuenta de correo electrónico para enviar comentarios sobre el informe que estaba escribiendo secretamente Strauss, y que no enviara los comentarios al correo electrónico regular de Fajardo, sino que los enviara a un nuevo correo electrónico especialmente creado. Fajardo le dijo a Donziger, “no incluyan ningún nombre en el documento”, y le dijo que utilizara nombres secretos; Fajardo era conocido como Lagarto 2, y Donziger como Lagarto 3. Esto se hizo, según lo ha confesado Donziger, porque no querían que otros supieran que Stratus había redactado el informe final que Cabrera presentaría a la corte.

163. Además, los conspiradores procuraron activamente no dejar rastros de otro modo en los Estados Unidos. E-Tech, por ejemplo, omitió declarar ante el Servicio de Rentas Internas (*Internal Revenue Service*) los ingresos percibidos por realizar su trabajo, caracterizando los pagos efectuados a consultores como contribuciones caritativas, y desvió los pagos, dentro de Estados Unidos y en el exterior, a fin de ocultar el hecho de que éstos se destinaban a financiar

actividades ilícitas. E-Tech también omitió posteriormente presentar los informes exigidos en su estado residente de Nuevo México, lo cual resultó en la cancelación de su Acta Constitutiva. Y aun cuando los Demandados RICO y sus co-conspiradores continúan obstruyendo la investigación de Chevron sobre la conducta exhibida por estos frente a muchos tribunales federales estadounidenses, han mantenido una campaña de presión pública constante atacando toda sugerencia de que el Informe Cabrera no era neutral e independiente. Véase los párrafos 229-39, *infra*. Esta defensa del Informe de Cabrera es necesaria porque, entre otras cosas, sin éste los Demandados RICO quedarían sin prueba alguna de responsabilidad o de daños.

(iv) El “Informe Cabrera”: El fraude repetido de los Demandados RICO

164. El 1 de abril de 2008, acompañado por guardias armados, Cabrera presentó su primer informe ante la corte de Lago Agrio. A pesar de que Cabrera tenía un plazo más largo para presentar su informe y no había efectuado declaración pública alguna de que lo presentaría anticipadamente, los Demandados RICO sabían cuándo lo haría y habían preparado detallados comunicados de prensa y habían alertado al equipo de *Crude* para que estuviera cerca y filmara el acontecimiento. Sobre la base de declaraciones inexactas, conclusiones carentes de pruebas y malos métodos científicos, el Informe “de Cabrera” — la culminación del trabajo clandestino que los conspiradores habían comenzado más de un año antes — concluyó que Chevron era responsable por más de US\$ 16.000 millones. Los Demandados RICO sabían que el Informe Cabrera atribuía falsamente responsabilidad a Chevron, y que sería aceptado solo si parecía provenir de un perito “independiente”. Por eso prepararon el documento en secreto y se esforzaron para que Chevron no supiera quién lo había escrito en realidad. Y los conspiradores todavía no habían terminado de redactar material en secreto para que Cabrera lo presentara falsamente como propio.

165. En septiembre de 2008, las partes presentaron ante la corte de Lago Agrio preguntas y comentarios sobre el Informe Cabrera. Los documentos presentados por los Demandados RICO y sus co-conspiradores en nombre de los Demandantes de Lago Agrio

tuvieron, en todo respecto, la intención de perpetuar la apariencia falsa de que Cabrera era neutral e independiente, y que los Demandados RICO y sus co-conspiradores no eran los verdaderos autores del informe. Esta presentación pretendió instar a Cabrera a considerar varios documentos e informes de terceros, criticó su análisis jurídico de la responsabilidad y ofreció sugerencias sobre cómo podría sustentar sus hallazgos actuales e introducir nuevos. Pero habían sido los mismos Demandados RICO y sus co-conspiradores quienes habían decidido qué documentos revisar, cómo presentar el caso jurídico y qué hallazgos y fundamentos exponer en el informe de Cabrera. Por ende, los Demandados RICO y sus co-conspiradores redactaron sus “preguntas” para fomentar la apariencia falsa de independencia de Cabrera.

166. Cabrera presentó la contestación a los comentarios de los Demandantes de Lago Agrio el 17 de noviembre de 2008 en un informe ampliatorio. Haciendo caso omiso de las objeciones de Chevron, el informe ampliatorio de Cabrera adoptó los comentarios expuestos por los Demandantes de Lago Agrio (en ocasiones palabra por palabra, incluidos los errores) lo que incrementó su recomendación de daños a US\$ 27.000 millones, con escasa explicación y sin apoyo válido jurídico o científico. Tal como lo había planeado Donziger, los Demandados RICO y sus co-conspiradores fueron capaces, en efecto, de “aumentar esto hasta treinta mil millones”.

167. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también dictaron otras partes de la contestación de Cabrera al redactar secretamente las “respuestas” de éste a los propios comentarios y preguntas de aquéllos. Algunas de las “preguntas para el Perito [Cabrera]”, según un mensaje electrónico interno de Stratus, se “nos asignaron”. En un mensaje electrónico de fecha 1 de agosto de 2008, Beltman reseñó para sus colegas lo que “tenemos que hacer para los comentarios sobre el informe de Cabrera”. En su mensaje indicó varias respuestas que debían prepararse y lo que debían decir. Notablemente, Beltman se refirió repetidas veces a las preguntas de los Demandantes de Lago Agrio en primera persona y al trabajo propio de ellos como el del “Sr. Cabrera”. Por ejemplo, dice que “[c]omentamos la escasa consideración prestada a la limpieza de ríos y arroyos” y “[c]omentamos que Cabrera no tiene en cuenta la contaminación por metales en sus costos de limpieza”. Luego sugiere posibles respuestas a estos

comentarios. Beltman asimismo expresó su deseo de que el trabajo realizado por el consultor estadounidense 3TM “estuviera de alguna forma en que alguien en Ecuador pueda escribirlo” y otro empleado de Stratus advirtió que esta compañía debía revisar su trabajo para “mejore el lenguaje para que parezca más como [Cabrera] y menos como comentario”.

168. Los Demandados RICO concretaron su estratagema en parte pidiéndole a Powers, el mismo contratista de Stratus que redactó en secreto partes del informe inicial de Cabrera (véase párrafo 151, *supra*), que respondiera a las preguntas que habían sido planteadas en relación con el Informe Cabrera. La Demandada Maest proporcionó a Powers las preguntas que debían contestarse — preguntas que eran exactamente las mismas que fueron planteadas por los Demandantes de Lago Agrio en su presentación de septiembre de 2008. Powers luego entregó las respuestas a Maest, que son las mismas que aquellas incluidas en el informe de Cabrera de noviembre de 2008.

169. Además, los Demandados RICO y sus co-conspiradores incorporaron a la contestación de Cabrera un segundo informe redactado por Richard Clapp, otro de sus consultores contratados. Del mismo modo que los Demandados RICO y sus co-conspiradores habían manifestado inquietud de que Hinton o Clapp mismo divulgara inadvertidamente el hecho de que el primer informe de Clapp se había incorporado “sin cambios” en forma de un anexo del Informe Cabrera, también mostraron preocupación de que se divulgara accidentalmente al público el uso del segundo informe de Clapp en la contestación de Cabrera. Beltman advirtió a Donziger: “No creo que debemos entregar ninguno de los dos como si fueran de Clapp, porque estaríamos distribuyendo pruebas”.

170. Incluso más allá de las declaraciones falsas sobre la independencia de Cabrera y la autoría de “su” informe, el Informe Cabrera — sin el cual los Demandados RICO no tienen la posibilidad de demostrar la imputación de responsabilidad o daños — adolece de defectos sustanciales y de problemas fundamentales. Decididos a “aumentar” la estimación de daños a US\$ 27.000 millones, los conspiradores atribuyeron, entre otros defectos atroces, *todo* el presunto impacto ambiental de las operaciones petroleras en el área del ex consorcio a TexPet y ningún aspecto del impacto a Petroecuador, el único titular de las operaciones en el área del ex

consorcio durante los últimos 20 años y el único responsable de más de 1.400 derrames petroleros durante ese período. El informe incluye millones de dólares en daños por la remediación de piscinas de desechos que ni siquiera existen y, de hecho, son sombras y otros objetos oscuros en las aerofotos. Además, el informe se basa en referencias de costos, estándares y metodologías derivados de EE.UU. que no reflejan las diferencias considerables en los costos entre EE.UU. y Ecuador, y que con frecuencia carecen de sentido fuera del contexto regulatorio estadounidense de mayor alcance. Por ejemplo, en el informe se aduce que el costo de remediar las piscinas — incluidas las imaginarias — ascendería a US\$ 2,2 millones por piscina. Esa cifra es 25 veces mayor que el costo real promedio de Petroecuador por la remediación en curso de las piscinas, que asciende a US\$ 85.000 por piscina.

171. También abundan otros errores intencionales. Aunque Cabrera no tomó *ni una* muestra de agua potable, y a pesar de la existencia de literalmente docenas de sistemas de agua potable públicos en el área de la concesión, el informe determinó US\$ 428 millones por daños en concepto de sistemas de agua potable. Los conspiradores también incluyeron US\$ 8.400 millones en daños por “enriquecimiento injusto” que presuntamente percibió TexPet, un gravamen punitivo que los Demandantes de Lago Agrio jamás solicitaron en su demanda, e incorporaron asignaciones, tales como millones de dólares para crear una granja agropecuaria para criar animales de caza para los residentes locales.

172. Finalmente, los Demandados RICO se basaron en datos de muestreo poco fiables y manipulados que ellos seleccionaron para maximizar sus reclamaciones de daños. Mientras pretendían utilizar laboratorios independientes, los Demandados RICO en realidad procesaron muchos de los materiales ellos mismos, a menudo en un laboratorio improvisado en un cuarto en un hotel, al cual denominaron los “Laboratorios de Selva Viva”. Sin embargo, este trabajo fue de tan baja calidad que a veces simplemente tenían que “perder” informes que no resistirían análisis alguno. También cambiaban su análisis cuando los resultados no eran los deseados. Por ejemplo, en 2004, dejaron de analizar la presencia de ciertos contaminantes porque se dieron cuenta de que la presencia de dichos contaminantes en las muestras “mostrarían que la

contaminación es mucho más reciente de lo que quisieramos”, indicando, por lo tanto, que la fuente eran actividades de Petroecuador después de que TexPet dejara de operar.

173. El Informe Cabrera también amplió unilateralmente el alcance del mandato de Cabrera y excedió el ámbito de experiencia de su equipo revelado públicamente al encarar cuestiones adicionales no relacionadas con las pretensiones de los Demandantes de Lago Agrio en cuanto a la remediación ambiental y el monitoreo médico. A pesar de no haber identificado ni una persona con cáncer ni de haber producido ni un informe médico, el informe calculó US\$ 2.900 millones por “muertes excesivas por cáncer” y luego aumentó esa cifra a US\$ 9.500 millones en la presentación de noviembre de 2008, aparentemente sobre la base de apenas un poco más de una página de análisis adicional. El informe no se valió de ningún método de aceptación científica para vincular el cáncer con las operaciones del consorcio; en lugar de usar datos oficiales, los casos de muerte por cáncer “excesivo” se “evaluaron” sobre la base de auto-evaluaciones en reuniones grupales con miembros no revelados de la población local, conducidas por el presunto integrante del equipo de Cabrera, Carlos Beristain, quien de hecho trabajaba bajo la dirección de los Demandados RICO y sus co-conspiradores.

174. El Informe Cabrera y su complemento posterior no fueron los únicos documentos presentados bajo el nombre de Cabrera que fueron secretamente escritos por los Demandados RICO. El 5 de noviembre de 2007, Cabrera presentó una declaración en la corte de Lago Agrio alegando que había sido sometido a amenazas y hostigamiento, y que ciertas partes desconocidas estaban constantemente vigilándolo. Pero aunque esta notificación estaba firmada por Cabrera, fue preparada para él por los Demandados RICO. Donziger ha confesado, sin embargo, que no tenía pruebas concretas que confirmaran las alegaciones presentadas en la notificación que indicaran que Cabrera estaba en “gran peligro”.

(v) Las adhesiones fraudulentas de los Demandados RICO de su “Informe Cabrera” y obtención de otras adhesiones mediante declaraciones falsas

175. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores, casi inmediatamente después de la presentación del Informe Cabrera, procuraron reafirmarlo mediante la publicación de adhesiones por parte de Stratus mismo — el autor secreto del informe — y de terceros expertos.

176. Después de que los conspiradores presentaran su informe bajo el nombre del perito judicial Cabrera, los señores Donziger, Beltman, Maest, Fajardo, Yanza y Hinton se reunieron nuevamente en Boulder, Colorado, para analizar y manejar la “[r]espuesta científica y mediática al informe de Cabrera”. En esa reunión, desarrollaron su plan de conseguir varios niveles de adhesiones del informe para usarlos en la corte de Lago Agrio y los medios de comunicación estadounidenses. Asimismo planearon la estrategia de cómo incrementar la cifra de daños de por sí infundada que se indicaba en el Informe Cabrera, desarrollaron un plan para responder a las críticas de Chevron sobre el informe y reseñaron un plan de ataque con los medios de comunicación. Tal como lo reconociera Beltman posteriormente en un mensaje electrónico dirigido a Amazon Watch sobre el avance de su plan de conseguir adhesiones fraudulentas, “gran parte de esto se hará para los medios”.

177. El primer nivel de adhesiones que pusieron en marcha los Demandados RICO y sus co-conspiradores fue la promoción del Informe de Cabrera y el anuncio a los cuatro vientos por Stratus, el autor secreto del informe, de la “independiente” de dicho documento. El 1 de diciembre de 2008, Stratus hizo público un documento de quince páginas pretendiendo analizar y defender el Informe Cabrera. En ese documento, que en la carátula ostenta las firmas de Beltman y Maest, así como de otros empleados de Stratus, dicha empresa aduce: “El Sr. Cabrera por lo tanto actúa en calidad de ‘perito’ neutral de la Corte, y su función consiste en asistir a la Corte en la evaluación de la información técnica y científica reunida y compilada para el caso. En el sistema judicial de los Estado Unidos, el Sr. Cabrera sería lo que se denomina un Técnico Maestro Especializado”.

178. La revisión del Informe Cabrera que hiciera Stratus en diciembre de 2008 está redactada para dar la impresión de que sus autores no tenían relación alguna con el Informe Cabrera ni con la ampliación al mismo, y que el objetivo era ofrecer una revisión neutral de terceros. Por ejemplo, los Demandados RICO y sus co-conspiradores describieron la redacción del informe de la siguiente manera: “Después de revisar la extensa constancia donde constan los datos y la información ambientales reunidos durante el juicio, y después de reunir algunos datos propios, el Sr. Cabrera ha llegado a la conclusión de que las operaciones de Texpet contaminaron seriamente una gran extensión de la Amazonía Ecuatoriana, y que la contaminación ha causado grandes daños al medio ambiente y a sus habitantes”. Una vez concluida, la “revisión” de Stratus del Informe de Cabrera fue distribuida intencionalmente por los conspiradores mediante correo físico y electrónico, y sigue disponible en el sitio web del co-conspirador en <http://amazonwatch.org>. Sin embargo, Maest, quien firmó el estudio, ha confesado que ella no sabía si Cabrera o algún miembro no revelado de su equipo escribió en realidad alguna parte del informe, y que nunca había visto nada que sugiriera que Cabrera en realidad había considerado o aún leído el informe que ella y sus colegas escribieron para él.

179. La “revisión” de Stratus tuvo la intención de engañar, como lo reconociera uno de los abogados contratados por los Demandados RICO para que revisara la presentación en 2010. En respuesta a una discusión en curso sobre el plan de los Demandados RICO de acusar a Chevron de fraude bajo la teoría de que sabía en todo momento que Stratus había redactado el Informe de Cabrera, el abogado escribió lo siguiente a Donziger y otros conspiradores:

Este documento podría poner fin a la discusión. Estos ‘comentarios’ están redactados de manera tal de dar la impresión de que Cabrera era totalmente independiente y de que llevaba a cabo su propia investigación y llegó a sus propias conclusiones. No hay ninguna señal en este documento de que Stratus, aparentemente la compañía de peritos independiente de Cabrera, haya redactado el informe para ‘que luego lo firmara’ Cabrera. Esto no sería determinante si hubiera alguna otra evidencia que demostrara que Chevron sabía o debía haber sabido que Stratus estaba involucrada en la elaboración del Informe Cabrera. En tal caso, los ‘comentarios’ de Stratus pueden haber sido una interpretación cruda y rara de un perito parcial, pero no un ‘fraude’ contra Chevron. Pero, en ausencia de tal evidencia, pareciera entonces que no sólo Cabrera y los demandantes [de

Lago Agrio] pueden ser acusados de ‘fraude’ con respecto al informe Cabrera, sino también Stratus puede ser señalada como conspiradora activa.

Esta declaración, en la que se admite que Stratus estuvo implicada en “la redacción secreta” del Informe de Cabrera y en la que se expresan inquietudes sobre la “aprobación” del informe por parte de Stratus, provino de uno de los abogados de los Demandados de Lago Agrio supuestamente contratado por Donziger.

180. El segundo nivel de adhesiones previstas por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y que se tratara durante la reunión de éstos en junio de 2008 en Boulder, comprendió solicitar la adhesión de expertos confiables engañándolos activamente sobre la autoría del Informe Cabrera y la colusión que existía entre los Demandados RICO y sus co-conspiradores y Cabrera. Durante la reunión, los Demandados RICO y sus co-conspiradores hablaron de que los expertos con quienes ya se habían comunicado para solicitar su adhesión se habían cuestionado su “relación a Cabrera”, y los Demandados RICO y sus co-conspiradores reconocieron que “t[ienen] que ser capaces de darles respuestas”. Lo que en realidad terminaron haciendo fue ocultar esa relación por completo.

181. Al procurar las espurias “aprobaciones” del Informe Cabrera, Stratus falsamente declaró ante numerosos terceros que el informe había sido redactado por Cabrera. Por ejemplo, el 12 de junio de 2008, David Mills de Stratus envió un mensaje electrónico a un representante de la Oficina de Prevención y Respuesta a Derrames de California, en el que describió el Informe Cabrera de la siguiente manera: “Durante el juicio, el magistrado ecuatoriano que entiende actualmente en el caso designó un perito técnico para resumir y analizar la información y los datos técnicos en la causa y sacar conclusiones respecto de los impactos medioambientales y humanos de las actividades de producción y exploración de petróleo”. Stratus solicitó al representante que revisara el Informe Cabrera a cambio de un honorario y efectuara comentarios por conversación telefónica — comentarios que, de ser favorables, los Demandados RICO y sus co-conspiradores podían presentar más adelante ante la corte.

182. De manera similar, el 26 de junio de 2009, Beltman envió un mensaje electrónico un representante del Centro de Investigación Aggeu Magalhães (Haggai Magellan) de Brasil para solicitar su respaldo al Informe Cabrera. En esa comunicación, Beltman se refirió al “informe del Perito de Oficio en el que [Cabrera] presenta los resultados de sus estudios y formula recomendaciones al juez acerca de los daños ocasionados por Texaco y qué hay que hacer como reparación de esos daños”. Beltman pidió al Centro de Investigación Haggai Magellan que “por favor revise el informe del Perito de Oficio y lea nuestra evaluación del mismo, y piensa en cómo podrías darle tu apoyo. Nuestra primera opción es que firmes la evaluación que nosotros redactamos (puedo darte una página de firma en blanco para que la firmes y la devuelvas)”.

183. No obstante, el objetivo de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de conseguir quince o veinte adhesiones de académicos, además de consultores, demostró ser difícil considerando lo que Beltman francamente llamó las “fallas” del Informe Cabrera. Como le explicó Beltman a Donziger en un mensaje electrónico: “Nuestros temores iniciales sobre el tema eran fundados...[Académicos] [e]stán capacitados y trabajan para ser críticos, no para aceptar. [De paso] saben que al firmar este tipo de avales al informe Cabrera se exponen a un ataque público de Chevron (y tal vez, ataques dentro de sus círculos académicos también)...Finalmente, parte del trabajo subyacente en la tarea de Cabrera tiene fallas, las que probablemente serían muy difíciles de defender por parte de los académicos”. Beltman explicó: “[I]ogramos mejores resultados en la gestión para que los asesores firmen los avales, que para que lo hagan los académicos (algo de lo que no estoy orgulloso)”.

184. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores, no obstante, tuvieron éxito al convencer a terceros de revisar el Informe Cabrera que Stratus presentó como de autoría de un “Técnico Maestro Especializado”. Por ejemplo, el 15 de julio de 2008, Stratus firmó un contrato con el Dr. Peter N. Jones de Bauu Institute, por el cual éste convenía revisar el Informe Cabrera y ofrecer comentarios en una conversación con Stratus. Dichas adhesiones obtenidas fraudulentamente, junto con la propia evaluación de Stratus — falsamente promocionada como

“independiente”— sirvieron para realzar aún más el valor del Informe Cabrera en la campaña de presión en los medios de comunicación dirigida por los Demandados RICO y sus co-conspiradores con el fin de forzar a Chevron a pagarles.

(vi) Pagos de los Demandados RICO a Cabrera por trabajo que este no realizó

185. Era esencial que se percibiera la independencia del Informe Cabrera para el ardid que planeaban los Demandados RICO. Esto era clave para su credibilidad con la prensa, el público y las otras partes cuyos respaldos necesitaban los Demandados RICO y sus co-conspiradores. Por supuesto, la percepción de la independencia se perdería al conocerse que los propios Demandados RICO y sus co-conspiradores eran los autores del informe, y mantener este secreto requería la cooperación de Cabrera. Y si el Informe Cabrera se percibiera como poco fiable, los Demandados RICO se verían en apuros a la hora de demostrar la responsabilidad de Chevron, ni qué decir la reparación por “daños y perjuicios” que esperaban recuperar. Por consiguiente, cuando los Demandados RICO lograron que la corte abandonara el proceso de inspecciones judiciales y nombrara a Cabrera como perito “global”, también insistieron en que las partes deberían pagar este proceso y le pagaron directamente más de \$263.000 a Cabrera, a pesar de que Chevron se opuso totalmente al nuevo proceso improcedente y se negó a financiarlo. Estos pagos comenzaron inmediatamente. Solo semanas después de que se hubiese anunciado públicamente el nombramiento de Cabrera, pero antes de que fuese oficialmente juramentado para comenzar su trabajo, Yanza le escribió a Donziger y le dijo, “Nos reunimos con Richard y todo está bajo control. Le dimos algún dinero de avance”. Algunos pagos se hicieron por medio de una “cuenta secreta”, por medio de la cual Kohn encauzó decenas de miles de dólares a Cabrera, aparentemente por encima de los \$263,000 que Selva Viva le pagó a Cabrera. Ya que ahora es evidente que Cabrera no escribió el informe, el único propósito de estos pagos, que fueron hechos por la Demandada Selva Viva y financiado por Kohn o Kohn Swift, debe haber sido comprar la cooperación y el silencio de Cabrera sobre la verdadera autoría del informe.

186. Cabrera obtuvo este dinero jurando en falso en repetidas ocasiones en la corte de Lago Agrio. Por ejemplo, el 23 de julio de 2007, cuatro meses después de una sesión de PowerPoint que duró todo el día con Donziger y Fajardo, Cabrera declaró ante la corte: “Debo aclarar, que yo no tengo ninguna relación ni acuerdos con la parte actora, lo cual me parece una ofensa para mí, que se me pretenda vincular con los abogados de los actores”.

187. Cuando Chevron planteó dudas ante la corte de Lago Agrio en cuanto a la autoría del Informe Cabrera y la relación de Cabrera con los Demandantes de Lago Agrio, Cabrera declaró en varias presentaciones ante la corte de Lago Agrio que había trabajado de forma independiente y transparente, a pesar de las pruebas en sentido contrario. El 7 de octubre de 2008, por ejemplo, Cabrera manifestó en una presentación que él era un “hombre de bien, que no [tiene] nada que esconder, ya que [su] actuación como perito en éste caso ha sido de lo más profesional, imparcial y objetivamente posible, así se puede observar al leer [su] dictamen pericial”. En esa misma presentación, Cabrera afirmó que “no obede[ce] a ninguna de las partes litigantes” y que él “no...estar[á] sometido al criterio o capricho de ninguna de las partes”. En otra presentación posterior el 5 de febrero de 2009, Cabrera sostuvo que “[t]odo el proceso del peritazgo fue trabajado por [su] persona”. Luego declaró que “[t]odo el trabajo fue planificado, dirigido y aprobado por [él]..., como responsable del examen pericial”.

188. Los Demandados RICO también negaron toda relación con Cabrera en los documentos presentados ante la corte de Lago Agrio. Por ejemplo, en una presentación con fecha 4 de abril de 2008, Fajardo afirmó que la idea de que había una “relación afín entre el perito Cabrera y la parte actora” y que Cabrera “trabaja por nosotros” era “simplemente ridículo”. Luego el 25 de abril de 2008, los Demandados RICO y sus co-conspiradores caracterizaron las afirmaciones de Chevron de que existía una estrecha relación entre ellos y Cabrera como “[o]tra infamia”, “infantiles y absurdas”.

189. A pesar de estas protestas acerca de la independencia de Cabrera ante la corte de Lago Agrio, el mismo Donziger ha admitido ahora que las declaraciones de Cabrera “no

e[ran] exacta[s]” porque “ciertamente los demandantes [de Lago Agrio] brindaron materiales para su consideración”.

(vii) El intento de los Demandados RICO de sanear el “Informe Cabrera”

190. A pesar de los esfuerzos concertados de los Demandados RICO por ocultar la verdadera autoría del Informe Cabrera, Chevron ha puesto al descubierto importantes elementos sobre la naturaleza y el alcance de este fraude generalizado a través de la obtención de pruebas en los tribunales de los EE. UU. de conformidad con el Artículo 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos. Véase párrafos 270-323, *infra*. Sin embargo, el hecho de que una parte de la verdad haya salido a la luz no ha impedido que los Demandados RICO hayan solicitado y obtenido una sentencia masiva sobre la base del Informe “de Cabrera”. En cambio, han tratado de sanear el Informe Cabrera mediante, para todos los efectos, una nueva presentación ante la corte de Lago Agrio, pero esta vez con *nuevos* nombres adjuntos. El 16 de septiembre de 2010, los Demandados RICO presentaron siete nuevos informes de “peritos” ante la corte de Lago Agrio, sobre la base de los cuales ahora exigen \$113.000 millones en daños y perjuicios.

191. Estos siete nuevos informes periciales pretenden ser independientes cuando, en realidad, se trata de una presentación diferente del mismo informe deficiente y fraudulento de Cabrera. Donziger discutió este plan con sus co-conspiradores en Patton Boggs, expresando sus preocupaciones con respecto a que no se estaban moviendo con suficiente rapidez como para presentar los nuevos informes periciales. Como informó Donziger, “El equipo de Ecuador se está poniendo nervioso porque va aumentando el riesgo de que el juez se adelante a nuestro proceso de ‘limpieza’ y terminemos con un fallo basado enteramente en Cabrera. Sin nuestra intervención lo más pronto posible, opinan que el juez pueda dictar autos para sentencia en 3 o 4 semanas, lo cual podría poner fin a nuestro remedio al problema de Cabrera”. En otra conversación, uno de los co-conspiradores en Patton Boggs, Adlai Small, le dijo a Donziger, “Un tema general para pensar durante todo el proceso es cómo queremos que el Nuevo perito aborde el informe de Cabrera y sus conclusiones. Si bien es más que probable que nuestro perito se base

en algunos de los mismos datos que Cabrera (y llegue a las mismas conclusiones que Cabrera), ¿creemos que el perito debe mencionar específicamente esas coherencias?” Small continuó explicándole a Donziger que él pensaba que deberían tratar de estructurar los nuevos informes periciales de manera tal que pudieran rehabilitar en cierto modo el informe viciado de Cabrera para que cuando alguien recibiera los nuevos informes “se pueda sentir cómodo concluyendo que ciertas partes de Cabrera son motivos válidos de daños”. Donziger también admitió que los nuevos informes periciales tenían por objeto darles a los Demandados RICO “un argumento” que les permitiera “intentar terminar con los esfuerzos conforme a la 1782 de Chevron en los Estados Unidos”

192. El vínculo entre el fraudulento Informe Cabrera y el trabajo de los “nuevos” peritos se hace explícito en el acuerdo de contratación firmado por el Weinberg Group, una firma consultora que, a su vez, contrató a los “nuevos” peritos. El acuerdo del Weinberg Group establece que fue contratado con el propósito de “reali[zar] una revisión integral de las secciones seleccionadas de un informe de perito preparado por el ingeniero Richard Stalin Cabrera Vega”, no para producir un nuevo informe científico independiente. Como lo describió un co-conspirador, el papel del Weinberg Group es meramente “proporcionar una presentación con sus nombres”.

193. El Weinberg Group proporcionó copias del Informe Cabrera a los peritos que contrató para que lo utilizaran en sus propios informes. Según Donziger y sus co-conspiradores, todo lo que necesitaban los “nuevos expertos” era el “informe de Cabrera en sí mismo” junto con los datos en los que se había basado Cabrera. Tal como pretendían los Demandados RICO y sus co-conspiradores, estos “nuevos” peritos se basaron en gran medida en el Informe Cabrera. Según Donziger, ninguno de estos “nuevos” peritos había “[ido] a Ecuador”, ni “llevó a cabo ningún tipo de nueva inspección del sitio”, ni “hizo un nuevo muestreo” ni por supuesto hizo “prueba medioambiental de ningún tipo”.

194. Uno de los “nuevos” peritos, Douglas Allen, por ejemplo, en lugar de realizar una evaluación independiente de las pruebas, se basó en las conclusiones infundadas que figuran

en el Informe Cabrera. De hecho, los conspiradores le ordenaron a Allen que utilizara el Informe Cabrera como el “punto de partida”. Él utilizó enteramente este informe como base para, entre otras cosas, el número de piscinas que requerían reparación. A pesar de que “[n]o lo s[abía], a ciencia cierta, si hay 917 piscinas que requieren rehabilitación”, tomó de todas formas como base dicho número del fraudulento Informe Cabrera para elaborar su propia estimación. Se basó en el Informe Cabrera a pesar de que creía que las conclusiones del mismo eran poco fiables y que carecía de citas y referencias apropiadas. Allen ha confesado, sin embargo, que si hubiera sabido que los Demandados RICO y sus co-conspiradores escribieron en realidad el Informe Cabrera, eso le hubiera “molesta[do]” y afectado sus opiniones periciales.

195. Del mismo modo, otro “nuevo” perito, el Dr. Lawrence Barnthouse, se basó en las normas contenidas en el Informe Cabrera, y “asum[ió] que [Cabrera] estaba describiendo correctamente cuáles son”. De hecho, admitió que no había sido contratado para crear un nuevo informe independiente, y además reconoció que “no podía ser completamente independiente” y no había “llevado a cabo todos los cálculos en forma independiente” en su propio informe porque la mayoría de la información que necesitaba estaba “solo estaba disponible en el Informe de Cabrera”. Al igual que Allen, Barnthouse admitió que se basó en el Informe Cabrera a pesar de que había llegado a la conclusión de que los números de Cabrera eran “inciert[o]s” y que la metodología que este había adoptado “no e[ra] un indicador confiable” y que era “[m]enos óptima, [e] inadecuada”.

196. Jonathan Shefftz, otro de estos peritos, no hizo ningún trabajo independiente y se limitó a reelaborar partes del fraudulento Informe Cabrera. Por ejemplo, Shefftz supuso, sin hacer ninguna investigación ni análisis por su propia cuenta, que TexPet estaba obligada a incurrir en costos y reparar las piscinas debido únicamente a que el Informe Cabrera afirmaba que esos gastos eran necesarios. Shefftz admitió que su informe se basaba totalmente en “datos y cifras de costo del informe de Cabrera” y que él había “simplemente tom[ado]...[las] cifras de volumen [de Cabrera] y sus cifras de costo, y las us[ó] como información para [sus] cálculos”. Explicó que él “no [se] estaba comprometiendo a comprobar la veracidad de [la] series de datos

[de Cabrera] o [sus] cifras de costos. Simplemente [Shefftz] los estaba utilizando en [su] informe”. Shefftz reconoció asimismo que se basó en el Informe Cabrera y que los números erróneos de este informe podrían “resultar en un error hacia arriba” a sus propios resultados. Por otra parte, un anexo del informe preliminar de Shefftz se basa en gran medida en el anexo T del informe Cabrera—un anexo que redactó Stratus, los consultores que escribieron secretamente el informe por Cabrera.

197. Los informes de otros peritos, como Carlos Picone, Robert Paolo Scardina y Daniel Rourke fueron escritos “en colaboración con Weinberg Group”, el grupo que había sido contratado no para crear nuevos informes, sino más bien para reelaborar el Informe Cabrera. Algunas secciones del informe de Picone fueron totalmente escritas por el Weinberg Group, con sólo revisiones “mínimas” por parte de Picone. El informe de Scardina fue escrito en gran parte por una persona del Weinberg Group, cuya identidad y cualificaciones Scardina desconocía. Al igual que los otros peritos, Scardina también se basó exclusivamente en el Informe Cabrera y el Weinberg Group para obtener la información básica para su informe.

198. En resumen, los “nuevos” informes periciales presentados por los Demandados RICO son nuevos sólo en dos aspectos. En primer lugar, tienen nombres nuevos, a pesar de no ser nada más que otra reelaboración del informe Stratus, el mismo que fue presentado originalmente como el Informe Cabrera. En segundo lugar, pretenden servir de fundamento para una nueva cifra indemnizatoria, la notable suma de US\$113.000 millones, que representa un incremento de casi US\$90.000 millones con respecto a la cifra de Stratus, a pesar de que no ofrece nuevos análisis ni pruebas.

2. Colusión con la República del Ecuador para formular falsos cargos contra los abogados de Chevron

199. Como parte de su plan para estafar y extorsionar a Chevron, los Demandados RICO y sus co-conspiradores conspiraron con funcionarios de la República del Ecuador para llevar adelante acusaciones penales infundadas contra Ricardo Reis Veiga y Rodrigo Pérez Pallares, abogados responsables de la celebración del Acta Final de Liberación de 1998 que

excluye las reclamaciones de los Demandados en contra de Chevron en el Litigio de Lago Agrio. El co-conspirador Bonifaz le explicó la estrategia a Donziger y Kohn en 2005 de la siguiente manera:

El día en que la administración de Chevron Texaco se convenza de que Reiss Veiga [sic] le pasó gato por liebre con sus promesas eliminaran nuestra causa, ese será el día en el cual Chevron Texaco querrá hablar. Ese es también el día en que veremos el fin de la carrera corporativa de Reiss Veiga [sic] ... Por lo tanto, tenemos que destruir su reputación con Chevron Texaco como incompetente de cualquier forma que podamos para que se resuelva nuestra causa.

200. Con las condenas penales en su poder, los Demandados RICO, sus co-conspiradores y el Ecuador podrían tratar de anular la exoneración y “sacar el máximo provecho de la investigación del delito”, en los medios de difusión y por otros canales, para obligar a Chevron a “transar” el Litigio de Lago Agrio o enfrentar una sentencia masiva. Según Donziger, “Si se entabla una causa penal, esto aparecerá en los cables de todo el mundo y realmente elevará el costo a [Chevron]”. De hecho, el metraje de *Crude* muestra a los conspiradores admitiendo que las acusaciones penales son un medio para ejercer “presión psicológica personal... [sobre] [los] altos ejecutivos [de Chevron]”, y las propias notas personales de Donziger dejan en claro que las acusaciones pretendían “dejarles el martillo en la cabeza [de Chevron]” y “forzará a [Chevron] negociar para obtener una posible resolución”.

201. Hace mucho tiempo que los Demandados RICO y sus co-conspiradores coluden con la República del Ecuador para tratar de formular acusaciones penales. En un intercambio de mensajes de correo electrónico en agosto de 2005 (que parece ser un extracto de una correspondencia regular) entre los conspiradores Alberto Wray, Bonifaz, Fajardo, Yanza, el Frente y la Procuraduría del Ecuador, Wray escribió “[s]i queremos que en algún momento el Gobierno y el Procurador jueguen de nuestro lado, debemos darles algo de capacidad de maniobra”. Martha Escobar, una procuradora sustituta, respondió que la Procuraduría y “todos quienes nos encontramos trabajando en la defensa del Estado, estamos buscando la manera de

anular o restar valor al contrato de remediación y al acta final [es decir el Acta Final de Liberación de 1998] . . . ”.

202. En ese mismo intercambio de mensajes electrónicos, Escobar confirmó que el Procurador General seguía resuelto a enjuiciar a “quienes celebraron” el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998, a pesar de la falta de pruebas de actos ilícitos: “El Procurador sigue empeñado en que la Contraloría vuelva a auditor (veo difícil también por el tiempo); quiere enjuiciar penalmente a quienes celebraron el contrato (también lo veo difícil, pues los indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría fueron desestimados por el fiscal . . . ”. El Fiscal General informó posteriormente a uno de los colegas de los Demandados RICO que “[él] qu[ería] que trabaj[aran] paralelamente en este tema” y que, al menos al principio, “[él] no qu[ería] que [sus] reuniones se hagan públicas hasta el momento oportuno”.

203. Después de trabajar juntos por algún tiempo, los Demandados RICO lograron que la República del Ecuador formulara cargos de fraude relacionados con la reparación en contra de Chevron en un litigio en los Estados Unidos. Cuando Donziger se enteró de esto, se regocijó con su triunfo: “¡¡El Procurador General de Ecuador demandará a Chevron por fraude en la remediación!! ¡¡Hemos luchado por esto durante más de un año, y finalmente lo logramos!!. Esto es algo realmente grandísimo”.

204. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores hicieron todo lo posible por ocultar su colusión con la República del Ecuador, a pesar de la existencia de, según lo describieron los mismos conspiradores, “evidencia casi irrefutable de haber nosotros colaborado con el [gobierno] para que sentenciaran a Reis Vega y a Perez.” En un mensaje de correo electrónico dirigido a Donziger y a otras personas, uno de los conspiradores les recordó que ellos “tuvimos que recurrir a medios muy sofisticados para desvincularnos del asunto (Amicus Curiae presentado por terceras personas, etc)”, y urgió a Donziger y a los otros a que no invalidaran estos esfuerzos asociándose públicamente con las acusaciones. En un mensaje de correo electrónico dirigido al asesor legal de la República del Ecuador en los EE. UU. acerca del posible

enjuiciamiento, Donziger le aseguró que un colega ecuatoriano que trabajaba en el asunto “entiende que es necesario mantener la confidencialidad de su contacto con la oficina de tu cliente”. Martha Escobar —la procuradora sustituta con quien Wray intercambió mensajes electrónicos— llegó incluso a prestar falso testimonio bajo juramento en una acción que se tramitaba en el Distrito Sur de Nueva York el 21 de noviembre de 2006, diciendo que nunca había tenido *contacto alguno* con los conspiradores acerca del Litigio de Lago Agrio. Sin embargo, al ser confrontada con el mensaje electrónico de 2005 intercambiado con Wray que demostraba lo contrario, ella confirmó que había actuado en dicha correspondencia a instancias del Procurador General.

205. La colusión con la República del Ecuador para obtener cargos penales falsos y el propósito de extorsión de esa colusión, se documenta en la película *Crude* y en las escenas no utilizadas. En una reunión de enero de 2007 entre Donziger y Kohn que aparece en las escenas no utilizadas de *Crude*, en la cual estos revisaron los materiales entregados por los Demandados RICO a la Procuraduría General ecuatoriana en apoyo de las acusaciones penales, Kohn analizó el plan de extorsión de los Demandados RICO: “Así que, otra vez, eso podría ser algo que podremos agilizar para que desaparezca en el momento oportuno...si quisieran que desapareciera”. Donziger respondió, “Precisamente”. Donziger le dijo a Kohn que Chevron estaba alegando una “conspiración” entre ellos y el gobierno ecuatoriano a lo que Kohn contestó, “Si tan sólo supieran”.

206. El 26 de abril de 2007, el presidente Correa recorrió los campos petrolíferos de Lago Agrio con los Demandados RICO y sus co-conspiradores. Ese mismo día, emitió un comunicado de prensa exigiendo el enjuiciamiento penal de los funcionarios ecuatorianos que habían firmado en el Acta Final de Liberación de 1998. Al día siguiente, después de escuchar esta noticia, Donziger reflexionó sobre si sería el momento adecuado para “pedir la cabeza de[1] [abogado de Chevron Rodrigo] Pérez Pallares da—dado a lo que dijo el presidente”. Donziger explicó: “[E]stá totalmente con nosotros”. Al día siguiente, el 28 de abril de 2007, en un discurso por radio nacional, el presidente Correa se hizo eco de la retórica de los Demandados RICO,

llamando traidores a los abogados ecuatorianos de Chevron y exigiendo que se los procesara, junto con los funcionarios de Petroecuador que firmaron en el Acta Final de Liberación de 1998. En la película *Crude*, aparece Donziger diciendo que “Correa dijo que los funcionarios del gobierno ecuatoriano que hayan aprobado la supuesta reparación ahora van a ser procesados en Ecuador” y agregando que aquellas personas que firmaron el Acta Final de Liberación de 1998 “se están haciendo en los pantalones en este momento”.

207. El hecho de que el Presidente Correa exigiera que se enjuiciara a quienes firmaron el Acta Final no sorprendió a los Demandados RICO ni a sus co-conspiradores. Un mes antes de que el Presidente Correa recorriera el Oriente, Fajardo se reunió con funcionarios del gobierno ecuatoriano, entre ellos Alexis Mera, Secretario Judicial y principal asesor jurídico del Presidente Correa, ocasión en la que Fajardo le pidió ayuda a Mera para proporcionarle al Presidente una “base” para que “reabr[an]” la “indagación para...los responsables”. Los conspiradores explicaron a Mera que, si bien podrían movilizar al público para tratar de invalidar el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998, “la oficialidad del Presidente podría hacer mucho más en este caso . . . [y] interés del Ejecutivo—y presión hacia la Fiscalía...podría hacer bastante en ese tema”. Mera, en respuesta, procedió a esbozar diversas maneras de anular el acuerdo y la exoneración. Sorprendentemente, los Demandados RICO lograron la ayuda de Mera y, por lo tanto, confabularon con el gobierno, a pesar de que Mera admitió que no había un camino “sustentable” para la anulación.

208. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores hicieron grandes esfuerzos para conseguir el apoyo del Presidente Correa y de otros funcionarios del gobierno ecuatoriano, celebrando reuniones privadas de almuerzo y conferencias. Donziger se reunió personalmente con el Presidente Correa en más de una ocasión, y Fajardo y Yanza también se reunieron con Correa repetidas veces sin que estuviera Donziger presente. Después de una de esas reuniones con el presidente, Fajardo informó: “Entonces, el Presidente cree que si hacemos un poquito de esfuerzo, antes de meter el público, el Fiscal va a ceder, y va a reabrir esa investigación por el fraude de los—del contrato de Texaco y el Estado Ecuatoriano”. El “elemento estratégico” que

lograron a la larga los Demandados RICO fue precisamente buscar la asistencia de representantes del gobierno ecuatoriano.

209. El plan para poder procesar a los abogados de Chevron incluía algo más que obtener el apoyo del Presidente Correa. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también dirigieron, como dice uno de sus asociados, sus “baterías [y] artillería” en contra de los abogados de Chevron a través de una serie de manifestaciones, y presionaron públicamente a las autoridades ecuatorianas. Como proclamó el Demandado Yanza durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 31 de julio de 2008, con el fin de asegurar el enjuiciamiento, los Demandados RICO y sus co-conspiradores “tendr[ían] que tomar todas las acciones legales, sea acciones legales contra estos funcionarios, denuncias públicas, presiones con la gente, todos estos mecanismos . . .” Yanza advirtió que “no están nada descartados”. Según Donziger, esto fue parte de la estrategia de los conspiradores de realizar una “campana guerrillera” contra Veiga y Pallares.

210. Esta campaña fue un éxito. Como se jactó Donziger, “[E]stamos pateando algunos traseros, y eso me pone muy contento”. Donziger estaba eufórico no sólo porque los cargos penales serían útiles para el ardid de extorsión de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, sino también porque se cumpliría una venganza personal. Así describió Donziger sus sentimientos hacia el Sr. Veiga, “En ciertas ocasiones tengo la fantasía de poner mis manos en el cuello de Reis Veiga y apretar hasta escucharlo rogar por misericordia, porque deseo que él sienta lo que es sufrir . . .”.

211. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores lograron finalmente su objetivo el 26 de agosto de 2008, cuando el gobierno ecuatoriano anunció cargos penales por fraude en contra de Ricardo Reis Veiga y Rodrigo Pérez Pallares, los dos abogados de Chevron que firmaron el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998. Los cargos fueron formulados a pesar de que dos fiscales generales anteriores determinaron que no había pruebas de fraude y pidieron que se cerrara el caso. Pero eso fue antes de que los Demandados

RICO fabricaran el supuestamente “independiente” Informe Cabrera sobre el cual se basó expresamente el Fiscal General al formular los cargos contra Veiga y Pallares.

212. Una vez que interpusieron cargos penales falsos, los Demandados RICO reclutaron a su “ejército privado” y comenzaron con amenazas directas contra Veiga y Pérez. El 5 de octubre de 2009, el Demandado Yanza, entre otros, solicitó la ayuda de la ciudadanía local para desfilarse con burdas efigies de Veiga, Pérez y otros ejecutivos de Chevron frente al tribunal en el Ecuador. Al concluir el mitin, Yanza y otros dieron discursos y amenazaron con “patéale el trasero [de Pérez]” y “enterrar [los abogados de Chevron] en...la[] piscina[]”. Los manifestantes anunciaron los “delitos” de cada ejecutivo de Chevron y un hombre vestido como la Parca representó la decapitación de cada una de las efigies con su guadaña antes de poner los “cuerpos” en un ataúd. Luego los manifestantes se llevaron el féretro a la selva, cavaron una tumba poco profunda y enterraron las efigies de los ejecutivos de Chevron.

213. Los cargos penales contra dos de los abogados de Chevron son el resultado directo de la colusión entre los Demandados RICO, sus co-conspiradores y la República del Ecuador. La imputación de estos cargos infundados y las amenazas de violencia contra los abogados de Chevron constituyeron una amenaza extorsiva firme, pero a su vez velada, contra Chevron: Si no resuelven el Litigio de Lago Agrio de acuerdo con nuestros términos, encarcelaremos a sus empleados, o algo peor. En efecto, como señaló el juez Kaplan del Distrito Sur de Nueva York, las pruebas muestran que Donziger y sus colegas han “intentado procurar la acusación penal a los fines de conseguir una conciliación [de Chevron]”, y que los procesamientos “aparentemente ha[n] sido instigad[os] por Donziger y por otros que trabajan con él con los fines básicos de ejercer coerción sobre Chevron para que firme una conciliación y para menoscabar un elemento importante de su defensa en Ecuador: la exoneración que obtuvo de[] [la] [República de Ecuador]”. Del mismo modo, en 2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que en el Ecuador “[s]e han utilizado demandas penales y órdenes de arresto contra funcionarios de empresas extranjeras” “para presionar a las empresas involucradas en controversias comerciales”. Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí.

3. Lanzamiento de ataques públicos contra Chevron sobre la base de declaraciones engañosas y mentiras para forzarle a pagar

214. A través de sus propios artilugios y los de sus colaboradores, los Demandados RICO han recurrido a falsedades premeditadas y declaraciones engañosas para crear una ola de críticas públicas contra Chevron. Al menos desde 2006, pero con mayor intensidad a partir de la fabricación del fraudulento Informe Cabrera, saturaron el dominio público con su falsa propaganda a través de Internet, radio, televisión y cine, así como los medios impresos, entre ellos, libros, periódicos y revistas. Además, llevaron esta campaña de presión a los organismos estatales y federales de los EE. UU., en busca de su ayuda falsamente inducida en este plan extorsionista. Como explicó uno de los conspiradores, Amazon Watch, la estrategia consiste en “aumentar la presión de la causa [sobre] Chevron por varios medios, resoluciones de accionistas, gran cobertura en los medios y extensas investigaciones mediante, por ejemplo la Comisión de Bolsa y Valores”. Y Donziger ha propuesto que los conspiradores utilicen el lema “Siempre Atacando”. Según Donziger, la “estrategia” es “incrementar lo que Chevron tiene que pagar”, incluso el “costo de la reputación mancillada que tienen entre los medios”. Según lo explicó uno de sus asociados en la preparación de una mediación con Chevron, “[t]enemos que atraer más a la prensa y aumentar la presión entre ahora y esa fecha para que aumente el precio”. Como lo presentó un juez federal, el “[e]l propósito de todo el juego, según Donziger, es hacer que esto sea tan incómodo y tan desagradable para Chevron que emitirán un cheque y acabarán con el asunto”.

a. El fraudulento bombardeo mediático

215. Donziger ideó la “estrategia” de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de aumentar los costos a Chevron y dejar “la reputación mancillada” con el periodista Peter Maass. En un artículo publicado en la revista *Outside*, Maass llamó a la estrategia de Donziger “guerra por desgaste: muerte por demanda legal”. Donziger le dijo a Maass, “Se tiene que ganar este caso tanto dentro como afuera del tribunal... Si tuvieran el caso sin la presión, jamás obtendrían un resultado”. Maass comentó, “Donziger quiere mantener la presión pública para

hacerle la vida tan difícil a la compañía que se dé por vencida y concilie el caso”. Se trata de “relaciones públicas guerrilleras” y “[l]a agitación es una táctica clásica de Donziger”. Aumentar la presión implica maximizar la publicidad y Donziger siempre “hace todo lo que pueda para montar un buen espectáculo”.

216. A tal efecto, Donziger contrató a Karen Hinton, especialista en relaciones públicas, para crear y dirigir la campaña de declaraciones públicas falsas y engañosas de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y coordinar los esfuerzos para absorber a los medios y a los ciudadanos bienintencionados en la campaña de presión de los conspiradores. Stratus también contribuyó a este esfuerzo, y desarrolló lo que denominó “material para la prensa”. Se sumó también el consultor de política y comunicaciones Chris Lehane para ayudar a los Demandados RICO a “sacar el máximo provecho de la investigación del delito” a través de extensos esfuerzos de relaciones públicas. Además de reclutar a periodistas para cubrir la historia, Lehane y los conspiradores planeaban que “[c]on base sobre la actividad inicial, debemos considerar varias mini campañas específicas dirigidas, todas concebidas para crear puntos de presión en la economía de Chevron”. Estas “mini campañas” incluyeron la presentación de una demanda de accionistas en contra de Chevron “por no divulgar información”, el contacto con el Procurador General de Nueva York “debemos ver si podemos incluir a Spitzer en el juego” y manipular a los estudiantes de una “universidad importante que está invertida en Chevron para hacer una campaña de desinversión”. En un correo electrónico acerca de la contratación de un nuevo miembro del equipo en el Ecuador, Donziger describió al candidato ideal como alguien que “cre[ara] bastante problemas en Ecuador”, y ese “trabajo comprende joder toda maquinaria que tenga puesto el nombre de Chevron Texaco...El poder fabricar una realidad es una ventaja”.

217. Los conspiradores también mantienen relaciones, en parte mediante el apoyo financiero, con varias organizaciones que distribuyen declaraciones públicas falsas y engañosas para aumentar la presión pública sobre Chevron. Algunas de estas organizaciones se dedican al fraude, mientras que otras tienen funciones más amplias, pero todas son cómplices, a sabiendas o

no, de los Demandados RICO y sus co-conspiradores. Ante todo están Amazon Watch, RAN y el Frente, uno de los Demandados, organizaciones que operan y controlan los aspectos importantes de la campaña de presión y conspiración general para obtener el pago de Chevron a través de la extorsión.

218. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores canalizaron una buena parte de sus ataques públicos sobre Chevron a través de Amazon Watch, que se presenta como una organización independiente. Donziger ha explicado el papel crucial de este elemento de la campaña de presión:

[Ellos] han jugado un rol ciertamente crítico en todo esto... [S]i no fuera por ellos, solo seríamos un caso ante los tribunales, pero gracias al trabajo de personas que se preocupan, sabes, especialmente Amazon Watch, somos una campaña que tiene un caso en los tribunales. Y creo. . . que, um, el daño que puede provocar Amazon Watch a Chevron es en muchos aspectos mayor que el que nosotros podemos provocar. . . .

Los Demandados RICO coordinan sus esfuerzos con la Rainforest Action Network [Red de Acción de la Selva Tropical], cuyas campañas de “acción directa” describe Donziger como “[b]rutalmente personales”.

219. Amazon Watch desempeña su función sumisamente y comprende plenamente que “el objetivo de muchos de los comunicados de campaña... es el propio Chevron y no tanto los medios”, y trabaja para “crispar los nervios de la gerencia de Chevron” tanto como sea posible. En una propuesta para obtener \$1 millón en fondos de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, Amazon Watch describió el Litigio de Lago Agrio como nada menos que una oportunidad para “cambiar como opera la industria petrolera”, y ofreció unirse a lo que vio como “la estructura de una campaña en pie y bien desarrollada, basada en los E.E:U.U.”. Amazon Watch describió su objetivo como poner a los administradores y a la junta directiva de Chevron “en una posición que para sobrevivir en la sociedad americana como empresa de buena reputación y ventaja competitiva, se verían forzados a resolver la demanda”. En seguida presentó la forma en la cual “amenazarían” los “grados de confianza” de la administración de Chevron,

quienes actualmente “viven en la zona de San Francisco con impunidad”, cómo los directores de Chevron “son especialmente vulnerables a la presión directa y a la presión a través de objetivos secundarios”, y cómo Amazon Watch crearía un “grupo de trabajo” que será “una constante y diaria fuente de fricción para Chevron”. Amazon Watch también preparó una representación visual de su estrategia, un cuadro en el cual se describen varias tácticas de presión, incluyendo el uso de organismos gubernamentales, todos en un círculo rodeando a “Chevron”.

220. La propuesta de Amazon Watch coincide con la estrategia de Donziger de “seguir atacando, mantener la presión, etc.” Donziger explica además su cálculo de “costo-cuestión de beneficios” de la campaña de presión: “también creo que si huyes. . . el costo en términos de problemas, el tiempo de manejo, el daño. . . a la reputación, lidiar con la junta, quedar mal, que tus chiquillos. . . en la escuela, tengan amigos que les dicen, oye, ¿qué hizo tu papi en el Ecuador?. . . creo que todo eso lo afecta en—en una forma extremadamente significativa, mucho más que l—los costos mismos, . . . los gastos menores y cosas así y yo, ya sabes, creo que es allí donde son más vulnerables”.

221. Los Demandados RICO se valen de Amazon Watch para llevar a cabo muchos de los ataques públicos en contra de Chevron, y los Demandados RICO siguen de cerca, modifican con frecuencia, y a veces escriben por completo los comunicados de prensa y las cartas que publica Amazon como si fueran propios. Cuando un representante de Amazon Watch se quejó a Donziger diciéndole que Amazon Watch no estaba “aquí simplemente para sellar los comunicados de prensa” y se atrevió a decirle que la experiencia previa demostraba que Amazon Watch “tiene que examinar cuidadosamente los hechos de tus comunicados de prensa para salvaguardar nuestra propia credibilidad”, Donziger le respondió en forma cortante que él y los demás abogados eran “la última palabra”, y que, “[p]odemos ser colaboradores, pero no somos socios iguales”. El tema que desató la arenga de Donziger es particularmente revelador: Amazon Watch había querido proporcionar los antecedentes académicos de Cabrera en un comunicado de prensa acerca de él. Donziger respondió: “El asunto sobre los antecedentes académicos de Cabrera es un buen ejemplo. No tiene un doctorado. No quiero destacar eso. Por eso, no

menciona en el comunicado de prensa qué diploma tiene. Obviamente, si tuviera un doctorado, lo habríamos puesto, ¿no te parece?” En respuesta, el representante de Amazon Watch calificó la táctica de Donziger como una “ofuscación sutil e innecesaria” y “grandilocuencia y el engaño”.

222. A través de Amazon Watch como representante, los Demandados RICO y sus co-conspiradores pueden enviar amenazas extorsivas a Chevron en un lenguaje más directo del que estarían dispuestos a utilizar, al menos, públicamente. Al “aumenta[r] la presión de la causa [sobre] Chevron”, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han hecho explícitas sus demandas extorsivas en comunicaciones directas con Chevron. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2009, Soltani escribió una carta “en nombre de Amazon Watch” al entonces presidente ejecutivo entrante, John Watson, en la que citó la evaluación fraudulenta de \$27.000 millones por daños y perjuicios del Informe Cabrera, y amenazó: “Hasta que Chevron no dé pasos certeros para resolver este caso, la cuestión seguirá dilatándose la corte de Ecuador, y también los claustros mundiales de la opinión pública”. Y luego continuó diciendo, “No sugerimos esto de manera superficial o simbólica”.

223. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores utilizan todos los medios disponibles para publicar sus mentiras y verdades a medias en el “claustros mundiales de la opinión pública”. Habitualmente difunden comunicados de prensa a través de Internet, correo electrónico y agencias de noticias, y aparecen en programas de radio y televisión. Por intermedio de diversas organizaciones que ellos mismos financian, los conspiradores operan o hacen operar sitios Web que atacan a Chevron, tales como www.chevrontoxico.com, www.texacotoxico.org, www.amazonwatch.org, www.chevroninecuador.com, truecostofchevron.com, thechevronpit.blogspot.com y www.changechevron.org. Los conspiradores también promueven su ardid a través de herramientas de medios sociales, el envío de mensajes a sus seguidores a través de Twitter (@changechevron) y Facebook, y mediante la publicación de comentarios difamatorios y declaraciones falsas (con frecuencia usando seudónimos) en respuesta a artículos de sitios de periódicos, blogs y otros comentaristas. Han ayudado a financiar por lo menos un libro de fotografías y una película documental, promoviendo imágenes engañosas de impacto

ambiental y pobreza. Y los ataques de los conspiradores en contra de Chevron no se han limitado a las palabras y fotografías, sino que han organizado marchas y manifestaciones, o amenazado con hacerlo, en las asambleas de accionistas, lugares de negocio y frente a las casas de empleados y miembros de la junta directiva de Chevron.

224. Los Demandados RICO realizan falsas declaraciones en apoyo de solicitudes de financiación, incluso a través de un enlace para hacer los pagos directamente en sus sitios: <http://chevrontoxico.com/take-action/donate.html> y en <https://www.gifttool.com/donations/Donate?ID=38&VER=1&LNG=EN> (por un enlace desde <http://www.amazonwatch.org>). No obstante, los Demandados RICO se cuidan como siempre de utilizar la supuestamente independiente Amazon Watch como frente para sus artilugios. El sitio chevrontoxico.com solicita que las donaciones se envíen por correo a la dirección de Amazon Watch en San Francisco, California. Kohn y Kohn Swift han hecho importantes donaciones a Amazon Watch. En 2009, por ejemplo, Kohn informó que Kohn Swift había donado más de US\$184.000 a Amazon Watch y esa suma no incluía las donaciones que él había hecho a título personal a esta organización. En base a nuestro leal saber y entender, los conspiradores utilizan los fondos recibidos de esta manera para seguir adelante con su plan ilegal para estafar a Chevron. De hecho, las declaraciones fiscales de Amazon Watch revelan que han canalizado al menos US\$90.000 en donaciones al Frente desde 2002.

225. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores utilizan otros intermediarios además de Amazon Watch para difundir su propaganda. Por ejemplo, cuando un cineasta de documentales fue al Ecuador para filmar una película sobre Lago Agrio, Donziger se aseguró de que los Demandados RICO tuviesen algo que ver con la forma en la cual se iba a hacer y comercializar, diciéndole al cineasta, “Es de importancia crítica el que se me incluya en la estrategia porque puede afectar el caso legal”. El cineasta en seguida le otorgó acceso a Donziger a los planes de producción. Los Demandados RICO reclutaron a otro cineasta, Joseph Berlinger, para hacer Crude, un supuesto documental acerca del Litigio de Lago Agrio, que se estrenó en 2009. La película, según Donziger, muestra cómo él “manipula el juicio”. Mientras

que Berlinger afirmó que su intención era hacer una película “imparcial”, y su equipo trabajó en estrecha colaboración con Donziger y otros en la planificación, filmación, edición y distribución de la película, y aseguró a Donziger que sería presentado en forma favorable en el producto final, diciendo, “Cumpliremos con lo que prometimos”.

226. Berlinger cambió la película antes de su estreno, a solicitud de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, para ocultar la relación entre los conspiradores y Carlos Beristain, quien fue públicamente revelado con el autor de una gran parte del Informe Cabrera, como se explica en el párrafo 305, *infra*. Este fue un cambio crítico, ya que la revelación de la relación previa entre los Demandados RICO y Beristain podría haber sido la punta visible que alertara a Chevron y al público sobre el gigantesco iceberg de colusión entre los Demandados RICO y Cabrera. Consciente de este riesgo, Fajardo le dijo que los cineastas que la divulgación de esa relación era “tan grave[] que podemos perder todo”, y que “si eso se mantiene sencillamente todo el juicio se nos viene abajo”. Por lo tanto, hizo que se realizaran los cambios a pesar de que fueron “costosos”.

227. Unos meses más tarde, Fajardo visitó la Universidad de Oregon y expresó su preocupación al descubrir que los estudiantes habían obtenido copias de la versión que mostraba a Beristain, y le dijo a Donziger que tenían un “grave problema”, aunque le aseguró que nadie en Oregon sabía que existía un “conflicto”. Cuando los Demandados RICO se enteraron de que la cadena CNN planeaba mostrar clips de *Crude*, ellos y el cineasta pugnaron por asegurar que no se mostraran las escenas de Beristain, ordenándole indirectamente a CNN: “Les rogamos que NO incluyan ninguna secuencia de la visita de Trudie a la comunidad Cofán en la que aparece un hombre con una camiseta blanca”. Berlinger también ha declarado que esperaba, al igual que los Demandados RICO, que el documental *Crude* pudiera “incidir en la decisión o posible resolución”. A través de los procedimientos de obtención de pruebas conforme al Artículo 1782 autorizados por este Tribunal, Chevron ha obtenido un volumen considerable de escenas no utilizadas de *Crude*, las que dejan en claro el alcance de las mentiras y tácticas obstruccionistas

de los Demandados RICO, y de las que se tomaron muchas de las citas directas de la presente Demanda Modificada.

228. Aunque Donziger y sus conspiradores se implicaron en la realización de la película *Crude*, sabían que la película sería mucho más útil a su causa si parecía independiente. Durante el rodaje, Donziger le recalcó a Berlinger: “No quiero que los abogados de Chevron vean que te estoy ayudando”. Pero entre bastidores, uno de los principales financiadores de *Crude* era Russell DeLeon, un amigo de la facultad de derecho de Donziger que también ha prestado un importante apoyo financiero al Litigio de Lago Agrio. Al término de *Crude*, los conspiradores promovieron y utilizaron la versión lanzada de la película en su campaña de presión contra Chevron y para recaudar dinero para esa campaña. En <http://chevrontoxico.com/take-action/crude-house-party.html>, instan a los lectores a “celebrar fiestas para ver la película” y pedir donaciones (para los Demandados RICO) en dichos eventos. En esa página, los Demandados RICO afirman, “[p]ara lograr que Chevron, una de las empresas petroleras más grandes y sucias del planeta, cambie, debemos construir un movimiento que sea un millón de veces más poderoso que ellos. *Crude* educará e inspirará a miles de personas a comprometerse a cambiar a Chevron en las próximas semanas y meses”.

b. Presentación falsa del Informe Cabrera como “independiente” y “neutral”

229. En todos estos medios de comunicación, los conspiradores han afirmado una y otra vez que Cabrera ofrece una perspectiva “independiente” y científica que “prueba” la responsabilidad de Chevron, y con ello han tratado de aumentar la presión sobre Chevron y, de ese modo, extorsionar a la empresa para obtener un pago. Por ejemplo, hay un extenso resumen del Informe Cabrera en chevrontoxico.com, que nunca revela el papel de los Demandados RICO en la redacción del informe, y concluye con lo siguiente: “El juez de primera instancia será quien tome la decisión final en lo que respecta a los daños y perjuicios, así como la responsabilidad de Chevron. Sin embargo, las cortes en el Ecuador, por lo general, muestran un gran respeto por los informes que preparan los peritos independientes”.

230. Al cuestionárselos, los Demandados RICO vuelven a afirmar que Cabrera es independiente. Por ejemplo, el 3 de abril de 2008, Fajardo declaró, en un comunicado de prensa emitido por Amazon Watch, “El alegato de que el profesor Cabrera está colaborando con los demandantes es totalmente falsa” y “Chevron teme a Cabrera, precisamente porque se trata de un perito independiente y creíble”. El principio rector de los Demandados RICO, como Donziger escribió a Fajardo, es el siguiente: “Si repiten una mentira mil veces se hace la verdad”.

231. El 31 de mayo de 2008 o alrededor de esa fecha, poco después de que los Demandados RICO presentaran su propio informe secretamente escrito como el de Cabrera, Kohn apareció en Fox News, haciendo alarde de la independencia de Cabrera. No sólo afirmó que Cabrera era un “perito independiente designado por el juez”, sino que más tarde declaró falsamente que Cabrera “analizó toda las pruebas de todas las partes de ambos lados”, y calculó una indemnización por daños y perjuicios de “entre los 8000 y los 16.000 millones”. Kohn no reveló que sus co-conspiradores escribieron el Informe Cabrera en secreto.

232. Después de que los conspiradores redactaron la actualización del Informe Cabrera en noviembre de 2008, en el que aumentaron el total de daños a US\$27.000 millones, el Frente emitió un comunicado de prensa el 1 de diciembre de 2008 elogiando falsamente el Informe Cabrera como una evaluación “independiente” del “Encargado Especial”, basada en la revisión de las “pruebas presentadas (en su mayoría presentadas por Chevron)”. Una vez más, no se mencionó nada de que el Informe Cabrera y su actualización habían sido escritos por los Demandados RICO, o que la mayoría de los materiales sobre los cuales se basó no eran “pruebas presentadas” en absoluto, sino los archivos de la empresa.

233. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores, además de presentar el informe de Cabrera como independiente ante los medios de difusión, también utilizaron la fraudulenta “evaluación” redactada por Stratus para aumentar la credibilidad del Informe Cabrera en dichos medios. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2008, Hinton y Amazon Watch emitieron un comunicado de prensa sobre el informe de Stratus titulado “La responsabilidad de Chevron en la Amazonía ecuatoriana por \$27.000 millones de dólares queda confirmada por un equipo de

científicos independientes”. Ese comunicado de prensa señala que “[e]l informe pericial independiente fue preparado por Richard Cabrera, un científico medioambiental ecuatoriano designado por la corte como Encargado Especial que ha trabajado principalmente para empresas petroleras en la preparación de evaluaciones de daños medioambientales”, y cita un refrendo del Demandado “Douglas Beltman, científico de la empresa Stratus Consulting que junto con un equipo de científicos analizó el informe pericial a pedido de los demandantes [de Lago Agrio]”. No es de extrañar que los empleados de Stratus “ratificaron” el informe ya que ellos lo habían escrito.

234. La participación de Stratus en la campaña mediática ya estaba prevista en el contrato inicial de agosto de 2007 entre Kohn Swift y Stratus, donde se contemplaba que Stratus llevaría a cabo “debates con la prensa”, además de realizar otras tareas para promover la conspiración. A modo de ejemplo, los Demandados Beltran y Stratus participaron en la orquestación de la respuesta de los Demandados RICO a las alegaciones de Chevron respecto a que el informe pericial ampliatorio de Cabrera mostraba pruebas de colusión entre Cabrera y los demandantes de Lago Agrio. De hecho, Beltman envió a Donziger un borrador negando que los demandantes de Lago Agrio estuvieran en colusión con Cabrera y afirmando que “La respuesta de Cabrera de noviembre a los demandantes es clara y propiamente la suya”. Esta respuesta se convirtió en parte de los esfuerzos generales de los Demandados RICO para presentar al Informe Cabrera como independiente.

235. Ahora, a pesar de las pruebas contundentes de que el propio equipo de peritos de los Demandados RICO y sus co-conspiradores escribieron el Informe Cabrera y su actualización, los conspiradores siguen difundiendo la mentira de que Cabrera es independiente. En mayo de 2010, en respuesta a una presentación judicial de Chevron en la que se alega la colusión entre los Demandados RICO y Cabrera, Fajardo volvió a negar cualquier conducta ilícita, afirmando que Cabrera había trabajado de forma independiente. Cuando se le preguntó sobre la participación de Stratus, Fajardo dijo a los medios: “Son nuestros consultores técnicos en los Estados Unidos, y han trabajado con nosotros durante muchos años, pero nunca han

interferido en el juicio”. No obstante, el día anterior a esa declaración, escribió una revisión de la presentación de Chevron para sus co-conspiradores en la cual admitió que era “verdad” que “la parte actora, es decir nosotros, hemos trabajado en colusión con el perito Cabrera”. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores siguen utilizando el Informe Cabrera como base para su reclamación más reciente de US\$113.000 millones en daños y perjuicios.

236. La vasta campaña de los Demandados RICO y sus co-conspiradores para presentar al fraudulento Informe Cabrera como el de un perito independiente designado por la corte ha tenido un gran éxito y numerosos medios incautos han repetido sin cuestionamiento alguno el falso estribillo de los Demandados RICO sobre la independencia de Cabrera. Un artículo de Reuters publicado el 3 de abril de 2008, por ejemplo, indicó: “Un perito ambiental independiente informó a un tribunal en el Ecuador que la petrolera Chevron debe pagar entre 7.000 millones y 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización por daños ambientales en el país”. Y en mayo de 2009, el programa de televisión *60 Minutes* informó sobre el Litigio de Lago Agrio, donde se analizó el Informe Cabrera en detalle, pero nunca se insinuó que los Demandados RICO habían obtenido el nombramiento de Cabrera y habían escrito dicho informe. Esto fue, sin duda, porque los Demandados RICO nunca le revelaron eso a *60 Minutes*. Hasta el día de hoy, los Demandados RICO y sus co-conspiradores mantienen un enlace a la televisación de este informe engañoso en *60 Minutes* en uno de sus sitios Web. Los principales medios de comunicación creyeron en la propaganda y actuaron tal como los conspiradores habían esperado y planeado en este ardid para extorsionar a Chevron. En efecto, el hecho de haber engañado a los principales medios beneficia a los conspiradores por partida doble, ya que les permite volver a publicar las declaraciones falsas de los medios sobre el Informe Cabrera sin corrección alguna, como lo hicieron con la historia de Reuters descrita anteriormente.

237. El engaño de los Demandados RICO y sus co-conspiradores a los medios nacionales e internacionales ha ido más allá de apremiarlos a volver a publicar mentiras sobre la independencia de Cabrera. Por ejemplo, los Demandados Fajardo y Yanza recibieron el Premio Ambiental Goldman, “el mayor programa de premios del mundo para activistas ambientales

comunitarios”, y Fajardo fue galardonado con el premio “Heroes” de la CNN. El comunicado de prensa anunciando el Premio Goldman volvió a repetir las declaraciones falsas y las verdades a medias de los Demandados RICO, incluso las relativas a la independencia de Cabrera.

c. Los Demandados RICO hacen declaraciones falsas a funcionarios del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales de EE.UU.

238. Los conspiradores han intentado abrir cuantos frentes se pueda en su ofensiva contra Chevron, al amparo de su estrategia para generar la máxima presión sobre Chevron, con el fin de impulsarla a un acuerdo coaccionado. Los Demandados RICO y sus colaboradores han hecho declaraciones falsas y engañosas en los Estados Unidos frente a funcionarios estatales y federales, intentando conseguir su ayuda (sin que estos tengan consciencia de lo que pasaba) en la maquinación fraudulenta mediante investigaciones y otros actos oficiales. Desde 2008, los Demandados RICO continuamente han pregonado sus conclusiones en el supuestamente “independiente” Informe Cabrera como prueba en respaldo de sus demandas por acción oficial.

239. Los conspiradores se han involucrado en una campaña de larga data para convencer a la SEC de que investigue a Chevron por presuntas violaciones de las obligaciones de divulgación. Han intentado ocultar su función en esta campaña utilizando Amazon Watch como pantalla, pero Donziger ha confesado que él escribió varias de las cartas que supuestamente eran de Amazon Watch. El 30 de enero, 2006, a solicitud de los Demandados RICO, Amazon Watch le escribió a Christopher Cox, entonces Presidente de la SEC, solicitándole que “iniciar una investigación sobre Chevron Corporation (CVX) por violar las reglamentaciones de la SEC que rigen las obligaciones de divulgación a los accionistas, con respecto al juicio entablado contra la compañía por la catástrofe ambiental en Ecuador relacionada con las operaciones petroleras”. Basándose en la estimación de daños y perjuicios de David Russel de \$6.000 millones (la cual este ya había repudiado), Amazon Watch acusó a Chevron de no informar a sus accionistas de su “posibilidad de [una] enorme responsabilidad”. La carta falsamente caracterizaba al pleito como “juicio colectivo” y declaraba que Chevron había “s[ido] forzada a admitir que Texaco...arrojó

más de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas en la selva amazónica . . .”. Aunque Donziger personalmente informó al Director Ejecutivo de Amazon Watch, Soltani, que el informe Russell era sumamente excesivo (*ver* párrafo 107, *supra*), Amazon Watch nunca corrigió sus falsas declaraciones a la SEC o a los accionistas de Chevron. De hecho, el mes siguiente, Soltani y Amazon Watch enviaron una carta de reiteración acusando a Chevron de distorsionar el informe de los “peritos dirimientes” del proceso de “la inspección judicial” entonces en curso el mismo procedimiento en el cual los conspiradores entregaron el falso informe pericial con la firma del Dr. Calmbacher fraudulentamente obtenida. Poco después, Donziger le informó a Lehane que, “La SEC está investigando seriamente el que [Chevron] no haya revelado su responsabilidad en los documentos que ha presentado a las autoridades — sé que es verdad porque un investigador de la SEC me acaba de entrevistar la semana pasada”.

240. El 18 de marzo de 2008, Amazon Watch repitió este esfuerzo escribiendo otra carta firmada por Soltani a la SEC. En esta carta, escrita semanas *antes* de que se presentara el fraudulento Informe Cabrera, pero obviamente muy consciente de su contenido secreto, Soltani hizo hincapié en el informe de próxima aparición, y en la independencia de su supuesto autor, “un encargado especial independiente” quien había preparado su informe “usa[ndo] toda la evidencia recolectada” con “un gran equipo de peritos técnicos bajo la supervisión de [él]”. La carta exigía una investigación y “la imposición de una sanción en contra de Chevron por no haber cumplido con sus obligaciones”. Soltani argumentaba “que Cabrera está siendo atacado por Chevron precisamente porque *está calificado* para realizar una evaluación de daños creíble”. Soltani y Amazon Watch hicieron estas declaraciones sabiendo que los autores reales del Informe Cabrera eran Stratus y otros consultores de los Demandados RICO. De hecho, a pesar de saber que el Informe Cabrera era un fraude, Soltani acusó a Chevron de “crear demandas de injusticia procesal”, y caracterizó a la postura de Chevron con respecto a que el proceso había sido injusto como “absurda”.

241. Cuando Donziger supo que era posible que la SEC investigara a Chevron, escribió que esto representaba una “gran victoria para AW [Amazon Watch]”. Le dijo a su

equipo que “siganles repitiendoles lo del [SEC] ”, aunque escribió, “pienso que esto es un engaño”.

242. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores han realizado estas mismas falsas declaraciones a otros organismos federales. En una carta con fecha del 29 de abril de 2008 al Representante Comercial de EE.UU., los Demandados Yanza y Fajardo se refirieron a Cabrera como “perito designado por el tribunal”, y afirmaron engañosamente que “la enorme cantidad de prueba sobre la cual el perito designado por el tribunal, el profesor Richard Cabrera, funda su criterio, fue brindada por Chevron misma por medio de sus pruebas sobre muestras”.

243. Y en abril de 2009, Donziger hizo falsas declaraciones con respecto a la supuesta “independencia” de Cabrera en una declaración ante la Cámara de Representantes de EE.UU. Donziger falsamente declaró que “Richard Cabrera, el perito designado por la corte, proporcionó una buena estimación actualizada e independiente sobre el impacto que ha tenido la contaminación en la salud humana”. (énfasis añadido). Donziger también testificó que “[n]umerosos científicos calificados que examinaron este informe consideran que sus conclusiones son razonables y que la evaluación de daños concuerda con los costos de otras grandes limpiezas ambientales”. Donziger en ningún momento reveló el hecho de que los “científicos calificados” eran sus co-conspiradores Stratus, Beltman, Maest y Chapman, quienes en secreto planificaron y escribieron el Informe “Cabrera”.

244. Los Demandados RICO también han hecho declaraciones falsas a miembros individuales del Congreso. El 19 de diciembre de 2008, el Demandado Beltman le proporcionó a la oficina del congresista de Estados Unidos, Jim McGovern, “temas de conversación” para una entrevista con el periódico Los Angeles Times, falsamente informando al personal del congresista que “[e]l perito designado por la Corte revisó la información científica disponible y llegó a la conclusión de que la gente de la zona sufre muchas enfermedades causadas por la contaminación, incluido el cáncer”. El 31 de enero de 2009, Beltman envió los informes de Cabrera declarando que “[a]djunto el resumen del informe pericial de la corte de marzo del 2008” y que “[a]djunta también está la respuesta, con fecha de noviembre del 2008, a las

preguntas de los demandantes [de Lago Agrio] escrita por el perito de la corte Beltman no reveló que Stratus y los otros Demandados RICO en realidad eran los autores secretos de las respuestas a los Demandantes de Lago Agrio junto con el informe inicial de Cabrera.

245. Además, los Demandados RICO han ampliado su campaña para incluir funcionarios estatales. En 2009, los Demandados RICO presentaron alegaciones fraudulentas con respecto a Chevron al Procurador General de Nueva York, y proporcionaron a dicha agencia información falsa de que Cabrera era un “perito designado por la corte” neutral y que los Demandados RICO no habían cumplido función alguna en la creación de la exorbitante cifra de \$27.000 millones. Sus intenciones eran generar una consulta o investigación oficial que por sí misma ejerciera presión directa sobre Chevron y que los Demandados RICO pudieran utilizar para reforzar su propia campaña de presión. El día 4 de mayo de 2009, basándose en las falsas declaraciones de los Demandados RICO, el Procurador General de Nueva York hizo precisamente eso, le envió una carta a Chevron indagando sobre las revelaciones de Chevron relacionadas con el Litigio de Lago Agrio, y solicitándole una “respuesta por escrito” a varias preguntas en el término de una semana. En el primer párrafo de la carta, el Procurador General de Nueva York declaró, “Según lo que entiendo de las acusaciones, un perito técnico ha calculado que si los demandantes ganan el litigio, los daños evaluados contra Chevron ascenderán a \$27.000 millones”. Los Demandados RICO aprovecharon dichos resultados, refiriéndose a la carta en múltiples comunicados de prensa como una “investigación”. En una carta con fecha del 25 de mayo de 2009 a los accionistas de Chevron, aparentemente proveniente de Atossa Soltani y otros miembros de Amazon Watch, los conspiradores declararon que “el Procurador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha iniciado una investigación de la empresa,” y “Chevron ya es el enfoque de una investigación del fraude por el Procurador del Estado de Nueva York”. Y, precisamente como eran las intenciones de los Demandados RICO, la carta al Fiscal General de Nueva York fue destacada en la prensa, y generó una cobertura en los medios que sugería que Chevron había “manejado mal” el asunto. La publicación de la industria Oilgram News señaló que la campaña estaba surtiendo sus efectos deseados, al reportar

en referencia a la carta del 4 de mayo que: “Los analistas tienen distintas opiniones con respecto a cuáles serán las consecuencias que sufrirá Chevron con el caso del Ecuador, pero coinciden en que esto repercutirá, a corto plazo, en el precio de las acciones”. Citó a un analista con Oppenheimerr Funds, Inc. quien había manifestado: “Yo llegaría a un acuerdo y dejaría de perder dinero”.

d. Los conspiradores intentan manipular el precio de las acciones de Chevron para forzar un acuerdo favorable

246. Para aumentar la presión financiera y pública sobre Chevron para que pague a los Demandados RICO por medio de un acuerdo de conciliación del Litigio de Lago Agrio obtenido por extorsión, los conspiradores han intentado manipular y deprimir el precio de las acciones de Chevron al fijar como objetivo de sus mentiras y verdades a medias a los accionistas, potenciales inversionistas y analistas de acciones de Chevron. El objetivo, según lo expresó Donziger, era causar una “venta masiva de miles de millones de acciones en [Chevron]”. Con el fin de promover sus maquinaciones, los conspiradores han organizado protestas en las asambleas de accionistas de Chevron y en los hogares de miembros de la Junta Directiva de Chevron, y han diseminado propaganda falsa y engañosa para los accionistas de Chevron sobre su responsabilidad en el Litigio de Lago Agrio. En cada instancia, han argumentado que la estimación de daños y perjuicios de US\$27.000 millones es independiente y legítima, y por lo tanto representa un riesgo mayor para el valor de las acciones de Chevron. Donziger describió estas tácticas de presión sobre los accionistas como una de las “cartas clave por jugar”.

247. La estrategia de los Demandados RICO de enfocarse en los accionistas de Chevron se encuentra claramente expuesta en sus comentarios públicos y en los sitios Web que operan, los cuales contienen material dirigido directamente a los inversionistas. En el sitio Web changechevron.org/for-investors, operado por el co-conspirador RAN, los conspiradores declaran que “el tipo de operaciones que tiene Chevron en estos momentos expone a la empresa (y sus inversionistas) a grandes riesgos financieros, de dañar su reputación y ambientales”. Con respecto a la estimación de daños y perjuicios en el informe de Cabrera, los conspiradores se

refieren a “pasivos en cantidades astronómicas”, y sugieren que Chevron no ha “prevenido a sus accionistas debidamente con respecto a los riesgos que la empresa confronta en Ecuador”. Los conspiradores describen estas actividades en su sitio Web: “Para presionar a Chevron para hacer lo correcto en Ecuador, nos involucramos en una variedad de tácticas. En los últimos años hemos...[a]lertado a los accionistas de Chevron a las mentiras y omisiones de la empresa con respecto al caso en Ecuador, un caso en que la sentencia contra Chevron amenaza dramáticamente el valor de las inversiones de los accionistas.”. Y en agosto de 2008, Donziger encargó un análisis detallado de “varias opciones para una estrategia más proactiva y dinámica para aplicar presión sobre Chevron por medio de los mercados públicos”.

248. Por ejemplo, poco después de que Cabrera presentara su informe inicial, el 31 de mayo de 2008 o alrededor de esa fecha, Kohn apareció en un segmento de Fox News pregonando el Informe Cabrera “independiente” como una razón por la cual los accionistas de Chevron deberían estar preocupados. En esa entrevista, Kohn insinuó que Chevron estaba ocultando información sobre la estimación de daños y perjuicios “independiente” de Cabrera, al decir que “los accionistas fueron [recientemente] informados por primera vez de la existencia de esta causa, a pesar de que originariamente se presentó en los Estados Unidos, en los noventa”. Entonces advirtió que los “accionistas deberían estar preocupados por la imagen de Chevron”. Kohn en ningún momento explicó que sus co-conspiradores habían en realidad sido los autores secretos del informe supuestamente independiente de Cabrera.

249. Frente a las alegaciones de que los Demandados RICO habían coludido con Cabrera, en un comunicado de prensa del 13 de febrero de 2009 emitido por el Frente, se cita a Fajardo quien dice que tales alegaciones eran “falsas y difamatorias” y alega que esto “expone[] a los accionistas de Chevron a responsabilidades adicionales”. Y en un comunicado de prensa de abril de 2008, emitido por el Frente de Defensa de la Amazonía, Fajardo acusó a Chevron de no revelar a los accionistas que el Procurador General del Ecuador había entablado una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de EE.UU., y que “[e]sto forma parte de una estrategia consciente para desacreditar un proceso judicial en el que Chevron sabe que está perdiendo por

el propio peso de las pruebas”. Y, recientemente, el 21 de diciembre de 2010, el Frente emitió un comunicado de prensa citando a Fajardo diciendo: “La Junta Directiva de Chevron no puede seguir ignorando la evidencia montada de actividad ilegal y fraude de parte del equipo legal de la compañía en los Estados Unidos y en Ecuador. . . . Intentamos buscar la reparación total del daño que se ha hecho en nombre de los accionistas de Chevron y hacer responsables a todos los individuos de Chevron que han participado en este plan ilegal”.

250. Los conspiradores también se han comunicado directamente con los accionistas de Chevron y analistas influyentes en numerosas ocasiones. El 25 de mayo de 2009, Amazon Watch envió una carta firmada por Soltani a los accionistas de Chevron, en la que se afirmaba que Chevron había presentado escritos “fals[os], confus[os] o incomplet[os]” a la SEC, y citaba analistas de Barclays y Potomac Research quienes manifestaban que el litigio estaba dañando el precio de las acciones de Chevron. Como con la mayoría de las declaraciones públicas de los conspiradores desde abril de 2008, la carta se fió en una “evaluación de daños independiente de la corte”, pero no divulgó que los mismos Demandados RICO y sus co-conspiradores habían escrito secretamente tal “evaluación”.

251. Donziger y sus co-conspiradores también han cabildeado personalmente con los analistas, incluso en reuniones personales, y han formulado falsedades fraudulentas con la intención de que sus falsedades fueran reportadas como hechos por estos analistas, y que estos informes redujeran el precio de las acciones de Chevron. El 11 de mayo de 2009, por ejemplo, Donziger y sus co-conspiradores se reunieron en Nueva York con the Director Administrativo de Oil & Gas Equity Research de UBS, y le proporcionaron copias de la carta de Cuomo, el Informe Cabrera y el informe ampliatorio, y el “análisis” fraudulento de dicho informe por Stratus, todo con intenciones de dar la impresión de que el Informe Cabrera era independiente y válido. También estaba involucrado en este esfuerzo el co-conspirador Daniel Orlow, descrito por los Demandados RICO como “un asesor de inversiones quien trabaja en el equipo jurídico que representa a las comunidades amazónicas”, quien formuló repetidas declaraciones públicas poco después de la reunión con UBS en representación de los Demandados RICO, como por ejemplo:

“La presión sobre la gerencia de Chevron está aumentando por la incertidumbre que rodea un posible pasivo ambiental muy significativo en Ecuador”, y “Nuestro equipo está siendo contactado constantemente por los accionistas y analistas, quienes están preocupados de que la administración de Chevron no esté revelando completamente y en forma honesta la exposición de la empresa en Ecuador. . . . Hay una preocupación real de que Chevron no esté jugando limpio y de que haya pagado demasiado por Texaco”.

252. En otro esfuerzo por influir en el precio de las acciones de Chevron, los conspiradores han iniciado una campaña “detención de compra” en la cual se han comunicado directamente con los inversionistas y, basándose en declaraciones falsas y engañosas acerca de los resultados de las inspecciones de los sitios y los procesamientos penales y las investigaciones gubernamentales que han instigado los conspiradores, han exhortado a los inversionistas a que no compren acciones de Chevron. Amazon Watch describe la campaña de la siguiente forma:

Amazon Watch está contactando a los accionistas institucionales e individuales, en particular, a las comunidades de inversión socialmente responsables (SRI) y fondos de pensión de empleados públicos, profesores y universidades para instarlos a que se unan a la detención de compra. La corte del juicio de Lago Agrio, Ecuador, ha encontrado niveles alarmantes de toxinas que atentan contra la vida en docenas de sitios de producción de Chevron anteriores en Ecuador. . . .

Ahora Chevron está acusada de fraude en Ecuador por mentir sobre los resultados de una remediación deficiente que llevaron a cabo a mediados de la década de los noventa. . . . Como resultado de esto, el Procurador de Ecuador le ha solicitado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue el supuesto fraude de Chevron. La Comisión de Bolsas y Valores (SEC) ya está investigando a la compañía por no haber divulgado a los accionistas la potencial responsabilidad.

Amazon Watch ocultó el hecho de que eran los Demandados RICO y sus co-conspiradores quienes en realidad escribieron el informe del Procurador General del Ecuador.

253. Los conspiradores también han organizado protestas en varias de las asambleas anuales de accionistas. Según aparece en la película *Crude*, estas protestas, mientras que fueron diseñadas para parecer acontecimientos de base comunitarios, en realidad están cuidadosamente planeadas y con un guión literalmente elaborado por Donziger y sus co-conspiradores.

254. Además, los conspiradores han cabildeado con grandes inversionistas institucionales para que respalden las resoluciones de accionistas de Chevron diseñadas para dar apoyo a las mentiras de los conspiradores y añadir presión adicional sobre Chevron. Por ejemplo, Stratus y Amazon Watch estuvieron involucradas en la redacción de una resolución de accionistas en el año 2009, ofrecida por la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York como custodio y fideicomosario de ciertos fondos de pensiones. El 1 de diciembre de 2008, Mitchell Anderson de Amazon Watch envió un correo electrónico a Beltman de Stratus con línea de asunto “Resolución de accionistas 2009 - Actualización urgente” y en la que dice: “[n]ecesitamos hacer algunos cambios al siguiente párrafo rápidamente, debido a las nuevas cifras que emitió el perito asignado por el tribunal”. Beltman proporcionó las cifras más altas del informe revisado de Cabrera, las cuales entonces se incluyeron textualmente en la resolución de accionistas propuesta por los fondos el día siguiente. Dicha resolución expresa que un “experto nombrado por la corte en el litigio ecuatoriano ha recomendado que se responsabilice a Chevron de hasta US\$ 27.300 millones en daños”, pero no explica que Stratus y los otros Demandados RICO y sus co-conspiradores secretamente redactaron el informe del “experto nombrado por la corte” en el que se declara la responsabilidad de Chevron.

255. Los conspiradores han promovido su participación en la redacción de las resoluciones de los accionistas para atraer la atención a la determinación de responsabilidad realizada por Cabrera pero, otra vez, sin revelar los papeles que desempeñaron los Demandados RICO y sus co-conspiradores en la redacción del informe. Por ejemplo, el 8 de abril de 2009, después de que la SEC se rehusó a expedir una carta de no acción a Chevron con respecto a una de las resoluciones de accionistas de los conspiradores, Hinton y Amazon Watch expidieron un comunicado de prensa describiendo la resolución como “una resolución de mucha visibilidad que amenaza con centrar la atención en el pasivo ambiental récord de la compañía de US\$ 27 mil millones en el Ecuador”.

256. El periódico The Wall Street Journal ha reportado que las declaraciones de los Demandados RICO acerca del Litigio de Lago Agrio y, específicamente la estimación de

Cabrera de \$27.000 millones en daños, han surtido su efecto deseado sobre el valor de las acciones de Chevron: “La posibilidad de que un juez a fines de este año exija el pago de una indemnización por daños y perjuicios por una cifra que puede ascender hasta USD 27,5 mil millones, casi un quinto de la capitalización de mercado de Chevron, parece haber atemorizado a algunos inversionistas.”.

257. El Frente y Hinton han difundido informes negativos de analistas con respecto a Chevron en el sitio Web chevrontoxico.com. Por ejemplo, el 26 de mayo de 2009, los conspiradores publicaron un artículo en el que se informa que “Oppenheimer, en un informe de fecha 4 de mayo, dijo que la demanda de US\$ 27.000 millones de parte de Ecuador “podría deprimir las acciones hasta que se llegue a un acuerdo de conciliación... mientras más pronto se elimine esto, mejor será para los accionistas” y que “Barclay’s caracterizó el caso de Ecuador como un “peso” sobre el valor de las acciones de Chevron”.

258. Y el 24 de agosto de 2010, FOX Business informó que, “la empresa petrolera ha perdido muchas de sus ganancias en las últimas semanas mientras continúa peleando una demanda en Ecuador que afirma que Texaco, adquirida por Chevron en 2001, destruyó partes de la selva con sus actividades de perforación de petróleo en las décadas de los setenta y ochenta”. Los conspiradores publicaron este artículo en su totalidad el día siguiente en chevronpit.blogspot.com.

259. Por sobre todo, sin embargo, las falsas declaraciones, la conducta hostigador y los esfuerzos de cabildeo con los medios, el gobierno, los accionistas e individuos privados por parte de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, están todos dirigidos hacia un único objetivo final: forzar a que Chevron pague miles de millones de dólares a los Demandados RICO y sus co-conspiradores para poner fin a todo esto.

e. Los Demandados RICO acusan falsamente a Chevron de asesinato para generar escándalo y forzar a que Chevron pague

260. Los conspiradores han hecho numerosas declaraciones públicas declarando o sugiriendo que Chevron es culpable de asesinato. Esta afirmación es falsa y se ha expresado intencionadamente y sin fundamento alguno. La intención de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de diseminar esta mentira es generar un gran escándalo e indignación entre el público y los activistas, y en los medios, todo para promover su extorsiva conspiración.

261. El Demandado Fajardo y sus co-conspiradores han intentado sacar provecho de la muerte violenta del hermano de Fajardo, Wilson Fajardo. Repetidas veces han insinuado que Chevron fue responsable y han afirmado que no hubo investigación policíaca alguna del crimen. Sin embargo, Fajardo sabe que esto es falso. En una declaración escrita hecha al Fiscal de Distrito como parte de una extensa investigación del asesinato de su hermano, Fajardo mismo proporcionó los nombres y direcciones de los hombres quienes él creía eran los asesinos de su hermano, detalles sobre el lugar y las circunstancias del asesinato y, aún más importante, una descripción detallada de las hostilidades previas entre los presuntos asesinos y Wilson Fajardo, incluidas amenazas previas y un intento por parte de uno de los hombres de apuñalar a su hermano unos pocos días antes. No se hace mención en esta declaración a Chevron ni a Texaco ni a ninguna conexión con el Litigio de Lago Agrio.

262. A pesar de esta declaración sobre los detalles de la muerte de Wilson Fajardo y de su conocimiento de que Chevron no tenía nada que ver con esto, Fajardo ha insinuado falsa e intencionadamente que Chevron es responsable. Por ejemplo, el 22 de abril de 2008, Fajardo hizo la siguiente declaración en la televisión ecuatoriana: “No puedo decir que fue Texaco que lo hizo, tampoco puedo decir lo contrario. Nunca se investigó este tipo de cosas. Entonces, han habido muchísimas cosas, muchísima presión, muchísima persecución en este-en este caso que sí deja mucho que—que hay que ver”. El 24 de agosto de 2009, Fajardo dijo a *Publico*, “Yo mismo he sido amenazado reiteradamente y uno de mis hermanos fue asesinado por sicarios, aunque no puedo probar que Chevron esté detrás”.

263. La co-conspiradora de Fajardo, Hinton, ha perpetuado estas falsedades en comentarios que incluyó en Politico.com el 16 de noviembre de 2009, en los cuales declaró que “nadie sabe quién asesinó al hermano [de Fajardo]”, y que la muerte ocurrió cuando Fajardo “y otros miembros del equipo legal de demandantes habían recibido varias amenazas de muerte anónimas conectadas con el trabajo de la causa”. Estas declaraciones son falsas y Fajardo y Hinton sabían en el momento en que las hicieron que eran falsas. Fajardo sabía que la muerte de su hermano había sido investigada y que Texaco y Chevron no tenían nada que ver con ella. Aún así, mintió sobre ello en la televisión, y Hinton difundió esa mentira.

264. Aunque identificó sospechosos en el asesinato de su hermano y los motivos de los asesinos para matar a su hermano, Fajardo ha insinuado falsamente que los asesinos confundieron a Wilson Fajardo con el mismo Demandado Fajardo para crear la impresión de que Chevron había intentado “asesinar” a Fajardo. Por ejemplo, en un artículo de mayo de 2007 en la revista *Vanity Fair* sobre la causa contra Chevron, Fajardo dijo que lo estaban siguiendo, y que “los asesinos habían cometido un error”. Donziger ha llevado esta escandalosa afirmación hasta el mismo Congreso de los Estados Unidos. En una declaración ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, Donziger afirmó que el “equipo de abogados y defensores que luchan contra Chevron en los tribunales del Ecuador sobre la responsabilidad de la limpieza ha sufrido represalias por ejercer sus derechos legales[.]” Y el primer “ejemplo[] de esta represalia” que le ofreció al comité fue: “El abogado principal de las comunidades de la selva, Pablo Fajardo, ha recibido amenazas de muerte. Un hermano del Sr. Fajardo fue asesinado en 2004, un año después de que comenzara el juicio, en circunstancias misteriosas que algunos piensan que se trató de un caso de identidad equivocada”. De modo parecido, en una escena especialmente ofensiva en *Crude* filmada en la tumba de Wilson Fajardo, el Demandado Fajardo vinculó el “asesinato” de su hermano con la “primera inspección judicial del caso Texaco” y falsamente indicó que los asesinos “me estaba buscando”. En otra escena, él hizo una “broma” que tenía un arma en su casa “[p]ara cuando Texaco venga”. Estas declaraciones falsas a sabiendas están destinadas a

dejar la falsa impresión de que Chevron no es solo responsable por el asesinato de Wilson Fajardo, sino que también desea matar a Pablo Fajardo.

265. Los escandalosos ataques contra Chevron que la implican en asesinatos son nada más que amenazas apenas veladas contra Chevron por parte de los Demandados RICO: Paguen, o continuaremos nuestra campaña de mentiras, fraude y corrupción.

C. La Campaña de mentiras y obstrucción de los conspiradores en los tribunales de los EE.UU

266. Determinados a evitar que su confabulación para defraudar y extorsionar a Chevron fuera expuesta durante la presentación de pruebas y otros procedimientos que inició Chevron en los tribunales federales en EE.UU., los Demandados RICO se embarcaron en una campaña de obstrucción y mentiras, intentando ocultar la verdadera autoría del Informe Cabrera y la relación de los Demandados RICO y de sus co-conspiradores con el supuestamente “independiente” Cabrera. Los Demandados incluso llegaron hasta el punto de presentar engañosamente la independencia de Cabrera en una demanda que entablaron ante este Tribunal en un litigio relacionado en el que procuraban suspender un procedimiento de arbitraje.

267. Estos esfuerzos de obstrucción han sido manejados por Patton Boggs, entre otros. En 2010, cuando le pareció a los Demandados RICO que Chevron iba a descubrir claras pruebas de su colusión con Cabrera, los abogados de Patton Boggs participaron en una serie de reuniones con los Demandados RICO y co-conspiradores en los Estados Unidos y en el Ecuador, para informarse sobre la naturaleza de dicha relación. También adoptaron control sobre la defensa contra las acciones de presentación de pruebas de Chevron entre bastidores, redactando secretamente a nombre de otros documentos para presentar a la corte y manejando a los abogados de otros estudios jurídicos. Mientras que su investigación seguía en curso, y mientras, de acuerdo con su propia confesión, no sabía “lo que había para admitir”, redactaron e hicieron que se presentaran escritos y declaraciones que contenían declaraciones falsas y engañosas negando la extensa colusión con Cabrera.

268. Una vez que quedó en claro que las declaraciones previas de los Demandados RICO ante los tribunales de los EE. UU. habían sido falsas y engañosas, Patton Boggs insistió, y no solo repitió y reafirmó las declaraciones falsas acerca de Cabrera, sino que también negoció para sí misma una participación en los resultados del Litigio de Lago Agrio en un acuerdo que le otorgaba influencia significativa sobre el rumbo futuro del litigio.

269. Además, Donziger mismo, el cabecilla de la empresa, ha interferido personalmente en los procedimientos de presentación de pruebas en este Tribunal y en otras partes, incluyendo repetidas y persistentes violaciones de múltiples providencias judiciales emitidos por este Tribunal. En estas y otras mentiras e inconductas ante varios tribunales en los EE. UU., los Demandados RICO y sus co-conspiradores, incluyendo Patton Boggs y otros bufetes como Emery Celli y Motley Rice, han aportado su fraude generalizado a los tribunales de este país y han intentado ocultarles sus maquinaciones delictivas a Chevron y a los tribunales.

1. Intentos de obstruir los procedimientos de presentación de pruebas de Chevron presentando declaraciones falsas y engañosas ante tribunales de distrito y de apelación de EE.UU.

270. Al enfrentarse a las desmentidas de los conspiradores en Ecuador con respecto a la autoría del informe de Cabrera, Chevron recurrió a los Estados Unidos para obtener la presentación de pruebas de la empresa conspirativa cuya base se encuentra principalmente en EE.UU., directamente por medio de procedimientos al amparo del Artículo 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, el cual autoriza que “[e]l tribunal de distrito del distrito en el que una persona resida o se encuentre puede ordenarle brindar su testimonio o declaración, o que presente un documento u otro instrumento para su utilización en un proceso llevado a cabo en un tribunal extranjero o internacional”. Varios tribunales han aprobado las solicitudes de presentación de pruebas por parte de Chevron, lo cual ha generado más pruebas de fraude, colusión y conducta delictiva, y pruebas que establecen la obstrucción a sabiendas por parte de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de las solicitudes del Artículo 1782 presentadas por Chevron. Estas pruebas y la censura de numerosos tribunales en EE.UU. de la conducta que

revelan se detallan a continuación. Pero el co-conspirador Julio Prieto quizás expresó el claro conocimiento de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de lo impropio de su propia conducta en un correo electrónico a Donziger y Fajardo, después de que Fajardo le dijera que la correspondencia de los Demandados RICO con Stratus probablemente sería revelada en un procedimiento del Artículo 1782 en Colorado: “[L]os efectos son potencialmente devastadores en Ecuador (aparte de destruir el juicio, podemos ir todos tus abogados a la cárcel)”.

271. Por consiguiente, los Demandados RICO adoptaron una estrategia de obstrucción y demora para promover sus maquinaciones delictivas, intentando demorar la presentación de pruebas en EE.UU. hasta que pudieran obtener un fallo en Ecuador y comenzar con su plan de utilizarlo para hostigar y atacar a Chevron y sus filiales alrededor del mundo. El co-conspirador Ilann Maazel de Emery Celli le escribió lo siguiente a Donziger y a otros conspiradores, incluidos los abogados de Patton Boggs y Motley Rice: “A menos que queramos que la revelación de Stratus/Cabrera salga en Colorado, que parece ser el peor de lugares posibles, necesitamos realizar nuestra entrega en Ecuador y rápido... Hemos estado más de un mes en Colorado y en todo el resto, pero tiempo ya casi se agota”.

272. A lo largo de estos procedimientos del Artículo 1782, el primero de los cuales fue iniciado por Chevron el 18 de diciembre de 2009, los Demandados RICO han intentado impedir la presentación de pruebas solicitadas por Chevron recurriendo a mentiras, abusos procesales y otras tácticas obstruccionistas dilatorias. No obstante estos esfuerzos, Chevron ha obtenido pruebas adicionales que demuestran que los conspiradores escribieron el Informe Cabrera e intentaron utilizar el llamado informe “independiente” para su propia ventaja. Al tiempo en que estas pruebas han salido a la luz, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han continuado haciendo declaraciones que no solo son falsas, sino también incoherentes con sus declaraciones previas, a pesar del hecho de que esta estrategia les hacía parecer “evasivos, en el mejor de los casos, y ridículos o poco confiables, en el peor”, según lo expresó Johathan Abady de Emery Celli en un correo electrónico a Donziger y a otros abogados de Emery Celli y Patton Boggs.

a. Las manifestaciones iniciales falsas de los Demandados RICO a los tribunales de EE.UU. de que ellos no tenían relación alguna con Cabrera ni papel alguno en la preparación del “Informe Cabrera”

273. Para oponerse a los esfuerzos de solicitud de pruebas de Chevron, la primera táctica de los Demandados RICO fue negar inconducta alguna, a pesar del correo electrónico de Prieto dejando en claro que lo que hicieron los Demandados RICO, si fuese descubierto, “destruir[ía]” su causa en Ecuador y que, “podemos ir todos tus abogados a la cárcel”. De hecho, de acuerdo con lo que ha confesado Donziger recientemente, aun después de haber recibido el correo electrónico de Prieto, la esencia de lo que discutió con los abogados de Patton Boggs y Emery Celli, Emery Celli presentó alegatos en los cuales declaraba que Cabrera era independiente y, en las palabras de Donziger, “[t]rató de impedir que el rol de Stratus con respecto al informe de Cabrera se supiera”. Ya en enero de 2010, Donziger estaba preparando argumentos acerca de la relación con Cabrera en los cuales Stratus y otros podían basarse en sus declaraciones juradas, utilizando una historia en la que todos coincidieran, pero falsa. Al adoptar estas y otras acciones que sirvieron de tácticas obstruccionistas ante el tribunal federal, esperaban evitar que se revelara su extraordinaria mala conducta. En múltiples presentaciones en procedimientos del Artículo 1782, los conspiradores han afirmado falsamente su falta de relación con Cabrera: “el señor Cabrera no es un perito de parte, sino una persona neutra nombrada por la Corte . . .”. Además, en declaraciones presentadas en todo el país, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han perpetuado su versión falsa de los acontecimientos, ocultando su relación con Cabrera y declarando que este era “independiente”.

274. Los Demandados RICO continuaron difundiendo su versión falsa de los acontecimientos en declaraciones juradas. El 23 de abril de 2010, por ejemplo, Chapman atestiguó falsamente que no tenía razón para pensar que Stratus había proporcionado el producto de su trabajo a Cabrera. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores estaban orgullosos de la actuación de Chapman, pero se dieron cuenta de que era seguro que la verdad emergería. El co-conspirador Andrew Wilson de Emery Celli le escribió a Donziger diciéndole: “Chapman hizo

un excelente trabajo al no recordar nada, pero Chevron podrá comparar de lado a lado, el producto de trabajo de Stratus y [el] informe [de Cabrera] al juez, lo cual apestará”. En realidad, como lo dejan en claro los propios documentos de Stratus, Chapman, el jefe del grupo de economía de los recursos naturales estaba personalmente involucrado y tenía conocimiento de la autoría secreta por parte de Stratus del informe de Cabrera. De hecho, fue Chapman quien le proporcionó a Donziger el bosquejo y plan inicial para que Stratus preparara los “daños potenciales”, y le preguntó a Donziger “cuándo se deba remitir el informe final al Juez” para que Stratus pudiera planificar sus recursos acorde a esto. La conducta con respecto a la declaración jurada de Chapman, sin embargo, no es sorprendente dado que Stratus ha permanecido activamente involucrada en la conspiración aun después de que se dieran a conocer las pruebas de sus fechorías. Por ejemplo, Beltman celebró reuniones con el personal de Stratus, después de que Chevron presentó una solicitud de presentación de pruebas de Stratus, en un intento de engañar a los empleados e influir en sus potenciales testimonios con respecto a la autoría por parte de Stratus del Informe Cabrera. En estas reuniones, Beltman en repetidas ocasiones declaró falsamente que Cabrera era un perito independiente, y tergiversó la función de Stratus en la redacción secreta por otros del Informe Cabrera. Beltman sistemáticamente omitió toda discusión de la participación verdadera de Stratus.

275. En otra negativa general, Stratus declaró por medio de sus asesores jurídicos ante el Distrito de Colorado el 27 de abril de 2010 que Stratus estaba “asombr[ado]” de ver “simili[tudes]” entre los documentos que había producido y el Informe Cabrera. Aseguró a los tribunales que Stratus no tuvo “la oportunidad de examinar el informe de Cabrera en su versión borrador”, y que lo que le proporcionaron a sus co-conspiradores “quería[n] ayudarlos en sus análisis de los datos”, y en la “mediación”, no “ayudar a Cabrera”. Estas eran mentiras descaradas; Stratus se *aseguró* de que su trabajo apareciera en el Informe Cabrera y tanto Maest como Beltman posteriormente confesaron que ninguno de ellos estaba sorprendido por la presencia de su trabajo en el Informe Cabrera, y que eso no sorprendería a nadie en Strauss. En un “Informe de Situación” presentado tres semanas más tarde, el abogado de Stratus le informó

al tribunal que la “investigación continua del Abogado parece indicar que sí hubo comunicaciones entre el Sr. Cabrera y dos representante de Stratus”.

276. Presuntamente ante una citación de comparecencia y presentación de pruebas emitida bajo la autoridad del Distrito de California del Sur, el conspirador y subcontratista de Stratus, Powers, desechó un disco duro que contenía documentos que respondían a lo solicitado y borró mensajes de correo electrónico de las mismas características. Pruebas obtenidas por Chevron en otros procedimientos del Artículo 1782 demostraron que Powers había sido un participante clave en las maquinaciones de los Demandados RICO. De hecho, uno de los *proprios abogados* de los Demandados RICO había escrito que, “a partir de estos documentos tenemos una idea de lo importante que fue Bill Powers en todo este asunto. Tiene mucho conocimiento y participación en el armado del borrador del Informe de Cabrera”. En última instancia, Powers confirmó en su declaración jurada que había redactado los anexos del Informe Cabrera inicial y partes importantes del Informe Cabrera complementario.

277. Los Demandados RICO también falsamente negaron contacto con otros integrantes del equipo de Cabrera. El Distrito de Nueva Jersey aceptó la solicitud de Chevron de presentación de pruebas de parte de otro de los conspiradores, UBR, sobre la base de que mientras dicha empresa era consultora remunerada de los Demandados RICO, uno de sus empleados, Juan Cristóbal Villao Yépez, fue revelado como uno de los autores del Informe Cabrera. En la apelación del fallo, los Demandados RICO dijeron al Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito que dicho fallo debería revocarse porque no habían pruebas que respaldaran la afirmación de Chevron de que Villao tuviese conexión alguna con Cabrera, o que hubiese trabajado para UBR cuando se suponía haber estado trabajando con Cabrera. Pero varios meses más tarde, cuando este Distrito ordenó al Demandado Donziger presentar sus propios archivos, estos revelaron que Donziger y otros Demandados RICO había tenido comunicaciones directas con Villao sobre la cuestión de su contribución al Informe Cabrera. Y Donziger mismo ahora ha reconocido que Villao trabajó tanto para Cabrera como para los Demandados RICO. Sin embargo, los Demandados RICO no han tomado acción alguna para corregir sus

tergiversaciones ante el Tribunal del Tercer Circuito. Sin embargo, en correspondencia interna, se ha discutido la situación con respecto a Villao, y si se debía reconocer públicamente que el Informe Cabrera fue escrito por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y comentado sobre la preocupación de ser acusados de “perpetuación del fraude”. Andrew Wilson de Emery Celli, por ejemplo, le advirtió a Donziger que fuera “[c]uidadoso” porque “no está claro, nuestra relación con Villao ha sido revelada”.

278. En sus comunicaciones internas, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han reconocido que sus negativas no cuadraron con los hechos. En mayo de 2010, uno de los abogados estadounidenses de los Demandantes de Lago Agrio escribió que su caracterización de que Cabrera había “considerado” el trabajo de Stratus “parece demasiado extendida teniendo en cuenta que el informe de Cabrera, o los anexos principales del mismo, son de hecho el trabajo del consultor. Esto es mucho más que ‘prueba circunstancial’; esto es, por cierto, una ‘demostración perfectamente hecha a medida’”. El co-conspirador Johathan Abady de Emery Celli describió la relación entre los Demandados RICO y Cabrera como “adopción integral del producto del trabajo de Stratus sin atribución”. El co-conspirador Wilson reconoció en un mensaje de correo electrónico interno que “[m]ientras más enfatizamos... [la] neutralidad [de Cabrera], menos sentido tiene que le estemos diciendo cosas que no deberíamos”. Y en una carta de abril de 2010 de Donziger a sus co-conspiradores, Donziger se refirió a la “demanda en Colorado al amparo de la sección 1782” como una “eventualidad importante” y advirtió que “si Chevron logra obtener documentos de Stratus y tomar la declaración de los dueños de Stratus..., se enterará de que Stratus redactó la gran mayoría del informe que Cabrera adoptó y presentó al tribunal”. Donziger también confesó que hubo “colaboración activa e importante entre los abogados locales y Cabrera, por separado, por medio de los abogados locales y Stratus”, y discutió los tipos de correos electrónicos que se generaban, incluyendo “numerosos correos electrónicos entre Stratus y los abogados locales que documentaban cómo se llevaba a cabo esta labor”, “varios correos electrónicos entre Stratus y los abogados estadounidenses que mostraban que el abogado estadounidense (siguiendo el consejo de los abogados locales)

aprobaba que se llevara a cabo este proceso, lo alentaba, y estaba envuelto como supervisor del mismo”, y correos electrónicos que “mostrar[án] que se hizo algún esfuerzo para que no saliera a relucir cuánta colaboración había habido entre nuestros abogados locales y Cabrera”.

279. Además, en un amplio intercambio de correspondencia en el mes de junio de 2010, entre Motley Rice, Patton Boggs, Emery Celli, y otros conspiradores, Jason Rockwell de Patton Boggs reconoce que “las notas de Ann Maest sugieren una mayor coordinación con Cabrera que tan solo la entrega de dos conjuntos de archivos”, y Jonathan Abady de Emery Celli reconoce que, “Si no admitimos este hecho tan obvio ahora, parecemos evasivos, en el mejor de los casos, y ridículos o poco confiables, en el peor”.

280. Debido a que su postura en estos procedimientos ha sido tan divergente de los hechos, los Demandados RICO han experimentado dificultades contratando abogados dispuestos a colaborar con esta maquinación de falsedades y obstrucción. Donziger ha reconocido que cuando primero uno y después otro de los estudios jurídicos de EE.UU. contratados por los Demandados RICO para representar sus intereses para oponerse a las solicitudes del Artículo 1782 de Chevron llegaron a comprender el alcance completo de la relación de los Demandados RICO con Cabrera; los estudios se retiraron de la representación.

281. En respuesta a las presentaciones iniciales del Artículo 1782 de Chevron, los Demandados RICO contrataron a un estudio jurídico respetado de Nueva York para representar sus intereses. Pero cuando un socio principal del estudio entrevistó a empleados de Stratus en Boulder, vio claramente que la relación entre los Demandados RICO y Cabrera era impropia y contraria a las descripciones que le hizo Donziger. Su estudio jurídico se retiró del caso al día siguiente.

282. Aproximadamente en este tiempo, Donziger preparó un memorándum que dirigió a abogados de un estudio jurídico de Colorado también contratado por los Demandados RICO para bloquear la presentación de pruebas solicitada por Chevron del Demandado Stratus. En dicho memorándum, Donziger engañó a dichos abogados con respecto a numerosos hechos pertinentes. Por ejemplo, en una sección del memorándum titulado “Papel de la Consultora

Stratus”, describió actividades inofensivas como “ayudar a los abogados ecuatorianos a responder a las preguntas científicas”, y “conceder entrevistas a los medios de comunicación”, pero dejó de informar a los abogados que Stratus de hecho había escrito el Informe Cabrera, la alegación central del procedimiento judicial en curso. E incluyó “opiniones del informe de Cabrera fueron extraídas directamente de los documentos de Stratus”, como una de las aseveraciones fácticas “inexact[a]s” de Chevron.

283. Cuando este segundo estudio jurídico no pudo obtener confirmación de ninguna de las declaraciones falsas de Donziger, y luego de recibir información de su predecesor sobre los resultados de las entrevistas que había realizado con Stratus, dicho estudio también se retiró. Al tiempo en que se retiraba del caso, le envió a Donziger un mensaje de correo electrónico citando la “inquietante información” de la cual se había enterado sobre el papel de Stratus en la confección del Informe Cabrera, y que “nos preocupa nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones hacia el juez Kane y hacia el tribunal en caso de continuar con nuestra representación de los actores de Lago Agrio en este juicio”. El abogado concluyó: “Lamento que haya salido todo así pero siento que, si prosiguiéramos, podría estar comprometiendo la reputación de esta firma y su altura ética, y no puedo hacer eso”.

284. Los conspiradores entonces consultaron un asesor jurídico que, según ellos, “parec[í]o estar dispuesto a firmar cualquier cosa”, pero esa relación con dicho asesor jurídico duró solo un mes antes de que el estudio se retirara. Y cuando el *cuarto* estudio contratado por los Demandados RICO en el *mismo* procedimiento del Artículo 1782 estudió lo actuado, y no solamente el memorándum sustancialmente engañoso de Donziger, concluyó que: “pareciera entonces que no sólo Cabrera y los demandantes pueden ser acusados de ‘fraude’ con respecto al informe Cabrera, sino también Stratus puede ser señalada como conspiradora activa”. A solicitud de este cuarto asesor jurídico, el segundo estudio contratado por los Demandados RICO, quienes previamente habían informado a Donziger que la postura de los Demandados RICO era “insostenible”, preparó un breve memorándum resumiendo sus fundamentos para retirarse del caso. En dicho memorándum, el estudio declaró que “no creíamos que teníamos fundamentos

bajo la Norma 11 para presentar oposición a las citaciones de Chevron”. La Regla 11 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil requiere que todo escrito entregado a un tribunal federal debe estar firmado por un abogado que declare que el escrito no se presenta para “ningún propósito indebido”, que las “demandas, defensas, y otros argumentos legales están justificados por el derecho vigente”, y que “los argumentos con respecto a los hechos están respaldados por las pruebas”.

285. Cuando otro abogado, Andrew Woods, que trabajaba para Donziger, se sobresaltó al saber que Donziger estaba utilizándolo para formular reclamaciones posiblemente fraudulentas en una declaración presentada ante un tribunal federal y solicitó formular una declaración aclaratoria si cualquiera de sus previas declaraciones eran falsas, Donziger y sus co-conspiradores le convencieron de que no dijera nada. A pesar de su propio reconocimiento de su mala conducta, los Demandados RICO continúan negando estas pruebas y con sus simulaciones en declaraciones juradas, en escritos ante los tribunales, y en testimonios orales jurados.

b. Las declaraciones falsas y engañosas posteriores de los Demandados RICO en un intento de justificar y excusar su conducta emergente

286. A medida que su estrategia obstruccionista y de negativa total se hizo cada vez más imposible de compatibilizar con los hechos emergentes, incluidas las escenas no utilizadas de vídeo de *Crude*, los Demandados RICO y sus co-conspiradores realizaron un esfuerzo desesperado por ocultar su conducta intentando confundir y engañar a los tribunales federales con respecto a las providencias judiciales de la corte de Lago Agrio que rigen su asociación con Cabrera. Los Demandados RICO distorsionaron los hechos de varias formas como parte de su intento por impedir la evaluación por parte de los tribunales federales de las solicitudes de presentación de pruebas de Chevron y, de ese modo permitir que la corte de Lago Agrio marche hacia la sentencia.

287. En respuesta a una averiguación del Distrito de Colorado en busca de información sobre la relación completa entre Cabrera y Stratus, Wilson de Emery Celli,

compareciendo como asesor jurídico para los Demandantes de Lago Agrio, aseguró al tribunal que proporcionarían el “panorama completo” en un escrito por presentarse. De hecho, Wilson aseguró *nueve* veces al tribunal en la audiencia que el informe por presentarse proporcionaría el “panorama completo”. Sin embargo, cuando los conspiradores hicieron que se presentara el prometido “panorama completo”, esta era incompleto y engañoso. En una declaración jurada, el Demandado Fajardo proporcionó una prolongada descripción de la relación entre los Demandados RICO y Cabrera, pero falsamente atestiguó que Cabrera era “independiente” y omitió de su declaración la importante función que él y otros conspiradores habían cumplido para obtener el nombramiento de Cabrera, sus numerosas reuniones personales con Cabrera - incluida la reunión de marzo de 2007, captada en las escenas no utilizadas de *Crude* - y el masivo proyecto en EE.UU. para escribir, traducir y presentar el fraudulento Informe Cabrera. En vez, Fajardo afirmó que el contacto entre los Demandados RICO y Cabrera fue de conformidad con órdenes emitidas por la corte en Lago Agrio en enero y abril de 2008, en las que se solicitaba que las partes realicen varias presentaciones a Cabrera. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores presentaron una declaración falsa no solo en el Distrito de Colorado, sino también en procedimientos ante este Tribunal y por lo menos seis otros tribunales de todo el país.

288. Los Demandados RICO repetidas veces han invocado estas órdenes de 2008 de la corte de Lago Agrio, aunque gran parte de sus amplios esfuerzos para reclutar, reunirse y coludir con Cabrera tuvieron lugar en 2007. También han intentado explicar las diversas declaraciones fraudulentas de Cabrera al tribunal de que operaba en forma independiente de ellos, afirmando, en una presentación al tribunal federal firmada por Wilson de Emery Celli, que dichas declaraciones fueron “hechas antes de la orden judicial [de Lago Agrio] autorizándolo a obtener materiales de las partes”, y argumentaron que “[c]uando la Corte [de Lago Agrio] le ordenó al Ing. Cabrera que considerara cualquier tipo de comunicaciones que le proporcionaran las partes, el panorama cambió considerablemente. Sin embargo, Chevron mezcla las declaraciones realizadas por el Ing. Cabrera en 2007 con una conducta que ocurrió después de que la Corte diera su autorización en 2008 . . .”.

289. El intento por parte de los Demandados RICO y sus co-conspiradores de justificar su conducta basados en estas órdenes es patentemente inválido. Estas órdenes se emitieron un año después de que había comenzado su estrecha relación con Cabrera, y no autorizan nada de lo que ocurrió. De hecho, al ser confrontado con las pruebas de la previa relación de los Demandados RICO con Cabrera, Donziger mismo reconoció que él y sus co-conspiradores “reunieron e interactuaron con el Sr. Cabrera tanto antes como después” de que la corte de Lago Agrio emitió su orden de enero de 2008. Su defensa es también incompatible con sus declaraciones a la corte de Lago Agrio *después de* que se emitieron dichas órdenes. El 25 de abril de 2008 el Demandado Fajardo afirmó en una presentación a la corte de Lago Agrio que era “[o]tra infamia” que los demandantes fueran “acusa[dos] de tener una relación íntima con el Perito Independiente Richard Cabrera”. “Es decepcionante señor Presidente que profesionales de tanta experiencia hayan caído en argumentos tan infantiles y absurdos”. Y esta defensa deje de lado el hecho de que los únicos documentos que los Demandados RICO entregaron a Cabrera de conformidad con una providencia judicial estaban expresamente limitados a documentos de “instituciones públicas del país”, lo cual no incluye el trabajo de sus propios consultores - una incongruencia que ellos han reconocido en correspondencia privada.

290. La canción constante de los Demandados RICO, con respecto a que los “materiales” fueron “entregados” a Cabrera, quien los “revisó”, queda desmentida por el propio récord de los Demandados RICO. Según se detalló anteriormente, Stratus estaba finalizando lo que sería adoptado “completamente” por Cabrera justo antes de presentarlo, y es simplemente imposible que él le hubiera lo hubiera revisado en forma detenida en las pocas horas que tenía para hacerlo. Tampoco es plausible que cualesquier modificaciones que pudiese haber realizado en ese breve tiempo fuesen importantes. Los Demandados RICO sabían exactamente lo que él presentaría porque era lo que ellos escribieron. De hecho, el día *antes* de que Cabrera presentara el informe, Donziger estaba en posesión de una tabla de cantidades por daños y perjuicios que coincidía con aquellos en el Informe Cabrera hasta en los centavos para varias categorías, incluyendo muertes por cáncer, pérdidas al ecosistema, enriquecimiento injusto y remediación.

En sus estimados totales, la tabla de Donziger y el Informe Cabrera difirieron por menos de una décima de punto.

291. Sin embargo, los Demandados RICO continúan afirmando en los tribunales federales de EE.UU. que su relación con Cabrera se realizó en virtud de dichas órdenes y que fue plenamente revelada a la corte de Lago Agrio. Ante el Tribunal del Tercer Circuito, por ejemplo, los Demandados RICO recientemente afirmaron que “La corte ecuatoriana estuvo y está plenamente consicente de los contactos *ex parte* de los actores con Cabrera y la presentación de materiales al mismo—e inclusive, *invitó* dichos contactos y presentaciones”. Por supuesto, si el tribunal era consciente de la colusión entre los Demandados RICO y Cabrera, lo que fue durante años categóricamente negado por los Demandados RICO y Cabrera, eso simplemente implica al tribunal en el fraude. No lo excusa ni lo justifica.

292. En declaraciones juradas exigidas por los tribunales en los EE. UU., los Demandados RICO han continuado obstruyendo las investigaciones de Chevron, y han mantenido posturas insostenibles ante pruebas aplastantes. Por ejemplo, la Demandada Ann Maest, a pesar de su presencia en las escenas eliminadas de *Crude* en una *reunión* con Cabrera en la cual se planificó el Informe Cabrera, negó bajo juramento que había tenido “cualquier contacto con el Ing. Cabrera con relación al trabajo [de ella]”. Cuando le preguntaron sobre la reunión, simplemente afirmó, “No recuerdo eso”, ignorando el hecho de que, como lo admitiría solo minutos después, había mirado el vídeo de la reunión durante las últimas dos semanas. Entonces, cuando le mostraron el vídeo y le preguntaron sobre la declaración de Fajardo de que “el trabajo no va a ser del perito”, ella declaró que “no sabía lo que él quería decir”, y negó haber entendido que Chevron estaría excluida de tal trabajo, a pesar de que se la mostrara comentando y riéndose acerca de ese asunto específico en el vídeo, y el hecho de que sus propios apuntes escritos a mano de la reunión contengan la siguiente frase, marcada con una estrella grande: “Solo los demandantes harán el Peritaje Global, no Chevron”. A lo largo del testimonio de su declaración jurada, casi todas las veces que le mostraron pruebas –a menudo su propio producto de trabajo– de que Stratus a sabiendas había preparado el Informe Cabrera con intenciones de

que se percibiera como independiente, ella declaró que no recordaba, o que no comprendía las pruebas. Cuando se le presentaron las repetidas negaciones de Cabrera con respecto a la ayuda de los Demandados RICO, Maest declaró que había discutido esto con Beltman y que su conclusión era simplemente que “en la cultura latina, es algo que a los hombres no les gusta admitir, que están recibiendo ayuda”. Entre las pocas cosas que sí confesó en su testimonio fue que los conspiradores entendían que sus reuniones con Cabrera tenían que mantenerse en secreto.

293. Los Demandados RICO también han formulado la afirmación falsa, primero ante el Distrito de Colorado y luego ante otros tribunales, que Cabrera reveló en su informe sus contactos con los conspiradores. Como apoyo de esta nueva postura, se refirieron específicamente a una cita en el Informe Cabrera, la que citaron como “*Peritos de . . . Selva Viva 2002-2006*” (énfasis y alteración en el original). Pero la cita completa, sin las elipsis cuidadosamente ubicadas por los conspiradores, claramente se refería a un juego específico de documentos relacionados a las inspecciones judiciales, y no revela nada que se parezca a la redacción generalizada del informe por parte de terceros sin atribución que en realidad ocurrió.

294. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también afirmaron que los escritos que entregaron a Cabrera eran “confidencial[es]” y que la ley ecuatoriana permitía que las partes secretamente entregaran materiales a funcionarios de la corte sin revelar dichos materiales a las otras partes. Para apoyar esta afirmación, los Demandados RICO y sus co-conspiradores entregaron una declaración que no cita autoridad legal alguna.

295. En otro intento para justificar su conducta, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han aseverado falsamente que su conducta no difería de la relación de Chevron con otros peritos judiciales. Pero los Demandados RICO saben que no se puede realizar una “verdadera comparación” y que tal comparación no sería “aceptable”, según le escribió Eric Westenberger, un abogado en Patton Boggs, a Donziger y otros en julio de 2010.

296. De hecho, la correspondencia interna de los Demandados RICO está repleta de confesiones de que estaban basándose en teorías y distinciones sin fundamento para evitar una divulgación. En marzo de 2010, Andrew Woods se enteró de boca de Donziger sobre las

circunstancias que rodeaban a la primera de varias retracciones de abogados que representaban al Demandado RICO en los procedimientos conforme a la Sección 1782 de Stratus. De inmediato, le sugirió a Donziger que buscara asesor un legal externo con respecto a su posible responsabilidad personal por la fabricación del Informe Cabrera. Donziger así lo hizo, e inmediatamente después comenzó a crear un expediente falso mediante el cual intentó responsabilizar a sus colegas ecuatorianos por la conducta, escribiendo un memorándum para “presentar” afirmando que había sido engañado.

297. Pero luego en una carta con fecha de abril de 2010 a sus co-conspiradores, Donziger francamente reconoció que su relación con Cabrera era “en violación a las normas del tribunal”, e “indebida” bajo una “perspectiva tradicional del derecho ecuatoriano. Al trabajar tan estrechamente con nuestros abogados locales y Startus, Cabrera incumplió su deber para con el tribunal”. Y el 16 de mayo de 2010, el abogado Ilann Maazel de Emery Celli, concedió en un mensaje de correo electrónico a su coasesor jurídico que, “la base fundamental para el 1782 es aparentemente correcta: ni Cabrera ni los demandantes divulgaron una propuesta de los demandantes que contenía borradores de parte del informe del experto escrito por Stratus”. Sin embargo, el mismo día siguiente, los Demandados RICO hicieron presentar un escrito ante un tribunal federal que incluía la afirmación de que todo contacto entre Cabrera y los Demandados RICO se había revelado.

298. En respuesta a otra defensa sugerida, en la cual los conspiradores argumentarían que el único fraude demostrado por lo actuado en actas fue de parte de Donziger, y no de los “clientes”, y, por lo tanto, protegiendo supuestamente de esta manera el privilegio de las comunicaciones, Donziger se quejó de que “me estás mandando a la horca”, y destacó que existían pruebas significativas de que Yanza estaba involucrado en todo fraude. El co-conspirador Ilann Maazel de Emery Celli le aseguró que Yanza no era su cliente, pero Donziger señaló que Yanza estaba asociado con el Frente, el cual recibiría el 10% de cualquier fallo. No obstante estas preocupaciones, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han presentado este argumento en numerosos tribunales en EE.UU.

299. La tentativa de los Demandados RICO y sus co-conspiradores para blanquear su conducta carecía de base de por sí, y el descubrimiento por parte de Chevron de su verdadera conducta ha demostrado lo infundado que eran estas tentativas. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores no presentaron materiales a Cabrera para que pudiera examinarlos en forma independiente; sino que lo hicieron para que los firmara y presentara a la corte a su nombre. Tampoco tuvieron, en ningún momento, la intención de revelar esto a Chevron ni a nadie. Según lo expresa Donziger, su intención específica con respecto al conocimiento por parte de Chevron de la relación de los Demandados RICO con Cabrera fue de asegurarse de “que no sepan una mierda”.

300. Los Demandados RICO ofrecieron estas declaraciones falsas en parte porque esperaban evitar que se revelara su inconducta, pero también como un esfuerzo para al menos impedir la presentación de pruebas al respecto por todo el tiempo que fuese posible, tergiversando los hechos y numerosos escritos sin mérito ante los tribunales. Mediante esta estrategia, ellos obtendrían el tiempo necesario para permitir que la corte de Lago Agrio emitiera su sentencia contra Chevron para la que la única base de responsabilidad sería el fraudulento Informe Cabrera. En mayo de 2010, cuando los conspiradores se dieron cuenta de que la verdad de su relación comenzaría a hacerse conocer, Donziger describió su estrategia: “Creo que deberíamos apelar sobre la teoría de que obtendremos una mayor ventaja disputándoles todo y manteniéndolos ocupados, que concediéndoles alguna cosa puntual aun cuando esperamos perderla en definitiva por el camino”. Y otro conspirador, Eric Westenberger del estudio de abogados Patton Boggs lo describió en términos más específicos en un correo electrónico a Donziger y los co-conspiradores en Emery Celli, Motley Rice y H5: “¿Qué [piensan] sobre lo siguiente? Apelación; espera; si ganamos esto con [el Juez del Corte de Distrito] genial; si perdermos, entregamos lo que queramos (lectura estrecha); [Gibson Dunn] protesta y luego pedimos clarificación. Si perdemos de nuevo, pensamos en otra apelación”.

301. Los Demandados RICO también han intentado distraer la atención de la presentación de pruebas de Chevron al inventar alegaciones falsas contra Chevron como táctica

de distracción. Por ejemplo, han intentado culpar a Chevron por el escándalo de solicitud de soborno del juez Núñez, aun cuando su propio asesor legal especial responsable por el asunto concluyó que “Chevron está diciendo la verdad” cuando declaró “ni siquiera haber sabido de estas conversaciones” en el momento en que ocurrieron. Cuando las noticias de las relaciones impropias de los Demandados RICO con los peritos comenzaron a darse a conocer en 2010, el co-conspirador Prieto sugirió que utilizara la solicitud de soborno como excusa para “presentar un caso nosotros para disminuir y contrarestar los efectos de lo que pueda pasar en Denver?”. También sugirió que esto podría ser un medio para obtener una presentación de pruebas más amplia para su campaña de presión: “Chevron tiene que tener algunos secretos escondidos. Busquémoslos”. Los Demandados RICO eventualmente siguieron la sugerencia de Prieto, entablando precisamente un juicio de esa naturaleza en la corte federal en California.

302. La evidencia que Chevron ha descubierto en los procedimientos del Artículo 1782, a pesar de las tácticas obstruccionistas de los Demandados RICO y sus co-conspiradores, ha inspirado un lenguaje muy directo de varios tribunales federales. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey sostuvo que la conducta adoptada para la promoción de la conspiración no podía constituir “otra cosa que un fraude al proceso judicial”. Y, con respecto a las pruebas grabadas en video de la empresa delictiva que ha obtenido Chevron, el Juez Kaplan del Distrito Sur de Nueva York determinó que “las tomas descartadas tienen considerable evidencia de falta de conducta en relación con el litigio de Ecuador”. Específicamente, el Juez Kaplan hizo notar que las escenas no utilizadas “contienen evidencias sustanciales de que Donziger y otros (1) estuvieron involucrados en contactos *ex parte* con el tribunal para lograr el nombramiento del perito, (2) se reunieron en secreto con el perito, supuestamente neutral e imparcial, antes de su nombramiento y bosquejaron un plan de trabajo detallado para los asesores de los propios demandantes (3) escribieron parte o todo el informe final del perito del perito que fue presentado a la corte de Lago Agrio y la Oficina del Fiscal General, supuestamente como el producto neutral e independiente del perito”. El Tribunal del Distrito Oeste de Carolina del Norte también sostuvo que “lo que ha ocurrido descaradamente en esta causa sería, en realidad,

considerado fraude por cualquier tribunal”, mientras que el Tribunal del Distrito de Nuevo México concluyó que “[I]a divulgación de cuantiosas horas de escenas no utilizadas conmocionó a la comunidad jurídica del país principalmente porque la filmación muestra, con una franqueza poco halagüeña, una conducta inapropiada, carente de ética y quizás ilícita”. El Tribunal del Distrito de Nuevo México también sostuvo que los Demandados RICO se han involucrado en “corrupción en el proceso judicial, fraude, confabulación de abogados con el Perito Cabrera, comunicaciones *ex parte* inapropiadas con la corte, y la presentación de informes y pruebas falsas”.

303. Numerosos tribunales también han sostenido que era aplicable la excepción crimen-fraude del privilegio de las comunicaciones entre abogado y cliente y, por lo tanto, dicho privilegio no protegía el fraude generalizado de los Demandados RICO y sus co-conspiradores contra la presentación de pruebas. El Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, por ejemplo, razonó que “[h]ay evidencia abundante en el expediente de que los demandantes ecuatorianos proporcionaron información de forma secreta al Sr. Cabrera, supuestamente un perito imparcial nombrado por la corte, y coludieron con el Sr. Cabrera para crear la apariencia de que las opiniones eran las de el mismo”. Dicho tribunal posteriormente falló que la excepción delito-fraude se aplicaba a la presentación de pruebas del co-conspirador William Powers, declarando que él estaba “profundamente envuelto [en el fraude] ya que su trabajo fue aparentemente adoptado completamente por Cabrera, el perito supuestamente neutral”. De manera semejante, el Tribunal de Distrito de Nuevo México hizo notar que los “intercambios” entre los Demandados RICO “dan lugar a la excepción delito-fraude, porque se relacionan a la corrupción del proceso judicial, la preparación de informes fraudulentos”, y “la fabricación de pruebas”. Y el Distrito Sur de Nueva York hizo notar que “hay algo más que pequeñas pruebas” que las actividades de los Demandados RICO “entran dentro del espectro de la excepción de fraude-delito”.

2. Realización de declaraciones falsas para engañar a los tribunales de Nueva York en relación con las solicitudes del Artículo 1782 de Chevron y otras acciones

304. Las declaraciones falsas deliberadas de los Demandados RICO y sus co-conspiradores ante tribunales federales no se han limitado a mentiras sobre su relación con Cabrera y la autoría del Informe Cabrera. Al contrario, los Demandados RICO y sus co-conspiradores han formulado, o han hecho que se formulen, una variedad de declaraciones falsas ante tribunales federales en Nueva York en relación con su intento de prevenir la revelación de ciertas escenas no utilizadas de *Crude* en un procedimiento al amparo del Artículo 1782, y en la causa entablada por los Demandantes de Lago Agrio, por medio del conspirador Emery Celli, para detener el arbitraje de Chevron con Ecuador en un procedimiento al amparo del tratado bilateral de inversiones.

305. Ante el Distrito Sur de Nueva York, los Demandados RICO y sus co-conspiradores hicieron una serie de declaraciones falsas sobre *Crude* y el contenido de las escenas no utilizadas de metraje solicitado por Chevron al amparo del Artículo 1782. Cuando Chevron descubrió pruebas de que una escena en *Crude* había sido modificada a solicitud de los Demandados RICO para excluir pruebas de reuniones entre los Demandados RICO y un integrante del equipo Cabrera, Carlos Beristain, los Demandados RICO le dijeron al tribunal que la reunión era “inocua” y una que “no guarda pertinencia con nada”. De igual modo, en la apelación de la orden del tribunal de distrito exigiendo la entrega de las escenas no utilizadas de *Crude*, los Demandados RICO y sus co-conspiradores declararon que le habían solicitado a Berlinger que eliminase la escena de la versión DVD de la película solamente para “para evitar la impresión errónea y promovida con cinismo por Chevron más abajo, de que los demandantes participaron en uno de los grupos de estudio del Dr. Beristain *después* de que él era un experto de tribunal” (énfasis en el original). De hecho, sin embargo, la reunión de la cual Beristain fue cuidadosamente eliminado fue una reunión concertada y financiada por los Demandados RICO y sus co-conspiradores como parte de sus maquinaciones para controlar el contenido del Informe Cabrera. Tampoco fue esa la única prueba de conducta ilícita que revelaría la divulgación del

video. Y el abogado que firmó el escrito en el Tribunal del Segundo Circuito, Ilann Maazel de Emery Celli, sabía que el metraje de Beristain resultaría mucho menos dañino de lo que él sabía que estaría incluido en las escenas no utilizadas, “una reunión entre Steve, Pablo, Stratus y Cabrera”, según informó a su coasesor jurídico cuando se anunció la orden del Tribunal del Segundo Circuito obligando la presentación.

306. El Juez Kaplan hizo notar que las declaraciones de Berlinger con respecto al contenido de dichas escenas no utilizadas, declaraciones que fueron adoptadas por los Demandados RICO por intermedio de su agente y co-conspirador, Emery Celli, “resultaron ser imprecisas”. El Juez Kaplan observó que “[e]stas instancias y similares son preocupantes al considerar sus demandas actuales”.

307. Además de las declaraciones falsas con respecto a *Crude*, los co-conspiradores han presentado falsedades en dos otras causas ante el Distrito Sur de Nueva York. Una de estas causas fue entablada por la República de Ecuador y Petroecuador, y la otra fue entablada por los Demandados RICO (aparentemente en nombre de los Demandantes de Lago Agrio), por medio de su agente y conspirador, Emery Celli, en un intento de suspender el Arbitraje conforme al Tratado que Chevron había iniciado como consecuencia del incumplimiento por parte de Ecuador de los términos del Acta Final de Liberación de 1998. Al hacer declaraciones falsas sobre Cabrera en ambos procedimientos en acciones relacionadas ante este Tribunal, los Demandados RICO han intentado engañar a este Tribunal.

308. El 14 de enero de 2010, el conspirador Emery Celli entabló una acción supuestamente en nombre de los Demandantes de Lago Agrio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, solicitando una orden judicial exigiendo que Chevron suspendiera el procedimiento del tratado bilateral de inversiones. La demanda alegó que “[e]l mejor y último cálculo *independiente* disponible de impacto en la salud humana de esta contaminación es proporcionado por el *Encargado Especial* [Cabrera] asignado por la Corte [de Lago Agrio] para brindar asesoramiento sobre daños”. (énfasis añadido). Expresó además que “el

Dr. Cabrera asignó un equipo de 14 profesionales técnicos”, y que “el informe final [fue] *producido* por el equipo de Cabrera. . .”. (énfasis añadido).

309. Esta demanda también alegó que “peritos de remediación medioambiental de los Estados Unidos han revisado el informe de Cabrera e indicaron que sus conclusiones eran razonables y que su evaluación de daños era coherente con los costos de otras limpiezas medioambientales importantes alrededor del mundo”. Los “peritos de remediación medioambiental de los Estados Unidos” eran los mismos Demandados RICO, un hecho que no fue revelado por los Demandados ante este Tribunal.

310. En el litigio previo entre Chevron y la República del Ecuador, los Demandados RICO convencieron al asesor legal para la República del Ecuador, Winston & Strawn, para que modificara los escritos iniciales de la República del Ecuador a fin de incluir las alegaciones de que el Acta Final de Liberación de 1998 de TexPet se obtuvo por tergiversaciones fraudulentas. El Demandado Donziger describió las alegaciones como un “martillo” que podía usar en el Litigio de Lago Agrio. Donziger entonces fue llamado por importantes funcionarios ecuatorianos para entrenar el testimonio del testigo para apoyar sus alegaciones. Pero esta alegación se realizó de mala fe y sin suficientes pruebas, con el objetivo impropio de obtener “ventaja” por sobre Chevron fuera del litigio en el cual se afirmó y, a la larga, no se pudo continuar. Dos meses más tarde, la República del Ecuador insistió en que la alegación se retirara porque no se podía hallar testigo que apoyara el elemento necesario de la reclamación de fraude y por lo tanto, se podrían imponer sanciones. Donziger sin embargo convenció a la República del Ecuador a que declarara falsamente al tribunal que “se retiraba no porque no era válida, sino debido a la agenda apretada impuesta por [elTribunal]”. Con la falta de prueba ocultada, Donziger continuó declarando a Chevron que “tendremos un testigo especial del gobierno que testificará sobre el fraude durante el examen”, un estratagema diseñada para mantener un “martillo” sobre la cabeza de Chevron, a lo cual se refería como “dirección equivocada”. Donziger escribió: “esto apoya mi estrategia para el litigio de presentar escritos que tienen las de perder para crear ventaja”.

3. Obstrucción de procedimientos judiciales mediante la corrupción de testigos, la retención de documentos y la formulación de declaraciones falsas ante este Tribunal

311. Donziger, el cerebro de la maquinación fraudulenta de los Demandados RICO, también ha sido un actor principal en el intento de ocultar las maquinaciones delictivas en los tribunales de EE.UU. Ha corrompido el testimonio y presentaciones bajo juramento de por lo menos otros dos testigos: Mark Quarles y Dr. Charles Calmbacher, y ha desafiado múltiples órdenes de presentación de pruebas emitidas por este Tribunal exigiéndole que presente sus propios documentos, y ha mentido ante el Tribunal repetidas veces acerca de su incumplimiento.

312. Donziger ha trabajado por años para impedir que Chevron descubriera las maquinaciones de los Demandados RICO. El 17 de Septiembre de 2007 o con anterioridad a esa fecha, los Demandados RICO y sus co-conspiradores persuadieron a uno de sus consultores, Mark Quarles, a que firmara una declaración, la cual se presentó en una acción pendiente en el Distrito Sur de Nueva York, declarando que “Sr. Cabrera y su equipo han actuado en forma independiente tanto de[] [los] demandantes [de Lago Agrio] como del demandado” Durante la reciente declaración jurada de Quarles en un procedimiento del Artículo 1782, Quarles testificó que la declaración con respecto a la independencia de Cabrera en su declaración estaba basada en varios días de observación del proceso global de evaluación en 2007, y también en específicas declaraciones falsas de Donziger con respecto a que Cabrera había escrito el plan de trabajo sobre el cual estaba basado el Informe Cabrera. Testificó además que Donziger le pagó para realizar sus observaciones y firmar la declaración. Quarles testificó que si hubiera sabido que Cabrera estaba trabajando directamente con los abogados de los Demandantes de Lago Agrio (es decir, los Demandados RICO), no habría firmado la declaración.

313. En documentos recientes presentados por Donziger se ha revelado además que Donziger no solamente presionó a Quarles para que jurara la independencia de Cabrera, sino que abogó por un lenguaje más directo y le pidió a Quarles que quitara lenguaje que hubiera perjudicado a los Demandados RICO si los verdaderos hechos fueran conocidos. El 16 de septiembre de 2007, Donziger le envió a Quarles un mensaje de correo electrónico al que se

adjuntaba un borrador de la declaración de Quarles. Donde Quarles había escrito un párrafo en el que trataba las cualificaciones del equipo de Cabrera, Donziger solicitó que reemplazara dicho lenguaje con declaraciones que Donziger sabía eran completamente falsas: “El Sr. Cabrera ha actuado en todo momento independientemente de los demandantes y los demandados. En ningún momento el Sr. Cabrera se reunió con los demandantes o sus representantes con respecto a su plan de trabajo actual u obró de acuerdo a sus sugerencias”. Donziger entonces le dijo a Quarles que borrara todo lenguaje que sugiriera que si hubiese ocurrido cualquier contacto de esa naturaleza, “un cierto grado de prejuicio en el plan de muestreo se habría introducido”. Quarles aceptó la solicitud de Donziger para eliminar el pasaje sobre “prejuicio”, y al final, firmó una versión que contiene el meollo de la afirmación falsa de independencia.

314. Más recientemente, cuando los conspiradores se enteraron de que Chevron tomaría la declaración jurada del Dr. Calmbacher en un procedimiento del Artículo 1782, los Demandados RICO intentaron impedir que Calmbacher expusiera la verdad sobre los informes falsificados que los Demandados y sus co-conspiradores presentaron en su nombre.

315. Bajo pretexto de solicitar una petición de anulación de la citación, Donziger se comunicó con Dr. Calmbacher e intentó convencerle de que no testificara en su declaración jurada, diciéndole que testificar podría presentar “problemas graves” para él, y podría tener como consecuencia un “procedimiento legal” en su contra porque “levantarían cargos en [su] contra por motivo de comportamiento poco profesional”. Donziger no contaba con ningún fundamento fáctico sobre el cual formular estas declaraciones, las cuales eran falsas y engañosas. Cuando se le preguntó en su declaración jurada si “Donziger [estaba] intentando convencerlo de que no se presentara a declarar”, Calmbacher testificó: “Por supuesto, por supuesto”.

316. Dr. Calmbacher hizo caso omiso de las amenazas y afirmaciones ultrajantes, y testificó en cumplimiento de la citación autorizada por el tribunal. Al ver copias de los informes presentados por los Demandados en la corte de Lago Agrio en su nombre, Dr. Calmbacher testificó, “No llegué a esas conclusiones y no escribí ese informe”. Dr. Calmbacher continuó explicando cómo los conspiradores le enviaron una versión de su informe pericial que

correctamente exponía sus perspectivas, y páginas en blanco para que él pusiera sus iniciales, de manera tal que ellos pudieran obtener su firma para los informes falsificados presentados en la corte de Lago Agrio, según se describe en los párrafos 117-20, supra.

317. En el procedimiento del Artículo 1782 dirigido al mismo Donziger, este ha hecho caso omiso de las Reglas Federales de Procedimiento Civil y las múltiples órdenes expresas de este Tribunal que le exigían que presentara todos sus documentos que respondieran a lo solicitado. Con la aprobación del Tribunal, el 9 de agosto de 2010, Chevron presentó una citación de comparecencia y presentación de documentos a Donziger en la que solicita documentos y testimonio sobre muchos de los asuntos descritos en esta Demanda Modificada. Donziger presentó una petición de anulación de la citación, y este Tribunal denegó dicha petición el 20 de octubre de 2010 y ordenó que Donziger cumpliera con la citación “de inmediato”. Además, debido a que Donziger no había presentado una lista de documentos privilegiados, el Tribunal determinó que toda pretensión de privilegio con respecto a los documentos de Donziger había sido renunciada. Sin embargo, el Tribunal destacó que podía “librar [a Donziger] de la renuncia”, si él “presenta un registro completo de privilegio a más tardar el 29 de octubre de 2010”.

318. Donziger no cumplió. Al contrario, produjo una fracción de sus documentos, presentó una serie de escritos sin mérito y contradictorios al Tribunal y, luego de casi un mes, presentó un “registro de privilegios” obviamente defectuoso. El 29 de noviembre el Tribunal una vez más ordenó que Donziger presentara sus documentos que respondieran a lo solicitado, determinando que la conducta de Donziger “fue un intento intencional de estructurar la respuesta a las citaciones judiciales de modo que creara la máxima posibilidad de demora”. Y Donziger una vez más incumplió.

319. En la declaración jurada de Donziger, su conducta fue tan indebida que motivó al Juez Auxiliar, nombrado por este Tribunal para supervisar la declaración jurada, que escribiera al Tribunal: “Desde virtualmente el primer día de su declaración jurada, el señor Donziger ha dado muchas respuestas evasivas e interesadas a preguntas que deberían haberse contestado

directamente, sin adornos”. El Juez Auxiliar continuó describiendo cómo repetidas veces había amonestado a Donziger y a su asesor jurídico, pero que esto “pareció tener poco efecto”.

320. El 13 de enero de 2011, el Tribunal una vez más, en respuesta a una petición para exigir cumplimiento entablada por Chevron, ordenó que Donziger presentara los documentos con respecto a los que estaba bajo órdenes de producir desde octubre, y se reservó el derecho de declarar a Donziger en desacato. Durante los días siguientes, Donziger, sin dar ninguna explicación por su previo incumplimiento, presentó más de 87.000 documentos, cuatro veces los que había presentado antes, la gran mayoría de los cuales respondían a las solicitudes de Chevron, incluso muchos de los documentos probatorios que forman el fundamento de esta Demanda Modificada. Sin embargo, en la declaración jurada inmediatamente posterior a esta presentación, Donziger reconoció que tenía aún *más* documentos que respondían a lo solicitado, tales como aquellos en cuentas de correos electrónicos que los Demandados RICO crearon específicamente para ocultar comunicaciones sensibles sobre, entre otros asuntos, su autoría del Informe Cabrera.

321. Por lo tanto, el 21 de enero el Tribunal mandó que Donziger entregara los discos duros que tenía para que Chevron pudiera probar la suficiencia de su presentación. En estos discos duros se hallaban *miles* de documentos más que respondían a las solicitudes de Chevron y altamente relevantes a la defensa de Chevron en el Litigio de Lago Agrio y su acción judicial del Arbitraje al amparo del TBI, pero que Donziger no había presentado. Muchos de los documentos que había retenido Donziger eran materiales altamente probatorios e irrefutables que revelaban las maquinaciones de los Demandados RICO en detalle aun mayor, incluyendo correos electrónicos acerca de reuniones con el juez en Lago Agrio y con el presidente Correa, memorandos con respecto a la obstrucción de los esfuerzos de presentación de pruebas por parte de Chevron en los Estados Unidos, y otros documentos que revelan falsedades adicionales presentadas por los Demandados RICO a la prensa y a los organismos gubernamentales.

322. Este alijo de documentos oculto no es el fin de la historia. Donziger entregó siete imágenes de disco duro en respuesta a la orden del Tribunal, y le aseguró a Chevron, por

medio del asesor legal, que esos representaban todo lo que tenía, y que “[él] no t[enía] conocimiento sobre el uso de ninguna unidad USB o unidades similares utilizadas por él u otros, y concordantemente con ello, que no posee ninguno”. Pero un análisis de las imágenes del disco duro proporcionados por Donziger revelaron que por lo menos 79 dispositivos externos de almacenamiento, incluyendo 7 discos duros externos, 1 disco Zip y 59 unidades flash habían estado conectados a dichos discos duros en varias ocasiones. El análisis también reveló que el 4 de agosto de 2010, se conectaron dos dispositivos externos de almacenamiento a las computadoras de Donziger – ese fue el día posterior a que Chevron presentara su primer escrito público con las escenas eliminadas de Crude que mostraban la reunión del 3 de marzo entre Donziger y Cabrera.

323. Al confrontar a Donziger con este análisis, este confesó que él “pud[ó] haber” utilizado una unidad flash “una o dos veces”, y que es posible que haya utilizado una en los últimos seis a ocho semanas en conexión con el Litigio de Lago Agrio, pero que ya no la tiene y no sabe dónde está o por qué no la tiene.

D. Chevron ha sufrido daños significativos como consecuencia de la conspiración de los Demandados RICO, y la ejecución de la sentencia corrupta en el Litigio de Lago Agrio profundizaría el daño

324. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores han utilizado la corrupción y la politización endémica del sistema judicial ecuatoriano en su provecho para confabularse con el gobierno del Ecuador y corromper a la corte y a su perito “neutral”. De hecho, según lo ha explicado el Juez Kaplan, “hay evidencias que sustentan el reclamo de Chevron de que el ‘peritaje global’ es un fraude. . . . También hay evidencia de que otras pruebas periciales presentadas a las cortes ecuatorianas en nombre de esos demandantes también son fraudulentas. Por lo tanto, Chevron corre peligro de que se dicte una sentencia por un monto muy elevado en su contra que podría darse como resultado de un fraude perpetrado por los demandantes de Lago Agrio”.

325. El 14 de febrero de 2011, la corte de Lago Agrio hizo exactamente eso cuando anunció su fallo, adjudicando \$8.650 millones en supuestos daños y perjuicios, otros \$865 millones además de los daños y perjuicios al Frente como representante de los demandantes de Lago Agrio, y \$8.650 millones en daños punitivos, todos los cuales no están respaldados por leyes o pruebas. De acuerdo con la estrategia de larga data de los conspiradores, el laudo es menor que las cantidades reclamadas por los Demandados RICO, para así permitir que los Demandados RICO argumenten que la sentencia fue supuestamente justa porque el tribunal “eliminó la mayor parte”. A primera vista, la sentencia confirma que no fue producto de nada que se asemeje a un proceso justo y, al contrario, se propone imponer una responsabilidad récord sobre Chevron sin siquiera la simulación de un fallo de que Chevron en realidad causó daño alguno. Al rechazar la dependencia de Cabrera, la sentencia por necesidad se basó en el fraudulento informe de Cabrera (la única “prueba” de causación en la causa) y en los informes de los otros “nuevos” peritos de los Demandados RICO, tales como Allen, Shefftz y Barnthouse, cuyos informes fueron diseñados por los Demandados RICO y sus co-conspiradores para “blanquear” el Informe Cabrera y quienes han reconocido basarse en el Informe Cabrera, en lugar de llevar a cabo sus propios análisis independientes. La sentencia además impuso otros \$8.650 millones como daños “punitivos”, aunque el derecho ecuatoriano no permite los daños punitivos y los Demandantes de Lago Agrio ni siquiera solicitaron tales daños en su demanda. La corte de Lago Agrio declaró que eliminaría la “penalidad punitiva” contra Chevron si Chevron presentase una “disculpa” pública tanto en la prensa en el Ecuador como en los Estados Unidos, reconociendo efectivamente su responsabilidad, dentro de los quince días a partir de la sentencia. El objetivo aparente de esta multa fue de coaccionar una confesión injustificada de responsabilidad por parte de Chevron al hacer que el costo de una apelación monte a \$8.650 millones, para que Chevron no pudiera apelar con éxito alguno u objetar a su ejecución más adelante. Además, la sentencia ignoró las pruebas incontrovertibles de Chevron sobre la conducta de los Demandados RICO, incluyendo los fraudes de Calmbacher y Cabrera.

326. Los Demandados RICO y/o sus co-conspiradores también estaban estrechamente involucrados en la redacción misma de partes de la sentencia de 188 páginas, o en proporcionarle al Juez Zambrano –o a quien fuera que escribiera la sentencia— sin notificación a la parte contraria materiales que no forman parte del registro público en el Litigio de Lago Agrio. Por ejemplo, partes de la sentencia se basa en información que fue obtenida exclusivamente de la “Base de Datos de Selva Viva” —la misma base de datos controlada por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y la fuente de por lo menos dos anexos del Informe Cabrera. La Base de Datos de Selva Viva, sin embargo, no forma parte del registro público del Litigio de Lago Agrio. La sentencia, por ejemplo, utiliza una convención irregular para nombrar las muestras, la cual es única de la Base de Datos de Selva Viva. Por ejemplo, la sentencia trata muestras que indican que no se detectó mercurio a “niveles alarmantes de mercurio” de 7 mg/kg. La razón de este error inequívoco es el hecho de que el símbolo “<” que indica que se había detectado “<7 mg/kg” —que fue el límite de detección para el equipo de prueba del laboratorio— aparece en una columna aparte en la Base de Datos de Selva Viva. Y quienquiera que haya preparado la sentencia simplemente trasladó el límite de detección sin el símbolo “<”. Otro error es que la sentencia declara que los resultados de ciertas muestras se presentan en miligramos por kilogramo (mg/kg) cuando en realidad se encuentran en microgramos por kilogramo ($\mu\text{g}/\text{kg}$) para llegar a los niveles de contaminantes mil veces mayores que las muestras realmente indicaron. Otra vez, la fuente de este error son los errores en la Base de Datos de Selva Viva, en la cual los resultados están etiquetados incorrectamente. La sentencia contiene algunos de los mismos errores del Informe Cabrera, pero también contiene errores adicionales del mismo tipo que no están en el Informe Cabrera, pero sí en la Base de Datos secreta de Selva Viva —demostrando que quien quiera que haya preparado la sentencia se basó en la base de datos secreta de Selva Viva, y no en el Informe Cabrera. Además, la sentencia se basa en otros documentos internos y no públicos preparados por los Demandados RICO y sus co-conspiradores, y repite los mismos errores que se hallan en esos documentos, incluyendo referencias a páginas incorrectas en el registro de *Lago Agrio*, errores gramaticales y errores en

las descripciones de los documentos. No hay explicación con respecto a cómo el Juez Zambrano o quienquiera que haya preparado la sentencia hubiera tenido acceso a esta información no pública sin la ayuda clandestina de los Demandados RICO y sus co-conspiradores.

327. Mientras que tanto Chevron como los Demandantes de Lago Agrio han apelado la sentencia fraudulenta en el Ecuador, la debilidad sistemática del poder judicial ecuatoriano, las fallas institucionales y la manipulación del proceso de apelación en esta causa demuestran que el fallo del Juez Zambrano no recibirá una revisión justa e independiente. Al contrario, hay pruebas que indican que el mismo juez que dictaminó – el Juez Zambrano, junto con Benjamín Cevallos, el Presidente del Consejo Judicial —el cual tiene el poder único para nombrar y remover jueces en el Ecuador— manipuló el proceso de selección para seleccionar personalmente a tres jueces quienes entenderían la apelación. Cevallos se presentó en una conferencia de prensa con el Juez Zambrano para anunciar la emisión de la sentencia en la causa de Lago Agrio, elogiando a Zambrano como “una estrella”, y en los meses previos a la constitución del panel, participó en varias acciones inusuales. Los tres jueces inicialmente asignados a la apelación fueron el Juez Zambrano, Juez Núñez y Juez Marco Yaguache. Entonces, semanas antes de que el panel estuviese oficialmente constituido, Cevallos removió al Juez Yaguache del panel y fue reemplazado por el Juez Luis Legña sin justificación alguna, excepto la declaración de que la remoción del Juez Yaguache fue “para beneficio de los intereses institucionales”. Entonces el Juez Zambrano, como delegado provincial del Consejo judicial, supuestamente realizó una “lotería” para reemplazarse a sí mismo y al Juez Núñez en el panel. Al contrario del derecho ecuatoriano, esta supuesta lotería se llevó a cabo en secreto y sin notificación a las partes. Como resultado de esto, el panel consistía en el Juez Legña, cuya presencia en el panel fue manipulada por Cevallos; el Juez Toral, quien fue nombrado por el Juez Zambrano, y el Juez Orellana, quien fue nombrado como juez suplente por el Consejo Judicial, el cual está controlado por Cevallos como Presidente, solo seis semanas antes de que el Juez Zambrano emitiera una sentencia en contra de Chevron. Los mismos Demandados de Lago Agrio notaron las irregularidades procesales en la creación del panel de apelación en un escrito presentado el mes pasado a la corte

de Lago Agrio, solicitando que el panel dejara en claro que se siguieran los procedimientos apropiados “para prevenir defectos que anulen el proceso”. Aun dejando a un lado el papel del Consejo Judicial, y específicamente Cevallos, en la creación de este panel, hay otras indicaciones de sesgo y prejuicio contra Chevron. Por ejemplo, el Juez Orellana es un juez a tiempo parcial que también actúa como abogado y actualmente representa a un individuo quien recientemente ha entablado una demanda contra Chevron por presuntas lesiones personales supuestamente causadas por las operaciones previas de TexPet en el Ecuador.

328. El peligro al cual se enfrenta Chevron como resultado de esta fraudulenta sentencia se ve agravado por el hecho de que los Demandados RICO continúan con acceso a fondos significativos para realizar sus maquinaciones delictivas. Hasta 2010, Kohn había sido la fuente principal de fondos para las maquinaciones delictivas, apoyándolas con más de US\$7 millones en menos de siete años —“el componente individual más grande” del cual fue, según Kohn, de más de US\$1 millón proporcionado a Donziger personalmente. Kohn proporcionó este dinero basado en pedidos específicos de los Demandados Donziger y Yanza, quienes trabajaron con Kohn para preparar presupuestos para el caso, y se comunicaban con él hasta mensualmente para solicitar cantidades que oscilaban entre US\$40.000 y US\$100.000 cada vez. Estos fondos se distribuyeron a consultores estadounidenses, incluido el Demandado Stratus, y a Ecuador, principalmente por medio de Selva Viva y el Frente, para financiar las actividades de los Demandados RICO en dicho país.

329. Después de que Donziger, Yanza y Fajardo se pelearon con Kohn, obtuvieron financiamiento adicional a largo plazo de Burford. La relación de los Demandados RICO con Burford comenzó en octubre de 2009, y para junio de 2010, Burford había pasado cientos de horas trabajando en asuntos relacionados con las maquinaciones de los Demandados RICO, y había participado activamente en el desarrollo de la estrategia. En el verano y el otoño de 2010, los Demandados RICO, junto con sus co-conspiradores H5, Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, discutieron una inversión de \$15 millones de Burford, y para diciembre, ya se habían proporcionado \$4 millones para apoyar las maquinaciones delictivas de los Demandados RICO.

La relación con Burford fue en gran medida tramada por Patton Boggs, que funciona como asesor legal externo de Burford y hasta comparte espacio en su despacho en Nueva York con Burford. A cambio de esto, Burford recibió no solo un interés en cualquier dinero obtenido de Chevron, sino también autoridad de aprobación sobre el uso de sus fondos, cuya autoridad está en manos de James Tyrell, un socio principal de Patton Boggs. Otra fuente significativa de fondos ha sido Russell DeLeon, un empresario de juegos en línea quien fue uno de los principales proveedores de fondos para Crude.

330. Los Demandados RICO, actuando de común acuerdo con Burford y Patton Boggs, han asegurado aún más su control sobre el futuro del Litigio de Lago Agrio, y han asegurado sus propios derechos sobre cualesquier cobro, y los de Burford y Patton Boggs, insistiendo que varios (pero no todos) de los Demandantes de Lago Agrio cedan sus derechos en el litigio a un fideicomiso (“Burford Trust”). El fiduciario del Burford Trust, quien debe ser aprobado por Burford, será “la sola y única Persona con derecho a, entre otras cosas...tener autoridad y obligación de aplicar y distribuir cualquier cantidad que provenga del Laudo” retenidos en el Burford Trust, y dicha distribución aparentemente está regida ahora por un acuerdo contractual entre Donziger, Burford, DeLeon, el Frente, Patton Boggs, H5 y otras partes en los EE. UU. Este acuerdo contractual incorpora una compleja “cascada” que, para cualesquier fondos colocados en el Burford Trust, asegura las pretensiones de los Demandados RICO, Burford, Patton Boggs y otros, y relega toda distribución real en el Ecuador al monto residual. Además, Donziger, Fajardo y Yanza supuestamente retienen la autoridad sobre la continuación del Litigio de Lago Agrio por parte del fiduciario del Burford Trust.

331. Los demandados ya están formulando planes para solicitar la ejecución de la sentencia ecuatoriana ante tribunales en EE.UU. y en el extranjero, y para extorsionar pagos de Chevron utilizando la sentencia ecuatoriana para amenazar la incautación de los activos de Chevron y los de sus filiales. El programa detallado de acción interno de los Demandados RICO para la ejecución mundial, un memorándum del conspirador Patton Boggs titulado “Invictus”, afirma que “[d]e darse una sentencia exigible en Ecuador y cuando ésta se dé, el Equipo de los

Demandantes espera tomar acción rápidamente, si no inmediatamente, en múltiples frentes de ejecución, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos”. Ellos han dicho otro tanto explícitamente en muchas ocasiones y, de hecho, han manifestado ante el Distrito Sur de Nueva York que la defensa de Chevron contra cualquier sentencia de Lago Agrio debe limitarse a la Ley de Reconocimiento de Nueva York.

332. El co-conspirador Amazon Watch ha informado que los representantes de los Demandantes de Lago Agrio rápidamente “[proceder[án] de inmediato a cobrar el fallo por todos los medios que sean necesarios en cualquier país en el que la empresa tenga activos” y que “intentarán exigir el cumplimiento del fallo contra la gigante petrolera inmediatamente en los tribunales estadounidenses”. La co-conspiradora Hinton dijo que “Si los tribunales [ecuatorianos] acuerdan permitir que [obliguen a Chevron a pagar una caución antes de poder apelar la sentencia de Lago Agrio], entonces intentaremos embargar activos en otros países”. De acuerdo con Donziger, “Si obtenemos una sentencia del tribunal de primera instancia, iremos inmediatamente, tan pronto como podamos, para conseguir la ejecución de la sentencia. No vamos a esperar por la apelación”. Y Donziger ha amenazado que “Chevron opera en más de 100 países y tiene numerosos petroleros que circulan por las aguas del mundo y atracan en diferentes puertos Este podría resultar ser uno de los forzosos de activos más grande de la historia y podría perturbar en gran medida las operaciones de la empresa”. En una entrevista transmitida como parte de un segmento del programa televisivo 60 Minutes sobre el Litigio de Lago Agrio, Donziger, en respuesta a la observación de que Chevron no tiene activos en Ecuador, declaró, “A fin de cuentas podría organizarse que una corte estadounidense haga cumplir la resolución y que sus auxiliares judiciales acudan a Chevron a embargar sus bienes”. Estas amenazas continúan sin cesar. Solo meses antes de que se entablara esta Demanda Modificada, Donziger, en una charla presentada a estudiantes de derecho, les informó que estaba reuniendo un equipo jurídico para “ejecutar cualquier sentencia que resulte en Ecuador, con eficacia, en cualquier fuero que pudiera-fuero que pudiera ser apropiado, incluso en múltiples lugares en los que, saben, se puedan iniciar juicios, confiscar activos, confiscar embarcaciones”.

333. Por medio de declaraciones hechas ante este Tribunal, los Demandados también han dejado en claro su intención de ejecutar la sentencia de inmediato. Cuando el Juez Sand del Distrito Sur de Nueva York preguntó si los Demandantes de Lago Agrio, en su acción para suspender el Arbitraje del Tratado, estaban “dispuestos a estipular que no tomar[ían] ninguna medida para ejecutar el fallo hasta...que concluya el proceso arbitral”, su asesor jurídico se rehusó a aceptar la suspensión de la ejecución: “No, Su Señoría. No procederíamos de ese modo y de hecho no podemos hacerlo”.

334. De hecho, desde que se dictó la sentencia de Lago Agrio, los Demandantes solo han acelerado su plan para presionar a Chevron utilizando la sentencia fraudulenta para iniciar procedimientos de embargo y otras acciones de ejecución, en desafío de la orden judicial de amparo temporal emitida por este Tribunal. El 14 de febrero de 2011, Fajardo declaró que “vamos a pedir inmediatamente a cualquier país donde Chevron tiene bienes. . . que se embarguen bienes de Chevron”. Y un día más tarde, refiriéndose a la emisión por parte de este Tribunal de la orden judicial de amparo, Fajardo declaró que la orden no impediría los intentos de los Demandados para ejecutar y reconocer la sentencia fuera de los Estados Unidos: “El juez no puede ordenar y disponer una cosa que salga de los [sic] fronteras de los Estado Unidos, como tal. Por lo tanto, esa prohibición es plenamente, eh, no es ejecutable, no es aplicable para otros países que no sean los Estado Unidos”.

335. La sentencia de la corte de Lago Agrio, instigada por el fraude de los Demandados RICO y sus co-conspiradores - además de los embargos y esfuerzos de ejecución relacionados, y el espectro de miles de millones de dólares en responsabilidad - amenaza con interrumpir las operaciones comerciales de Chevron, mancillar su reputación y además causar que Chevron sufra daños irreparables. En el memorándum “Invictus” de los Demandados RICO, que esboza los planes para usar la sentencia de Lago Agrio para obtener pagos de Chevron, Patton Boggs también propone iniciar una acción derivada de los accionistas contra Chevron en los Estados Unidos, “como punto de apalancamiento para la conciliación... [y] de fundamento útil para la presentación de pruebas de las maquinaciones de la gerencia de Chevron frente al

litigio ecuatoriano”. Y dicho memorándum también revela que los Demandados RICO no pretenden esperar las sentencias en los procedimientos de ejecución propuestos: “Acorde con su enfoque agresivo, el Equipo de los Demandantes buscará formas de proceder en contra de Chevron sobre una base prejudicial fundamentalmente como medio para lograr una conciliación favorable en una etapa anticipada. Diversas leyes y procedimientos dentro y fuera de los Estados Unidos pueden permitir el embargo de los activos de Chevron previo al reconocimiento exitoso de la sentencia ecuatoriana”.

336. Los Demandados RICO tampoco están limitando sus operaciones al Litigio de Lago Agrio. Donziger ha declarado que su intención es de “tomar los honorarios profesionales que ganemos en este caso y, y hacer más casos como este en distintos lugares con, bueno, el mismo equipo, si es posible”.

337. Las maquinaciones extensas y de gran alcance de los Demandados RICO para defraudar y extorsionar a Chevron, según se describen en esta Demanda Modificada, ya han surtido un efecto duradero e irreparable sobre Chevron. Las declaraciones falsas y engañosas de los Demandados RICO han sido utilizadas con confianza por tribunales de EE.UU., agencias estatales y federales en EE.UU., accionistas de Chevron, inversionistas, analistas, los medios, y la corte de Lago Agrio, por medio de la aceptación de las falsedades y omisiones de los Demandados y de Cabrera, y por no tomar acciones correctivas significativas. Además, las declaraciones falsas y engañosas de los Demandados RICO han causado importantes daños y perjuicios para Chevron. Chevron ha tenido que gastar millones de dólares en gastos y honorarios de abogados para defenderse en el litigio fraguado que entablaron los Demandados RICO y sus co-conspiradores en Ecuador, y para poner en descubierto el fraude generalizado de los conspiradores en los procedimientos del Artículo 1782. Además de los gastos y los honorarios de los abogados y, los intereses de Chevron en contratos perfeccionados, incluyendo el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998, también han sido perjudicados como consecuencia de la confabulación entre los Demandados RICO y sus co-conspiradores con la República del Ecuador. Además, muchos de los actos extorsivos de los

Demandados RICO han presentado declaraciones injustas y falsas sobre las prácticas comerciales de Chevron, dañando la reputación y crédito mercantil de Chevron. De acuerdo con lo que se ha alegado en todo este documento, estos daños representan el resultado precisamente deseado por la conducta de los Demandados RICO. Y aun peor, no cabe duda, basado en las acciones y palabras de los Demandados RICO, que no tienen intención alguna de cesar hasta que Chevron se rinda a sus demandas extorsivas. Sin la intervención del Tribunal, Chevron continuará sufriendo considerables daños a manos de los Demandados RICO y sus maquinaciones ilícitas.

338. Los hechos y las pruebas presentadas en esta Demanda Modificada son el resultado de muchas miles de horas de trabajo por parte de Chevron, sus abogados y sus investigadores, y se han recopilado a un costo extraordinario. Sin embargo, mientras se preparaba esta Demanda Modificada para ser interpuesta, continuaron emergiendo nuevas pruebas, y la verdadera naturaleza de la conducta delictiva de los Demandados RICO se hace cada vez más clara. Hace solo meses, al considerar la solicitud de Chevron para obtener la presentación de pruebas directamente del cabecilla de esta empresa delictiva, Donziger, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York resumió el caso de la siguiente manera: “[E]l juego en realidad es imponer mucha presión en los tribunales para proporcionarles autos, en parte falsos con el fin de obtener una sentencia grande o amenazar una sentencia grande, que concebiblemente podría ser ejecutable en los EE.UU. o en Gran Bretaña u otro lugar similar, a fin de convencer a Chevron que desembolse algún dinero. Ahora bien, ¿tienen alguna relevancia aquí las frases tales como la Ley Hobbs, extorsión, RICO?”.

PETITORIOS

PRIMER PETITORIO **(Violaciones de la ley RICO, Artículo 1962(c))** **del Título 18 del Código de los Estados Unidos** **(Contra todos los Demandados RICO)**

339. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

340. En todo momento pertinente, Chevron es una persona según el significado de los Artículos 1961(3) y 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

341. En todo momento pertinente, cada Demandado RICO es una persona según el significado de los Artículos 1961(3) y 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

La Empresa RICO

342. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores son un grupo de personas asociadas de hecho con el propósito común de llevar a cabo una empresa delictiva en curso, tal como se describió en los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada; a saber, mediante una campaña multifacética de mentiras, fraude, amenazas y corrupción oficial, para coaccionar a Chevron para que pague miles de millones de dólares a los Demandados RICO y a sus co-conspiradores. Estos Demandados RICO y sus co-conspiradores han organizado su operación en un grupo unido con responsabilidades específicas y asignadas y una estructura de mando, que opera en los Estados Unidos y Ecuador, es financiado principalmente desde los Estados Unidos y dirigido principalmente desde dicho país. A través de los años han adaptado su ardid según las circunstancias cambiantes, incorporando nuevos miembros a su operación y ampliando el alcance y la naturaleza de sus actividades. Si bien la organización de la empresa delictiva ha cambiado con el tiempo, y es posible que sus miembros hayan desempeñado distintos papeles en distintas ocasiones, la empresa delictiva por lo general se ha estructurado para funcionar como una unidad a fin de lograr las metas de su plan delictivo:

- a. Los demandados Donziger, el estudio jurídico de Steven R. Donziger, y Donziger & Associates, PLLC han sido responsables de supervisar el plan

para estafar y extorsionar a Chevron, y han ordenado a otros conspiradores que tomen las medidas necesarias para lograr las metas generales de la empresa delictiva—a saber, fabricar pruebas de la responsabilidad de Chevron, obtener cargos penales falsos contra los abogados de Chevron, realizar campañas públicas masivas de presión destinadas a propagar información falsa y engañosa sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio, y obstaculizar las actividades de Chevron para revelar la verdad en varios procedimientos judiciales en tribunales de los Estados Unidos.

- b. El demandado Fajardo ha sido responsable principalmente de llevar a cabo el litigio falso en las cortes ecuatorianas, se ha desempeñado como uno de los jefes de la empresa delictiva en los medios de los Estados Unidos y de Ecuador, y ha planeado y coordinado la redacción secreta en nombre del autor del Informe Cabrera.
- c. Los demandados Yanza y el Frente han sido responsables principalmente de dirigir el “ejército privado” de los Demandados RICO ejerciendo su influencia sobre el gobierno y los funcionarios judiciales ecuatorianos y actuando en connivencia con ellos, y cumpliendo la función de representantes ante los medios de la empresa delictiva en la que han hecho declaraciones falsas a los accionistas de Chevron, analistas financieros, inversionistas y/o a los organismos estatales y federales. Yanza hizo los arreglos necesarios para el financiamiento por parte de Kohn y/o Kohn Swift, de las actividades de los Demandados RICO en Ecuador, y con frecuencia dispuso la transferencia de dinero fuera de los Estados Unidos con ese fin.
- d. La demandada Selva Viva ha hecho las veces de conducto para suministrar fondos y promover de otro modo la empresa delictiva de los Demandados RICO.

- e. Los demandados Stratus, Beltman y Maest han sido responsables de coordinar la redacción del Informe Cabrera y de efectuar la redacción sin atribución propia del mismo, y de otros escritos presentados al tribunal del Lago Agrio, y de la promoción falsa del Informe Cabrera en los medios y en los tribunales de Estados Unidos como si fuera un informe independiente.

343. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores constituyen una empresa organizada como sociedad de hecho según el significado de los Artículos 1961(4) y 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, a la cual se hará referencia en lo sucesivo como la “Empresa”. Cada uno de los Demandados RICO participó en la operación o dirección de la Empresa.

344. En todo momento pertinente, la Empresa participó en, y sus actividades afectaron, el comercio interestatal y extranjero según el significado del Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Patrón de actividades de extorsión

345. Los Demandados RICO realizaron o participaron, directa o indirectamente, en la conducción, dirección u operación de los asuntos de la Empresa mediante un “pauta de patrón de actividades organizadas de extorsión” según el significado del Artículo 1961(5) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y en violación del Artículo 1962(c) del Título 18 de dicho Código, a saber:

Patrón de las actividades de extorsión: Extorsión en violación de la Ley Hobbs, Artículo 1951 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

346. En todo momento esencial para esta Demanda Modificada, Chevron participó en el comercio interestatal y extranjero y en una industria que afecta a dicho comercio.

347. Como se describió en la presente, los Demandados RICO han diseñado una campaña de gran alcance de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas, cargos penales falsos, un fallo civil fraudulento amenazado y real, investigaciones por parte de

organismos gubernamentales, y el constante acoso e interrupción de las operaciones comerciales, y han exigido el pago de miles de millones de dólares antes de suspender estas actividades, todo con la intención y el efecto de causar un temor razonable de pérdida económica por parte de Chevron.

348. Como se describe en la presente, los Demandados RICO fabricaron pruebas falsas contra Chevron y dependen de dichas pruebas en el Litigio falso de Lago Agrio con la intención y efecto de causar un temor razonable de pérdida económica por parte de Chevron.

349. Como se describe en la presente, los Demandados RICO conspiraron con la República de Ecuador para promover cargos penales infundados contra dos abogados de Chevron encargados de ejecutar el Acta de Liberación Final de 1998 con el fin de extorsionar a Chevron.

350. Las acciones de los Demandados RICO tienen como fin provocar el temor en Chevron de que dichos demandados, entre otras cosas: (1) seguirán con su plan de tergiversación de los hechos para gran perjuicio y denigración pública de Chevron, a menos y hasta que Chevron “transe” el Litigio del Lago Agrio; (2) seguirán conspirando con funcionarios ecuatorianos para enjuiciar penalmente a los abogados de Chevron por cargos falsos; y (3) se asegurarán un fallo fraudulento por miles de millones de dólares contra Chevron y entablarán juicios en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones extranjeras en procura del reconocimiento y ejecución del fallo. Estas acciones, tal como se describen en la presente, han creado un temor razonable de perjuicio por parte de Chevron, incluido el temor de pérdida económica.

351. En consecuencia, los Demandados RICO han obstaculizado, demorado y afectado ilícitamente —e intentaron obstaculizar, demorar y afectar— el comercio según la definición de ese término en el Artículo 1951 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y el movimiento de artículos y mercancías en dicho comercio, por extorsión, según la definición de ese término en el Artículo 1951, en cuanto a que dichos demandados intentaron inducir a

Chevron a consentir en la renuncia de bienes mediante el uso ilegal de fuerza tanto real como por amenazas, violencia y temor, incluido el temor al perjuicio económico.

Patrón de las actividades de extorsión: Extorsión en violación de la Ley Penal de Nueva York, Artículos 110.00, 155.05(2)(e), 155.42

352. De forma similar, los intentos ilícitos por parte de los Demandados RICO por apropiarse de los bienes de Chevron infundiendo temor de que si los bienes no son entregados dichos demandados realizarían un acto planeado para perjudicar a Chevron materialmente con respecto a su negocio, situación financiera y reputación, viola los Artículos 110.00, 155.05(2)(e) y 155.42 de la Ley Penal de Nueva York.

Patrón de las actividades de extorsión: Múltiples casos de fraude por correo regular y electrónico en violación de los Artículos 1341 y 1343 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

353. Como se describe en la presente, los Demandados RICO participaron en un plan o ardid de gran alcance para estafar a Chevron, varios tribunales de justicia y al público en general con respecto a la supuesta responsabilidad de Chevron por el daño medioambiental en Ecuador fabricando pruebas, actuando en connivencia con el perito judicial Cabrera para presentar las pruebas fabricadas de dichos demandados, y luego presentando el Informe de Cabrera como un documento independiente y neutral cuando decididamente no lo era. El objetivo final del plan o artimaña de los Demandados RICO con fines de estafa es coaccionar a Chevron a efectuar un pago de miles de millones de dólares que beneficie directamente a dichos demandados tanto individuales como institucionales.

354. En respaldo de su plan, y como se describe en la presente, los Demandados RICO transmitieron, o hicieron transmitir, mediante comunicación electrónica en el comercio interestatal o extranjero, escritos, signos, señales, imágenes y sonidos, y también hicieron colocar impresos y cosas en cualquier oficina postal o depósito autorizado, o depositaron o hicieron depositar impresos o cosas para su envío o entrega por una empresa interestatal privada o comercial, incluido, entre otros, lo siguiente:

- a. mensajes por correo electrónico y publicaciones en páginas web incorporando declaraciones falsas y engañosas con respecto al Informe de Cabrera;
- b. comunicación electrónica o envíos postales entre los Demandados RICO con respecto a la elaboración del informe en los Estados Unidos que Cabrera presentó ante el tribunal en el Litigio de Lago Agrio;
- c. comunicaciones dirigidas a funcionarios y reguladores estatales y federales de los Estados Unidos que incorporaban declaraciones falsas y engañosas con respecto a la responsabilidad de Chevron en el Litigio de Lago Agrio;
- d. fondos transferidos por Kohn o Kohn Swift, o ambos, a los Demandados RICO, con la intención de que esos fondos fueran empleados para promover las actividades delictivas de dichos demandados; y
- e. la presentación electrónica y notificación de documentos judiciales que contienen declaraciones falsas y engañosas destinadas a obstaculizar el funcionamiento de esos tribunales.

355. Chevron incorpora por referencia el Apéndice B adjunto, en el que se exponen usos particulares de comunicaciones electrónicas y por correo en respaldo del plan o artimaña de los Demandados RICO con fines de estafa que constituyen violaciones a los Artículos 1341 y 1443 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, incluido qué demandado individual hizo enviar la comunicación por correo o por comunicaciones electrónicas, cuándo se efectuó la comunicación y cómo promovió el plan fraudulento.

356. Los Demandados RICO participaron en el plan o artimaña a sabiendas, intencionadamente y con la intención específica de engañar o estafar, o ambas, a Chevron para que pague a dichos demandados y sus co-conspiradores. Los Demandados RICO, a sabiendas e

intencionadamente, prepararon un análisis a su favor de la presunta responsabilidad de Chevron en Lago Agrio, y luego a sabiendas y con la intención de engañar al tribunal de Lago Agrio, a Chevron y al público general, hicieron presentar el análisis con el pretexto de que era un informe preparado por un perito judicial independiente. Los Demandados RICO actuaron en connivencia con la República de Ecuador para entablar acciones penales contra los abogados de Chevron sobre la base de este informe y otras declaraciones que dichos demandados sabían que eran falsos o engañosos. Además, con respecto a este informe, estos cargos penales y otros asuntos, los Demandados RICO hicieron declaraciones que ellos sabían eran falsas o engañosas para difundirlas al público general, a los medios y a múltiples organismos estatales y federales y tribunales federales, con la intención de que esas declaraciones fueran creídas y que formaran la base de más ataques públicos a Chevron, las investigaciones de Chevron y la disminución del valor de los activos corporativos de Chevron. Los Demandados RICO procedieron de la manera antedicha a sabiendas con la intención de provocar un temor tal en Chevron que ésta finalmente pagaría a dichos demandados para que dejen de proceder de ese modo, con el pretexto de una resolución del Litigio de Lago Agrio, mediante el cumplimiento de una sentencia en el Litigio de Lago Agrio, o en un procedimiento judicial posterior de reconocimiento y ejecución de dicha sentencia.

357. Los tribunales de los EE. UU., los organismos gubernamentales estatales y federales de los EE. UU., los accionistas de Chevron, los inversionistas, los analistas, los medios y la Corte de Lago Agrio han confiado en las declaraciones falsas y engañosas de los Demandados RICO al aceptar esas declaraciones falsas y omisiones de dichos demandados y de Cabrera y por su falta de acción para tomar medidas correctivas significativas. Además, las declaraciones falsas y engañosas de los Demandados RICO le han causado a Chevron perjuicios considerables.

Patrón de las actividades de extorsión Lavado de dinero en violación del Artículo 1956(a)(2)(A) del Título 18 del Código de los Estados Unidos

358. Los demandados Yanza, Donziger, las Law Offices of Steven R. Donziger, y Donziger & Associates, PLLC, en múltiples ocasiones, actuando en sus funciones individuales y como agentes de Selva Viva o del Frente, o de ambos, han hecho transportar, transmitir o transferir a sabiendas fondos a o desde los Estados Unidos a ellos mismos y a los demandados Selva Viva, el Frente y a otras entidades con la intención de que esos fondos fueran usados para promover la realización de actividades ilícitas incluyendo pero limitándose a violaciones de los Artículos 1341, 1343 y 1951 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, tal como la preparación secreta del Informe de Cabrera, el pago a Cabrera por su complicidad y silencio con respecto a la autoría del informe, el financiamiento de las campañas de presión montadas por los Demandados RICO contra la Corte de Lago Agrio y contra Chevron, y la connivencia con la República de Ecuador.

Patrón de las actividades de extorsión Obstrucción de justicia en violación del Artículo 1503 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

359. Afrontando las negaciones implacables en Ecuador por parte de Cabrera y los Demandados RICO sobre la autoría del Informe de Cabrera, Chevron recurrió a los tribunales de los EE. UU. para la presentación de pruebas directamente desde la Empresa por medio de un procedimiento judicial conforme al Artículo 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, que establece que “[e]l tribunal de distrito del distrito en el que una persona resida o se encuentre puede ordenarle brindar su testimonio o declaración, o que presente un documento u otro instrumento para su utilización en un proceso llevado a cabo en un tribunal extranjero o internacional”.

360. Concertando sus esfuerzos para frustrar los intentos de Chevron por revelar la verdad y para evitar la presentación de pruebas, los Demandados RICO y sus abogados habitualmente presentaron o hicieron presentar al tribunal documentos, incluidas declaraciones por las cuales prestaron juramento so pena de perjurio, que manifiestan falsamente que Cabrera era un perito independiente y que aparte de eso tergiversan las interacciones que los Demandados

RICO tenían con Cabrera. Lo han hecho con pleno conocimiento de que estas declaraciones eran falsas, según lo manifiesta su propia correspondencia interna. Al hacer estas declaraciones falsas en forma deliberada y estratégica en varios procedimientos judiciales federales pendientes, con total conocimiento de su consecuencia y con la intención específica de intentar por todos los medios y de manera corrupta influir, obstaculizar e impedir la debida administración de la justicia, los Demandados RICO han cometido varios actos de obstrucción de la actividad judicial en violación del Artículo 1503 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Patrón de las actividades de extorsión Intimidación de testigos en violación del Artículo 1512 del Título 18 de Código de los Estados Unidos

361. De conformidad con la orden del 2 de marzo de 2010 expedida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito del Norte de Georgia que concedía la solicitud de Chevron conforme al Artículo 1782, Chevron notificó la declaración jurada del perito de los demandados, Charles W. Calmbacher, Ph.D.

362. Temiendo que el Dr. Calmbacher pondría al descubierto la verdad sobre los informes falsificados presentados en su nombre por los Demandados RICO, Donziger a sabiendas llevó a cabo actividades de intimidación, amenazas, conducta engañosa y persuasión corrupta contra el Dr. Calmbacher, con la intención específica de influir, demorar y evitar el testimonio del Dr. Calmbacher o hacer que éste no presentara expedientes, objetos, documentos y testimonios de un procedimiento judicial oficial.

363. Como el Dr. Calmbacher testificó conforme a la citación judicial autorizada por el tribunal en su declaración jurada del 29 de marzo de 2010, Donziger se comunicó con el Dr. Calmbacher y trató enfáticamente de convencerlo de que no testificara en su declaración jurada, advirtiéndole que testificar podría causarle “graves problemas” a él y podría tener como resultado un “procedimiento legal” debido a que “levantarían cargos en [su] contra por motivo de comportamiento poco profesional”. Cuando se le preguntó en su declaración testimonial si “Donziger [estaba] intentando convencerlo de que no se presentara a declarar”, Calmbacher testificó lo siguiente: “Por supuesto, por supuesto”. Donziger interfirió ilegalmente

en el testimonio del Dr. Calmbacher en violación del Artículo 1512 del Título 18 del Código de los Estados Unidos en respaldo del plan de la Empresa.

364. Los Demandados RICO también interfirieron ilegalmente en el testimonio del consultor ambiental Mark Quarles en respaldo de dicho plan de la Empresa. En 2007, Ecuador presentó una declaración por Quarles sobre la “independencia” del Informe de Cabrera en un procedimiento judicial pendiente en el Distrito Sur de Nueva York, usando esa declaración para apoyar la aseveración del gobierno de que el Litigio de Lago Agrio “se ha llevado a cabo de acuerdo con las normas de procedimiento del derecho ecuatoriano”. Quarles admitió recientemente en un testimonio bajo juramento que Donziger le pagó por esta declaración jurada, y que no habría firmado la misma si hubiera sabido de la relación que los Demandados RICO tenían con Cabrera. Al no revelar la verdad sobre el contacto indebido de Donziger con Cabrera y en cambio engañar deliberadamente a Quarles, Donziger tomó parte a sabiendas en una conducta engañosa y persuadió de manera corrupta a Quarles con la intención de influir en su testimonio en un procedimiento judicial oficial.

365. Los Demandados RICO y sus co-conspiradores también interfirieron ilegalmente en el testimonio potencial de numerosos empleados de Straus, todo ello en respaldo del plan de la Empresa. Después de que Chevron presentó una solicitud conforme al Artículo 1782 en diciembre de 2009 pidiendo la presentación de pruebas de la firma Stratus, Beltman, sin dudas preocupado por el testimonio futuro potencialmente perjudicial de los empleados de Stratus, a sabiendas tuvo una conducta engañosa y persuadió de manera corrupta a numerosos empleados de Stratus, con la intención específica de influir, demorar y evitar que dichos empleados prestaran su declaración veraz o de hacer que los empleados no presentaran expedientes, objetos, documentos y testimonios de un procedimiento judicial oficial. Beltman en repetidas ocasiones declaró falsamente a miembros del personal de Stratus que Cabrera era un perito independiente y autor de su propio informe. Asimismo, Beltman engañó en repetidas ocasiones a los empleados de Stratus y omitió los hechos verdaderos cuando declaró falsamente que la firma Stratus había desempeñado un papel limitado de asesoría técnica a los Demandantes

de Lago Agrio. Por lo tanto, Beltman alteró fraudulentamente con el testimonio potencial o previsto de los empleados de Stratus en violación del Artículo 1512 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, en respaldo del plan de la Empresa.

Resumen del patrón de las presuntas actividades de extorsión por parte de cada demandado RICO

366. El demandado Donziger ha cometido numerosas violaciones de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas, incluidas las señaladas en el Apéndice B en las que Donziger utilizó o hizo utilizar la correspondencia o correspondencia electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Donziger también extorsionó a Chevron y se comportó de manera fraudulenta por medio de numerosos actos, entre ellos participando en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio (incluso haciendo declaraciones falsas en la Cámara de Representantes de los EE. UU.), fabricando pruebas falsas en forma del Informe de Cabrera, intentando formular cargos infundados contra los abogados de Chevron en Ecuador, actuando en connivencia con funcionarios ecuatorianos y presionando al tribunal de Lago Agrio con el fin de obtener un resultado negativo para Chevron en el Litigio de Lago Agrio, y amenazando y haciendo que se amenace a Chevron directamente y por medio de sus accionistas. Además, Donziger ha participado en actividades de obstrucción de la actividad judicial al presentar o hacer que se presenten documentos en múltiples tribunales de los EE. UU., incluidas declaraciones bajo juramento so pena de perjurio, que falsamente afirman que Cabrera era un perito independiente y aparte de eso tergiversan las interacciones que los Demandados RICO tenían con Cabrera. Donziger ha cometido fraude por comunicaciones electrónicas y participó en actividades de lavado de dinero al hacer, a sabiendas, que se transporten, transmitan o transfieran fondos de los Estados Unidos a Selva Viva, Yanza, el Frente y otras partes con la intención de que dichos pagos financiaran la actividad delictiva de los Demandados RICO. Donziger también ha intimidado a testigos al participar a sabiendas en actos de intimidación, amenazas, conducta engañosa y persuasión corrupta contra el Dr. Calmbacher con la intención específica de influir,

demorar y evitar el testimonio del Dr. Calmbacher en el Distrito Norte de Georgia. Donziger también interfirió ilegalmente en el testimonio de Mark Quarles al pagarle por su declaración jurada y ocultarle a éste la interacción que los Demandados RICO tenían con Cabrera y el Informe de Cabrera.

367. Los Demandados, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC, mediante las acciones de su agente, el demandado Donziger, han cometido numerosos actos extorsivos, incluyendo defraudación por correo y fraude electrónico, extorsión, obstrucción de la justicia, blanqueo de dinero e influencia ilícita sobre testigos. Las violaciones de defraudación por correo y por fraude electrónico, incluyen las señaladas en el Apéndice B en las que Law Offices of Steven R. Donziger o Donziger & Associates, PLLC utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC también han extorsionado a Chevron y se comportó de manera fraudulenta por medio de numerosos actos, entre ellos participando en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio (incluso haciendo declaraciones falsas en la Cámara de Representantes de los EE. UU.), fabricando pruebas falsas en forma del Informe de Cabrera, intentando formular cargos infundados contra los abogados de Chevron en Ecuador, actuando en connivencia con funcionarios ecuatorianos y presionando al tribunal de Lago Agrio con el fin de obtener un resultado negativo para Chevron en el Litigio de Lago Agrio, y amenazando y haciendo que se amenace a Chevron directamente y por medio de sus accionistas. Además, Law Offices of Steven R. Donziger, y Donziger & Associates, PLLC han participado en actividades de obstrucción de la actividad judicial o hecho que se presenten documentos en múltiples tribunales de los EE. UU., incluidas declaraciones bajo juramento so pena de perjurio, que falsamente afirman que Cabrera era un perito independiente y aparte de eso tergiversan las interacciones que los Demandados RICO tenían con Cabrera. Además, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC han cometido fraude electrónico y han estado involucrados en blanqueo de dinero al ocasionar el transporte, transmisión o

transferencia a sabiendas de fondos desde los Estados Unidos a Selva viva, Yanza, el Frente, y a otras partes con la intención de financiar con dichos pagos la actividad delictiva de los Demandados RICO. Law Offices of Steven R. Donziger también ha intimidado a testigos al participar a sabiendas en actos de intimidación, amenazas, conducta engañosa y persuasión corrupta contra el Dr. Calmbacher con la intención específica de influir, demorar y evitar el testimonio del Dr. Calmbacher en el Distrito Norte de Georgia. Además, Law Offices of Steven R. Donziger, también interfirió ilegalmente en el testimonio de Mark Quarles al pagarle por su declaración jurada y ocultarle a éste la interacción que los Demandados RICO tenían con Cabrera y el Informe de Cabrera.

368. El demandado Fajardo ha cometido numerosas violaciones de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas, incluidas las señaladas en el Apéndice B en las que Fajardo utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Fajardo también extorsionó a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al participar en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio (incluida una carta al Representante de Comercio de los EE. UU.), fabricar y hacer que se fabriquen pruebas falsas y al presionar a funcionarios del gobierno ecuatoriano para que formulen cargos penales infundados contra los abogados de Chevron. Además, Fajardo ha participado en actividades de obstrucción de la actividad judicial al presentar o hacer que se presenten documentos en numerosos tribunales de los EE. UU., incluida una declaración bajo juramento so pena de perjurio, que falsamente afirma que Cabrera era un perito independiente y aparte de eso tergiversa la relación entre Cabrera y los Demandados RICO.

369. El demandado Yanza ha cometido numerosas violaciones de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas, incluidas las señaladas en el Apéndice B en las que Yanza utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Yanza ha cometido fraude por comunicaciones electrónicas y participó en actividades de lavado de dinero al hacer, a sabiendas, que se

transporten, transmitan o transfieran fondos de los Estados Unidos a Selva Viva, el Frente y otras partes con la intención de que dichos pagos financiaran la actividad delictiva de los Demandados RICO. Yanza también extorsionó a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al participar en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio (incluida una carta al Representante de Comercio de los EE. UU.), fabricar y hacer que se fabriquen pruebas falsas y al presionar a funcionarios del gobierno ecuatoriano para que formulen cargos penales infundados contra los abogados de Chevron. Además, Yanza ha participado en actividades de obstrucción de la actividad judicial al presentar o hacer que se presenten documentos en múltiples tribunales de los EE. UU., incluidas declaraciones bajo juramento so pena de perjurio, que falsamente afirman que Cabrera era un perito independiente y aparte de eso tergiversan las interacciones que los Demandados RICO tenían con Cabrera.

370. El Demandado el Frente, mediante las acciones de sus agentes, los Demandados Fajardo y Yanza, entre otros, ha cometido numerosos actos extorsivos, incluyendo defraudación por correo y fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión. Las violaciones de defraudación por correo y fraude electrónico incluyen las señaladas en el Apéndice B en las que el Frente utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. El Frente también ha cometido varias violaciones de fraude electrónico y múltiples actos de blanqueo de dinero al ocasionar que Kohn y/o Kohn Swift transfiriera fondos desde los Estados Unidos al Ecuador, actuando como conducto de dichos fondos, y luego distribuyendo dichos fondos para financiar la maquinación ilícita de los Demandados RICO. Además, el Frente participó en numerosos actos de extorsión de Chevron y se comportó de manera fraudulenta al participar en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio por medio de una página web que el Frente mantiene así como de numerosos comunicados de prensa y al fabricar y hacer que se fabriquen pruebas falsas.

371. La demandada Selva Viva, mediante las acciones de sus agentes demandados Yanza y Donziger, entre otros, ha cometido varias violaciones de fraude por comunicaciones electrónicas y múltiples actos de lavado de dinero al hacer que Kohn o Kohn Swift, o ambos, transfieran fondos de los Estados Unidos a Ecuador, actuar de conducto de esos fondos y luego distribuir los mismos para financiar la maquinación ilegal de los Demandados RICO. Mediante las acciones de sus agentes los Demandados Yanza y Donziger, entre otros, Selva Viva también ha participado en numerosos actos de extorsión a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al fabricar y hacer que se fabriquen pruebas falsas.

372. El demandado, la firma Stratus, mediante las acciones de sus agentes, los demandados Beltman, Maest y otras personas, ha cometido numerosos actos extorsivos, incluyendo defraudación por correo y fraude electrónico, extorsión, obstrucción de justicia e influencia ilícita sobre testigos. Las violaciones de defraudación por correo y fraude electrónico incluyen las señaladas en el Apéndice B en las que Stratus utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Stratus también ha participado en la extorsión a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al fabricar pruebas falsas, en forma del Informe de Cabrera y sus anexos, utilizado en gran medida por los Demandados RICO en el Litigio de Lago Agrio y de forma más general en respaldo de su plan ilegal. Además, Stratus ha participado en la extorsión y se comportó de manera fraudulenta al difundir declaraciones falsas sobre Chevron mediante su autoría del Informe Cabrera y de su “evaluación” posterior de ese informe. Stratus también participó en la extorsión y se comportó de manera fraudulenta al intervenir en una campaña de ataques públicos basados en declaraciones falsas y engañosas sobre Chevron y el Litigio de Lago Agrio. Por último, la firma Stratus participó en actividades de obstrucción de la actividad judicial al afirmar falsamente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado que Cabrera era un perito independiente, que estaba “asombr[ada]” de ver “simili[tudes]” entre su propio trabajo y el Informe de Cabrera cuando fue Stratus la que en realidad redactó la mayor parte de dicho informe, y al tergiversar aparte de eso la relación entre Cabrera y los Demandados

RICO. Finalmente, Stratus ha participado en la influencia ilícita sobre testigos al engañar a muchos de sus empleados repetidas veces e intencionalmente sobre la independencia de Cabrera, y al omitir hechos con respecto a su verdadero papel en la redacción del Informe Cabrera, con la intención de que sus empleados, si fuesen llamados a testificar con respecto a estos temas, no pudiesen presentar la verdad.

373. El demandado Beltman ha cometido numerosas violaciones de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas, incluidas las señaladas en el Apéndice B en las que Beltman utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Beltman también ha participado en la extorsión a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al fabricar pruebas falsas, en forma del Informe de Cabrera y sus anexos, utilizado en gran medida por los Demandados RICO en el Litigio de Lago Agrio y de forma más general en respaldo de su plan ilegal. Además, Beltman ha participado en la extorsión y se ha comportado de manera fraudulenta al difundir declaraciones falsas sobre Chevron mediante su papel en la redacción tanto del Informe de Cabrera como su “evaluación” posterior de ese informe. Beltman también extorsionó a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al difundir y hacer que se difundan declaraciones falsas al público y a un miembro del Congreso con respecto a Chevron, el Litigio de Lago Agrio y la independencia de Cabrera. Beltman participó en actividades de obstrucción de la actividad judicial al hacer que se afirme falsamente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado que Cabrera era un perito independiente, que la firma Stratus estaba “asombr[ada]” de ver “simili[tudes]” entre su propio trabajo y el Informe de Cabrera cuando fue Stratus la que en realidad redactó la mayor parte de dicho informe, y al tergiversar aparte de eso la relación entre Cabrera y los Demandados RICO. Por último, Beltman ha intimidado a testigos al engañar en repetidas ocasiones e intencionadamente a numerosos empleados de Stratus acerca de la independencia de Cabrera, y al omitir hechos sobre el verdadero papel de Stratus en la redacción del Informe de Cabrera, con la intención de que entonces los empleados no testificaran con veracidad si se los convocara a testificar sobre estos temas.

374. La demandada Maest ha cometido numerosas violaciones de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas, incluidas las señaladas en el Apéndice B en las que Maest utilizó o hizo utilizar la correspondencia o comunicación electrónica en respaldo del plan de estafa de los Demandados RICO. Maest también ha participado en la extorsión a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al fabricar pruebas falsas, en forma del Informe de Cabrera y sus anexos, utilizado en gran medida por los Demandados RICO en el Litigio de Lago Agrio y de forma más general en respaldo de su plan ilegal. Además, Maest ha participado en la extorsión y se comportó de manera fraudulenta al difundir declaraciones falsas sobre Chevron mediante su papel en la redacción tanto del Informe de Cabrera como la “evaluación” posterior de Cabrera de ese informe. Maest también extorsionó a Chevron y se comportó de manera fraudulenta al difundir y hacer que se difundan declaraciones falsas al público con respecto a Chevron, el Litigio de Lago Agrio y la independencia de Cabrera. Por último, Maest participó en actividades de obstrucción de la actividad judicial al hacer que se afirme falsamente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado que Cabrera era un perito independiente, que la firma Stratus estaba “asombr[ada]” de ver “simili[tudes]” entre su propio trabajo y el Informe de Cabrera cuando fue Stratus la que en realidad redactó la mayor parte de dicho informe, y al tergiversar aparte de eso la relación entre Cabrera y los Demandados RICO.

375. Cada uno de los Demandados RICO ha participado en múltiples actos preparatorios, según se describen en los párrafos 366-74, *supra*. La conducta de cada uno de los Demandados RICO descrita en los párrafos 345-74, *supra*, constituye un patrón de las actividades de extorsión según el significado del Artículo 1961(5) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

376. Chevron sufrió perjuicios en su negocio y en sus bienes por motivo de las violaciones del Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos cometidas por los Demandados RICO. Los perjuicios a Chevron causados por motivo de las violaciones del Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos incluye, entre otros, un perjuicio al crédito mercantil y el buen nombre de Chevron; el perjuicio al interés de Chevron en

los contratos firmados, incluido el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta de Liberación Final de 1998; y los honorarios de abogados y las costas judiciales para defenderse en un litigio falso objetivamente infundado e indebidamente motivado en Ecuador y en litigios relacionados en los Estados Unidos, incluidos los honorarios de abogados y las costas judiciales correspondientes para poner al descubierto el extendido fraude por parte de los Demandados RICO en el procedimiento judicial conforme al Artículo 1782.

377. Además, estos perjuicios a Chevron fueron el resultado directo, próximo y razonablemente previsible de violar el Artículo 1962 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Chevron es en última instancia víctima de la Empresa ilícita de los Demandados RICO. Chevron ha sido perjudicada en su negocio y en sus bienes y lo seguirá siendo por un monto que se determinará en la etapa de prueba.

378. Conforme al Artículo 1964(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Chevron tiene derecho a obtener reparación judicial de los Demandados RICO que consista en daños triplicados más las costas judiciales y honorarios de abogados.

379. Asimismo, Chevron tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como el Burford Group y sus entidades afines y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

SEGUNDO PETITORIO
(Conspiración para violar la ley RICO, Violación del Artículo 1962(c))
del Título 18 del Código de los Estados Unidos
(Contra todos los Demandados RICO)

380. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

381. Los Demandados RICO se han combinado, conspirado, confederado y convenido ilícitamente, a sabiendas e intencionadamente juntos y con otros para violar el Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, tal como se describe anteriormente, en violación del Artículo 1962(d) del Código de los Estados Unidos.

382. Conforme al saber y entender, los Demandados RICO sabían que formaban parte de una conspiración para cometer los actos preparatorios, y sabían que los actos preparatorios eran parte de dicha actividades de extorsión, y la participación y conformidad de cada uno de ellos eran necesarias para posibilitar la comisión de este patrón de actividades de extorsión. Esta conducta constituye una conspiración para violar el Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, en violación del Artículo 1962(d) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

383. Conforme al saber y entender, los Demandados RICO acordaron llevar a cabo o participar, directa o indirectamente, en la dirección, gestión u operación de los asuntos de la Empresa mediante un patrón de actividades de extorsión en violación del Artículo 1962(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

384. Cada Demandado conforme a la ley RICO estaba al tanto del plan de la Empresa para obtener bienes de Chevron y estuvo de acuerdo en facilitar el mismo. Era parte de la conspiración que los Demandados RICO y sus conspiradores cometieran un patrón de actividades de extorsión al llevar a cabo los asuntos de la Empresa, incluidos los actos de crimen organizado expuestos en los párrafos 345-74, *supra*.

385. Como resultado directo y próximo de la conspiración de los Demandados RICO, los actos de las actividades de extorsión de la Empresa, los actos manifiestos realizados en

respaldo de esa conspiración, y de las violaciones del Artículo 1962(d) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Chevron ha sufrido perjuicios en su negocio y en sus bienes, incluido el perjuicio al crédito mercantil y el buen nombre de Chevron; el perjuicio al interés de Chevron en los contratos firmados, incluido el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta de Liberación Final de 1998; y los honorarios de abogados y las costas judiciales para defenderse en un litigio falso objetivamente infundado e indebidamente motivado en Ecuador y en litigios relacionados en los Estados Unidos, incluidos los honorarios de abogados y las costas judiciales correspondientes para poner al descubierto el extendido fraude por parte de los Demandados RICO en el procedimiento judicial conforme al Artículo 1782.

386. Conforme al Artículo 1964(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Chevron tiene derecho a obtener reparación judicial de los Demandados RICO que consista en daños triplicados más las costas judiciales y honorarios de abogados.

387. Asimismo, Chevron tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

TERCER PETITORIO

(Fraude)
(Contra todos los Demandados)

388. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

389. Los Demandados y sus agentes falsearon, omitieron u ocultaron, a sabiendas, hechos sustanciales en sus escritos y declaraciones ante los tribunales de los Estados Unidos y ante la corte de Lago Agrio, en sus comunicaciones con organismos gubernamentales y funcionarios federales y estatales, y en sus comunicaciones con Chevron, los accionistas de Chevron, inversionistas, analistas y con los medios de difusión. Todos y cada uno de los Demandados se comportaron personalmente de esa manera o sabían, o deberían haber sabido, que los otros Demandados se comportaban así en su nombre. Estas declaraciones falsas se detallan en toda esta Demanda Modificada e incluyen los informes falsificados de Calmbacher, la verdadera autoría del Informe de Cabrera, la negación de todo contacto indebido con Cabrera, la supuesta independencia y neutralidad de Cabrera y su evaluación de responsabilidad y daños, la presentación de nuevos informes de “peritos” basados en el Informe de Cabrera fraudulento, así como los avales fraudulentos de dicho Informe.

390. Los Demandados realizaron estas declaraciones falsas sabiendo que las mismas eran sustancialmente falsas o que sus omisiones eran relevantes.

391. Los Demandados además realizaron estas declaraciones falsas u omisiones, o ambas cosas, con la intención de obtener fallos favorables de los tribunales de los EE. UU. y de Lago Agrio, presionar a los organismos estatales y federales de los EE. UU. a fin de promover investigaciones de Chevron y propagar información falsa sobre Chevron a los accionistas, inversionistas, analistas y los medios de difusión.

392. Chevron, los tribunales, organismos y funcionarios gubernamentales estatales y federales de los EE. UU., los accionistas de Chevron, los inversionistas, los analistas y los medios de difusión, y la Corte de Lago Agrio se basaron razonable y justificadamente en estas declaraciones falsas u omisiones, o ambas cosas, de carácter sustancial, por medio de su

aceptación de las declaraciones falsas y omisiones de los Demandados y de Cabrera y su falta de acción para tomar medidas correctivas significativas.

393. Como resultado directo, próximo y previsible del fraude de los Demandados, Chevron ha sido perjudicada, incluidos considerables daños y perjuicios pecuniarios, a su reputación y de otro tipo. Estos perjuicios incluyen considerables daños al crédito mercantil y el buen nombre de Chevron y los honorarios de abogados y las costas judiciales para defenderse en un litigio falso objetivamente infundado e indebidamente motivado en Ecuador y en litigios relacionados en los Estados Unidos, incluidos los honorarios de abogados y las costas judiciales correspondientes para poner al descubierto el extendido fraude por parte de los Demandados en el procedimiento judicial conforme al Artículo 1782.

394. Los Demandados han participado en la comisión de actos maliciosos, intencionados y fraudulentos y, debido a la naturaleza reprensible y vergonzosa de estos actos, Chevron tiene derecho al cobro de daños punitivos contra cada uno de los Demandados, y se les deberían conceder.

395. Asimismo, Chevron tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

CUARTO PETITORIO
(Interferencia ilícita con el Contrato)
(Contra todos los Demandados)

396. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

397. Los Demandados están y han estado al tanto de los contratos válidos y ejecutorios entre TexPet y la República de Ecuador, incluido el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta de Liberación Final de 1998. Estos contratos, a cambio de las acciones correctivas por parte de TexPet, eximieron a TexPet, Texaco, y a sus empleados, sucesores, mandantes y filiales de toda responsabilidad en relación con los daños ambientales en Ecuador.

398. Los Demandados han hecho intencionadamente, y han continuado haciéndolo, que la República de Ecuador viole reiteradamente el Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta de Liberación Final de 1998. Los Demandados, mediante influencia indebida y el falso Informe de Cabrera, persuadieron a la República de Ecuador para que se niegue a defender los derechos de Chevron y los de sus filiales conforme a los contratos, dicte indebidamente al poder judicial que Chevron sea responsabilizada en el Litigio de Lago Agrio y formule cargos penales contra los empleados de Chevron.

399. La sentencia de la Corte de Lago Agrio también constituye una grave y cualitativamente diferente violación del Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Acta de Liberación Final de 1998. Los Demandados hicieron intencionadamente que la República de Ecuador tome las medidas necesarias para conseguir esta sentencia fraudulenta.

400. Como resultado directo, próximo y previsible de las violaciones de Ecuador del Acuerdo de Conciliación de 1995 y del Acta de Liberación Final de 1998, Chevron se ha visto obligada a defenderse contra demandas por las cuales TexPet ya se había conseguido una exención de responsabilidad, lo cual ha causado considerables perjuicios pecuniarios, a la reputación y de otro tipo. Estos perjuicios incluyen daños a la reputación de Chevron y considerables honorarios de abogados y costas judiciales para defenderse y sus subsidiarias contra demandas anteriormente exoneradas en Ecuador, en litigios afines para intentar hacer

cumplir estos contratos en el arbitraje internacional, y en sus actividades de reconocimiento y ejecución en todo el mundo.

401. Los Demandados han participado en la comisión de actos maliciosos, intencionados y fraudulentos y, debido a la naturaleza reprensible y vergonzosa de estos actos, Chevron tiene derecho al cobro de daños punitivos contra cada uno de los Demandados, y se les deberían conceder.

402. Chevron también tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente contra los Demandados, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

QUINTO PETITORIO
(Entrada sin autorización en propiedad ajena)
(Contra todos los Demandados)

403. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

404. Como se expuso más arriba, los Demandados RICO han participado en un patrón de extorsión, connivencia, comisión de delitos y engaño con la intención de interferir con los bienes de Chevron, y los Demandantes de Lago Agrio se han beneficiado y seguirán beneficiándose del plan delictivo de los Demandados RICO mediante una sentencia fraudulenta.

Mediante estas acciones y al entablar un juicio fraudulento, fabricar pruebas falsas, interferir ilícitamente con el testimonio, difundir declaraciones engañosas a los tribunales, el público y funcionarios del gobierno de los EE. UU. y aparte de eso participar en la campaña de presión descrita en los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada, los Demandados han interferido y se han inmiscuido intencionadamente y sin justificación o consentimiento en el uso y gozo por parte de Chevron de sus fondos que estaban destinados para sus fines comerciales y de su reputación comercial y buen nombre.

405. Chevron ha sido perjudicada y se ha interferido con sus bienes y se le ha perturbado cuando sus bienes, recursos y fondos fueron necesariamente reasignados de sus usos previstos para defenderse contra el litigio fraudulento y la campaña engañosa en los medios de difusión llevada a cabo por los Demandados. Por ejemplo, Chevron se ha visto obligada por la conducta intencional e ilícita de los Demandados RICO a gastar fondos y recursos defendiéndose contra presentaciones fraudulentas en el Litigio de Lago Agrio, solicitando la reparación de agravios en el Arbitraje conforme al Tratado, poniendo al descubierto el fraude de los Demandados RICO mediante la presentación de pruebas en los Estados Unidos (presentación con la cual los Demandados RICO han interferido continuamente y la cual han prorrogado indebidamente, como se describió en la presente), respondiendo a informes falsos y engañosos en importantes publicaciones de los medios y transmisiones por radio o televisión que fueron inducidos por dichos Demandados, y manteniendo un esfuerzo constante por brindar información precisa sobre el Informe de Cabrera y otros aspectos del fraude de los Demandados RICO a los medios de difusión y directamente al público.

406. Chevron también ha sido perjudicada dado que la conducta de los Demandados RICO ha dañado la reputación de Chevron, lo cual ha interferido con el interés de Chevron en su aceptación por parte del público. La conciencia pública y las asociaciones positivas con las marcas Chevron y Texaco y los demás activos de la marca Chevron se encuentran entre los activos más valiosos de Chevron y ésta ha invertido recursos sustanciales en esas marcas. Los Demandados RICO han procurado intencionadamente reducir el valor de esos activos como parte

de su plan de extorsión. Como Donziger lo ha manifestado expresamente, un elemento clave de la estrategia de los Demandados RICO es imponer a Chevron “el costo de la reputación mancillada que tienen entre los medios”.

407. Los perjuicios sufridos por Chevron son los resultados directos, próximos y razonablemente previsibles de los actos de interferencia intencionada de los Demandados RICO con los fondos y el crédito mercantil de Chevron.

408. Los Demandados han participado en la comisión de actos maliciosos, intencionados y fraudulentos y, debido a la naturaleza reprensible y vergonzosa de estos actos, Chevron tiene derecho al cobro de daños punitivos contra cada uno de los Demandados, y se les deberían conceder.

409. Chevron también tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente contra los Demandados, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

SEXTO PETITORIO
(Enriquecimiento ilícito)
(Contra todos los Demandados)

410. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

411. Los Demandados RICO procuran obtener miles de millones de dólares de Chevron por medio de una sentencia fraudulenta en el Litigio de Lago Agrio. Los Demandados se han enriquecido sin causa, y siguen haciéndolo, por los beneficios obtenidos debido a la sentencia próxima misma.

412. Todo bien que los Demandados obtengan de Chevron será adquirido como resultado de la conducta ilícita, ilegal y fraudulenta de los Demandados, como se expone en la presente, incluida la prosecución del Litigio de Lago Agrio mismo.

413. Los principios de equidad y buena conciencia exigen que este Tribunal impida que los Demandados se beneficien con una ganancia de miles de millones de dólares y con todo beneficio producto del litigio fraudulento expidiendo, entre otras cosas, un mandamiento judicial preliminar y permanente contra los Demandados, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia de Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

SÉPTIMO PETITORIO
(Conspiración civil)
(Contra todos los Demandados)

414. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

415. Como se expuso anteriormente, los Demandados han cometido actos ilícitos civiles contra Chevron, incluidos actos de crimen organizado que dieron lugar a violaciones de la ley RICO, fraude, interferencia ilícita con contratos, entradas sin autorización en propiedad ajena y enriquecimiento ilícito.

416. Los Demandados acordaron participar en un plan común contra Chevron. Los Demandados participaron intencionadamente en la promoción de un plan o propósito para obtener bienes de Chevron. En respaldo de este plan o propósito, los Demandados cometieron actos manifiestos e ilícitos, incluidos actos de extorsión como se alega en la presente.

417. Como resultado directo y próximo de la conspiración de los Demandados, los actos manifiestos cometidos en respaldo de esa conspiración, y los actos ilícitos civiles cometidos contra Chevron, ésta ha sido perjudicada en su negocio y en sus bienes, y más perjuicios al negocio y los bienes de Chevron son inminentes o se amenaza a ésta con ellos.

418. Los Demandados han participado en la comisión de actos maliciosos, intencionados y fraudulentos y, debido a la naturaleza reprensible y vergonzosa de estos actos, Chevron tiene derecho al cobro de daños punitivos contra cada uno de los Demandados, y se les deberían conceder.

419. Chevron también tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente contra los Demandados, el cual debería concedérsele, que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia de Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

OCTAVO PETITORIO
(Violaciones del Artículo 487 de la Ley Judicial de Nueva York)
(Contra los Demandados Donziger, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC)

420. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

421. El Artículo 487 de la Ley Judicial de Nueva York estipula, en la sección pertinente, lo siguiente: “El abogado o consejero que . . . [s]ea culpable de algún engaño o de alguna confabulación, o consienta a cualquier engaño o confabulación, con la intención de engañar a un tribunal o a alguna de las partes. . . [s]erá culpable de un delito menor. Asimismo, además de la pena prescrita para ello por la ley penal, deberá a la parte perjudicada una indemnización triple, que podrá reclamarse por medio de una acción civil”.

422. Como se expuso anteriormente, Donziger, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC participaron en un patrón intencional de connivencia, comisión de delitos y engaño con la intención de engañar tanto a Chevron como a múltiples tribunales federales, incluido el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.

423. Donziger, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC participaron activamente en la preparación y presentación de múltiples documentos judiciales ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que incluían declaraciones falsas y engañosas sobre el Litigio de Lago Agrio y el Informe de Cabrera. Los Demandados Donziger y Law Offices of Steven R. Donziger presentaron estas declaraciones falsas a sabiendas con la intención de engañar a este Tribunal y a Chevron. Como se describe en los párrafos 304-10, *supra*, estas declaraciones falsas se presentaron en oposición a las solicitudes de presentación de pruebas de Chevron conforme al Artículo 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos y en respaldo de las acciones contra Chevron de los

Demandantes de Lago Agrio y la República de Ecuador solicitando la terminación del procedimiento arbitral.

424. Donziger y Law Offices of Steven R. Donziger interfirieron ilícitamente con el testimonio del consultor ambiental Mark Quarles en respaldo del plan de la Empresa. En 2007, Ecuador presentó una declaración por Quarles sobre la “independencia” del Informe de Cabrera en un proceso pendiente en el Distrito Sur de Nueva York, usando esa declaración para apoyar la aseveración de Ecuador de que el Litigio de Lago Agrio “se ha llevado a cabo de acuerdo con las normas de procedimiento del derecho ecuatoriano”. Quarles reconoció recientemente en un testimonio bajo juramento que Donziger le pagó por esta declaración jurada, y que no habría firmado la misma si Donziger le hubiera dicho la verdad sobre la relación que los Demandados RICO tenían con Cabrera. Al no revelar la verdad sobre el contacto indebido de los Demandados RICO con Cabrera y en cambio engañar deliberadamente a Quarles, Donziger empleó el engaño a sabiendas con la intención de engañar a Quarles, a este Tribunal y a Chevron.

425. Como resultado de la conducta engañosa y fraudulenta de Donziger, Law Offices of Steven R. Donziger y Donziger & Associates, PLLC tal como se describe en la presente, Chevron ha sufrido perjuicios por un monto que se establecerá en la etapa de prueba.

426. Por motivo de lo antedicho, Chevron tiene derecho a que se le adjudique una indemnización monetaria por daños y perjuicios contra Donziger, Law Offices of Steven R. Donziger, y Donziger & Associates, PLLC daños triplicados y honorarios razonables de abogados de conformidad con el Artículo 487 de la Ley Judicial.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

NOVENO PETITORIO

**(Solicitud de Sentencia Declarativa de que la Sentencia por la Corte de Lago Agrio contra Chevron no es exigible ni reconocible judicialmente)
(Contra el Frente y los “Demandantes de Lago Agrio”)**

427. Chevron realega e incorpora en la presente por referencia todos y cada uno de los párrafos anteriores de esta Demanda Modificada como si se expusieran por completo.

428. Chevron tiene derecho a una sentencia declarativa de que la sentencia de la corte de Lago Agrio no es exigible ni reconocible judicialmente conforme a la Ley de Sentencias Declarativas, Artículo 2201(a) del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

429. Una sentencia declarativa no intensificará indebidamente la fricción entre regímenes jurídicos soberanos ni usurpará la competencia debida de un tribunal extranjero ya que ningún tribunal tiene el derecho de imponer sentencias fraudulentas como la sentencia de la corte de Lago Agrio. Y un interdicto en contra de los Demandados nombrados en esta demanda y todos aquellos que actúan de común acuerdo con ellos no obligaría ni afectaría los tribunales ecuatorianos de ninguna forma, y no implica la interferencia con procedimiento alguno en ningún otro tribunal extranjero porque, *inter alia*, no hay procedimientos de reconocimiento o ejecución actualmente pendientes en tales tribunales.

430. Mediante esta demanda, Chevron procura se dicte una sentencia declarativa de que la sentencia de la corte de Lago Agrio no es exigible ni reconocible judicialmente, incluido, entre otros, según la Constitución de los Estados Unidos, los principios del “derecho consuetudinario” federal, los principios de respeto mutuo del “derecho consuetudinario” de Nueva York, y/o la Ley de Reconocimiento de Sentencias Monetarias de Países Extranjeros de Nueva York (C.P.L.R. de Nueva York, Artículo 5301, *et seq.*), por, entre otros, motivos de fraude, falta de procedimientos compatibles con el debido proceso, falta de tribunales imparciales, falta de competencia personal, contravención del orden público, que la sentencia está en conflicto con otra sentencia final y concluyente, que el procedimiento en el tribunal extranjero fue contrario a un acuerdo entre las partes bajo el cual la disputa de relevancia se resolvería de manera distinta de la de los procedimientos en dicho tribunal, y que la sentencia es una penalización no ejecutable.

431. Por motivo de los actos fraudulentos y los procedimientos judiciales fundamentalmente injustos descritos en esta Demanda Modificada que han dado lugar a la sentencia de Lago Agrio, ha surgido una controversia real y justiciable que ahora existe entre Chevron y los Demandantes de Lago Agrio y el Frente en cuanto a si la sentencia no es exigible

ni reconocible en los Estados Unidos y a establecer si los activos de Chevron están protegidos contra las acciones fraudulentas y actividades de extorsión de los Demandados. Las acciones de los Demandados RICO en nombre de los Demandantes de Lago Agrio a quienes ellos afirman representar han perjudicado a Chevron y amenazan con seguir perjudicándola. A menos que se resuelva la controversia entre las partes, los Demandantes de Lago Agrio y el Frente seguirán perjudicando a Chevron y procurarán obtener el reconocimiento y ejecución de la sentencia fraudulenta que los Demandados RICO han obtenido en nombre de los Demandantes de Lago Agrio.

432. Chevron no cuenta con un recurso jurídico adecuado. Una acción declaratoria es necesaria y útil para resolver y poner fin a la cuestión de si la sentencia fraudulenta de Lago Agrio es exigible y reconocible judicialmente y es el recurso mejor y más eficaz para concluir la controversia entre las partes en cuanto a esta cuestión y para eximir a Chevron de la incertidumbre costosa y perjudicial en torno a la ejecución y reconocimiento pendientes de la sentencia fraudulenta. Chevron tiene derecho a que se resuelva a la brevedad la cuestión de si la sentencia de Lago Agrio es exigible y reconocible judicialmente para poder seguir realizando sus negocios sin la amenaza de embargo, incautación de activos u otras acciones de ejecución que se derivan de una sentencia fraudulenta de enormes proporciones.

433. Asimismo, Chevron tiene derecho a un mandamiento judicial preliminar y permanente, el cual debería concedérsele, que prohíba al Frente y los Demandantes de Lago Agrio, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos de iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna —directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia de Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción. Por consiguiente, aunque no sean demandados nombrados en esta

demanda de Sentencia Declaratoria, los otros Demandados RICO y sus co-conspiradores, incluyendo los bufetes de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y los financiadores como Burford y Russell DeLeon, están sujetos a cualquier interdicto otorgado por este Tribunal en la medida en que actúen de común acuerdo con los demandados nombrados en esta demanda – los Demandados de Lago Agrio y el Frente.

POR LO CUAL, Chevron solicita se dicte la sentencia como se expone a continuación.

PETITORIO

Con respecto a los petitorios Primero y Segundo :

1. Daños y perjuicios según las pruebas presentadas en la etapa de prueba, triplicados conforme a la ley, Artículo 1964(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
2. Intereses de la condena por daños y perjuicios conforme a la ley; y
3. Honorarios razonables de abogados de Chevron conforme a la ley, Artículo 1964(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los petitorios Primero a Séptimo:

4. Daños y perjuicios conforme a las pruebas presentadas en la etapa de prueba;
5. Reparación judicial de acuerdo al régimen de equidad (*Equity*) según sea apropiado conforme a las leyes pertinentes, incluido, entre otros, la expedición de un interdicto temporario, un mandamiento judicial preliminar y otro permanente que prohíba a los Demandados, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos —incluidos potencialmente los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon—iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna —directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir cualquier sentencia de Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal

determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción; y

6. Solo en el caso de los petitorios Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo, daños punitivos en un monto que se determinará en la etapa de prueba.

Con respecto al Octavo petitorio:

7. Daños y perjuicios según las pruebas presentadas en la etapa de prueba, triplicados conforme a la ley, Ley Judicial 487; y

8. Honorarios razonables de abogados de Chevron y costas judiciales conforme a la ley, Ley Judicial 487.

Con respecto al Noveno petitorio:

9. Una declaración de que la sentencia contra Chevron en el Litigio de Lago Agrio no sea reconocible ni exigible judicialmente por todas y cada una de las razones expuestas en la presente; y

10. Reparación judicial de acuerdo al régimen de equidad (*Equity*) según sea apropiado conforme a las leyes pertinentes, incluido, entre otros, la expedición de un interdicto temporario, un mandamiento judicial preliminar y otro permanente que prohíba al Frente, los Demandantes de Lago Agrio, sus cesionarios y a todo aquel que actúe de común acuerdo con ellos—incluidos los otros Demandados RICO, los estudios jurídicos de Emery Celli, Motley Rice y Patton Boggs, y H5 y financiadores como Burford y Russell DeLeon— iniciar, llevar a cabo o fomentar en forma alguna—directa o indirectamente— todo intento de reconocer o hacer cumplir la sentencia del Lago Agrio en cualquier corte, tribunal u organismo administrativo en cualquier jurisdicción, en los Estados Unidos o en el extranjero, incluido todo intento de embargar o confiscar cualesquier activos de Chevron o de una filial de Chevron o de co-inversionistas en empresas conjuntas, ya sea en forma preventiva o de otro modo, hasta que este Tribunal determine los méritos y registre la sentencia sobre las demandas de Chevron contra los Demandados en esta acción o hasta cuando este Tribunal lo considere apropiado.

Con respecto a todos los petitorios:

11. Otras reparaciones judiciales de acuerdo al régimen de equidad (*Equity*) que el Tribunal considere que Chevron tenga derecho a recibir.

FECHA: 20 de abril de 2011

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

Por: _____ [firma]
Randy M. Mastro

200 Park Avenue
New York, New York 10166-0193
Teléfono: 212.351.4000

Scott A. Edelman
2029 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Teléfono: 310.552.8500

Andrea E. Neuman
3161 Michelson Drive
Irvine, California 92612
Teléfono: 949.451.3800

William E. Thomson
333 South Grand Avenue
Los Angeles, California 90071
Teléfono: 213.229.7000

Abogados del Demandante Chevron Corporation

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

----- X
CHEVRON CORPORATION,

Plaintiff,

v.

STEVEN DONZIGER, THE LAW OFFICES OF
STEVEN R. DONZIGER, DONZIGER &
ASSOCIATES, PLLC, PABLO FAJARDO
MENDOZA, LUIS YANZA, FRENTE DE
DEFENSA DE LA AMAZONIA A/K/A AMAZON
DEFENSE FRONT, SELVA VIVA SELVIVA
CIA, LTDA., STRATUS CONSULTING, INC.,
DOUGLAS BELTMAN, ANN MAEST, MARIA
AGUINDA SALAZAR, CARLOS GREFA
HUATATOCA, CATALINA ANTONIA
AGUINDA SALAZAR, LIDIA ALEXANDRA
AGUINDA AGUINDA, PATRICIO ALBERTO
CHIMBO YUMBO, CLIDE RAMIRO AGUINDA
AGUINDA, LUIS ARMANDO CHIMBO
YUMBO, BEATRIZ MERCEDES GREFA
TANGUILA, LUCIO ENRIQUE GREFA
TANGUILA, PATRICIO WILSON AGUINDA
AGUINDA, CELIA IRENE VIVEROS
CUSANGUA, FRANCISCO MATIAS
ALVARADO YUMBO, FRANCISCO
ALVARADO YUMBO, OLGA GLORIA GREFA
CERDA, LORENZO JOSÉ ALVARADO
YUMBO, NARCISA AIDA TANGUILA
NARVÁEZ, BERTHA ANTONIA YUMBO
TANGUILA, GLORIA LUCRECIA TANGUILA
GREFA, FRANCISCO VICTOR TANGUILA
GREFA, ROSA TERESA CHIMBO TANGUILA,
JOSÉ GABRIEL REVELO LLORE, MARÍA
CLELIA REASCOS REVELO, MARÍA
MAGDALENA RODRÍGUEZ BARCENES,
HUGO GERARDO CAMACHO NARANJO, JOSÉ
MIGUEL IPIALES CHICAIZA, HELEODORO
PATARON GUARACA, LUISA DELIA
TANGUILA NARVÁEZ, LOURDES BEATRIZ
CHIMBO TANGUILA, MARÍA HORTENCIA

11 Civ. 0691 (LAK)

AMENDED COMPLAINT

JURY TRIAL DEMANDED

VIVEROS CUSANGUA, SEGUNDO ÁNGEL :
AMANTA MILÁN, OCTAVIO ISMAEL :
CÓRDOVA HUANCA, ELIAS ROBERTO :
PIYAHUAJE PAYAHUAJE, JAVIER PIAGUAJE :
PAYAGUAJE, DANIEL CARLOS LUSITANDE :
YAIGUAJE, BENANCIO FREDY CHIMBO :
GREFA, GUILLERMO VICENTE PAYAGUAJE :
LUSITANTE, DELFÍN LEONIDAS PAYAGUAJE :
PAYAGUAJE, ALFREDO DONALDO :
PAYAGUAJE PAYAGUAJE, TEODORO :
GONZALO PIAGUAJE PAYAGUAJE, MIGUEL :
MARIO PAYAGUAJE PAYAGUAJE, FERMIN :
PIAGUAJE PAYAGUAJE, REINALDO :
LUSITANDE YAIGUAJE, LUIS AGUSTÍN :
PAYAGUAJE PIAGUAJE, EMILIO MARTÍN :
LUSITANDE YAIGUAJE, SIMON LUSITANDE :
YAIGUAJE, ARMANDO WILFRIDO PIAGUAJE :
PAYAGUAJE, and ÁNGEL JUSTINO :
PIAGUAJE LUSITANTE, :

Defendants. :

----- X

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
INTRODUCTION	1
PARTIES AND RELEVANT NON-PARTIES	4
Plaintiff	4
RICO Defendants.....	4
Non-Party Co-Conspirators	6
Remaining Defendants.....	12
SUBJECT MATTER JURISDICTION AND VENUE.....	13
PERSONAL JURISDICTION.....	13
FACTUAL BASIS FOR CLAIMS	19
A. Background	19
1. TexPet Participates in Ecuador’s State Oil Consortium and Negotiates Release From Liability in Return for Specified Remediation	19
2. U.S. Plaintiffs’ Lawyers Devise Baseless Litigation Against Chevron in Ecuador	28
B. The Conspirators Are Corrupting the Judicial Process to Extort a Payment From Chevron	31
1. Pressuring the Lago Agrio Court and Manufacturing Evidence.....	33
a. Implementing Pressure Tactics and Colluding With Ecuadorian Government Officials.....	33
b. Taking Advantage of a Weakened and Increasingly Corrupt Ecuadorian Judiciary.....	40
c. Manipulating and Falsifying Their Own Experts’ Findings to Corrupt the Judicial Inspection Process.....	42
(i) Inducing an Expert to Report Biased and False Results	43
(ii) Filing Falsified Expert Reports.....	46

	<u>Page</u>
d. Arranging Cabrera’s Appointment as Global Assessment Expert and Secretly Writing His Supposedly “Independent” Report.....	50
(i) Weeks Before the Court Appointed Cabrera, the RICO Defendants Meet With Him to Plan His “Independent” Expert Report.....	51
(ii) The Court Appointed Cabrera as Its “Independent” “Global Assessment Expert”.....	55
(iii) While Cabrera Staged Mock Inspections, the RICO Defendants and Their Co-Conspirators Secretly Ghostwrote His Report	56
(iv) The “Cabrera Report”: The RICO Defendants’ Repeated Fraud	66
(v) The RICO Defendants’ Fraudulent Endorsements of Their “Cabrera Report” and Procurement of Other Endorsements Through Misrepresentations.....	70
(vi) The RICO Defendants’ Payments to Cabrera for Work He Did Not Perform.....	74
(vii) The RICO Defendants’ Attempt to Launder the “Cabrera Report”	76
2. Colluding With the Republic of Ecuador to Bring Sham Charges Against Chevron’s Attorneys.....	79
3. Launching Public Attacks on Chevron Based on Misleading Statements and Lies to Force Chevron to Pay Up	85
a. The Fraudulent Media Blitz.....	85
b. Misrepresenting the “Independent” and “Neutral” Cabrera Report.....	92
c. The RICO Defendants Make False Statements to U.S. State and Federal Government Officials.....	95
d. The Conspirators Attempt to Manipulate Chevron’s Stock Price to Coerce a Favorable Settlement	98
e. The RICO Defendants Falsely Accuse Chevron of Murder to Generate Outrage and Force Chevron to Pay	103

	<u>Page</u>
C. The Conspirators’ Campaign of Lies and Obstruction in U.S. Courts	105
1. Attempting to Obstruct Chevron’s Discovery Proceedings by Making False and Misleading Statements Before U.S. District Courts and Courts of Appeals	106
a. The RICO Defendants’ Initial False Representations to U.S. Courts That They Had No Relationship With Cabrera and No Role in Preparing the “Cabrera Report”	108
b. The RICO Defendants’ Subsequent False and Misleading Statements in an Attempt to Justify and Excuse Their Emerging Misconduct	113
2. Making False Statements to Deceive New York Courts in Connection With Chevron’s Section 1782 Applications and Other Actions	121
3. Obstructing Judicial Proceedings by Tampering With Witnesses, Withholding Documents, and Making False Statements to This Court.....	123
D. Chevron Has Suffered Substantial Damages as a Result of the RICO Defendants’ Conspiracy, and Enforcement of the Corrupt Judgment in the Lago Agrio Litigation Would Deepen the Harm	127
CLAIMS FOR RELIEF	136
FIRST CLAIM FOR RELIEF (Violations of RICO, 18 U.S.C. § 1962(c))	136
SECOND CLAIM FOR RELIEF (Conspiracy to Violate RICO, Violation of 18 U.S.C. § 1962(d))	151
THIRD CLAIM FOR RELIEF (Fraud).....	153
FOURTH CLAIM FOR RELIEF (Tortious Interference With Contract)	154
FIFTH CLAIM FOR RELIEF (Trespass to Chattels).....	156
SIXTH CLAIM FOR RELIEF (Unjust Enrichment).....	158
SEVENTH CLAIM FOR RELIEF (Civil Conspiracy).....	159

	<u>Page</u>
EIGHTH CLAIM FOR RELIEF (Violations of New York Judiciary Law § 487)	160
NINTH CLAIM FOR RELIEF (Request for Declaratory Judgment That the Judgment by the Lago Agrio Court Against Chevron is Unenforceable and Non- Recognizable)	161
PRAYER FOR RELIEF	163

Plaintiff Chevron Corporation (“Chevron”) for its Amended Complaint against the Defendants listed below alleges as follows:

INTRODUCTION

1. Over the course of several years, defendant Steven Donziger and his co-defendants and co-conspirators have sought to extort, defraud, and otherwise tortiously injure plaintiff Chevron by means of a plan they conceived and substantially executed in the United States. It has been carried out by a U.S.-based enterprise comprised of, among others, U.S. plaintiffs’ lawyers led by Donziger; U.S. environmental consultants, led by Stratus Consulting, Inc., Ann Maest, and Doug Beltman; their Ecuadorian colleagues, led by Pablo Fajardo and Luis Yanza; and their front organizations, the Amazon Defense Front and Selva Viva. These conspirators are collectively referred to herein as the “RICO Defendants.”¹ Their co-conspirators in the enterprise include, among others, U.S. law firms and attorneys, such as Joseph Kohn of Kohn Swift & Graf, P.C., Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP, Motley Rice LLC and Patton Boggs LLP; U.S. environmental “activists,” such as Atossa Soltani, Amazon Watch, and Rainforest Action Network; U.S. public relations consultants, such as Karen Hinton; and additional financiers, such as Russell DeLeon and the Burford Group.

2. The enterprise’s ultimate aim is to create enough pressure on Chevron in the United States to extort it into paying to stop the campaign against it. The RICO Defendants have sought to inflict maximum “damage to [Chevron’s] reputation,” to put “personal psychological

¹ Forty-seven of the 48 Ecuadorian individuals who are named in the caption of the Lago Agrio complaint are also named as defendants here (the exception being one who is now deceased). Whether or not these 47 individuals were actively involved with the corrupt acts described in this Amended Complaint, or knew or should have known about them, the Lago Agrio Litigation and multiple acts in United States courts have been undertaken in their names, as well as in the name of the Amazon Defense Front, by the other defendants or those acting in concert with them on their behalves. Thus, they are vicariously liable for the torts of their agents undertaken on their behalves, can in no way benefit from a corruptly obtained judgment, and any relief Chevron procures by means of this action or other legal avenues applies equally to these 47 Ecuadorian individuals, who necessarily would thereby be acting in concert with their corrupt agents.

pressure [on] their top executives,” to disrupt Chevron’s relations with its shareholders and investors, to provoke U.S. federal and state governmental investigations, and thereby force the company into making a payoff.

3. To effect this plan, the RICO Defendants and their co-conspirators initiated a sham litigation in Lago Agrio, Ecuador (the “Lago Agrio Litigation”), claiming to seek money damages for “collective environmental rights” of the “affected” “communities” to remediate alleged petroleum contamination in Ecuador’s Oriente region. The Lago Agrio Litigation was directed and funded in significant part from the United States by United States residents, such as Donziger and Kohn. In prosecuting the Lago Agrio Litigation, the RICO Defendants and their co-conspirators have engaged in a series of corrupt acts. For example, they have submitted in the Lago Agrio Litigation fabricated evidence in the form of expert reports in the name of a U.S. environmental consultant, Dr. Charles Calmbacher, that he did not draft or approve. They also pressured U.S. environmental consultant David Russell to generate an inflated \$6 billion damages figure, which they never filed in Lago Agrio but instead touted in the press and, via co-conspirator Amazon Watch, submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission in an attempt to trigger a Sarbanes-Oxley investigation. And they arranged the appointment of Richard Stalin Cabrera Vega (“Cabrera”) as the Ecuadorian court’s sole expert to conduct a “global damages assessment.” They then secretly met with Cabrera to plan his report and—in the United States—ghostwrote the report and its annexes that Cabrera adopted “pretty much verbatim.” The U.S.-based consultant RICO Defendants drafted “comments” purporting to criticize “the Expert’s work and conclusions,” even though they had written his initial report themselves, and then ghostwrote “Cabrera’s” responses to their own “comments,” increasing his fake damage assessment to more than \$27 billion. In addition, the RICO Defendants have adopted a strategy to intimidate Ecuadorian judges, whom they have described as “mak[ing] decisions based on who they fear the most, not based on what the laws should dictate,” and they have colluded with the Republic of Ecuador to procure sham criminal charges against Chevron’s attorneys.

4. To pressure Chevron in the United States, the RICO Defendants have cited this fabricated evidence, Cabrera's supposedly "independent" report and these trumped-up criminal charges in false statements to the U.S. Congress, the U.S. Department of Justice, state and federal regulatory agencies, including the Securities and Exchange Commission, the U.S. media, and Chevron shareholders, among others. They have also made false statements to U.S. courts in an attempt to cover up their wrongdoing and to obstruct Chevron's discovery efforts. In fact, when U.S. discovery proceedings were poised last March to require disclosure of the RICO Defendants' collusion with Ecuadorian court expert Cabrera, the RICO Defendants sought to delay the truth from coming out. As one of the Ecuadorian lawyers told Defendant Donziger at the time, "the effects" of disclosure "are potentially devastating in Ecuador (apart from destroying the proceeding, all of us, your attorneys, might go to jail)." U.S. counsel agreed, admitting in a remarkable series of internal emails that "it appears not only that Cabrera and plaintiffs can be charged with a 'fraud' respecting the former's report, but that Stratus was an active conspirator." Undeterred, however, Donziger and other U.S. counsel then conspired to "cleanse" the Cabrera scandal by submitting to the Lago Agrio court last September new expert reports which largely relied on the tainted "Cabrera" report, but hiked the damages sought to \$113 billion.

5. The RICO Defendants' conduct violates the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 28 U.S.C. § 1961 *et seq.*, with predicate acts of extortion, mail and wire fraud, money laundering, obstruction of justice, and witness tampering, among others. In addition, Defendants' conduct constitutes common law fraud, unjust enrichment, intentional interference with contract, trespass to chattels, and civil conspiracy, among others. As a result, Defendants' misconduct entitles Chevron to injunctive relief precluding Defendants from attempting to enforce the judgment emanating from the proceedings in Lago Agrio, Ecuador, a declaratory judgment that the Lago Agrio judgment is unenforceable, damages, and other relief.

PARTIES AND RELEVANT NON-PARTIES

Plaintiff

6. Plaintiff Chevron Corporation (“Chevron”) is a Delaware corporation with its principal place of business located at 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583. Chevron is therefore a citizen of Delaware and California.

RICO Defendants

7. The defendants listed in paragraphs 8 through 17 are the individuals who have conspired to engage in a pattern of racketeering activity, have each committed numerous criminal acts as part of their scheme to defraud and extort Chevron, and have each participated in the operation or management of the criminal enterprise. These defendants shall be referred to herein as the “RICO Defendants.”

8. Defendant Steven Donziger (“Donziger”) is currently a “consulting” attorney for the Amazon Defense Front in the Lago Agrio Litigation and, as he described himself, “the person primarily responsible for putting [the Lago Agrio] team together and supervising it.” Donziger is an individual residing in New York, New York, with an intention to reside there indefinitely, and is therefore a citizen of the State of New York. Exercise of jurisdiction over Donziger is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 25, *infra*.

9. Defendant the Law Offices of Steven R. Donziger is a sole proprietorship located at 245 W. 104th Street, #7D, New York, New York 10025, and is therefore a citizen of the State of New York. Exercise of jurisdiction over the Law Offices of Steven R. Donziger is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 26, *infra*.

10. Defendant Donziger & Associates, PLLC is a professional limited liability corporation located at 245 W. 104th Street, #7D, New York, New York 10025, and is therefore a citizen of the State of New York. Exercise of jurisdiction over Donziger & Associates, PLLC is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 26, *infra*.

11. Defendant Pablo Fajardo Mendoza (“Fajardo”) is counsel of record for the Amazon Defense Front as well as purportedly counsel of record for the named plaintiffs in the

Lago Agrio Litigation. Fajardo is an individual residing in Ecuador, with an intention to reside there indefinitely, and is therefore a citizen of Ecuador. Exercise of jurisdiction over Fajardo is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 28, *infra*.

12. Defendant Luis Yanza (“Yanza”) is the co-founder of the Amazon Defense Front and is or has been the General Manager for Defendant Selva Viva. Yanza is an individual residing in Ecuador, with an intention to reside there indefinitely, and is therefore a citizen of Ecuador. Exercise of jurisdiction over Yanza is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 29, *infra*.

13. Defendant Frente de Defensa de la Amazonia, a/k/a the Amazon Defense Front or Amazon Defense Coalition (the “Frente” or the “Front”), is a “non-profit” organization purporting to represent the “plaintiffs” in the Lago Agrio Litigation. The Front is the designated “beneficiary” and “trustee” of a trust ordered by the judgment in the Lago Agrio Litigation (the “Judgment Trust”), and intends to administer the proceeds from the judgment entered against Chevron. The Front is a non-profit organization registered under the laws of Ecuador with offices located in the town of Nueva Loja (Lago Agrio) in the province of Sucumbíos, Ecuador. The Front is therefore a citizen of Ecuador. Exercise of jurisdiction over the Front is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 30, *infra*.

14. Defendant Selva Viva, a/k/a Selva Viva Selviva CIA, Ltda. (“Selva Viva”) is or was an Ecuadorian limited liability company with an office located at 1240 Shirys Street, Tumbaco, Ecuador. Selva Viva is therefore a citizen of Ecuador. Defendant the Front created Selva Viva to administer funds for the litigation. Defendant the Front controls Selva Viva, Defendant Donziger is or has been the President of Selva Viva, and Defendant Yanza is or has been the General Manager of Selva Viva. Exercise of jurisdiction over Selva Viva is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 31, *infra*.

15. Defendant Stratus Consulting, Inc. (“Stratus”) provided various environmental consulting services to the RICO Defendants, and was involved in producing the purportedly “independent” expert report filed in the Lago Agrio Litigation. Stratus is a private corporation

incorporated in Colorado with its main office at 1881 Ninth Street, Suite 201, Boulder, Colorado 80302, and is therefore a citizen of Colorado. Exercise of jurisdiction over Stratus is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 27, *infra*.

16. Defendant Douglas Beltman (“Beltman”) is an Executive Vice President of Stratus. Beltman is an individual residing in Colorado, with an intention to reside there indefinitely, and is therefore a citizen of Colorado. Exercise of jurisdiction over Beltman is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 27, *infra*.

17. Defendant Ann Maest (“Maest”) is a Managing Scientist at Stratus. Maest is an individual residing in Colorado, with an intention to reside there indefinitely, and is therefore a citizen of Colorado. Exercise of jurisdiction over Maest is reasonable and proper in this District for the reasons set forth in paragraph 27, *infra*.

Non-Party Co-Conspirators

18. Certain other non-party individuals and business entities played roles, direct or indirect, in the scheme to defraud and extort Chevron. Foremost among these individuals and business entities are the following:

- a. Joseph Kohn (“Kohn”) of the law firm Kohn Swift & Graf P.C. is an attorney who was a “consulting” attorney for the Amazon Defense Front in the Lago Agrio Litigation, and a primary source of funds for that litigation and for many of the illegal activities described in this Amended Complaint. Kohn is a resident of Pennsylvania.
- b. Kohn Swift & Graf P.C. (“Kohn Swift”) is a professional corporation located at One South Broad Street, Suite 2100, Philadelphia, Pennsylvania 19107. Kohn Swift has bankrolled the Lago Agrio Litigation as one of its “flagship cases” and funded the co-conspirators’ other illegal activities.
- c. Joshua Lipton (“Lipton”) is the President of Stratus and is a resident of Colorado. Together with the RICO Defendants, Lipton coordinated and oversaw the use of Stratus and other resources by the RICO Defendants to ghostwrite the Cabrera

Report and publicize its findings. To these ends, Lipton met with Donziger to discuss the RICO Defendants' plan to draft portions of the Cabrera Report and was included in various correspondence concerning Stratus's work in ghostwriting the Cabrera Report.

- d. David Chapman ("Chapman") is a Principal at Stratus and is a resident of Colorado. Chapman proposed drafting the Cabrera Report to Donziger, worked with Lipton and the RICO Defendants to coordinate the use of Stratus resources in the ghostwriting of the Cabrera Report, and participated in the subsequent obstruction of Chevron's efforts to uncover evidence of the fraud in U.S. court proceedings. He met with Donziger to discuss the RICO Defendants' plan to ghostwrite the Cabrera Report, signed Stratus's report endorsing the Cabrera Report, and perjured himself in a deposition when he testified that he had no reason to believe that Stratus had provided work product to Cabrera.
- e. William Powers ("Powers") is a subcontractor for Stratus and is a resident of California. Powers had responsibility for components of the fraudulent scheme to ghostwrite the Cabrera Report; he worked on two annexes of the Cabrera Report and drafted portions of Cabrera's supplemental report.
- f. Amazon Watch is a "non-profit" organization with its main office at 221 Pine Street, San Francisco, California 94104. Amazon Watch undertakes various projects ostensibly on behalf of environmental and human rights causes in the Amazon basin. In connection with the Lago Agrio Litigation, Amazon Watch applied its experience and resources in public, media and government relations to use the Cabrera Report and other false and fraudulent claims as the basis for the RICO Defendants' public pressure campaign against Chevron. With the Amazon Defense Front, Amazon Watch maintains at least one of the RICO Defendants' websites, chevrontoxico.com, and through that and other means, distributes false

and misleading statements as part of the RICO Defendants' extortionate scheme.

Kohn and Kohn Swift are significant financial supporters of Amazon Watch.

- g. Atossa Soltani ("Soltani") is the founder and executive director of Amazon Watch and, in that capacity, Soltani repeatedly distributed false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation as part of the RICO Defendants' extortionate scheme. She has also worked with Donziger, Yanza and other RICO Defendants to coordinate the public pressure campaign against Chevron, and to develop the RICO Defendants' strategy of manipulating the Lago Agrio court through intimidation and collusion with the Republic of Ecuador. Soltani is a resident of California.
- h. Rainforest Action Network ("RAN") is a "non-profit" organization with its main office at 221 Pine Street, San Francisco, California 94104. The organization specializes in boycotts, demonstrations, and other high-profile means of exerting pressure on corporations that it perceives threaten the world's rainforests. In close concert with Amazon Watch (with which it shares a headquarters location), RAN has organized demonstrations and boycotts against Chevron and distributed false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation. RAN also maintains at least one of the websites, changechevron.org, through which the RICO Defendants distribute false and misleading statements.
- i. Richard Stalin Cabrera Vega ("Cabrera") is a mining engineer and court expert in the Lago Agrio Litigation and a resident of Ecuador. The RICO Defendants secured his appointment as a purportedly independent court expert in the Lago Agrio Litigation. He was paid by the RICO Defendants and their co-conspirators for his cooperation in signing a fraudulent report ghostwritten by the RICO Defendants and their co-conspirators and he has repeatedly misrepresented his independence.

- j. Alberto Wray (“Wray”) is the former counsel of record for the plaintiffs in the Lago Agrio Litigation and is a resident of Washington, D.C. Wray previously served on Ecuador’s Supreme Court and has significant political connections in Ecuador. The RICO Defendants have used Wray’s connections to procure the sham criminal investigations of Chevron’s attorneys.
- k. Cristóbal Bonifaz (“Bonifaz”) of the Law Offices of Cristóbal Bonifaz was counsel of record for plaintiffs in two actions that were filed in the Southern District of New York, *Aguinda v. Texaco, Inc.*, No. 93 Civ. 7527 (S.D.N.Y. Nov. 3, 1993), and *Jota v. Texaco, Inc.*, No. 94 Civ. 9266 (S.D.N.Y. Dec. 28, 1994). Bonifaz is a resident of Massachusetts. Until in or about 2006, Bonifaz was also a consulting attorney for the Front, and purportedly the named plaintiffs, in the Lago Agrio Litigation.
- l. Juan Pablo Saenz (“Saenz”) is an Ecuadorian attorney who claims to represent the plaintiffs in the Lago Agrio Litigation and is a key intermediary between the RICO Defendants and the Republic of Ecuador. He has also signed false and misleading declarations filed in U.S. courts, including in the Southern District of New York.
- m. Julio Prieto (“Prieto”) is an Ecuadorian attorney who claims to represent the plaintiffs in the Lago Agrio Litigation. Prieto was a key participant in the RICO Defendants’ obstruction of justice in U.S. courts and he proposed litigation and public relations activities in the United States that the RICO Defendants undertook in order to obscure the evidence of their fraudulent scheme.
- n. Karen Hinton (“Hinton”) is a spokeswoman for the Front in the United States and is a resident of Virginia. Hinton assisted the RICO Defendants in the development of their public pressure campaign and, often in concert with Amazon Watch, has authored false and misleading press releases and media statements

about the Lago Agrio Litigation in furtherance of the RICO Defendants' extortionate scheme.

- o. E-Tech International ("E-Tech") is an environmental consulting firm located at 231 Las Mananitas, Santa Fe, New Mexico 87501. E-Tech provided various environmental consulting services to the RICO Defendants and helped the RICO Defendants secretly draft Cabrera's work plan and otherwise colluded with Cabrera.
- p. Burford Capital Limited, Burford Group Limited, Burford Group LLC, Burford Advisors LLC, and Treca Financial Solutions (collectively, "Burford") are associated entities in the business of litigation finance. Burford Capital Limited is registered in the Bailiwick of Guernsey and is publicly traded on the London Stock Exchange's AIM Market. Burford Group Limited is also a Guernsey corporation, and it operates in the United States through its subsidiary Burford Group LLC, which has its principal office at 1185 Avenue of the Americas, New York, New York 10036. Burford Advisors also has its principal office at 1185 Avenue of the Americas, New York, New York 10036. Treca Financial Solutions is registered in the Cayman Islands, and is a funding vehicle established by Burford to funnel financial support to the RICO Defendants. Burford began working with the RICO Defendants in 2009 and began funding the Lago Agrio Litigation in 2010.
- q. Russell DeLeon ("DeLeon") is a law school friend of Donziger's and entrepreneur whose businesses include PartyGaming Plc, an online gambling company headquartered in Gibraltar. DeLeon has funded the RICO Defendants' activities for several years, providing over \$1 million in support, and has made payments directly to Ecuadorians, including Fajardo and others. DeLeon has funneled some or all of this funding through Torvia Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar.

- r. Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP (“Emery Celli”) is a law firm located at 75 Rockefeller Plaza, 20th Floor, New York, New York 10019. Emery Celli has spearheaded the RICO Defendants’ obstruction and cover-up efforts in the United States, making numerous meritless filings in opposition to Chevron’s discovery proceedings in U.S. courts in an express effort to delay those proceedings and “buy time” for the RICO Defendants’ criminal scheme.
- s. Patton Boggs LLP (“Patton Boggs”) is a law firm with its principal office at 2550 M Street, NW, Washington, D.C. 20037. Patton Boggs has developed the RICO Defendants’ strategy for pursuing the assets of Chevron and its subsidiaries around the world on the basis of the fraudulent judgment in Ecuador, and has also been instrumental in the cover-up and obstruction of Chevron’s U.S. discovery proceedings.
- t. Motley Rice LLC (“Motley Rice”) is a law firm with an office located at One Corporate Center, 20 Church St., Hartford, Connecticut 06103. Motley Rice has participated in the obstruction of Chevron’s U.S. discovery efforts.
- u. H5 is a California corporation with its principal office at 71 Stevenson St., San Francisco, California 94105. H5 has participated in planning and implementing the RICO Defendants’ scheme, including the “cleansing” of the Cabrera Report and the obstruction of Chevron’s U.S. discovery efforts.

19. At all relevant times, each and every non-party named in paragraph 18 was acting in concert with, or as an agent for, one or more of the RICO Defendants and, further, as described in more detail below, conspired with one or more of the other RICO Defendants to perform the acts averred herein.

Remaining Defendants

20. The Lago Agrio Litigation was ostensibly brought on behalf of forty-eight named individual Ecuadorians,² referred to herein as the Lago Agrio Plaintiffs. At all relevant times, the Lago Agrio Plaintiffs have been individuals residing in the Republic of Ecuador. The Lago Agrio Plaintiffs are those individuals identified in Appendix A to this Amended Complaint, which is incorporated by reference as if set forth herein in its entirety.

21. The Lago Agrio Plaintiffs' Complaint seeks no individual damages in the Lago Agrio Litigation, and the signatures for twenty of the Lago Agrio Plaintiffs on the power of attorney form submitted along with the complaint in the Lago Agrio Litigation are the product of forgery. Defendant Fajardo, in a sworn declaration submitted to this Court in January 2011, has affirmed that he represents the Lago Agrio Plaintiffs as their attorney in the Lago Agrio Litigation and is authorized to pursue and defend their interests in other domestic and foreign courts. According to Fajardo, the Lago Agrio Plaintiffs gave him "the power to represent them" in the Lago Agrio Litigation in 2006. At that time, they purportedly signed documents appointing him as their "Common Attorney," which required him "to undertake all appropriate legal action to defend the[ir] rights" and authorized him "to appear on their behalf in connection with the Lago Agrio Litigation and if necessary to delegate this power to others." Subsequently, in November 2010, "at least forty-one (41)" of the Lago Agrio Plaintiffs allegedly signed notarized powers of attorney "affirming" Fajardo's "powers to represent them in pursuit and defense of their interests before the courts in Ecuador and in all other countries, including the United States." Moreover, in these powers of attorney, the Lago Agrio Plaintiffs purportedly "ratified and approved each and every action to date performed by [Fajardo] or by any other persons authorized by [Fajardo] to act in defense of the [Lago Agrio] Plaintiffs' interests in the Lago Agrio Litigation and in all other related actions." In his declaration, Fajardo represented

² One of these individuals, Esteban Lusitante Yaiguaje, is now deceased and thus is not named as a defendant in this case.

that the Lago Agrio Plaintiffs who signed the powers of attorney in November 2010 “affirmed that as lead counsel I have the authority to make and sign contracts, hire and retain legal consultants, and designate to others all or part of my power to represent the [Lago Agrio] Plaintiffs.” He also stated that he retained several U.S. law firms to assist with the representation of the Lago Agrio Plaintiffs, including Patton Boggs, Emery Celli, and Motley Rice.

22. Whether or not the individual Lago Agrio Plaintiffs were or are aware of the fraud that has been perpetrated by the RICO Defendants and their co-conspirators in their names, the Lago Agrio Plaintiffs cannot benefit from the fraud and corrupt acts perpetrated ostensibly on their behalf.

SUBJECT MATTER JURISDICTION AND VENUE

23. This Court has subject matter jurisdiction over Chevron’s claims under 28 U.S.C. §§ 1331 and 1332, and under 18 U.S.C. § 1964(c). Chevron’s first claim for relief arises under 18 U.S.C. § 1961 *et seq.*, as hereinafter more fully appears. There is also complete diversity of citizenship between the parties, and the amount in controversy exceeds \$75,000, exclusive of interest and costs. Chevron’s state law claims arise out of the same case or controversy as its federal law claims, as all claims in this action arise out of a common nucleus of operative facts. Thus, this Court also has supplemental jurisdiction over Chevron’s state law claims under 28 U.S.C. § 1367.

24. Venue is proper in this District under 28 U.S.C. § 1391(b)(2), as a substantial number of the events giving rise to this action occurred in this District, and also under 18 U.S.C. § 1965.

PERSONAL JURISDICTION

25. Exercise of jurisdiction over Defendant Donziger is reasonable and proper in this District because Donziger is a citizen of the State of New York and because he conducts extensive business activities within the State. Donziger is the sole proprietor of the Law Offices of Steven R. Donziger, which is located and does business in New York. Through his activities in New York, Donziger has served as the ringleader in the enterprise to defraud and extort

Chevron, working closely with the other RICO Defendants in this action. For Chevron's claims for violations of 18 U.S.C. § 1962 and New York state law, exercise of jurisdiction over Donziger is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(a) and N.Y. C.P.L.R. 301.

26. Exercise of jurisdiction over the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC is reasonable and proper in this District because the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC are citizens of New York, and because they conduct extensive business activities in the State. Further, by and through the activities of Donziger described above, the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates PLLC have served as key players in the conspiracy against Chevron. For Chevron's claims for violations of 18 U.S.C. § 1962 and New York state law, exercise of jurisdiction over the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(a) and N.Y. C.P.L.R. 301.

27. Defendants Stratus, Beltman, and Maest are all residents of the United States. For Chevron's claims for violations of 18 U.S.C. § 1962, the exercise of jurisdiction over each of these defendants is proper in this District pursuant to 18 U.S.C. § 1965(b). The ends of justice require application of the nationwide service provisions of 18 U.S.C. § 1965(b) because there is no district in which all of the RICO Defendants could otherwise be tried together. For Chevron's claims under New York state law, exercise of jurisdiction over Defendants Stratus, Beltman, and Maest is proper pursuant to N.Y. C.P.L.R. 301 and 302. Through their agents and co-conspirators, Defendants Stratus, Beltman, and Maest have transacted and continue to transact business in the State of New York, and there is a substantial nexus between Defendants Stratus, Beltman, and Maest's purposeful availment of the New York forum and Chevron's claims.

28. Exercise of jurisdiction over Fajardo is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(b) and N.Y. C.P.L.R. 301 and 302. Fajardo has transacted business and engaged in tortious conduct in the United States and New York which gives rise in part to Chevron's claims. Among other things, Fajardo (i) met with his co-conspirators in the United States multiple times to plan the ghostwriting of the Cabrera Report, including trips to New York to meet with Donziger and to

Boulder, Colorado; (ii) acted in the United States and New York to conceal the conspiracy and fraud, including falsely testifying in *In re Application of Chevron*, Case No. 10 MC 00002 (S.D.N.Y. Aug. 6, 2010) that Cabrera was “independent” while knowing the RICO Defendants’ role in Cabrera’s appointment and reports (*see id.*, Dkt. 31 at Ex. 46); (iii) solicited and obtained funds for the Lago Agrio Litigation while in the United States and, on information and belief, in New York; and (iv) caused to be filed in the Southern District of New York an action on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs to stay the international arbitration that Chevron initiated pursuant to the United States-Ecuador Bilateral Investment Treaty (the “Treaty Arbitration”), *Yaiguaje et al. v. Chevron Corp. and Texaco Petroleum Co.*, No. 10 CV 316 (LBS) (S.D.N.Y. Jan. 14, 2010) (“*Yaiguaje*”). Fajardo has also engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts the effects of which Fajardo knew and intended would be felt in the United States and New York. For example, Fajardo has (i) directed a multitude of phone calls, emails, and other forms of communication to his co-conspirators in the United States and New York for the purpose of planning and carrying out their conspiracy and fraud; and (ii) participated in and orchestrated campaigns in the United States and New York to influence United States federal officials, State of New York officials, financial analysts, investors, and stockholders for the purpose of extorting money from Chevron. Also, as set forth more fully herein, Fajardo’s co-conspirators and agents have engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts in the United States and New York. Fajardo was aware of the effects in the United States and New York of those acts, the activities of Fajardo’s co-conspirators and agents were to the benefit of Fajardo, and his co-conspirators and agents were working at the direction, under the control, at the request, and/or on behalf of Fajardo in committing those acts.

29. Exercise of jurisdiction over Yanza is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(b) and N.Y. C.P.L.R. 301 and 302. Yanza has transacted business and engaged in tortious conduct in the United States and New York which give rise in part to Chevron’s claims. Among other things, Yanza (i) met with his co-conspirators in the United States multiple times to plan the ghostwriting of the Cabrera Report, including trips to New York to meet with Donziger and to

Boulder, Colorado; (ii) caused funds to be transferred within the United States and from the United States to Ecuador in furtherance of the RICO Defendants' wrongful activities; (iii) attended Chevron shareholder meetings to attempt to pressure Chevron's stockholders and board of directors in furtherance of the conspiracy; (iv) solicited and received funds for the Lago Agrio Litigation while in the United States and, on information and belief, in New York and from persons in the United States and New York directly and through agents by other means for the purpose of carrying out the conspiracy and fraud; (v) attempted to conceal the conspiracy and fraud by making false and misleading statements in the United States and elsewhere; and (vi) caused to be filed in the Southern District of New York the *Yaiguaje* action on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs to stay the Treaty Arbitration initiated by Chevron. Yanza has also engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts the effects of which Yanza knew and intended would be felt in the United States and New York. For example, Yanza has (i) directed multitudes of phone calls, emails, and other forms of communication to his co-conspirators in the United States and New York for the purpose of planning and carrying out their conspiracy and fraud; and (ii) participated in and orchestrated campaigns in the United States and New York to influence United States federal officials, State of New York officials, financial analysts, investors, and stockholders for the purpose of extorting money from Chevron. Also, as set forth more fully herein, Yanza's co-conspirators and agents have engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts in the United States and New York. Yanza was aware of the effects in the United States and New York of those acts, the activities of Yanza's co-conspirators and agents were to the benefit of Yanza, and his co-conspirators and agents were working at the direction, under the control, at the request, and/or on behalf of Yanza in committing those acts.

30. Exercise of jurisdiction over the Front is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(b) and N.Y. C.P.L.R. 301 and 302. The Front has been designated beneficiary and trustee in the Lago Agrio Litigation and stands to benefit from the fraudulent judgment entered against Chevron. Yanza is the Front's co-founder, Fajardo is a leader within the organization, and at all times relevant herein Yanza and Fajardo were acting as the Front's co-conspirators, agents

and/or alter egos in perpetrating the conspiracy and fraud against Chevron. By and through its co-conspirators, agents and/or alter egos Yanza and Fajardo, the Front has transacted business and engaged in tortious conduct in the United States and New York which give rise in part to Chevron's claims, as set forth more fully above. The Front has also engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts the effects of which the Front knew and intended would be felt in the United States and New York. Among other things, the Front: (i) directed multitudes of phone calls, emails, and other forms of communication to its co-conspirators in the United States and New York for the purpose of planning and carrying out their conspiracy and fraud; (ii) maintains or causes to be maintained a website intentionally directed towards a U.S.-based audience called www.texacotoxico.org through which the Front has attempted to conceal the conspiracy and fraud by making false and misleading statements and, on information and belief, raised funds from the United States and New York for the purpose of carrying out the conspiracy and fraud; (iii) solicited and received funds from persons in the United States and New York directly and through agents by other means for the purpose of carrying out the conspiracy and fraud; (iv) used Amazon Watch as its public relations firm in the United States to publish false and misleading statements to conceal the conspiracy and fraud; and (v) hired a Washington, D.C.-based lobbyist to pursue its and its co-conspirators' interests before the U.S. Congress. Also, as set forth more fully herein, the Front's co-conspirators and agents have engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts in the United States and New York. The Front was aware of the effects in the United States and New York of those acts, the activities of the Front's co-conspirators and agents were to the benefit of the Front, and its co-conspirators and agents were working at the direction, under the control, at the request, and/or on behalf of the Front in committing those acts.

31. Exercise of jurisdiction over Selva Viva is proper pursuant to 18 U.S.C. § 1965(b) and N.Y. C.P.L.R. 301 and 302. Donziger is or has been the President of Selva Viva, Yanza is or was the General Manager of Selva Viva, and at all times relevant herein Donziger, Yanza and Fajardo were acting as Selva Viva's co-conspirators, agents and/or alter egos in

perpetrating the conspiracy and fraud against Chevron. By and through its co-conspirators, agents and/or alter egos Donziger, Yanza and Fajardo, Selva Viva has transacted business and engaged in tortious conduct in the United States and New York which give rise in part to Chevron's claims, as set forth more fully above. Selva Viva has also directly transacted business and engaged in tortious conduct in the United States which give rise in part to Chevron's claims. The RICO Defendants use or have used Selva Viva as a conduit for funding their wrongful activities in Ecuador. Selva Viva has solicited and received several payments from Kohn Swift in the United States in order to fund the Lago Agrio Litigation, and some of those payments were subsequently channeled to Cabrera from a Selva Viva bank account. Also, as set forth more fully herein, Selva Viva's co-conspirators and agents have engaged in intentional, wrongful, illegal, and/or tortious acts in the United States and New York. Selva Viva was aware of the effects in the United States and New York of those acts, the activities of Selva Viva's co-conspirators and agents were to the benefit of Selva Viva, and its co-conspirators and agents were working at the direction, under the control, at the request, and/or on behalf of Selva Viva in committing those acts.

32. Exercise of jurisdiction over the Lago Agrio Plaintiffs is proper pursuant to N.Y. C.P.L.R. 301 and 302 because the Lago Agrio Plaintiffs have purposefully availed themselves of the New York forum by purportedly engaging New York attorneys and instituting and otherwise participating in related litigation in this District. The Lago Agrio Plaintiffs have reportedly hired Defendant Donziger, a New York attorney, to represent their interests in the Lago Agrio Litigation. Additionally, they have reportedly hired co-conspirator Emery Celli, a New York law firm, to represent them in litigation pending in this Court and elsewhere in the United States. On January 14, 2010, the Lago Agrio Plaintiffs were the named plaintiffs in an action filed in this Court against Chevron to stay the Treaty Arbitration that Chevron initiated to obtain relief for the Republic of Ecuador's violations of its obligations under the United States-Ecuador Bilateral Investment Treaty, investment agreements, and international law, including Ecuador's failure to abide by the negotiated settlement and releases relating to the remediation of the former

concession area. *See Yaiguaje*, No. 10 CV 316 (LBS) (S.D.N.Y. Jan. 14, 2010), Transcript of Hearing, Mar. 10-11, 2010. The Lago Agrio Plaintiffs have also intervened in Chevron’s 28 U.S.C. § 1782 proceedings in this Court (and in other federal district courts) by filing various motions and briefs as “interested parties.” The Lago Agrio Plaintiffs’ involvement in the 1782 proceedings in this Court caused Judge Kaplan to specifically find that “they [have] subjected themselves to the personal jurisdiction of this Court.” *In re Application of Chevron*, 10 MC 00001 (LAK) (S.D.N.Y. July 22, 2010), 9/7/2010 Order at 23. There is a substantial nexus between the Lago Agrio Plaintiffs’ purposeful availing of the New York forum and Chevron’s claims under New York state law. For such claims, exercise of jurisdiction over the Lago Agrio Plaintiffs is therefore proper pursuant to N.Y. C.P.L.R. 301-02.

FACTUAL BASIS FOR CLAIMS

A. Background

33. This Amended Complaint details how a group of U.S. plaintiffs’ lawyers, together with U.S. and Ecuadorian co-conspirators, set about fraudulently exploiting images of environmental degradation in rural Ecuador to extort money from a U.S. company in a criminal scheme. Many of the quotations included in this Amended Complaint were captured in video footage in the making of *Crude: The Real Price of Oil*, a film commissioned by the RICO Defendants and their co-conspirators in furtherance of their criminal scheme. Others come directly from the RICO Defendants’ own emails, letters and other documents.

1. TexPet Participates in Ecuador’s State Oil Consortium and Negotiates Release From Liability in Return for Specified Remediation

34. In 1964, Ecuador granted oil exploration and production rights (known as a “concession”) in a designated part of the Oriente region of Ecuador to Texaco Petroleum Company (“TexPet”) and the Ecuadorian Gulf Oil Company (“Gulf”), which then formed what came to be known as the consortium. Ecuador’s state-owned oil company, Petroecuador (formerly known as Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana or CEPE), became a stakeholder in the consortium in 1974 and, on December 31, 1976, it became the 62.5% majority stakeholder.

35. When the consortium began its exploration activities, TexPet and Gulf agreed that TexPet would serve as the operator on behalf of both companies. As operator, and per the terms of the 1965 Napo Joint Operating Agreement that governed the internal workings of the consortium, TexPet was “in direct charge of carrying out the [p]arties’ work obligations and performing other duties” with their prior consent and approval. Each party was obligated to provide operating expenses and investment funds according to its ownership interest in the consortium. TexPet was required to render its services as operator at cost and, in consideration therefor, was to be indemnified and held harmless by the parties for any claims brought by third parties arising out of or related to its performance as operator.

36. Once Petroecuador entered the consortium and after it became the majority owner, TexPet continued to serve as operator. As majority owner, however, Petroecuador contributed 62.5% of the consortium’s investments and operating costs and approved all annual work programs and budgets. Petroecuador retained oversight of TexPet’s activities as operator beyond the annual budgeting cycles by approving projects as they were implemented and answering monthly “cash calls” with the funds necessary for each month’s operating expenses.

37. TexPet continued in the role of operator until 1990 when Petroecuador assumed operations. In 1992 when the concession contract expired, Petroecuador took over 100% ownership of the former consortium fields and facilities. TexPet has not operated any oilfields in Ecuador since 1990, and has had no ownership interest in any oilfield operations in Ecuador since 1992. From 1992 to the present, Petroecuador has been the sole owner and operator of the former concession area.

38. Before its termination, the consortium’s activities generated over US\$23 billion. The Republic of Ecuador retained 97.3% of this amount, however, through an array of income taxes, royalties, contributions for domestic consumption, and gross profit on Petroecuador’s share. The money generated by the consortium represented more than 50% of Ecuador’s gross national product during that period.

39. TexPet's total profits over the life of the consortium were a small fraction of those realized by Ecuador—less than US\$500 million.

40. Since Petroecuador took over operational control in 1990, it has drilled 414 new wells—almost 30% more than were drilled during TexPet's 25 years as the operator—and, according to Ecuadorian public media sources, was responsible for more than 1,400 disclosed spills from 2000 to 2008 alone. Petroecuador's environmental record has prompted Ecuador's current President, Rafael Correa to comment that Petroecuador “has dreadful environmental management practices.”

41. Defendant Fajardo—before he realized that such candor might undercut the conspiracy's attempts to extort Chevron—also spoke out against Petroecuador's environmental record:

[Petroecuador is] unreliable because what Petro[ecuador] says is one thing and what it does is the complete opposite. Since Texaco left here, Petro[ecuador] has inflicted more damage and many more disasters than Texaco itself. But they'd never, ever say that. So there's one spill after another; there's broken pipes, there's contamination of wetlands, of rivers, of streams in great magnitude. But since it's a state-owned company, since it's the same people involved in the laws and all, no one says a thing.

42. When Petroecuador took over as operator of the consortium in 1990, TexPet consented to Ecuador's request that it collaborate with Petroecuador to conduct an environmental audit of the consortium's oil fields. TexPet insisted, however, that Petroecuador, as majority owner of the consortium, share responsibility for any necessary remediation that the audit identified in the same manner as the parties had shared all operating costs. Ecuador acknowledged that TexPet was responsible for only its 37.5% share of the costs of remediating the environmental impact of the consortium's operations, and the parties recognized that TexPet could not be held responsible for the environmental impact of oil field operations conducted after its concession rights expired in 1992.

43. In 1994, Ecuador publicly rejected the preliminary findings of the independent, joint audit and threatened to bring suit against TexPet for injuries to Ecuador's environment.

Ecuador further informed TexPet that Petroecuador would not participate with TexPet in conducting environmental remediation because it lacked the necessary money to fund its share of the work. Thus, instead of identifying remediation work to be funded jointly, Ecuador insisted that the parties identify a set of remediation obligations corresponding to TexPet's share of responsibility.

44. On or about December 14, 1994, Ecuador, Petroecuador, and TexPet entered into a Memorandum of Understanding ("MOU") in which they agreed to define TexPet's "Scope of the Work of Environmental Reparation" with respect to the "biotic" and "abiotic" environment, and also secured from TexPet a commitment to "carry out socio-economic compensation projects in order to address problems . . . stemming from the oil operations. . . ." This compensatory effort would accrue to the benefit not of the government in a narrow sense, but rather of the larger population. In fact, elsewhere, the document expressly underscores that these projects had to "tak[e] into consideration the inhabitants of the Oriente Region." In exchange, the MOU obligated Ecuador to "negotiate the full and complete release of TexPet's obligations for environmental impact arising from the operations of the Consortium."

45. The MOU furthered Ecuador's own constitutional duties toward its citizens. Under Article 19(2) of the extant Constitution, the authority to vindicate any environmental rights on behalf of the Ecuadorian people was held exclusively by the government of Ecuador. According to the Ecuadorian Ambassador to the United States, "It is the Republic's *obligation* to become involved in matters that directly impact the welfare of Ecuadorian citizens, territory and natural resources, and the very sovereignty of the Republic of Ecuador. The recent agreement between the Republic, Petroecuador and Texaco Petroleum Company, which was reviewed and supported by the Ecuadorian Congress, . . . demonstrates the Republic's determination to fulfill this obligation."

46. Thus, as TexPet was winding down its operations, an Environmental Committee of the Ecuadorian Congress insisted that any settlement agreement between TexPet and Ecuador "indemnify or alleviate the negative environmental effects caused . . . to the Ecuadorian

population living in [the] Amazonian region,” and stressed, to that end, that TexPet had to provide compensation in the “biotic, abiotic and socio-economic areas,” and, with an “atmosphere of consensus[,] . . . tak[e] into consideration the inhabitants and authorities in the region.” TexPet and the representatives of Ecuador and Petroecuador “t[ook] into consideration” the comments and suggestions from the Ecuadorian Congress. Local politicians from the Oriente region also played what they saw as a “leading role as the interested party” in the “negotiations to reach an understanding between Texaco and the Ecuadorian Government regarding environmental remediation in the Amazon.”

47. Defendant the Front also openly and actively participated in the negotiation of this settlement between TexPet and Ecuador. Defendant Yanza, President of the Front, sought an “audience” with the President of Ecuador “to explain directly the situation” of the people of the Oriente whom he purported to represent, so that their situation “may be taken into consideration when signing the agreements with [TexPet].” Yanza later submitted his group’s “proposal” for defining the scope of work, which he claimed represented “far-reaching and vigorous work to reach consensus” among the population. Reflecting this cooperation with groups like the Front, Ecuadorian officials recently repeated, under oath, that the negotiations leading to these settlements were “open for all those who wanted to attend,” and members of many environmental organizations, including the Front, did attend. These governmental officials saw themselves as the “facilitator[s]” of an open dialogue between the communities and TexPet, and followed orders from the “National Congress to take into account the problems that Amazonian groups were having.” As a result of this dialogue, the environmental groups were “behind everything that was being done,” leading to a final instrument that considered and accounted for the interests of individuals and communities in the concession areas. When the MOU was opened to public scrutiny, and while the Scope of Work was being defined, the Front was one of the groups that wrote to the Ministry of Energy and Mines to express their “agree[ment] that the process of understanding [between Ecuador and TexPet] and the immediate performance of the environmental remediation work should continue.”

48. Pursuant to the terms of the MOU, on or about March 23, 1995, Ecuador, Petroecuador, and TexPet executed a precise “Scope of Work” identifying the particular sites and projects that would constitute TexPet’s remediation obligations, consistent with TexPet’s former one-third ownership share of the consortium. The “Scope of Work” required the performance of not only a vast remediation effort by TexPet, but also a number of socioeconomic projects, including the payment of \$1 million to a redress fund to “be used for the rehabilitation of the areas affected, establishing, together with the population, viable systems for the use of renewable natural resources, and . . . to improve the quality of life.” The Ministry of Energy and Mines received that money, and was entrusted to administer the fund “for the benefit of the Indigenous Communities of the Amazonian region.” TexPet also financed the establishment of education and medical centers in the Oriente, together with “logistical support” for those centers such as ambulances and aircraft.

49. Following the execution of the Scope of Work, on or about May 4, 1995, Ecuador, Petroecuador, and TexPet executed a settlement agreement (the “1995 Settlement Agreement”). In consideration for its release from any future responsibility for environmental impacts, TexPet agreed to perform the defined “Environmental Remedial and Mitigation Work” and provide “socio-economic compensation” for the affected areas. The 1995 Settlement Agreement immediately “release[d], acquit[ted] and forever discharge[d]” TexPet from all claims based on “Environmental Impact” from the consortium’s activities at sites not included in the Scope of Work and provided that TexPet would be released from any “Environmental Impact” associated with the sites covered by the Scope of Work upon completion of the prescribed remediation at each site. In other words, because Petroecuador continued to operate the oil fields, it assumed any residual or future responsibility, recognizing both its share of the past, as the former consortium’s majority owner, and its control over the future, as sole owner and operator going forward.

50. The settlement was purposefully broad. “Environmental Impact” was defined as “[a]ny solid, liquid or gaseous substance present or released into the environment in such

concentration or condition, the presence or release of which causes, or has the potential to cause harm to human health or the environment.” Reflecting this breadth of coverage, the release “includ[ed] but [was] not limited to consequences of all types of injury that the Government or Petroecuador may allege concerning persons, properties, business, reputations, and all other types of injuries that may be measured in money, including but not limited to, trespass, nuisance, negligence, strict liability, breach of warranty, or any other theory or potential theory of recovery.” The claims expressly released also included all “causes of action under Article 19-2 of the [1978] Political Constitution of the Republic of Ecuador,” which, as discussed in paragraph 45, *supra*, placed the “duty [on] the State” to “oversee the preservation of nature” and guarantee all Ecuadorians “[t]he right to live in a pollution-free environment.” The 1995 Settlement Agreement was signed by Abril Ojeda, Ecuador’s Minister of Energy and Mines; Federico Vintimilla Salcedo, Executive President of Petroecuador; Ricardo Reis Veiga, Vice President of TexPet; and Rodrigo Pérez Pallares, legal representative of TexPet.

51. The 1995 Settlement Agreement also obligated TexPet “to continue negotiations” with certain municipalities in eastern Ecuador that had also brought suit against the company. Filing materially identical complaints, the municipalities of Joya De Los Sachas, Orellana, Shushufindi, and Lago Agrio had each sued TexPet in 1994 in order to protect “the health of [their] citizens, the rivers of [their] communities.” These municipalities purported to fulfill their quasi-sovereign duties to assist the Republic in meeting its environmental obligations to all citizens, and to exercise their own capacity to “carry out legal actions” necessary to protect the “collective needs of [their] community” of inhabitants, specifically those needs concerning health and the environment.

52. In consideration for TexPet financing specified “social interest works,” each municipality suit was settled in 1996, similarly “exempt[ing], releas[ing], exonerat[ing] and reliev[ing] forever” Texaco and TexPet “from any responsibility, claim, request, demand or complaint, be it past, current or future, for any and all reasons related to” the consortium’s operations, “especially concerning damages possibly caused to the environment in said cantonal

jurisdiction of the Municipality.” The parties also expressly agreed that “pursuant to Article 2386 [current Article 2362] of the Civil Code, this settlement shall have for the parties the effect of *res judicata* before the highest court.” Each settlement agreement represented that the municipal government had consulted “with the entities and organizations representing the community of its inhabitants” in order to choose an appropriate reparation project. According to sworn statements of the relevant government officials, each agreement met “the interests of The Community and of its citizens as to any claims they may have against TEXPET.” All of these settlements were “approve[d] . . . in full” by Ecuadorian courts because they “d[id] not violate any legal provision” and “cover[ed] all issues described in the [municipality] complaint[s].”

53. In addition to the national and municipal governments, two Provinces also settled their potential claims against TexPet in the name of their residents and of the ecosystems within their respective territories. In 1996, the provincial government of Sucumbíos conferred “with entities and organizations representing the community of its inhabitants” in order to select an acceptable reparation project and avoid a potential lawsuit with TexPet. It ultimately demanded, “according to the interests of the community,” that TexPet fund “social interest works,” *viz.*, “provincial eco-production projects.” A Consortium of Municipal Mayors in the Napo Province also endorsed a settlement contract that identified their potential disputes with TexPet relating to “the oil concession,” and, especially, to “the impact or damages possibly caused to the environment.” Like its counterparts in Sucumbíos and at the national level, it negotiated and settled with TexPet in order to safeguard environmental and communal entitlements. These agreements with the municipalities and provinces shall be referred to herein collectively as the “1996 Municipality Releases.”

54. Pursuant to the terms of the 1995 Settlement Agreement with Ecuador, TexPet selected Woodward-Clyde, one of the largest environmental engineering firms in the world at the time, from a list provided by Ecuador of acceptable contractors to perform the remediation. Woodward-Clyde conducted additional investigations of the well sites listed in the Scope of Work and developed a Remedial Action Plan, which identified the specific pits at each well site

requiring remediation under the criteria set out in the 1995 Settlement Agreement and specified the remedial action to be taken at each site. Ecuador reviewed Woodward-Clyde's Remedial Action Plan and conducted its own investigation of the sites to confirm that it was consistent with the MOU and the 1995 Settlement Agreement. In September 1995, Ecuador, Petroecuador, TexPet, and Woodward-Clyde each approved and signed off on the Remedial Action Plan.

55. Between October 1995 and September 1998, Woodward-Clyde conducted all of the remediation required by the 1995 Settlement Agreement and the Remedial Action Plan on behalf of TexPet and at TexPet's expense. The remediation work was monitored and supervised by Petroecuador, the Ministries of Energy and Environment, and outside auditors. Ecuador issued a series of official records called "*Actas*" during this time certifying the adequacy of the remediation work that it had supervised and evaluated on an ongoing basis. In all, TexPet spent approximately \$40 million (unadjusted dollars) on environmental remediation and community development in Ecuador pursuant to the 1995 Settlement Agreement in exchange for the releases granted by Ecuador.

56. On September 30, 1998, Ecuador, Petroecuador, and TexPet executed the *Acta Final* (the "1998 Final Release"), certifying that TexPet had performed all of its obligations under the 1995 Settlement Agreement, and thus fully releasing TexPet from any and all environmental liability arising from the consortium's activities except for individual personal injury claims, such as to specific persons or property, which the parties understood as not being covered by the release. The 1998 Final Release was signed on behalf of Ecuador by Patricio Ribadeneira, the Minister of Energy and Mines; on behalf of Petroecuador by Ramiro Gordillo, Executive Chairman, and by Luis Alban Granizo, Manager of Petroproducción; and on behalf of TexPet by Rodrigo Pérez Pallares and Ricardo Reis Veiga.

57. The validity of these agreements has been publicly acknowledged by the Republic of Ecuador, and—recently—by the Lago Agrio Plaintiffs as well. As noted above, *supra* paragraphs 45 and 50, at the time the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release were executed, the Republic of Ecuador was the only legal person or entity with

standing to represent and assert legal claims for environmental damage. Ecuador, and only Ecuador, could demand environmental remediation; individuals could assert only individual property damage or personal injury claims. Accordingly, TexPet's settlement with Ecuador and the affected municipalities and provinces fully discharged TexPet from any responsibility or liability that may have existed for environmental impact as a result of the consortium's activities, except individual personal injury claims.

2. U.S. Plaintiffs' Lawyers Devise Baseless Litigation Against Chevron in Ecuador

58. Certain plaintiffs' attorneys in the United States sought to exploit any environmental harm in the Oriente region by turning it into a financial windfall for themselves. These U.S. plaintiffs' attorneys (including Defendant Donziger, and co-conspirators Kohn and Bonifaz), devised a plan to use TexPet's former participation in the consortium as the basis for extracting large sums of money from TexPet's parent, Texaco, Inc. ("Texaco"). As Kohn described his motivation, "[A]t the end of the day . . . , it [would] be a lucrative case for the firm." As Donziger described it, "I sit back and dream Billions of dollars on the table. A movie, a possible book." In other words, a financial windfall of unprecedented proportion, and one that would make Donziger "quite wealthy." According to Donziger's estimates, he thought his "own fee right now would be around 200m[illion]."

59. In 1993 and 1994, these U.S. plaintiffs' attorneys filed two lawsuits against Texaco in federal district court in New York, purportedly on behalf of classes of "30,000 residents" of the Oriente and "25,000 residents" of Peru. *See Aguinda v. Texaco, Inc.*, No. 93 Civ. 7527 (S.D.N.Y. Nov. 3, 1993) ("*Aguinda*") and *Jota v. Texaco, Inc.*, No. 94 Civ. 9266 (S.D.N.Y. Dec. 28, 1994) ("*Jota*"). Those actions were dismissed on grounds including *forum non conveniens*, international comity, and failure to join indispensable parties Petroecuador and the Republic of Ecuador.

60. Because Ecuador and Petroecuador had released TexPet from liability following its remediation efforts and because Ecuadorian law does not allow class actions, the U.S.

plaintiffs' attorneys required the government's cooperation to bring a potentially lucrative lawsuit in Ecuador. The U.S. plaintiffs' attorneys had no desire to sue Petroecuador or Ecuador for the harms that had occurred—despite their actual culpability—because, as Defendant Donziger explained, “[T]he government here will never pay for any judgment. In contrast, Texaco can pay.” In order to get the “juicy check” that, as Fajardo put it, was the ultimate goal, the U.S. plaintiffs' attorneys struck a deal with the Ecuadorian government to enable those attorneys to bring an action against a convenient U.S. target.

61. The U.S. plaintiffs' attorneys agreed not to sue Petroecuador and assured the Republic of Ecuador that it would benefit from any judgment entered against Chevron in exchange for public and private governmental support for the U.S. plaintiffs' attorneys' case.

62. The U.S. plaintiffs' attorneys presented Ecuador's Attorney General with written promises not to pursue legal action against the Republic of Ecuador or Petroecuador or to collect a judgment against Ecuador if one were awarded to them. Bonifaz stated, “[I]f the U.S. court [in the *Aguinda* or *Jota* actions] finds both Petroecuador and Texaco guilty, we will not accept the percentage of the claim assigned to [Petroecuador].” And he admitted that the Lago Agrio Plaintiffs had “committed in legal documents not to sue Ecuador.”

63. With reported legislative assistance from the U.S. plaintiffs' attorneys, Ecuador enacted the Environmental Management Act of 1999 (the “EMA”). For the first time, the EMA enabled private individuals to bring generalized environmental injury claims previously held exclusively by the state. It also extended standing for the first time to private citizens to enforce “collective environmental rights” for environmental harm. These actions are private in name only, however, because the EMA provides that any monetary judgment be awarded to the “community.”

64. With a new and highly advantageous legal framework thus in place, the U.S. plaintiffs' attorneys, joined and assisted by other RICO Defendants and their co-conspirators, filed the Lago Agrio Litigation, *Maria Aguinda et al. v. Chevron-Texaco*, in May 2003 in the Superior Court of Nueva Loja, Ecuador. As a result of the EMA, and the RICO Defendants'

attempt to apply it retroactively, the Lago Agrio Litigation is unusual in structure. The ostensible plaintiffs in the Lago Agrio Litigation are forty-eight named individuals, but it is unknown whether these individuals consented to have the litigation brought in their names, as twenty of their signatures were forged in the very document that purported to provide authority to Ecuadorian counsel to file the complaint.

65. The Lago Agrio Litigation does not seek damages based on personal injuries to the named Plaintiffs, which, along with claims for individual property damage, is the only type of claim individuals could bring (*see* paragraph 57, *supra*). Rather, relying on the EMA, the complaint seeks the costs of remediating broadly defined “environmental damages,” the proceeds of which will not directly benefit the Lago Agrio Plaintiffs. Defendants Donziger, Fajardo and the other U.S. and Ecuadorian lawyers and investors reportedly expect up to 30% of the judgment. The Republic of Ecuador reportedly expects 90% of the benefit, although the RICO Defendants with assistance from Patton Boggs, H5 and other co-conspirators have already laid out plans to “keep the proceeds out of Ecuador,” by placing the funds in a “trust” outside of the country, under the exclusive control of a trustee they approve. The RICO Defendants requested that the Front receive an additional amount equal to 10% of the judgment (a fact that Donziger thought “best if Chevron did not know” out of concern that it “could harm the image” of the litigation), and the trial court granted that request in its judgment. The individual Lago Agrio Plaintiffs, on the other hand, will not receive any portion of the judgment, and thus are at most only nominal plaintiffs.

66. In effect, the RICO Defendants are planning to control nearly all of the proceeds from the judgment, shutting out the Lago Agrio Plaintiffs, the Republic of Ecuador, and Petroecuador and setting themselves up as a source of patronage through billions of dollars in remediation contracts that will be issued following an adverse judgment against Chevron, in a country whose entire annual Gross Domestic Product is just over \$64 billion. In an email exchange with Fajardo and Donziger, for example, co-conspirator Julio Prieto noted that “Petroecuador is NOT the one who must contract the remediation companies That’s our

job.” And when the RICO Defendants heard that the Republic of Ecuador might be considering negotiating with Chevron directly, they pushed to have those conversations shut down, urging that no “representative of the Ecuadorian government . . . meet face to face with a representative of Chevron at this juncture[.]”

67. The Lago Agrio complaint does not name the entity that has been responsible for environmental harm in the Oriente region since at least 1992: Petroecuador. Pursuant to their agreement not to bring any claims against Petroecuador or the Republic of Ecuador itself, the Lago Agrio Plaintiffs’ U.S. representatives caused Chevron to be named as the only defendant in the Lago Agrio Litigation, despite the fact that Chevron has never operated in Ecuador. (Years after TexPet ceased operations in Ecuador, one of Chevron’s subsidiaries merged with Texaco, TexPet’s ultimate parent company. Chevron thereby became an indirect shareholder of TexPet.)

B. The Conspirators Are Corrupting the Judicial Process to Extort a Payment From Chevron

68. The support of the Republic of Ecuador, the manipulation of the EMA, and the filing of the Lago Agrio Litigation provided the U.S. lawyers with the foundation for their criminal scheme. Through the conduct of their criminal enterprise, the conspirators set about to manufacture false evidence and a fake “history” that they would repeat in every media outlet, before Congress, in front of state and federal investigative and administrative agencies, and with which they would seek to scare and mislead Chevron shareholders and investors. All of this was done in furtherance of their scheme to coerce Chevron into making a massive payoff to the criminal enterprise. As part of this scheme, the conspirators keep “jack[ing] up,” in Donziger’s words, their demand. In 2003, they thought \$6 billion was an aggressive number. In 2008, they raised the stakes to \$16 billion, then to \$27 billion, and finally, to an outrageous \$113 billion, before ultimately obtaining an \$18.2 billion judgment in Lago Agrio.

69. The RICO Defendants’ criminal scheme has three main lines of attack: One, intimidate or corrupt the Lago Agrio court and obtain a fraudulent judgment against Chevron based on manufactured evidence of liability. Two, collude with the Republic of Ecuador to

procure sham criminal charges against Chevron's attorneys. Three, conduct a massive public pressure campaign designed to spread false and misleading information about Chevron and the Lago Agrio Litigation. These lines of attack are related but nonetheless distinct attempts to pressure Chevron into paying the RICO Defendants. Donziger has even admitted that the criminal charges and the pressure campaign were *not* simply means of supporting the Lago Agrio Litigation, but "other things in play outside of the legal case." The ultimate objective, in Donziger's words, is to cause "damage to [Chevron's] reputation," to put "personal psychological pressure [on] their top executives" through threats and attacks through the media and force Chevron into a payoff.

70. Donziger has explained how the conspirators work to increase costs for Chevron on all fronts until it gives in to their extortionate demands:

The work doesn't let up just because I'm in the U.S., at all. I mean, it's still really intense, you know, so it's always looking for ways to increase the leverage and increase the cost to Chevron for not doing anything. So, what's the cost? The cost is, right now, it's the cost of the risk of getting a huge multi-billion dollar judgment at trial, . . . it's the cost of all the hassle they have to put up with from the environmental groups, . . . it's the cost of their sullied reputation, you know, in the media.

71. The RICO Defendants and their co-conspirators have shown no signs of stopping their attack. Indeed, Donziger has threatened to try to enforce the fraudulent judgment obtained in the Lago Agrio Litigation in the United States and in other foreign jurisdictions, observing that "Chevron operates in more than 100 countries and has numerous oil tankers that troll the world's waterways and dock in any number of ports" In a recent speech, Donziger asserted that the conspirators are assembling a legal team to "seize assets, seize boats," wherever Chevron's subsidiaries operate around the world—even though the Lago Agrio Plaintiffs previously told this Court that Chevron's defense against any Lago Agrio judgment should be restricted to New York's recognition act. Fajardo has likewise warned that the RICO Defendants plan to confiscate Chevron's assets in the United States in order to enforce the judgment. And Donziger has also stated that the conspirators' plan is to move on from Chevron and Ecuador and

reprise their criminal scheme again and again: “take legal fees we can earn from this case and do more cases like this in different places. With, you know, the same team, if possible.”

1. Pressuring the Lago Agrio Court and Manufacturing Evidence

a. Implementing Pressure Tactics and Colluding With Ecuadorian Government Officials

72. Central to the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ scheme to defraud and extort Chevron is the fact that Ecuador’s judiciary has developed systemic weakness and corruption, in addition to other significant flaws and shortcomings. The conspirators are aware of this fact, and have sought to exploit it. According to Donziger, “[T]he court is now in play, up for grabs, and accessible.” Donziger has boasted that, unlike in the United States, the “game” is “dirty” and there are “almost no rules” in Ecuador. Donziger and his co-conspirators have sought repeatedly to capitalize on the Ecuadorian judiciary’s weakness, threatening violence, bullying judges, and using political connections to obtain rulings in their favor based on the judges’ fear of repercussions rather than the facts or law. Indeed, Donziger instructed one of his co-conspirators to “prepare a detailed plan with the necessary steps to attack the judge through legal, institutional channels and through any other channel you can think of.” Attacking the judge was necessary, because, as Donziger put it: “[T]he only way the court will respect us is if they fear us—and . . . the only way they will fear us is if they think we have [s]ome control over their careers, their jobs, their reputations—that is to say, their ability to earn a livelihood.” This fear and “constant pressure on the judge and the court” is essential to the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ plan to obtain “a fast decision.” With assistance from the highest levels of the Ecuadorian government, the RICO Defendants and their co-conspirators ensured that the Lago Agrio court would rule against Chevron, as it ultimately did.

73. The RICO Defendants and their co-conspirators do not view the enterprise in which they are engaged as a lawsuit. As Donziger has explained, the litigation “is not a legal case,” but a “political battle that’s being played out through a legal case.” In other words, Donziger and his co-conspirators knew that what “we need to do is to get the politics in order . . .

[because] the only way we're going to succeed, in my opinion, is [i]f the country gets excited about getting this kind of money out of Texaco So you have to play to those . . . themes, [with] those feelings these people have." Consistent with this strategy, Donziger and the other RICO Defendants know that their "success" will have nothing to do with pursuing the Lago Agrio Litigation on the merits, but rather will depend on using that "litigation" as a vehicle or pretense with which to attack Chevron in the media and before U.S. governmental bodies and shareholders and force it into paying them off. In Donziger's own words, the conspirators have conducted the Lago Agrio Litigation as a "flat-out street brawl, extreme fighting through litigation" in which he and his co-conspirators are seemingly "only a short step away from smashing the faces of our counterparts with a closed fist, or taking out guns[.]"

74. Donziger has acknowledged the RICO Defendants' and their co-conspirators' use of "pressure tactics" to influence and intimidate the Ecuadorian judiciary. Donziger admitted that such tactics are "something you would never do in the United States. . . . But Ecuador, you know . . . this is how the game is played, it's dirty." Donziger further declared that "there's almost no rules here" and that "the only language that I believe, this judge is gonna understand is one of pressure, intimidation and humiliation. And that's what we're doin' today. We're gonna let him know what time it is We're going to scare the judge, I think today." These fear tactics are effective, according to Donziger, because Ecuadorian judges "are really not very bright" and "make decisions based on who they fear the most, not based on what the laws should dictate." In fact, when an associate suggested to Donziger that no judge would rule against them because "[h]e'll be killed," Donziger replied that, although the judge might not actually be killed if he ruled against them, "he thinks he will be Which is just as good." As a colleague told Donziger, "The only way we will win this case is if the judge thinks he will be doused with gasoline and burned if he rules against us." Donziger stated that this comment did not shock him. Donziger further asserted: "[The judges] don't have to be intelligent enough to understand the law, just as long as they understand the politics." And according to Donziger, "no judge can rule against us and feel like he can get away with it in terms of his career." These threats are

made all the more real given the prevalence of violence in the Oriente region of Ecuador. Indeed, Fajardo has acknowledged that paid assassins in the Oriente will kill someone for as little as \$60, and the region is known to harbor elements of the terrorist group FARC.

75. As part of their strategy to intimidate and coerce the Lago Agrio court, the RICO Defendants and their co-conspirators plotted to raise what they called their own “private army,” a “specialized group” detailed “to watch over the court,” for which, “if we need weapons, we can provide weapons.” According to Fajardo, it was “necessary” for the RICO Defendants and their co-conspirators to “organize pressure demonstrations at the court” that will be a “little bit aggressive” in order to “teach the court a lesson.” During one meeting in which the “private army” was discussed, Defendants Donziger and Yanza along with Amazon Watch founder Soltani and Kevin Koenig, Amazon Watch’s Northern Amazon Program Coordinator, discussed their plans to organize and finance attempts “to control the court, to pressure the court.” Donziger elaborated that the conspirators “want to send a message to the court that, ‘don’t f[**]k with us anymore—not now, and not—not later, and never.’” He observed that, “no one fears us right now. And, until they fear us, we’re not gonna win this case. I’m convinced.” Accordingly, the conspirators planned to “take over the court with a massive protest,” with the goal of “shut[ting] the court down for a day.” According to Donziger, “[O]nly after that should we talk to the judge about what he needs to do. The judge needs to fear us for this to move how it needs to move, and right now there is no fear, no price to pay for not making these key decisions.” Realizing the ramifications of this plan, Soltani asked if the videotapes of the discussion could be subpoenaed, advising: “I just want you to know that it’s—it’s illegal to conspire to break the law.”

76. Ignoring these qualms, the RICO Defendants and their co-conspirators put their plan into effect, organizing their “army” in demonstrations at inspection sites and at the courthouse itself, intending to confront and instill fear into the court. Donziger described one action to Joe Berlinger, the director of the film *Crude*: “[O]ur private ‘army’ . . . has been very effective. Yesterday they followed a Texaco lawyer into the judge’s chambers and had a

confrontation. This is a critical part of our strategy that is allowing the case to go forward.” Over the ensuing months, the conspirators’ private army would make numerous appearances at judicial inspections of environmental sites, at the courthouse, and in the streets of Lago Agrio, always seeking to remind the judiciary that this was not litigation, but a “flat-out street brawl.” At one such protest at a judicial inspection of the Sacha Sur Station, the RICO Defendants and their co-conspirators amassed their “army” of protesters who the judge would not permit to enter the Station due to the risk that such a large mob would pose to the Station’s operation. When Donziger saw that what he described as his “army” would not be able to enter, he demanded that the “[**]kin’ judge” come to the gate to deal with the mob himself and warned that “they’re provoking a violent incident.” Although the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ “army” was rebuffed at this inspection, the RICO Defendants and their co-conspirators achieved their purpose of letting the judiciary know that it was being watched by a potentially violent group. In another incident, the conspirators organized a protest at the judge’s office after a canceled judicial inspection. The intimidation was successful, causing the judge to “sweat” and “promis[e] to make a decision” on a new date by the following day.

77. The RICO Defendants also employed extortion to get what they wanted. For example, the RICO Defendants “wrote up a complaint against [Judge] Yanez, but never filed it, while letting him know [they] might file it if he does not adhere to the law and what [they] need.” And on a task list he prepared in February 2006, Donziger wrote: “accuse [Judge] of being involved in corruption with Chevron; ask for recusal.”

78. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ plan to instill fear in the judiciary was only one approach to illegally obtaining a favorable ruling. Another approach involved numerous attempts to personally influence, intimidate or negotiate with the judge in the Lago Agrio Litigation, often through *ex parte* meetings. Donziger described such actions as “lobbying.” Donziger, for example, has held numerous meetings with presiding judges, often over lunch at the judges’ homes, during which he has “t[aken] advantage of the situation to explain [the RICO Defendants’] theory of the case.” During one such meeting, Donziger pressed

upon the judge the false assertion that “Texaco’s sampling is full of s[**]t.” Donziger has also asked his co-conspirators to meet with the judge in secret and press their case. And indeed, Fajardo and the Front—the organization that stands to receive a windfall from the judgment—have met directly with the judge, pressing the conspirators’ interests and obtaining promises of cooperation from the judge.

79. The RICO Defendants did all this because they believed that it worked. On one occasion, one of Donziger’s co-conspirators suggested that in order to get the court to rule in their favor on an important legal point, “Maybe Pablo [Fajardo] can have one of his backroom conversations.” In August 2006, co-conspirator Joseph Mutti updated Donziger that, “Luis [Yanza] reported that the judge appears to be backing down from his position regarding the cancellation of the inspections and that pressure must be brought to bear on him. Thus, it was resolved that two members of the coalition will be traveling to Lago next week to meet with the judge. Esperanza already met with him twice this week—once with an accompanying declaration—so he’s already feeling the pressure.” The RICO Defendants are not the only observers to note the impact that these tactics have had. *The Economist*, for example, observed: “The judge in Lago Agrio, Juan Núñez, . . . has made no secret of his sympathy for the plaintiffs.”

80. Not content merely to apply pressure themselves, and as part of their previous arrangement with the Ecuadorian government (*see* paragraphs 60-63, *supra*), the RICO Defendants and their co-conspirators have also enlisted Ecuadorian officials to pressure and intimidate the judiciary to rule against Chevron. As Donziger has explained the strategy, “We can have the best proof in the world, and if we don’t have a political plan we will surely *lose*. On the other hand, we can [have] mediocre proof and a good political plan and stand a good chance of winning.” Donziger understood that to get what the co-conspirators wanted, he had to do “political work at the highest level to make things happen, like get the government, for example, to take a position in a case that affects your clients.” This was facilitated by the fact that, according to Donziger, the conspirators had “close ties” to “high-ranking Ecuadorian

government officials” in addition to the Front’s “wide influence in Ecuador” and “ab[ility] to command meetings with government ministers and even the President.”

81. The collaboration between the RICO Defendants and Republic of Ecuador is so close that one U.S. District Court has concluded that it was “an established fact” that the Republic of Ecuador was supporting the Lago Agrio Plaintiffs. The Republic of Ecuador recently asserted in court filings that it has had a formal “*common interest agreement*” with representatives of the Lago Agrio Plaintiffs since 2006. In pursuit of that alleged common interest, the RICO Defendants and the Republic of Ecuador have coordinated their legal and public relations strategies, both directly and through Ecuador’s U.S. legal counsel. As part of this cooperation, the RICO Defendants have received assistance from the highest levels of government in Ecuador, from “allies [who were] firmly entrenched at the top.” For example, Donziger himself ghostwrote a letter from Ecuador’s ambassador to the United States, Dr. Luis Gallegos, to *The Wall Street Journal*.

82. The RICO Defendants have also worked with Winston & Strawn LLP (“Winston & Strawn”), the U.S. law firm hired by Ecuador to represent it against Chevron in proceedings in the United States. The RICO Defendants have provided information and other assistance to Winston & Strawn, including having Stratus provide scientific analysis and Donziger help with the drafting of legal documents. Donziger, aware that this level of cooperation crossed the line, was concerned it might lead Chevron to believe the RICO Defendants and the Ecuadorian government were “in bed” together. Thus, upon realizing he had been photographed alongside a Winston & Strawn attorney for a newspaper article, Donziger vowed to deny that the man in the photograph was him. However, Donziger recognizes that the RICO Defendants and the Republic of Ecuador have been “really helping each other.”

83. The RICO Defendants have also turned to the government to *shut down* Petroecuador’s remediation, because of the negative impact it would have on their scheme. For example, in 2009, in an email to Donziger and other conspirators with the subject line “WORRISOME,” Fajardo warned them that a newspaper was reporting that the government was

assuming responsibility for remediation, and, worse, that it believed it would cost an “extremely low” \$96 million. Fearful that Chevron would “say that the State finally assumed its duty and is going to clean up what it ought to,” Fajardo called on his co-conspirators to act. Donziger responded in an email to Juan Saenz, “You have to go to Correa to put an end to this s[**]t once and for all.”

84. Other members of the Ecuadorian government have also signaled to the Lago Agrio court the government’s demand that Chevron be found liable. As the Ecuadorian Attorney General Diego García Carrión told a reporter in August 2008, the Correa administration’s position in this case is clear: “The pollution is [the] result of Chevron’s actions and not of Petroecuador.” Again, in May 2010, Attorney General García “dismissed any responsibility on the part of the Ecuadorian State for the environmental damage caused in the Amazon region by the U.S.-based oil company Chevron-Texaco.” And in September 2009, Ombudsman Fernando Gutiérrez announced: (i) the Lago Agrio Litigation “has absolute priority and the judgment must be rendered as soon as possible”; (ii) the case concerns “an assault on the entire country”; and (iii) in a direct signal to the Lago Agrio court, Chevron, rather than the State, bears full responsibility for any harm.

85. This support was not arrived at independently, but through collusion between the RICO Defendants and the Republic of Ecuador. Ana Alban, then Ecuador’s Minister of the Environment, communicated with Donziger directly, assuring him that the government was “giving the support that we can do” to the Lago Agrio Plaintiffs, reminding him that “we brought the President to the zone,” and assuring him that she had a “very close” “friend of the Frente de Amazonia working with me doing all this.”

86. The fact that President Correa and other members of the government have sided with the Defendants and against Chevron sends a clear message to the Ecuadorian judiciary that it must find Chevron liable. And it sends a message to Chevron that it must pay money to the conspirators in the form of a “settlement” or face the fraudulent, politically influenced judgment that the RICO Defendants intend to try to enforce in U.S. courts or elsewhere.

b. Taking Advantage of a Weakened and Increasingly Corrupt Ecuadorian Judiciary

87. The RICO Defendants have been able to influence the proceedings because the independence and integrity of the Ecuadorian judiciary has eroded to where it is now greatly susceptible to these tactics, and to pressure from outside and through the executive branch. Indeed, the Ecuadorian presidency now wields de facto control and near-autocratic power over all Ecuadorian institutions.

88. Various sources confirm the political branches' domination over Ecuador's judiciary in recent years and the judiciary's system-wide corruption. For example, the World Bank's Worldwide Governance Indicators for 2009, compiled from 21 independent sources, ranked Ecuador below the 10th percentile of all countries surveyed with respect to the "rule of law"—down from the 31st percentile in 2003. Ecuador's negative score is -1.28, which places it below North Korea (-1.25).

89. The U.S. Department of State's annual Human Rights Report published in March 2010 also noted that "there continued to be serious problems" in Ecuador with respect to "corruption and denial of due process within the judicial system" and that the judiciary was "susceptible to outside pressure and corruption." Similarly, as recently as July 15, 2010, the UN Special Rapporteur on extrajudicial executions described Ecuador's judicial system as "almost universally condemned for its inefficiency and mismanagement."

90. Among the means by which President Correa has established his control over the judiciary is a policy whereby he has caused the issuance of a memorandum instructing all of his ministers that should any Ecuadorian court enjoin their ministry, and if the ministry is able to overturn the injunction on appeal, the ministry is to immediately sue the judge who entered the injunction *personally* for damages.

91. There are numerous examples of this corruption and undue influence on display in the Lago Agrio Litigation. While he was presiding over the trial, Judge Núñez publicly stated that the Lago Agrio Litigation had "taken too long" immediately after a two-hour luncheon with

President Correa, at which the President complained about delays and demanded “expedited treatment of cases that are of interest to Ecuador.” Judge Núñez was ultimately forced to excuse himself from the case, not because of his apparent bias, but because of a bribery solicitation scandal where he was caught on video expressing his prejudgment against Chevron.

92. Just after this bribery solicitation story broke and the videos become public, on September 2, 2009, co-conspirator Juan Pablo Saenz wrote to Donziger and assured him that the Front’s “sources at the government tell us they’re actively looking for [Ecuadorians involved in the scandal], to cut their heads off. We should focu[s] on [the Americans involved], since they’re the Chevron stooges. Correa and his cronies will take care of the rest.”

93. On the following day, September 3, 2009, Judge Núñez filed a motion to excuse himself from the Lago Agrio Litigation. The next day, Prosecutor General Pesántez publicly declared that he had asked Judge Núñez to excuse himself “to prevent any delay of the trial.” Pesántez then added that Chevron had “probably caused serious environmental damages for decades and also caused illnesses” and confirmed that the government of Ecuador expected to receive 90% of the prospective judgment against Chevron.

94. Although Chevron filed a petition to annul all of Judge Núñez’s biased and politically influenced rulings in the Lago Agrio Litigation, that petition was denied by Judge Núñez’s replacement. Thus, Judge Núñez’s improper and bad-faith judicial decisions continued to taint the Lago Agrio Litigation and undermine Chevron’s rights, just as the RICO Defendants hoped they would. After all, the conspirators’ underlying strategy has been that the more Chevron fears an unfair ruling in the sham Lago Agrio Litigation, the better target for an extorted payment it becomes.

95. Against this backdrop of collusion and corruption, the RICO Defendants have obtained a judgment in their favor and against Chevron by playing the “game” “dirty” and currying favor from the Ecuadorian government. And this is all part of the conspirators’ scheme to convince Chevron to pay up—or else. Chevron has initiated international arbitration under the Bilateral Investment Treaty, seeking relief from the Republic of Ecuador’s violations of

international law and treaty obligations in connection with its failure to honor its contractual agreements. The Lago Agrio Plaintiffs and other parties named in this Amended Complaint are not and cannot be parties to the Treaty Arbitration, and Ecuador has asserted sovereign immunity against claims filed in courts of the United States.

c. Manipulating and Falsifying Their Own Experts' Findings to Corrupt the Judicial Inspection Process

96. At the outset of the litigation, the Lago Agrio court ordered a process known as a judicial inspection to assess the 122 former consortium oil production sites. In a process agreed to by both parties and the court, experts were nominated by each side and appointed by the court to investigate and report on conditions at the sites. The court nominated a third set of “settling experts” to resolve any differences between the experts nominated by the parties.

97. The RICO Defendants and their co-conspirators believed they could use and corrupt the judicial inspection process to their advantage. To this end, they designed a strategy to “choreograph[h]” the judicial inspections and to “create conflict, invit[ing] the press” to “entrap [Chevron] in the conflict.” As Donziger put it, “The goal of the inspections [was] to win the legal case, not to produce an independent scientific report.” From his perspective, the judicial inspection process was “all about politics and arguing and bulls[**]t and show.” Part of that show was to organize a number of demonstrations at the judicial inspection sites—some threatened to become violent (*see* paragraph 76, *supra*)—to showcase the strength and will of the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ “army” and to send a message to the judiciary that it was being watched.

98. The RICO Defendants and their co-conspirators have also sought and obtained a court order prohibiting Petroecuador from conducting any remediation of the former consortium area. Fajardo spelled out to his colleagues, “[Petroecuador is] altering the evidence and it is possible that when our technicians go to the PG to take samples that they will find most of the waste has been removed. This could complicate things for us a bit.” Fajardo explained that it was “urgent” that the RICO Defendants “coordinate” with Petroecuador “so they will desist

[remediating] until we've had a chance to extract the evidence we need.” In response, Donziger cautioned Fajardo to “[b]e careful with written letters—informal and oral meetings are better[.] [W]e don't want Texaco to use some letter to say we are obstructing remediation.” In another email to Donziger and other conspirators, Fajardo expressed concern that the government was assuming responsibility for remediation, and that it would cost an “extremely low” \$96 million. The RICO Defendants then turned to the government for assistance in shutting down the remediation.

99. Ultimately, the judicial inspection process was short-lived. The first and only time settling experts issued a report for one of the judicial inspection sites was in February 2006, at which point they agreed with Chevron's expert's findings and concluded that TexPet's remediation met the standards agreed to with Ecuador. They further agreed that there was no evidence of contamination posing a risk to either human health or the environment.

100. When it became apparent to the conspirators that the judicial inspection process was not going to provide them with the record they needed to extort a payment from Chevron, they abandoned that process and set about developing their own false history and factual record, entirely under their control. Using a series of paid experts whom they pressured, misled or recruited to their scheme, the conspirators created an increasingly extreme and distorted record, and then manipulated the Lago Agrio court into accepting that false history as the product of independent analysis.

(i) Inducing an Expert to Report Biased and False Results

101. To create their first false data point, the RICO Defendants pressured their U.S. expert David Russell to develop an exaggerated damages estimate and continued to “use it to put out a figure that will scare Chevron and investors,” long after Russell sent Donziger a cease-and-desist letter demanding that he stop using the estimate.

102. In 2003, Russell, who was retained by the RICO Defendants to oversee the judicial inspection process for the Lago Agrio Plaintiffs and prepare a damages analysis, initially estimated the cost of remediation to be approximately \$6 billion. In Russell's own words, that

estimate was prepared in “a very short time, with only a week of review time in the jungle, and heavily influenced by [Donziger] in the writing.” At Donziger’s insistence, and as evidence of his heavy influence on Russell’s initial calculation, Russell used the most expensive remedial option available, because Donziger wanted a “large” damages estimate. Even so, Russell made clear to Donziger and others that the quantitative data “ha[d] not [been] reliably established” and that he and his team were “still at the guessing stage.”

103. As Russell continued his work, he realized that the evidence on the ground did not support his damages estimate. By December 2004, he told Donziger “that Texaco may be right when they indicate that the remediation is performing as designed, and degrading the petroleum.” Two months later he provided an update to Donziger in which he explained, “From the data I have seen so far, we are not finding any of the highly carcinogenic compounds one would hope to see when investigating the oil pits.”

104. After Russell prepared his estimate, he learned that the remediation work he considered appropriate could be completed at a substantially lower cost and wrote Donziger in February 2006 to demand that he stop using the unsupported and exaggerated \$6 billion estimate. In his letter, Russell informed Donziger that the information he had since learned “would cause me to state that the 2003 cost estimate is too high by a substantial margin, perhaps by a factor of ten, or more.” (Emphasis in original.) And indeed, a year later, another of the co-conspirators, Charles Champ, estimated that a remediation and related social and development projects could be done for \$1 billion, an estimate that itself is wildly exaggerated and calculated using fictional cost assumptions. Nonetheless, the RICO Defendants have never publicly disclosed this exaggerated figure because it is too low for their illicit purposes.

105. In that same cease-and-desist letter, Russell objected to Donziger’s and Amazon Watch’s use of the \$6 billion estimate in their request to the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) for the SEC to “investigate Chevron under Sarbanes-Oxley” for allegedly “underreporting their liabilities.” Russell made clear that the “estimate is no longer valid and if

subpoenaed to testify, I will state that the costs are much lower based upon the knowledge available to me at the time I was released from the project.”

106. Russell also emphasized in the letter that he wanted nothing more to do with Donziger and the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ pursuit of the litigation against Chevron:

I do not want to get into the courts in the US, and do not want to be involved in your case against Texaco/Chevron!

I have not prepared any other cost estimate, nor do I intend to do so. It is no longer any of my concern, except to see that the name of my company and my reputation are not abused by continued association with the Aguinda vs. Texaco lawsuit. If subpoenaed, I will tell the truth about what I know about the existing costs, how the cost estimate was prepared, and what the differences in unit costs might be to cleanup contamination in Ecuador.

I am trying to stay out of your way and out of your case, but by using and abusing the outdated cost estimate to flail Chevron, you keep dragging me back in to [sic] it! The Ecuador project has been a sorry chapter in my life and I do not want to get re-involved with you or it on any basis.

Several recent press releases using the 2003 cost estimate plus the most recent demand by Amazon Watch abuses me and my company.

Get a new cost estimate generated in Ecuador. You will have to do that under the terms of the Global Inspection as required by the Court in Ecuador. That 2003 cost estimate is a ticking time bomb which will come back to bite you, and very badly if anyone attempts due diligence on it.

(Emphasis in original.)

107. Donziger did not mince words in response: “I don’t care what the f[**]k that guy says.” In a conversation with co-conspirator Soltani of Amazon Watch, Donziger acknowledged that the “[p]rice tag” for remediation “would only be a guess” and that Russell’s \$6 billion “very rough estimate” significantly overstated the true costs of remediation: “[The] six billion dollar thing is out there. The reality is, based on what this guy is telling me, [it] would cost less than that. Significantly less than that” And in an email to his co-conspirators, Donziger recognized that the “fact [Russell] sent this letter has a certain amt of danger for us.” Nonetheless, in a subsequent conversation with Defendants Fajardo and Yanza and others,

Donziger discussed requesting a higher amount than \$6 billion so a judgment of a lower amount could be portrayed as favorable to Chevron: “But as a concept, I ask, do we ask for much more than we really want as a strategy? Do we ask for eight and expect three, so that [the judge] says, ‘Look, Texaco, I cut down the largest part.’”

108. And despite Russell telling Donziger that his estimate was inaccurate and that he did “not want to be involved in” the Lago Agrio Litigation and despite Donziger’s assurance to Russell that he would stop using Russell’s work, the RICO Defendants and their co-conspirators continued to use the exaggerated and disavowed \$6 billion estimate. As Donziger explained it, “[G]iven that [the RICO Defendants] ha[d] worked with Russell’s number all of these years,” not continuing to use the \$6 billion number “would make [them] look like fools.” For example, Amazon Watch, exhibiting the same disregard of the facts as Donziger, continued to tout the \$6 billion figure well after Russell sent Donziger his cease-and-desist letter. Amazon Watch’s press releases asserted that Russell’s company, Global Environmental Operations, endorsed the \$6 billion damages estimate even though Russell implored Donziger to stop “abusing” the “name of [Russell’s] company” by associating it with the Lago Agrio Litigation. For example, a March 20, 2007 press release entitled “Ecuador Court Speeds Up Chevron’s \$6 Billion Amazon Trial Over Rainforest Contamination” issued by Amazon Watch states: “The only independent damage assessment, by the U.S. firm Global Environmental Operations, puts clean-up costs at \$6.14 billion, exclusive of personal damages to thousands of residents of the area.” In issuing this press release, the conspirators lied about having an expert estimate of \$6 billion when they knew that Russell repudiated the \$6 billion figure as “no longer valid” and “a ticking time bomb” well over a year earlier. Donziger has subsequently admitted that he had no other basis for the \$6 billion figure when that press release was issued.

(ii) Filing Falsified Expert Reports

109. Not only did the RICO Defendants and their co-conspirators pressure Russell to come up with a large, unsupported damages assessment, but they also submitted falsified expert

reports under the name of another of their U.S. experts, Dr. Charles Calmbacher, that contradicted his conclusions that he had found no evidence of harm.

110. In 2004, the conspirators selected Dr. Calmbacher to be the expert in charge of their inspection and to act as the Lago Agrio Plaintiffs' testifying expert for four of the sites that were being inspected.

111. Shortly after Dr. Calmbacher began his work in the field, Donziger informed him and the other members of the technical team that "[t]he goal is to win the legal case, not to produce an independent scientific report." Much to the RICO Defendants' dismay, Dr. Calmbacher did not abide by this admonition when he informed the RICO Defendants and their co-conspirators that, in his professional opinion, the sites he inspected did not require further remediation and did not pose a risk to human health or the environment. This, of course, was not what the RICO Defendants and their co-conspirators wanted to hear. Indeed, Donziger had instructed Dr. Calmbacher to find contamination during his site inspections.

112. Dr. Calmbacher was uneasy with Donziger's instructions and the level of control the RICO Defendants tried to exert over his work. He was concerned regarding the methods and scope of analysis that the RICO Defendants and their co-conspirators planned to perform on the samples they collected. In his opinion, the analysis was insufficient to test all the aspects of the oil that he felt should be tested. When Dr. Calmbacher informed Donziger of his concerns, however, Donziger brushed them aside and decided to proceed with the limited and inadequate analysis he already had planned.

113. When it became clear that Dr. Calmbacher's conclusions were unsatisfactory to the RICO Defendants and their co-conspirators, they submitted to the Lago Agrio Court judicial inspection samples bearing the name "Selva Viva Laboratory" on the chain of custody forms. But there is no Selva Viva Laboratory; rather, the "analysis" was performed—if it was performed at all—in the RICO Defendants' and their co-conspirators' team hotel room, and they borrowed the name "Selva Viva"—the same name as the RICO Defendant who was "created" "simply as a pass thru mechanism to administer funds for the litigation" in Ecuador—to lend

false authenticity to their sham inspection. The conspirators knew such activity was not without risk, and they worried that Dr. Calmbacher would “inform the court that the Selva Viva project is a fraud.”

114. Ultimately, the RICO Defendants and their co-conspirators decided that they did not need Dr. Calmbacher to agree with their position, and that if the facts did not support their case, they would manufacture new ones. Thus, after Dr. Calmbacher communicated his negative findings to the RICO Defendants and their co-conspirators, he was “terminated without warning or explanation” and Donziger ordered him to return to the United States. At the time, Donziger believed that “[Dr. Calmbacher] will still sign the perito [expert] reports, but we might have to write them in Quito.”

115. Dr. Calmbacher, however, was adamant that he would still be the one to “write the Perito reports,” despite his differences with Donziger, because he needed “to comply with [his] obligation to the court and to maintain [his] professional integrity with the Ecuadorian court.” In an email to Donziger, Dr. Calmbacher made clear that the RICO Defendants were not to alter any of the conclusions in his report:

It also has been stressed to me that it is highly unusual for a perito [expert] to allow others to contribute to the writing of a report. Comments or review is acceptable, but the perito’s opinion and findings are final. I therefore have and feel no obligation to allow your team of textile engineers and associated cron[i]es to review or edit my reports. I am assured, as perito of the court, that I am completely within my rights to write and submit my report independent of those who have nominated me for appointment as perito. My sole obligation is to tell the truth, as I see it, to the court, no matter the consequences for either party.

116. After Dr. Calmbacher’s rebuke, Donziger threatened to withhold payment from him in order to pressure Dr. Calmbacher to draft the reports in a manner that would back up the Lago Agrio Plaintiffs’ assertions. Donziger described this strategy to Wray, Kohn and Bonifaz, but also noted that, if the problem was not resolved, “we are developing a Plan B that will be explained in person.”

117. Plan B put into play Donziger’s view that “[s]cience has to serve the law practice; the law practice doesn’t serve science.” The RICO Defendants and their co-

conspirators cast aside Dr. Calmbacher's actual conclusions and set about manufacturing reports to be filed under Dr. Calmbacher's name, a fact that Chevron only learned for the first time at Dr. Calmbacher's March 2010 deposition that Chevron subpoenaed pursuant to 28 U.S.C. § 1782.

118. The difficulty for the RICO Defendants was how to obtain Dr. Calmbacher's signature on the false conclusions they wanted to submit as "expert" findings. Their solution was to send Dr. Calmbacher initial drafts of the report, which correctly characterized his conclusions, for his review. Because the drafts appeared to accurately reflect his opinions, Dr. Calmbacher authorized the reports to be filed.

119. Next, the conspirators prevailed upon Dr. Calmbacher to provide signature pages, along with several blank pages bearing his initials, which he did, based on the lie that these extra pages would be used to file the reports he had already authorized to be filed. At the conspirators' request, Dr. Calmbacher sent by overnight delivery service one set of these signed and initialed pages to Ecuador and the second set directly to Donziger in New York.

120. The reports that the RICO Defendants and their co-conspirators filed under Dr. Calmbacher's name, however, are not the same as the reports that he authorized to be filed. Instead, as part of their Plan B, the RICO Defendants and their co-conspirators prepared different, fraudulent reports that misstated the evidence and concluded that the inspected sites presented a danger to the environment and required additional remediation. The conspirators printed their fraudulent reports on the pages that Dr. Calmbacher had initialed, used the signature pages that he had provided, and filed the forged reports with the court in Lago Agrio.

121. Although Chevron has since informed the Lago Agrio court about the falsified Calmbacher reports, to date the court has refused to remove his reports from the record or take any corrective measures.

d. Arranging Cabrera's Appointment as Global Assessment Expert and Secretly Writing His Supposedly "Independent" Report

122. When Dr. Calmbacher refused to cooperate in the scheme to defraud and extort Chevron and when the Lago Agrio court's settling experts began to confirm the RICO Defendants' and their co-conspirators' lack of evidence, the conspirators changed tactics. Realizing that neutral settling experts would not accept their fraudulent claims, the RICO Defendants and their co-conspirators requested that the Lago Agrio court abandon the judicial inspection process that had been agreed to by the parties. In its place, the conspirators arranged for the Lago Agrio court to create a new "global assessment" process and secured the appointment of a co-conspirator to the position of the purportedly neutral "global assessment expert" with whom they would work in secret to ghostwrite his report. Until Chevron uncovered the RICO Defendants' and their co-conspirators' underlying fraudulent behavior, their plan seemed to be working.

123. To the Lago Agrio court, the conspirators proposed that a single expert be appointed, and that he and his team conduct a global assessment of the former concession area.

124. To execute their scheme, the RICO Defendants assembled a team handpicked by the conspirators of U.S. scientists, Ecuadorians, engineers, and other experts, who would do the actual work charged to Cabrera. And after the report was filed, some of these individuals were disclosed as members of Cabrera's fictional team.

125. In December 2006, more than two months before Cabrera was appointed by the court, Donziger discussed the RICO Defendants' and their co-conspirators' plan to ghostwrite the "independent" report with co-conspirator Soltani: "The judge is going to appoint a guy in Ecuador, um, to be the expert, but really, you know, we'll be supporting him with the work—our people, E-Tech, whoever we choose to use." As Donziger saw it, the expert would "ha[ve] to totally play ball with us and let us take the lead while projecting the image that he is working for the court." Indeed, the driving question for the plaintiffs during this period, was, as Donziger mused, "how can we control this perito?"

(i) Weeks Before the Court Appointed Cabrera, the RICO Defendants Meet With Him to Plan His “Independent” Expert Report

126. The RICO Defendants and their co-conspirators put their expanded scheme to defraud and extort Chevron in motion in early 2007. The first order of business was to ensure that the court adopt the new “global assessment” process proposed by the RICO Defendants and their co-conspirators and appoint Cabrera as the global assessment expert.

127. On January 16, 2007, Fajardo reported that he had been in contact with the Lago Agrio judge in person and had sent him an email message regarding who to appoint as the global assessment expert. Fajardo then set about persuading Cabrera to join them in their extortionate scheme in a series of secret meetings during February 2007. The RICO Defendants and their co-conspirators first appealed to Cabrera emotionally, impressing upon him “the importance of the case, what it means for history, how we can do something that we will always be remembered for, what this would mean for the country and world, etc.” They also made it clear that he would be rewarded financially. Not only would Cabrera be paid a substantial sum for his “work,” an amount that eventually totaled at least \$263,000, but Donziger or one of his co-conspirators likely told Cabrera what Donziger had told another potential expert: “if he served as the global court expert and the plaintiffs won the case that he would have a job the rest of his life being involved in the remediation.”

128. Having convinced Cabrera to join their conspiracy and secure in the knowledge that the court would select Cabrera, the conspirators set to work with him to plan the writing of the report by the covert U.S. team the RICO Defendants and their co-conspirators had assembled. This report would develop into an essentially fictional description of the region that alleged massive harms with little or no valid data or analysis in support. And Cabrera would act as the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ puppet.

129. On March 3, 2007—two weeks *before* the court appointed Cabrera—Donziger, Fajardo and Yanza met with Cabrera to plan the report. Also present at this meeting were members of the U.S. team working with the conspirators to ghostwrite the Cabrera Report,

including Defendant Ann Maest, Richard Kamp of E-Tech International and Charles Champ of Champ Science and Engineering.

130. In the morning session of the March 3rd meeting, Fajardo gave a PowerPoint presentation outlining the plan for Cabrera's Global Expert Assessment. As part of that plan, Fajardo stated: "Our legal theory is that Texaco is liable for all of the existing damage, even that caused by Petroecuador." Fajardo then outlined a plan for dealing with Chevron: "Chevron's main problem right now is that it doesn't know what the hell is going to happen in the global expert examination. In other words, they don't know that. I hope none of you tell them, please. [laughter] . . . [I]t's Chevron's problem." Next, Fajardo identified six steps that the RICO Defendants must take, specifically: (1) the team must "[k]eep up the pressure and constant oversight in the court"; (2) the team must "[m]ake certain that the expert constantly coordinates with the [Lago Agrio] plaintiffs' technical and legal team"; (3) "[t]he [Lago Agrio] plaintiffs' technical coordinator must be [involved] in the process fulltime" and "[a]ccompany the expert in the field"; (4) "an attorney . . . will always be in the field to also protect the activity being performed"; (5) the team must "provide the facilities and necessary support to the field team"; and (6) the team must "support the expert in writing the report."

131. Fajardo made clear that they were the ones who would actually be writing Cabrera's report, explaining: "And here is where we do want the support of our entire technical team . . . of experts, scientists, attorneys, political scientists, so that all of us will contribute to that report—in other words—you see . . . *the work isn't going to be the expert's. All of us bear the burden.*" Someone asked whether the final report was going to be prepared only by the expert Cabrera. Fajardo responded that the expert will "sign the report and review it. But all of us . . . have to contribute to that report." Then Defendant Ann Maest of Stratus added, with a smile, "But not Chevron," and everyone laughed.

132. Later that day, the conspirators discussed the "work plan," a document that was prepared by the conspirators and subsequently submitted to the Ecuadorian court by Cabrera as the independent court expert. Donziger proposed that he and the U.S.-based consultants form a

“work committee” to present a “draft plan,” with a goal of being “more or less eighty percent, ninety percent from achieving a plan” in a few days. Looking at Cabrera, Donziger then said, “and Richard, of course you really have to be comfortable with all that. And we’ll also def—define the support the expert needs.” Donziger has admitted under oath that this work plan was drafted by his co-conspirators and that Cabrera did not disclose its true authors.

133. The recording of the March 3rd meeting ended with Donziger commenting, they could “jack this thing up to thirty billion in one day.” Donziger went on to say that he was exaggerating—it would really take 90 days. And in the end, the RICO Defendants and their co-conspirators “jacked up” the damages estimate in Cabrera’s Report to \$27 billion. Their plan of submitting their liability and damages theories under the guise of an “independent” expert report whose content was dictated by the very persons who stood to profit from an extorted payment from Chevron was thus well under way.

134. The next day, March 4th, Donziger explained how he would accomplish the conspiracy’s goal, despite the absence of supporting evidence. When Defendant Maest and the other consultants hired by the RICO Defendants and their co-conspirators to write Cabrera’s report told Donziger that there was no evidence that contamination from the pits had spread into the surrounding groundwater, Donziger responded: “Hold on a second, you know, this is Ecuador, okay, . . . You can say whatever you want and at the end of the day, there’s a thousand people around the courthouse, you’re going to get what you want” and “[t]herefore, if we take our existing evidence on groundwater contamination, which admittedly is right below the source . . . [a]nd wanted to extrapolate based on nothing other than our, um, theory,” then “[w]e can do it. And we can get money for it.” He continued: “*Because at the end of the day, this is all for the Court just a bunch of smoke and mirrors and bullshit.*” And when Champ argued that “there is not enough information on that groundwater” and that “the one hole in the remediation, is the water,” Donziger instructed the camera crew capturing his conversation to stop filming, stating, “[T]here’s another point. I got to make . . . to these guys, but I can’t get this on camera.”

135. The RICO Defendants' and their co-conspirators' strategy all along, as first evidenced in Donziger's discussion with Fajardo about whether to request an even higher amount than Russell's disavowed \$6 billion damages estimate to make it appear as though a judgment of a lower amount was reasonable or even somehow favorable to Chevron (*see* paragraph 107, *supra*), was to provide an absurd damages number to convince the judge to award a lower but still outrageous amount. Donziger described the goal to his consultants: "If we have a legitimate fifty billion dollar damages claim, and they end up—the judge says, well, I can't give them less than five billion." He explained that an inflated damages number would allow the judge to say that "Tex had a huge victory. They knocked out ninety percent of the damages claim."

136. Donziger brushed off other comments from consultants Champ and Kamp expressing concern about meeting with Cabrera. First, Champ told Donziger, "I know we have to be totally transparent with Chevron in showing them what we're doing." Donziger responded, "No, no," and stated, "because they will find out everything we do." He continued: "Our goal is that they don't know shit . . . and that's why they're so panicked." Then, Kamp expressed unease about the process and commented to Donziger that "[h]aving the perito [Cabrera] there yesterday in retrospect . . . That was bizarre." In response, Donziger instructed Kamp: "Don't talk about it," and, "that's the way it works." Donziger told the camera crew, "[T]hat is off the record."

137. The RICO Defendants' and their co-conspirators' close relationship with Cabrera also raised questions in the minds of the *Crude* filmmakers, who became "confused about why Chevron is saying that the Court Appointed expert is biased." The filmmakers asked Fajardo why he was paying Cabrera, "[w]hy is Chevron not also paying for the expert and why do they not have their own expert[?]" Even to sympathetic individuals untrained in legal matters, something about the RICO Defendants' and their co-conspirators relationship with Cabrera seemed wrong.

**(ii) The Court Appointed Cabrera as Its “Independent”
“Global Assessment Expert”**

138. In late February, to cover up the fact that the judge planned to appoint the “global assessment expert” championed by the RICO Defendants, the judge called Cabrera and purported to ask him for a recommendation for the expert. But by this point Cabrera’s appointment had already been secretly secured by the RICO Defendants. Indeed, in their internal correspondence they discussed the steps they had taken to make “100% sure the judge would appt Richard,” including threatening the judge with a complaint against him that they showed him, but never filed. Thus, when Donziger feared the judge’s call to Cabrera meant the appointment of the RICO Defendants’ handpicked “expert” was in jeopardy, Fajardo reassured him that the call was just “part of the judge’s complicated plan to protect himself.” On March 19, 2007, the Lago Agrio court did indeed appoint Cabrera as its global assessment expert, ordering that Cabrera would be “responsible for the entire report, the methodology used, for the work done by his assistants, etc.”

139. Cabrera, the RICO Defendants, and their co-conspirators had violated the terms of Cabrera’s appointment before he had been appointed, and they would continue to do so throughout his service. They did this even though the RICO Defendants knew, as Donziger has since admitted, that the Lago Agrio court ordered Cabrera to “act with absolute objectivity and independence” and to “act independent of the parties.” The RICO Defendants, however, knew that they had to maintain a façade of independence. To do so, shortly after Cabrera was appointed, they plotted “something that Richard [Cabrera] could do AGAINST us in order to prove his independence.”

140. When the Lago Agrio court officially swore in Cabrera as the global assessment expert on June 13, 2007, Donziger exclaimed that “the perito just got sworn in . . . this is a huge victory!!!!!!!” He further elaborated that the development was good for the Lago Agrio Plaintiffs’ case: “We have to keep pushing on all fronts at all times. . . . [A]ll this bullshit about the law and facts . . . but in the end of the day it is about brute force . . . [Cabrera’s

appointment] took five months . . . five months of delay . . . and [the judge] never would have done [it] had we not really pushed him.” And he noted, “that visit to the judge last week was a huge help.”

141. Consistent with Cabrera’s unique and central status as the court’s sole expert for damages issues, including liability, the Lago Agrio court repeatedly issued orders that Cabrera was required to be independent from the parties. For example, when the court administered the oath to Cabrera in June 2007, Cabrera had to promise that he would perform his duties “with complete *impartiality* and *independence* vis-à-vis the parties.” And on October 3, 2007, the Lago Agrio court ordered Cabrera to “work in an impartial manner and independently with respect to the parties.” The court further explained that “the role of the expert is one of complete impartiality and transparency with respect to the parties and their attorneys” and required Cabrera to “observe and ensure . . . the impartiality of his work, and the transparency of his activities.” By then, the conspirators were already well into planning the drafting of Cabrera’s purportedly independent report, and indeed the court itself may have been participating in the scheme by this point, and merely issuing these orders for the sake of appearances.

142. In November 2007, the Lago Agrio court ordered that “all the documents that serve as support or a source of information for the work performed by the Expert must be presented together with the report. . . . [I]n his report the Expert is required to cite all of the scientific sources, and analytical and legal documents that he uses to perform his work.”

(iii) While Cabrera Staged Mock Inspections, the RICO Defendants and Their Co-Conspirators Secretly Ghostwrote His Report

143. In public, the RICO Defendants and their co-conspirators and Cabrera worked to maintain the illusion that Cabrera was an independent expert. At one inspection, in an exchange included in the film *Crude*, Cabrera and Fajardo made a show of rejecting a suggestion from Chevron’s lawyer Diego Larrea that counsel for the parties be permitted to make suggestions to Cabrera as to what samples he might take on his inspections (translations are taken from *Crude*):

Cabrera: (Addressing the public) I have been named the expert for the global assessment report. At this juncture, I am the highest authority at this examination. The samples taken and the analyses done today will be the only ones valid for this report.

Larrea: (To Cabrera) We would like you to consider the possibility of letting us know what kind of sample will be taken at each location so that eventually we can suggest that other samples be taken—

Fajardo: (Raising his hands in protest) Wait, wait, wait. . . .

Larrea: In the same terms that Pablo says —

Fajardo: You can't do that.

Larrea: The expert can check the equipment to verify if it's visible. (To Fajardo) It's a request. He can deny it or accept it.

Fajardo: What we agreed on was that the expert has the authority to say what is and what isn't going to be. We can't say "take samples here and there." Excuse me, but that is something he has to decide.

Cabrera: (To Larrea) You can make a suggestion, but I can't work under your criteria. I decide where to take samples, and that's it, counselor.

144. Of course, while Fajardo's duet with Cabrera at the inspection site was featured in the theatrical release of *Crude*, the outtakes show that Fajardo was doing far more than merely inspecting Cabrera's equipment. At their all-day session weeks earlier, Fajardo told Cabrera exactly what "criteria" he would be working under, and how Fajardo's associates would secretly write Cabrera's report for him. And when Cabrera did go into the field to conduct testing, Donziger laid down further "criteria" under which he expected Cabrera to work in an email to Yanza and Fajardo: "When I get there, we'll re analyze the work and the budget with Richard. And we'll adjust with a much smaller team. My tendency is to stop Richard from working much more in the field . . . or, if he continues doing it, he should continue under the most strict control with an extremely limited number of samples. And we'll change the focus of the data at our offices." The RICO Defendants have also admitted that they selected the sites that Cabrera

would sample. Indeed, as Donziger has admitted, Fajardo was in “regular contact” with Cabrera—unbeknownst to Chevron—while Cabrera was supposedly serving as the “independent” court expert.

145. Back in the United States, preparations were well underway for drafting Cabrera’s Report. Just after the March meeting with Cabrera, David Chapman, a principal at Stratus, emailed Donziger, proposing that “the way this would work best is that if Stratus did much of the work, putting the pieces together and writing the report.” Shortly thereafter, on April 27, 2007, the conspirators assembled at Stratus’s offices in Boulder, Colorado to discuss how they were going to “jack this thing up to thirty billion,” as Donziger had put it. Present at the meeting from Stratus were President Joshua Lipton, David Chapman, Preston Sowell, and Defendants Beltman and Maest. The conspirators ultimately went with Chapman’s suggested approach, permitting Stratus to take the lead on the drafting of the report. As Donziger later admitted, Beltman, the Stratus project leader, had “a fair amount of discretion,” including the authority to eliminate sections of the report if Stratus could not complete them on time.

146. The participants in this meeting also discussed how they could leverage the Cabrera Report, once it was filed in the Lago Agrio court, as a supposedly independent endorsement of their position. Donziger talked up how important and far-reaching he thought the report should be: “We also see this case as having a larger meaning. . . . [W]e think that, Uhm, this is the kind of thing people will be interested in reading. You know, like this damages report[—]academics, people in your field, other lawyers.” Lipton responded, “we loved the whole package.” As a result, Stratus entered into a contract with Kohn Swift to provide technical assistance, including the production of reports and support in discussions with the media, in furtherance of the conspiracy. The initial contract for \$125,000 was modified multiple times to accommodate Stratus’s increasing involvement and fees. Indeed, by the fall of 2009, Stratus received at least \$1.1 million in payment for their role in the criminal scheme. Donziger also offered Stratus a piece of the action, suggesting that it could obtain contracts to oversee the

actual remediation work once the RICO Defendants obtained a fraudulent judgment against Chevron.

147. Meetings and communications continued between the conspirators as they prepared Cabrera's report. Leading up to the April 2008 filing of Cabrera's first report, Stratus, Donziger, Kohn, and environmental consultants exchanged hundreds of emails regarding draft outlines of the Cabrera report and proposed annexes, schedules for completion of various annexes, and discussing review, analysis, and translation of the annexes including "[e]nvironmental standards," "[e]co impacts from contamination," "[p]it (plus) cleanup costs," "[v]alue of human life losses," "[h]abitat losses at wells and stations," "TexPet [r]emediation summary," "[h]istorical data summary," "[d]ata extrapolation" and "[t]oxicity of site chemicals to humans." (Additional details concerning the emails exchanged in furtherance of the conspiracy's scheme to defraud Chevron are included in Appendix B, which is incorporated by reference as if set forth herein in its entirety.)

148. During this period, Donziger continued to press for higher and higher damages numbers, explaining at one point that an estimate for unjust enrichment "sound[ed] awfully low" and implored that the Stratus consultants not "say or even suggest anything that backs away from the [Lago Agrio plaintiffs'] figures." And as another means of getting the high numbers he wanted—and getting the most impact from the "independent" expert—Donziger during this period suggested to Stratus that they "define the norms of clean-up" and then "propose these norms to the Ministry of Energy which governs these norms[,] and whose Minister is a good friend of ours, so that the Ministry issues them as an official decree before the trial ends."

149. The numerous emails among the Stratus team and between Stratus and Donziger were necessary because, as Beltman explained in a February 22, 2008 email urging his Stratus colleagues' support: "We have to write, over the next 2 to 3 weeks, probably the single most important technical document for the case. The document will pull together all of the work over the last 15 or so years on the case and make recommendations for the court to consider in making its judgment." And that "single most important technical document for the case" was the

Cabrera Report itself. As Donziger has now admitted, “[T]he general idea” was “that Stratus would draft the report in a form that it could be submitted directly to the Ecuadorian court by Mr. Cabrera.” The RICO Defendants and their co-conspirators took care to make it appear that Cabrera had actually prepared the report. For example, Kohn corrected Beltman at one point, telling him to use “1,000ppm instead of 100” because “Cabrera exclusively uses 1000.”

150. As Beltman, Donziger and others made decisions about the contents of appendices to the report and which appendices to include, Beltman also turned his focus to completing the draft of the report itself, writing to Maest and other colleagues on March 10, 2008: “Now that the annexes are out of the way, there’s the little problem of the report itself. Unfortunately, I’ve been too busy on annex stuff to work much on it, and it has to go to the court in [two] weeks and get translated. It’s a problem.” Indeed, Beltman himself was responsible for drafting the majority of the report, while the various annexes were parceled out among the various Stratus employees and contractors and others hired by the RICO Defendants. When he had an initial draft of the Cabrera Report written, Beltman sent it to Donziger, asking whether he was “on track in terms of tone, language level, and content.”

151. While Stratus was the primary coordinator of the work that went into the Cabrera Report, other members of the U.S.-based team of experts the conspirators assembled, including E-Tech, Uhl, Baron, Rana & Associates, Inc., and 3TM Consulting, also contributed to the report without attribution in the report or disclosure to Chevron. Annex S of the Cabrera Report, for example, was drafted by co-conspirator William Powers, who worked for E-Tech and was a subcontractor for Stratus, and his calculations were used in Annex T. And Richard Clapp, another consultant hired by Donziger and his co-conspirators, drafted one of the annexes to the Cabrera Report. And Stratus retained contractors to prepare a large database of sampling data, known to the RICO Defendants as the “Selva Viva Database,” which was reviewed and further revised by the RICO Defendants and their co-conspirators in Ecuador.

152. As the various consultants finished their portions of the Cabrera Report, Beltman took on the delicate task of translating the report, written in English by U.S. consultants, into

Spanish. As Beltman would later put it, they would treat “our original English version as if it’s a translated version” of Cabrera’s work. In March 2008, Beltman corresponded with several translation firms, ultimately working mainly with Translating Spanish, Inc. On March 12, 2008, Beltman sent, via email with a copy to Maest, the actual Cabrera Report—which contained an introduction falsely stating that “[t]his report was written by Richard Cabrera, ING to provide expert technical assistance to the Court”—to be translated into Spanish for filing with the Lago Agrio court. And as Beltman and other Stratus Consultants revised their work, they forwarded new annexes of the report for translation as well. In addition, the critical annexes to the Cabrera Report covering alleged remediation costs, excess cancer deaths, and other building blocks of what would ultimately be a \$27 billion fraud were also translated into Spanish at Beltman’s direction days before they were fraudulently submitted to the Lago Agrio court as the work of Cabrera and the other Spanish-speaking personnel to whom the report would be attributed. In order to facilitate the final preparations, the RICO Defendants discussed renting office space in Ecuador as well, but Donziger stressed that it had to be “isolated,” and could not be space shared with those known to be affiliated with the RICO Defendants.

153. Prior to the Cabrera Report’s submission, Beltman followed up to ensure that those consultants who had actually written certain annexes had their “name[s] taken off” the documents that Cabrera would actually submit to the court. The RICO Defendants and their co-conspirators determined “to whom Richard [Cabrera would] attribute each of the annexes,” and it was not to their actual authors. All of these contributions were orchestrated by the conspirators, who maintained a master schedule identifying each portion of the report, which of their team members would do the actual work, and to whom they could publicly and fraudulently “attribute[e] each in the filed Cabrera Report.”

154. The conspirators did not entirely ignore Cabrera during this period of heavy drafting. In January 2008, Donziger, Beltman, Maest, Fajardo and others met with Cabrera as the conspirators were in the homestretch of drafting his report. Notably, this meeting was held at a private home, and not at the conspirators’ offices in Quito, in order to keep the meeting a

secret. The RICO Defendants also delegated various aspects of the report to nominal authors who had not been publicly identified as working with the Lago Agrio Plaintiffs, but who in fact were close associates of the RICO Defendants. The RICO Defendants kept a close eye and a firm hand on their work. For example, Luis Miguel Garcia Aragon, who was later disclosed to be a member of Cabrera's team, engaged in ongoing email communication with Beltman and Maest regarding the drafting of extensive portions of the Cabrera Report. On January 22, 2008, Aragon emailed Beltman, "We're moving forward with our model thanks to your help. Now I'm maling [sic] you after the documents [sic] you told me about. Do you remember, about the discount rate and so? I'd appreciate you sending me those." The RICO Defendants and their co-conspirators also retained and worked with another consultant, Juan Cristobal Villao Yopez, who was also later identified in the filed Cabrera Report as a member of Cabrera's "independent" team, and the technical reports on water issues that he wrote as a paid consultant for the RICO Defendants ultimately appeared in the Cabrera Report. Another supposed member of Cabrera's "independent" team is Ximena Echeverria who has since been revealed to be an employee of Defendant Selva Viva and who was actively working with Stratus, a fact never disclosed to Chevron or the Lago Agrio court until it was revealed in Chevron's U.S. discovery efforts. Accordingly, the RICO Defendants and their co-conspirators and "Cabrera's team" were one and the same.

155. And it was the RICO Defendants and their agents who finalized the Cabrera Report, down to the last comma. At most, Cabrera had a few hours to skim the report and the 4,000 pages of supporting material, but he made no changes, and could not have given it a substantive review—that is, if he reviewed it at all. The bulk of the report was drafted in English—a language Cabrera does not speak—and was not complete until the middle of March. After the translation was finished on or around March 18, 2008, the RICO Defendants still had work to do on the Cabrera Report, prompting Beltman to complain that they were in a "tight bind" with so little time left. The RICO Defendants and their co-conspirators continued to maintain control of the document during this time, revising the Spanish text directly, until the

morning of March 31, the day before it was filed. On that morning, they printed the report and its voluminous supporting material, which were then to be submitted to the Lago Agrio court the next day by Cabrera—its author in name only.

156. Nonetheless, Cabrera, the RICO Defendants, and their co-conspirators intended to spread the lie that the report was Cabrera's own. To this end, they made every effort to conceal the huge amount of work performed by Stratus and others, despite the Lago Agrio court's order that Cabrera present "all the documents that serve as support or a source of information" and "cite all of the scientific sources, and analytical and legal documents that he use[d]." Donziger has admitted that "there was a general feeling on our team that we wanted" to "ke[ep] confidential" the "fact that plaintiffs had written" "[p]ortions of what became the Cabrera report." Concealing this fact was partly driven by the concern of some of the RICO Defendants and their co-conspirators about being criminally charged in Ecuador if they had admitted that they had ghostwritten portions of the report filed under Cabrera's name.

157. The RICO Defendants and their co-conspirators have never disclosed, and have still not admitted, the relationship between Cabrera and the Lago Agrio Plaintiffs to the Lago Agrio court. Indeed, they have failed to disclose this fact even though as early as May 2010, one of the conspirators, Ilann Maazel of Emery Celli, conceded in internal correspondence that "neither Cabrera nor plaintiffs disclosed a submission from plaintiffs that contained drafts of part of the expert report written by Stratus" and another, Jonathan Abady of the same firm, described the relationship as the "wholesale adoption of Stratus work product w/o attribution." And Donziger himself has now conceded that he "do[es]n't think" the Cabrera Report's statement of authorship—" [t]his report was written by expert engineer Richard Stalin Cabrera Vega"—"is accurate" and that Stratus ultimately gave Cabrera "a substantial amount of material," including "an actual report with annexes in Cabrera's name." Yet the RICO Defendants still have not acknowledged the truth. As recently as January 2011, the RICO Defendants filed a brief in the Third Circuit stating that "[t]he Ecuadorian court was and is well aware of the Ecuadorian

Plaintiffs' *ex parte* contacts with Cabrera and submission of materials to him—and indeed, *invited* such contacts and submission.”

158. The RICO Defendants and their co-conspirators, in attempting to conceal the true authorship of the Cabrera Report and its annexes, encountered some close calls. On May 14, 2008, for example, Beltman wrote to Defendant Donziger regarding an “[u]rgent issue” that arose when Karen Hinton, spokeswoman for the Amazon Defense Front, wanted to give Richard Clapp’s report—the same report the RICO Defendants submitted as an annex to the Cabrera Report—to a reporter. To have done so would have exposed the truth that the RICO Defendants and their co-conspirators and their consultants actually wrote the Cabrera Report. And so, Beltman told Hinton not to use the Clapp report, giving the false reason that he was “not sure of its pedigree” instead of telling her the real reason it could not be made public: that it was used “as an Annex” to the Cabrera Report. Concerned about covering their tracks, Beltman warned Donziger that they “need to be careful about this.” And later, when the RICO Defendants and their co-conspirators feared that Clapp himself would inadvertently disclose the true authorship of the Cabrera Report during a congressional hearing, Donziger explained the steps necessary to prevent exposure: “We have to talk to Clapp about that 5-pager, and how we have to limit its distribution. It CANNOT go into the Congressional Record as being authored by [Clapp].”

159. In their rush to finish the Cabrera Report and then the supplemental report, the RICO Defendants and their co-conspirators were not careful enough. After the Cabrera Report had already been submitted, Beltman realized that an annex to the Cabrera Report may have cited a report written by Clapp. The problem, according to Beltman, was that the cited report had then *itself* been used verbatim in Cabrera’s report. Beltman lamented in an email to a colleague, “[o]h what a tangled web . . .” omitting the rest of the quotation, “when first we practice to deceive.”

160. In another effort to prevent Stratus’s role in drafting the Cabrera Report from coming to light, Beltman attempted to influence the testimony of Stratus employees who might

be called to testify in United States court. After Chevron filed an action pursuant to 28 U.S.C. § 1782 seeking discovery from Stratus, Stratus held staff meetings attended by all staff available at that time, including some personnel who had been subpoenaed to testify. The staff members were provided with information about Chevron's subpoenas and the Cabrera Report, and Beltman, taking the opportunity to create a consistent but misleading story, misrepresented to the meeting attendees that Cabrera was an "independent expert who submitted his own report to the court." During this and other staff meetings, Beltman also misrepresented Stratus's role to Stratus staff. He explained that Stratus had "prepared a series of technical analyses" that were given to Cabrera "to help in his preparation of his report" and failed to disclose the fact that Beltman and other Stratus consultants had authored the report that Cabrera submitted as his own.

161. Fajardo and Donziger also discussed how they would respond to any accusations that "Cabrera used exactly, or almost exactly, the same words we put in our motions." Fajardo offered the "[s]imple" solution of concocting a story that the RICO Defendants submitted material to Cabrera after they noticed some errors in the calculations and figures in the report and that Cabrera then adopted their submission. As Fajardo put it, "There is no substantive problem, we just have to explain it."

162. Fajardo and Donziger also devised ways to hide their misconduct by creating special email addresses and code names to be used in planning and discussing their scheme. Fajardo, for instance, instructed Donziger not to use his own email account to send comments about the report that Stratus was ghostwriting, and not to send the comments to Fajardo's regular email address but to direct them to a new, specially created email address. Fajardo instructed Donziger, "do not insert any names in the document," and told him to use code names; Fajardo went by Lagarto 2, and Donziger by Lagarto 3. ("Lagarto" is Spanish for "lizard.") This was done, as Donziger has admitted, because they did not want others to know that Stratus had drafted the final report for Cabrera to submit to the court.

163. In addition, the conspirators sought otherwise to cover their tracks in the United States. E-Tech, for example, failed to report income received for doing its work to the Internal

Revenue Service, characterizing payments to consultants as charitable contributions, and routed payments, inside the United States and abroad, in order to hide the fact that these payments were being used to fund unlawful activity. E-Tech has also subsequently failed to file required reports in its home state of New Mexico, resulting in the cancellation of its Certificate of Incorporation. And as the RICO Defendants and their co-conspirators continue to obstruct Chevron's investigation into their conduct in front of many U.S. federal courts, they have kept up a constant public pressure campaign attacking every suggestion that the Cabrera Report was not neutral and independent. *See* paragraphs 229-39, *infra*. This defense of the Cabrera Report is necessary because, among other things, without it the RICO Defendants would be left with no evidence of either liability or damages.

**(iv) The “Cabrera Report”: The RICO Defendants’
Repeated Fraud**

164. On April 1, 2008, accompanied by armed guards, Cabrera filed his first report with the Lago Agrio court. Despite the fact that Cabrera still had more time to file his report and had not made any public statement that he would be filing it early, the RICO Defendants knew when he would file the report, and had prepared detailed press releases and alerted the *Crude* team to be on hand to film the event. Relying on misstatements, conclusions not supported by evidence, and bad science, the “Cabrera” Report—the culmination of the clandestine work that the conspirators had begun more than a year earlier—concluded that Chevron was liable for more than \$16 billion. The RICO Defendants knew that the Cabrera Report falsely attributed liability to Chevron, and that it would be accepted only if it appeared to have come from an “independent” court expert. This was why they prepared the document in secret, and actively sought to keep Chevron from knowing who had really written it. And the conspirators were not done ghostwriting material for Cabrera to falsely present as his own.

165. In September 2008, the parties submitted to the Lago Agrio court questions and comments on the Cabrera Report. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ submission filed on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs was in all respects intended to perpetuate the false

appearance that Cabrera was neutral and independent and that the RICO Defendants and their co-conspirators were not the report's true authors. This submission purported to urge Cabrera to consider various documents and third-party reports, criticized his legal analysis of liability, and gave suggestions as to how he might support his existing findings and introduce new ones. But it had been the RICO Defendants and their co-conspirators themselves who had decided which documents to review, how to present the legal case, and what findings and support to put forward in Cabrera's report. Thus, the RICO Defendants and their co-conspirators wrote their "questions" to further the false appearance of independence from Cabrera.

166. Cabrera filed a response to the Lago Agrio Plaintiffs' comments on November 17, 2008 in a supplemental report. Ignoring Chevron's objections, the comments put forward by the Lago Agrio Plaintiffs are reflected (at times word for word, including errors) in Cabrera's supplemental report, which increased the damage recommendation to \$27 billion, with little explanation and no legally or scientifically valid support. As Donziger had planned, the RICO Defendants and their co-conspirators were indeed able to "jack this thing up to thirty billion."

167. The RICO Defendants and their co-conspirators also dictated other portions of Cabrera's response by secretly drafting his "answers" to their own comments and questions. Some of the "questions to the Perito [Cabrera]," according to an internal Stratus email, were "assigned to us." In an email dated August 1, 2008, Beltman outlined for his colleagues what "we need to do for the comments on the Cabrera report." His email listed the various answers that needed to be prepared, and what they should say. Beltman repeatedly referred to the Lago Agrio Plaintiffs' questions in the first person and to their own work as that of "Mr. Cabrera." For example, he says that "[w]e comment on the lack of consideration given to cleanup of rivers and streams," and "[w]e comment that Cabrera does not consider metal contamination in his cleanup costs." He then suggests possible responses to those comments. Beltman likewise expressed his desire that work performed by U.S. consultant 3TM "be in a form that someone in Ecuador could have written," and another Stratus employee noted that Stratus needed to revise

their work to “clean up the language so it [would] sound[] more like [Cabrera] and less like a comment.”

168. The RICO Defendants accomplished their ruse in part by asking Powers, the same Stratus contractor who ghostwrote portions of Cabrera’s initial report (*see* paragraph 151, *supra*), to respond to questions that had been raised in connection with the Cabrera Report. Defendant Maest provided Powers the questions to be answered—questions that were the very same ones posed by the Lago Agrio Plaintiffs in their September 2008 filing. Powers then supplied Maest with the answers that are the same as those that are included in Cabrera’s November 2008 report.

169. In addition, the RICO Defendants and their co-conspirators incorporated into Cabrera’s response a second report written by Richard Clapp, another one of their hired consultants. Just as the RICO Defendants and their co-conspirators had been concerned that Hinton or Clapp himself would inadvertently disclose the fact that Clapp’s first report had been incorporated “as is” in the form of an annex to the Cabrera Report, they likewise became concerned that the use of Clapp’s second report in Cabrera’s response would accidentally be made public. Beltman warned Donziger, “I don’t think we should hand out either [report] as Clapp’s, thereby distributing proof.”

170. Beyond the misrepresentations concerning Cabrera’s independence and the authorship of “his” report, the Cabrera Report—without which the RICO Defendants cannot demonstrate liability or damages—suffers from substantial flaws and fundamental problems. Determined to “jack up” the damages estimate to \$27 billion, the conspirators, among other egregious defects, attributed *all* alleged environmental impact from oil operations in the former consortium area to TexPet and none to Petroecuador, the sole owner of operations in the former consortium area for the past nearly 20 years and the one responsible for well over 1,400 oil spills during that time. The report includes millions of dollars of damages for remediation of disposal pits that do not exist and are, in fact, shadows and other dark objects on aerial photographs. In addition, the report relies on U.S.-derived cost baselines, standards, and methodologies which do

not reflect substantial differences in costs between the U.S. and Ecuador, and are often meaningless outside the larger U.S. regulatory context. For example, the report asserts that the cost of remediating the pits—including the imaginary ones—would be \$2.2 million per pit. This is *25 times* greater than Petroecuador’s average actual cost of ongoing pit remediation at \$85,000 per pit.

171. Other intentional errors abound. Even though Cabrera did not take a *single* sample of drinking water and despite the existence of literally dozens of public drinking water systems in the concession area, the report assesses \$428 million in damages for potable water systems. The conspirators also included \$8.4 billion in damages for “unfair profits” TexPet allegedly earned, a penal levy that the Lago Agrio Plaintiffs never requested in their complaint, and included allocations such as millions of dollars to create a husbandry farm to produce hunting game for local residents.

172. Finally, the RICO Defendants relied on unreliable, manipulated sampling data that they selected in order to maximize their damages claims. While claiming to use independent laboratories, the RICO Defendants actually processed much of the material themselves, often at a makeshift lab in a hotel room, which they referred to as “Selva Viva Labs.” This work was so shoddy, however, that they sometimes had to simply “lose” reports that would not stand up to any review. They would also change their analysis when the results were not coming out the way they wanted. For example, in 2004 they stopped analyzing for certain contaminants because they realized that the presence of those contaminants in the samples would “show that the contamination is much more recent than we would desire,” thus indicating that the source was Petroecuador activity after TexPet ceased operations.

173. The Cabrera Report also unilaterally expanded the scope of Cabrera’s mandate and went far beyond the expertise of his publicly disclosed team by addressing additional issues unrelated to the Lago Agrio Plaintiffs’ claims for environmental remediation and medical monitoring. Despite the failure to identify a single individual with cancer or produce a single medical report, the report initially assessed \$2.9 billion for “excessive cancer deaths” and then

increased that to \$9.5 billion in the November 2008 filing, ostensibly based on just over a page of additional discussion. The report did not use any scientifically accepted method to link cancer to the consortium's operations; instead of using official data, the "excessive" cancer deaths were "assessed" on the basis of self-reporting at group meetings with undisclosed members of the local population conducted by purported member of the Cabrera team Carlos Beristain, who was in fact working at the direction of the RICO Defendants and their co-conspirators.

174. The Cabrera Report and its subsequent supplement were not the only documents filed under Cabrera's name which were secretly written by the RICO Defendants. On November 5, 2007, Cabrera filed a statement with the Lago Agrio court alleging that he had been subjected to threats and harassment, and that he was constantly under surveillance by unknown parties. But while this notice was signed by Cabrera, it was prepared for him by the RICO Defendants. Donziger has admitted, however, that he had no concrete evidence for the allegations in the notice that Cabrera was in "serious danger."

(v) The RICO Defendants' Fraudulent Endorsements of Their "Cabrera Report" and Procurement of Other Endorsements Through Misrepresentations

175. The RICO Defendants and their co-conspirators sought almost immediately after filing the Cabrera Report to bolster it through the publication of endorsements of the report by Stratus itself—the report's secret author—and by third-party experts.

176. After the conspirators filed their report under the name of court expert Cabrera, Donziger, Beltman, Maest, Fajardo, Yanza, and Hinton assembled again in Boulder, Colorado to discuss and manage the "[s]cientific and public relation response to [the] Cabrera report." During this meeting, they developed their plan to obtain multiple levels of endorsement of the report for use in the Lago Agrio court and the U.S. media. They also strategized about how to increase the already unfounded damages number contained in the Cabrera Report, developed a plan for responding to Chevron's criticisms of the report, and outlined a plan of attack on the media front. As Beltman later acknowledged in an email to Amazon Watch about the progress of their plan to procure fraudulent endorsements, "a big part of this will be for media."

177. The first level of endorsement the RICO Defendants and their co-conspirators put into play was the promotion of the Cabrera Report and the trumpeting of its “independence” by Stratus, the report’s secret author. On December 1, 2008, Stratus released a fifteen-page document purporting to analyze and defend the Cabrera Report. In this document, which bears on its front page the signatures of Beltman and Maest, as well as other Stratus employees, Stratus claimed, “Mr. Cabrera is thus acting in the capacity of a neutral ‘expert’ to the Court, and his role is to assist the Court in evaluating the scientific and technical information that was collected and compiled for the case. In the U.S. Court system, Mr. Cabrera would be called a Technical Special Master.”

178. Stratus’s December 2008 review of the Cabrera Report is written to give the impression that its authors had no connection to the Cabrera Report or the supplement to his report, and were providing a neutral, third-party review. For example, the RICO Defendants and their co-conspirators described the writing of the report as follows: “After reviewing the extensive record of environmental data and information that was collected during the trial, and collecting some of his own data, Mr. Cabrera has concluded that Texpet’s operations severely contaminated a large area of the Ecuadorian Amazon, and that the contamination has caused extensive damages to the environment and its inhabitants.” Once completed, Stratus’s “review” of the Cabrera Report was knowingly distributed by the conspirators using physical and electronic mail and remains available on a co-conspirator’s website at <http://amazonwatch.org>. Yet Maest, who signed the review, has admitted that she did not know if Cabrera or any disclosed member of his team actually wrote any portion of the report, and that she has never seen anything suggesting that Cabrera actually considered or even read the report she and her colleagues wrote for him.

179. Stratus’s “review” was intended to deceive, as one of the lawyers retained by the RICO Defendants who reviewed the submission in 2010 recognized. Responding to an ongoing discussion about the RICO Defendants’ plan to accuse Chevron of fraud on the theory that it

knew Stratus had written the Cabrera report all along, the lawyer wrote the following to Donziger and other conspirators:

This document might end the discussion. These “comments” are written in a manner to give the impression that Cabrera was entirely independent and conducted his own research and came up with his own findings. There is no indication in this document that Stratus, ostensibly the company of experts independent from Cabrera, was itself involved in “ghosting” the Cabrera report. This might not be dispositive if there were other evidence showing that Chevron had actual or constructive knowledge that Stratus had been involved in the creation of the Cabrera report. In such a case Stratus’s “comments” may have been a rather crude and awkward spin by a biased expert - but it would not have been a “fraud” upon Chevron. But, in the absence of such evidence, then it appears not only that Cabrera and [the Lago Agrio] plaintiffs can be charged with a “fraud” respecting the former’s report, but that Stratus was an active conspirator.

This statement admitting that Stratus was involved in “ghosting” the Cabrera Report and expressing concerns regarding Stratus’s “endorsement” of the report was from one of the Lago Agrio Plaintiffs’ attorneys purportedly retained by Donziger.

180. The second level of endorsement envisioned by the RICO Defendants and their co-conspirators and discussed during their June 2008 meeting in Boulder involved soliciting the endorsement of credible experts by deceiving them about the Cabrera Report’s authors and the collusion between the RICO Defendants and their co-conspirators and Cabrera. During the meeting, the RICO Defendants and their co-conspirators discussed the fact that experts who had already been approached for endorsement had questioned their “relationship to Cabrera,” and the RICO Defendants and their co-conspirators acknowledged that they “need[ed] to be able to give them answers.” What they ended up doing, in fact, was concealing that relationship entirely.

181. In seeking the sham “endorsements” of the Cabrera Report, Stratus falsely represented to numerous third parties that the report was written by Cabrera. For example, on June 12, 2008, David Mills of Stratus emailed a representative of California’s Office of Spill Prevention and Response, describing the Cabrera Report as follows: “As part of the trial, the Ecuadorian judge currently directing the case appointed a technical expert to summarize[] and analyze the technical data and information about the case and draw conclusions about the

environmental and human impacts of the oil exploration and production activities. This expert report was recently submitted to the court.” Stratus asked the representative to review the Cabrera Report for a fee and provide comments via telephone conversation—comments that, if favorable, could later be submitted by the RICO Defendants and their co-conspirators to the court.

182. Similarly, on June 26, 2009, Beltman emailed a representative of Brazil’s Aggeu Magalhães (Haggai Magellan) Research Center seeking an endorsement of the Cabrera Report. In that communication, Beltman referred to “the Court Expert report in which [Cabrera] presents the results of his studies and makes recommendations to the judge about the damages caused by Texaco and what needs to be done as reparation for those damages.” Beltman asked the Haggai Magellan Research Center to “please review the Court Expert report and read our evaluation of it, and think about how you could provide support. Our first choice is for you to sign the evaluation that we drafted (I can provide you with a blank signature page for you to sign and return).”

183. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ goal of obtaining fifteen or twenty endorsements from academics in addition to consultants, however, proved difficult given what Beltman called the “weaknesses” of the Cabrera Report. As Beltman explained to Donziger in an email: “Our original concerns about this have come to pass [Academics] are trained and they function to be critical, not accepting. [Additionally], they know that signing their names onto some kind of endorsement of the Cabrera report is setting them up for public attack from Chevron (and perhaps attack within their academic circles as well) And finally, some of the underlying work in the Cabrera report has weaknesses that an academic would probably have a hard time defending.” Beltman explained, “[w]e’re having better success with consultants being willing to sign endorsements than academics (something I am not proud of).”

184. The RICO Defendants and their co-conspirators did, however, ultimately succeed in convincing third parties to review the Cabrera Report that Stratus held out as having been drafted by a “Technical Special Master.” For example, on July 15, 2008, Stratus executed a

contract with Dr. Peter N. Jones of Bauu Institute whereby he agreed to review the Cabrera Report and provide comments in a conversation with Stratus. Such fraudulently obtained endorsements, along with Stratus's own evaluation—falsely touted as “independent”—served to further enhance the value of the Cabrera Report in the RICO Defendants' and their co-conspirators' media pressure campaign targeted at forcing Chevron to pay them off.

(vi) The RICO Defendants' Payments to Cabrera for Work He Did Not Perform

185. The perceived independence of the Cabrera Report was essential to the RICO Defendants' plan. Independence was the key to its credibility with the press, the public, and the other parties whose endorsements the RICO Defendants and their co-conspirators needed. Of course, the perception of independence would be lost if it was known that the RICO Defendants and their co-conspirators wrote the report themselves, and keeping this secret required Cabrera's cooperation. And if the Cabrera Report were perceived as untrustworthy, the RICO Defendants would be at a loss to demonstrate Chevron's liability, not to mention the “damages” they hoped to recover. Accordingly, when the RICO Defendants arranged for the court to abandon the judicial inspection process and appoint Cabrera as a “global” expert, they also insisted that the parties should pay for this process, and directly paid Cabrera over \$263,000, despite the fact that Chevron objected throughout to the improper new process and refused to fund it. These payments began immediately. Just weeks after Cabrera's appointment had been publicly announced, but before he was officially sworn in to commence his work, Yanza wrote to Donziger and told him, “We have met with Richard and everything is under control. We gave him some money in advance.” Some payments were made through a “secret account,” through which Kohn funneled tens of thousands of dollars to Cabrera, apparently in excess of the \$263,000 paid to Cabrera through Selva Viva. As it is now clear that Cabrera did not write the report, the only purpose for these payments, which were made by Defendant Selva Viva and funded by Kohn or Kohn Swift, must have been to buy Cabrera's cooperation and silence regarding the true authorship of the report.

186. Cabrera earned his money by repeatedly perjuring himself in the Lago Agrio court. For example, on July 23, 2007, four months after an all-day PowerPoint session with Donziger and Fajardo, Cabrera declared to the court: “I should clarify that I do not have any relation or agreements with the plaintiff, and it seems to me to be an insult against me that I should be linked with the attorneys of the plaintiffs.”

187. When Chevron raised questions with the Lago Agrio court as to the authorship of the Cabrera Report and Cabrera’s relationship with the Lago Agrio Plaintiffs, Cabrera represented in multiple filings with the Lago Agrio court that he had worked independently and transparently despite evidence to the contrary. On October 7, 2008, for example, Cabrera declared in a filing that he is an “honest man with nothing to hide, and [his] conduct as an expert in this case has been as professional, impartial and objective as possible, as can be seen from [his] expert report.” In that same filing, Cabrera asserted that he does “not take orders from either of the parties to the lawsuit” and that he is “not, nor will [he] be, subject to the views or whims of either of the parties.” In a subsequent February 5, 2009 filing, Cabrera claimed that the “entire expert investigation procedure was completed by [him] personally.” He later declared that “[a]ll the work was planned, directed, and approved by [him], as the person responsible for the expert examination.”

188. The RICO Defendants have also denied a relationship with Cabrera in filings with the Lago Agrio court. For example, in an April 4, 2008 filing, Fajardo asserted that the notion that there was a “common interest relationship between the expert Mr. Cabrera and the plaintiff” and that Cabrera “works for us” was “simply ridiculous.” Then on April 25, 2008, the RICO Defendants and their co-conspirators characterized Chevron’s claim that a close relationship existed between them and Cabrera as “[a]nother infamy,” “childish and absurd.”

189. Despite these protestations of Cabrera’s independence to the Lago Agrio court, Donziger himself has now admitted that Cabrera’s statements were “not accurate” because “certainly the [Lago Agrio] plaintiffs provided materials for his consideration.”

**(vii) The RICO Defendants' Attempt to Launder the
"Cabrera Report"**

190. Despite the RICO Defendants' concerted efforts to conceal the true authorship of the Cabrera Report, Chevron has uncovered significant elements of the nature and extent of their pervasive fraud, through discovery in U.S. courts pursuant to 28 U.S.C. § 1782. *See* paragraphs 270-323 *infra*. This partial picture of the truth coming to light, however, has not stopped the RICO Defendants from seeking and obtaining a massive judgment based on "Cabrera's" report. Instead, they have sought to whitewash the Cabrera Report by, for all intents and purposes, submitting it—again—to the Lago Agrio court, only this time with *new* names attached. On September 16, 2010, the RICO Defendants filed seven new "expert" reports with the Lago Agrio court, through which they now demanded \$113 billion in damages.

191. These seven new expert reports purport to be independent. In reality, however, they are a repackaging of Cabrera's flawed and fraudulent report. Donziger discussed this plan with his co-conspirators at Patton Boggs, expressing his concern that they were not moving quickly enough to file the new expert reports. As Donziger reported, "The Ecuador team is getting nervous that there is an increasing risk that our 'cleansing' process is going to be outrun by the judge and we will end up with a decision based entirely on Cabrera. Absent our intervention ASAP, they believe the judge could issue autos para sentencia in about 3-4 weeks, which would in effect bar our remedy to the Cabrera problem." In another conversation, one of the co-conspirators at Patton Boggs, Adlai Small, told Donziger, "One overarching theme to think about throughout this process is how we want the new expert to address the Cabrera report and its conclusion. While our new expert will most likely rely on some of the same data as Cabrera (and come to the same conclusions as Cabrera), [d]o we think the expert should make specific mention of such consistencies?" Small went on to explain to Donziger that he thought they should attempt to structure the new expert reports in such a way that they might rehabilitate the tainted Cabrera Report to some degree, so that someone presented with the new reports "might feel comfortable concluding that certain parts of Cabrera are a valid basis for damages."

Donziger has also admitted that the new expert reports were intended to give the RICO Defendants “an argument” allowing them to “attempt to shut down Chevron’s 1782 efforts in the U.S.”

192. The link between the fraudulent Cabrera Report and the work of the “new” experts is made explicit in the retention agreement signed by the Weinberg Group, a consulting firm, which, in turn, retained the “new” experts. The Weinberg Group’s retention agreement provides that it was retained for the purpose of “conduct[ing] a comprehensive review of selected sections of an expert report prepared by Richard Stalin Cabrera Vega,”—not to produce a new, independent scientific report. As one co-conspirator has described it, the role of the Weinberg Group is merely to “provid[e] a submission with their name on it.”

193. The Weinberg Group provided copies of the Cabrera Report to the experts it retained for use in their own reports. According to Donziger and his co-conspirators, all the “new expert[s]” needed was the “Cabrera report in and of itself” along with the data that Cabrera relied upon. As the RICO Defendants and their co-conspirators intended, these “new” experts then relied heavily on the Cabrera Report. According to Donziger, none of these “new” experts had “go[ne] to Ecuador,” “did any kind of new site inspection,” “did any kind of new sampling,” or indeed, did “environmental testing of any kind.”

194. One of the “new” experts, Douglas Allen, for example, made no independent evaluation of the evidence, instead relying on the unsubstantiated findings contained in the Cabrera Report. Indeed, the conspirators instructed Allen to use the Cabrera Report as his “starting point.” He relied entirely on the Cabrera Report for, among other items, the number of pits requiring remediation. Despite the fact that he “[did]n’t know if there are in fact 917 pits that require remediation,” he relied on that number anyway—drawn from the fraudulent Cabrera Report—in developing his own estimate. He relied on the Cabrera Report despite his opinion that the conclusions in the Cabrera Report are unreliable and that that the report lacked appropriate citations and references. Allen has admitted, however, that had he known that the

RICO Defendants and their co-conspirators actually wrote the Cabrera Report, that would have “bother[ed]” him and affected his expert opinions.

195. Similarly, another “new” expert, Dr. Lawrence Barnthouse, relied on the standards contained in the Cabrera Report, and “assume[d] [Cabrera] was correctly characterizing what they were.” Indeed, he has admitted that he was not retained to create a new, independent report, and further acknowledged that he “couldn’t be completely independent” and he had not “independently performed all the [necessary] calculations” in his own report because most of the information he needed was “only available from the Cabrera Report.” Like Allen, Barnthouse has admitted that he relied on the Cabrera Report despite the fact that he had reached the conclusion that Cabrera’s numbers were “uncertain” and that methodology he adopted from Cabrera was an “an unreliable indicator” and was “[s]uboptimal, [and] inadequate.”

196. Jonathan Shefftz, another of these experts, did no independent work and repackaged portions of the fraudulent Cabrera Report. For example, Shefftz assumed without doing any independent research or analysis that TexPet was required to incur costs and to remediate pits based solely on the Cabrera Report’s assertion that these costs were necessary. Shefftz admitted that his report as a whole depends upon “data and cost figures from the Cabrera Report” and that he had “simply taken [Cabrera’s] volume figures and . . . cost figures and used those as inputs to [his] calculations.” He explained that he “was not engaging in any exercise to verify [Cabrera’s] data series or his cost figures. [Shefftz] was just using them in [his] report.” Shefftz also conceded that his reliance on the Cabrera Report and its flawed numbers could “lend an upward bias” to his own results. Furthermore, an annex of Shefftz’s draft report relies heavily on annex T to the Cabrera report—an annex that was drafted by Stratus, the consultants who ghostwrote the Cabrera Report.

197. The reports of other experts, such as Carlos Picone, Robert Paolo Scardina, and Daniel Rourke were written “in collaboration with the Weinberg Group,” the group that had been hired not to create new reports but rather to repackage the Cabrera Report. Sections of Picone’s report were written entirely by the Weinberg Group, with only “minimal” editing by Picone.

Scardina's report was written largely by a person at the Weinberg Group whose identity and qualifications are unknown to Scardina himself. Scardina, like the other experts, also relied exclusively on the Cabrera Report and the Weinberg Group for information central to his report.

198. In summary, the "new" expert reports submitted by the RICO Defendants are new only in two aspects. First, they bear new names, despite being nothing more than another repackaging of the Stratus report that was originally submitted as the Cabrera Report. And second, they purport to support a new damages figure, a remarkable \$113 billion, which is a nearly \$90 billion increase over Stratus's figure, despite offering no new analysis or evidence.

2. Colluding With the Republic of Ecuador to Bring Sham Charges Against Chevron's Attorneys

199. As part of their scheme to defraud and extort Chevron, the RICO Defendants and their co-conspirators conspired with officials from the Republic of Ecuador to advance baseless criminal prosecutions against Ricardo Reis Veiga and Rodrigo Pérez Pallares, lawyers responsible for executing the 1998 Final Release that precludes Defendants' claims against Chevron in the Lago Agrio Litigation. As co-conspirator Bonifaz explained the strategy to Donziger and Kohn in 2005:

The day ChevronTexaco's management becomes convinced that Reiss Veiga [sic] sold them a bill of goods with his promises that got [rid] of our case, that is the day on which ChevronTexaco will want to talk. That is also the day that will see the end of Reiss Veiga's [sic] corporate career. . . . Thus we have to destroy his reputation with ChevronTexaco as an incompetent any way we can to see our case settled.

200. With criminal convictions in hand, the RICO Defendants and their co-conspirators and Ecuador could then seek to nullify the release, and "fully leverage the criminal investigation"—in the media and otherwise—to force Chevron to "settle" the Lago Agrio Litigation or face a massive judgment. According to Donziger, "[I]f this penal case is brought, this will be on the wires all over the world and it will really raise the cost to [Chevron]." Indeed, footage from *Crude* shows the conspirators admitting that the criminal prosecutions are a means to exert "personal psychological pressure [on Chevron's] top executives," and Donziger's own

personal notes make clear that the criminal prosecutions were meant “to keep the hammer over [Chevron’s] head” and “force [Chevron] to the table for a possible settlement.”

201. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ collusion with the Republic of Ecuador to procure the criminal indictments has been long in the works. In an email exchange in August 2005 (which appears to be an excerpt from an ongoing correspondence) among conspirators Alberto Wray, Bonifaz, Fajardo, Yanza, the Front, and Ecuador’s Attorney General’s office, Wray wrote, “if at some point we want the Government and the Attorney General to play for our side, we must give them some ability to maneuver.” Martha Escobar, a deputy of the Attorney General, responded that both the office and “all of us working on the State’s defense were searching for a way to nullify or undermine the value of the remediation contract and the final acta [*i.e.*, the 1998 Final Release]”

202. In that same email exchange, Escobar confirmed that the Attorney General was still determined to prosecute “those who executed” the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release, despite the absence of evidence of any wrongdoing: “The Attorney General remains resolved to have the Comptroller’s Office conduct another audit (that also seems unlikely to me given the time); he wants to criminally try those who executed the contract (that also seems unlikely to me, since the evidence of criminal liability established by the Comptroller’s Office was rejected by the prosecutor” The Attorney General later informed one of the RICO Defendants’ colleagues that “he want[ed] [them] to work together on this matter” and that, at least initially, “he [did] not want [their] meetings to be made public.”

203. After working together for some time, the RICO Defendants were successful in getting the Republic of Ecuador to pursue fraud charges related to the remediation against Chevron in litigation in the United States. When Donziger learned of this, he reveled in their success: “The Attorney General of Ecuador is now suing Chevron for fraud on the remediation!! We have been pushing this for over a year, we finally did it !!! This is huge, huge.”

204. The RICO Defendants and their co-conspirators went to great lengths to hide their collusion with the Republic of Ecuador, despite the existence of, as the co-conspirators

themselves described it, “pretty much irrefutable evidence of us collaborating with the [government] to get Reis Veiga and Perez convicted.” In an email to Donziger and others, one of the conspirators reminded them that they “had to resort to very sophisticated methods to disassociate ourselves from the case (Amicus Curiae submitted by third parties etc),” and urged Donziger and others not to undo this work by associating themselves publicly with the prosecutions. In an email to the Republic of Ecuador’s U.S. counsel discussing the potential prosecution, Donziger assured him that an Ecuadorian colleague working on the matter, “understands the need to keep his contacts with your client’s office totally confidential and non-public.” Martha Escobar—the deputy Attorney General with whom Wray exchanged emails—even perjured herself in a deposition taken in an action pending in the Southern District of New York on November 21, 2006 and denied that she ever had *any communications* with the conspirators concerning the Lago Agrio Litigation. But when confronted with her own 2005 email with Wray proving otherwise, she confirmed that she had been acting in that correspondence at the direction of the Attorney General.

205. The collusion with the Republic of Ecuador to obtain sham criminal charges, and the extortionate purpose of that collusion, is documented in the film *Crude* and its outtakes. In a January 2007 meeting between Donziger and Kohn captured in the *Crude* outtakes, in which they are reviewing materials the RICO Defendants provided to the Ecuadorian Attorney General in support of criminal prosecutions, Kohn discussed the RICO Defendants’ extortion plan: “So, again, that may be something that we could facilitate going away at the right time . . . if they wanted it to go away.” Donziger replied, “Precisely.” Donziger told Kohn that Chevron is alleging a “conspiracy” between them and the Ecuadorian government, to which Kohn responded, “If only they knew.”

206. On April 26, 2007, President Correa toured the Lago Agrio oil fields with the RICO Defendants and their co-conspirators. That same day, he issued a press release demanding the criminal prosecution of the Ecuadorian officials who had signed the 1998 Final Release. On the following day after hearing this news, Donziger mused as to whether the time might be right

to “ask for the head of [Chevron’s lawyer Rodrigo] Pérez Pallares—given what the President said.” Donziger explained: “[H]e’s totally with us.” The next day, on April 28, 2007, in a national radio address, President Correa echoed the RICO Defendants’ rhetoric, calling Chevron’s Ecuadorian lawyers traitors and demanding that they, along with the Petroecuador officials who signed the 1998 Final Release, be criminally prosecuted. In the movie *Crude*, Donziger is shown stating that “Correa just said that anyone in the Ecuadorian Government who approved the so-called remediation is now going to be subject to litigation in Ecuador,” and adding that those persons who signed the 1998 Final Release “are shittin’ in their pants right now.”

207. The fact that President Correa called for the criminal indictment of those who signed the Final Release did not come as a surprise to the RICO Defendants and their co-conspirators. A month prior to President Correa’s tour of the Oriente, Fajardo met with Ecuadorian government officials, including Alexis Mera, a Judicial Secretary and chief legal advisor to President Correa, in which Fajardo asked for Mera’s assistance in providing the President with a “basis” for “reopen[ing]” the “investigation for . . . the responsible parties.” The conspirators explained to Mera that, while they could mobilize the public in an effort to overturn the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release, “the official nature of the President could do much more in this case . . . [and] interest by the Executive Branch[] and pressure on the Public Prosecutor’s Office . . . could do a lot on this subject.” Mera, in response, proceeded to outline various ways of nullifying the settlement and release. Remarkably, the RICO Defendants managed to procure Mera’s assistance, and thus collude with the government, despite Mera’s admission that there was no “sustainable” path to nullification.

208. The RICO Defendants and their co-conspirators made significant efforts to enlist the support of President Correa and other Ecuadorian governmental officials, holding private lunch meetings and conferences. Donziger personally met with President Correa on more than one occasion, and Fajardo and Yanza also met with Correa repeatedly without Donziger in attendance. After one such meeting with the President, Fajardo reported: “So, the President

thinks that if we put in a little effort, before getting the public involved, the Prosecutor will yield, and will re-open that investigation into the fraud of, of the contract between Texaco and the Ecuadorian Government.” By seeking assistance from Ecuadorian government representatives, this is precisely the “strategic development” the RICO Defendants ultimately achieved.

209. The plan to procure the criminal prosecution of Chevron’s attorneys included more than obtaining President Correa’s support. The RICO Defendants and their co-conspirators also aimed, as called by one of their associates, their “troops [and] artillery” against Chevron’s attorneys through a series of demonstrations, and they publicly pressured Ecuadorian officials. As Defendant Yanza proclaimed during a July 31, 2008 press conference, in order to ensure prosecution, the RICO Defendants and their co-conspirators would “have to take legal actions against these officials . . . make public denunciations . . . put pressure through the people, all these mechanisms . . .” Yanza warned that “nothing is ruled out.” According to Donziger, this was part of the conspirators’ strategy of conducting a “guerrilla campaign” against Veiga and Pallares.

210. And this campaign was successful. As Donziger boasted, “[W]e are kicking some ass, and it feels awfully good.” Donziger was elated not only because criminal charges would be useful to the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ extortionate scheme, but also because it would satisfy a personal vendetta. As Donziger described his feelings toward Mr. Veiga, “Some days, I fantasize about putting my strong hands around Reis Veiga’s neck and squeezing until he begs for mercy. I want him to know how it feels to suffer . . .”

211. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ objective was finally achieved on August 26, 2008 when the Ecuadorian government announced criminal charges for fraud against Ricardo Reis Veiga and Rodrigo Pérez Pallares, the two Chevron attorneys who signed the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release. The charges were issued after two previous Prosecutors General had determined that there was no evidence of fraud and had requested that the case be closed. But that was before the RICO Defendants manufactured the

allegedly “independent” Cabrera Report upon which the Prosecutor General expressly relied when he filed the charges against Veiga and Pallares.

212. After the sham criminal charges were procured, the RICO Defendants reprised their “private army” and engaged in direct threats against Veiga and Pérez. On October 5, 2009, Defendant Yanza, among others, enlisted the help of local citizens in parading crude effigies of Veiga, Pérez, and other Chevron executives in front of the courthouse in Ecuador. At the concluding rally, Yanza and others gave speeches and threatened to “kick [Pérez’s] ass” and “bury [Chevron’s lawyers] in the . . . pit.” The protestors announced the “crimes” of each Chevron executive and a man dressed as the Grim Reaper mimed beheading each of the effigies with his scythe before placing the “bodies” in a coffin. The protesters then carried the coffin into the jungle, dug a shallow grave, and buried the Chevron executives in effigy.

213. The criminal charges against two of Chevron’s attorneys are a direct result of the collusion between the RICO Defendants and their co-conspirators and the Republic of Ecuador. The issuance of these baseless charges and the threats of violence against Chevron’s attorneys were firm but also a thinly veiled extortionate threat to Chevron: If you do not settle the Lago Agrio Litigation on our terms we will have your employees imprisoned—or worse. Indeed, as Judge Kaplan of the Southern District of New York noted, evidence shows that Donziger and his colleagues have “attempt[ed] to procure criminal prosecutions for the purpose of extracting a settlement [from Chevron],” and that the prosecutions “appear[] to have been instigated by Donziger and others working with him for the base purposes of coercing Chevron to settle and undermining a significant element of its defense in Ecuador, the release it obtained from the [Republic of Ecuador].” Likewise, in 2010, the U.S. State Department reported that “[c]riminal complaints and arrest warrants against foreign company officials” are used in Ecuador “to pressure companies involved in commercial disputes.” That is exactly what has occurred here.

3. **Launching Public Attacks on Chevron Based on Misleading Statements and Lies to Force Chevron to Pay Up**

214. Through their own efforts and those of their collaborators, the RICO Defendants have conspired to manufacture a wave of public criticism of Chevron based on deliberate falsehoods and misleading statements. Since at least 2006, but with increased intensity since manufacturing the fraudulent Cabrera Report, they have saturated the public domain with their false propaganda—using the Internet, radio, television, and film, as well as print media, including books, newspapers, and magazines. And they have taken this pressure campaign to U.S. state and federal agencies, seeking their falsely induced assistance in this racketeering scheme. As conspirator Amazon Watch has explained, the strategy is to “turn up the heat on Chevron through various means, shareholder resolutions, major media coverage and major investigations through, for example, the Securities and Exchange Commission.” And Donziger has proposed that the conspirators use the slogan “Always attacking.” According to Donziger, the “strategy” is to “increase the cost to Chevron” including the “cost of their sullied reputation, you know, in the media.” As he explained to one of his associates in preparing for a mediation with Chevron, “[w]e need to get more press and increase the pressure b/w now and then, to get the price up.” As one federal judge put it, the “object of the whole game, according to Donziger, is to make this so uncomfortable and so unpleasant for Chevron that they’ll write a check and be done with it.”

a. **The Fraudulent Media Blitz**

215. Donziger outlined the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ “strategy” of increasing costs to Chevron by “sull[y]ing their reputation” to reporter Peter Maass. In an article published in *Outside* magazine, Maass called Donziger’s strategy “attrition warfare: death by lawsuit.” Donziger told Maass, “This case has to be won both in and out of the courtroom If you had the case without the pressure, you would never get a result.” Maass observed, “Donziger wants to keep the public pressure on, to make the company so miserable that it throws in the towel and settles.” This is “guerrilla PR,” and “[r]abble rousing is a vintage Donziger

tactic.” Increasing the pressure involves maximizing publicity, and Donziger always “does his best to arrange a good show.”

216. To that end, Donziger recruited Karen Hinton, a public relations specialist, to create and manage the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ campaign of false and misleading public statements, and to coordinate the efforts to co-opt the media and well-meaning private citizens in the conspirators’ pressure campaign. Stratus contributed to the effort as well, developing what Stratus referred to as a “comprehensive press kit.” And political and communications consultant Chris Lehane was brought on board to help the RICO Defendants “leverage the criminal investigation of the Chevron executives” through extensive public relations efforts. In addition to recruiting reporters to cover the story, Lehane and the conspirators planned to “[b]uild[] off the initial activity, we will want to consider several targeted specific mini-campaigns all designed to create pressure points on Chevron’s economics.” These “mini-campaigns” included filing a shareholder lawsuit against Chevron “for failure to disclose information,” contacting the New York Attorney General “to see whether we can get Spitzer into the game,” and manipulating students at a “major university that is invested in Chevron for a divestment campaign.” In an email about hiring a new team member in Ecuador, Donziger described the ideal candidate as someone who would “raise some hell in Ecuador,” and that the “job entails f[*]*king up every machine you see that has ChevronTexaco’s name on it. . . . Being able to manufacture reality a plus.”

217. The conspirators also maintain relationships, in part through the provision of financial support, with various organizations that distribute false and misleading public statements to increase the public pressure on Chevron. Some of these organizations are dedicated to the fraud while others have broader functions, but all are knowing or unknowing accomplices of the RICO Defendants and their co-conspirators. Foremost among these are Amazon Watch, RAN, and Defendant the Front, organizations that knowingly operate and control significant aspects of the pressure campaign and overarching conspiracy to extort a payment from Chevron.

218. The RICO Defendants and their co-conspirators funnel a substantial portion of their public attacks on Chevron through Amazon Watch, which presents itself to the public as an independent organization. Donziger has explained the crucial role of this element of the pressure campaign:

[They have] played an absolutely critical role in this . . . [I]f it weren't for them, we would just be a legal case, but because of the work of people who care, you know, especially Amazon Watch, we're a campaign that has a legal case. And I think . . . that, um, the pain Amazon Watch can cause Chevron in many respects is greater than the pain we can cause

The RICO Defendants coordinate their efforts with Rainforest Action Network, whose “direct action” campaigns Donziger describes as “[b]rutally personal.”

219. Amazon Watch dutifully plays its role, fully understanding that “the target of many of the . . . campaign releases is Chevron itself rather than the media” and working to “get under Chevron management’s skin” as much as possible. In a proposal seeking \$1 million in funding from the RICO Defendants and their co-conspirators, Amazon Watch described the Lago Agrio Litigation as nothing less than a chance to “change how the oil industry operates,” and offered to join what it saw as “an existing and well-developed campaign structure based in the U.S.” Amazon Watch described its goal as putting Chevron’s management and board, “in a position where, to survive intact in American society as a reputable company with a competitive edge, they will be forced to settle the lawsuit.” It then set forth how they would “threaten” the “personal comfort levels” of Chevron management, who currently “live in the Bay Area with impunity,” how Chevron’s directors “are particularly vulnerable to direct pressure and pressure via secondary targets,” and how Amazon Watch would create a “task force” that will be “a constant and daily source of friction for Chevron[.]” Amazon Watch also prepared a visual representation of their strategy, a chart describing various pressure tactics, including the use of government agencies, all in a circle surrounding “Chevron.”

220. Amazon Watch’s proposal is in line with Donziger’s strategy to “keep attacking, keep pressure on, etc.” Donziger has further explained his “cost-benefit” calculation of the pressure campaign: “I also think that if you run . . . the costs in terms of the hassle, the

management time, reputational . . . [h]arm, dealing with the board, looking bad, having your kids . . . in school, have friends who say, hey, what'd your daddy do in Ecuador? I think all of that factors into it in an af—extremely significant way, much more than th—the hard-core costs, . . . out-of-pocket expenses and stuff—I think that's where they're most vulnerable.”

221. The RICO Defendants rely on Amazon Watch to carry out many of the public attacks against Chevron, and the RICO Defendants closely monitor, frequently revise, and sometimes entirely ghostwrite, the press releases and letters that Amazon Watch issues. When an Amazon Watch representative complained to Donziger that Amazon Watch was “not here to simply rubber-stamp press releases,” and dared to tell him that prior experience showed that Amazon Watch “needs to carefully fact-check your press releases in order to safeguard our own credibility,” Donziger replied sharply. He stated that he and the other lawyers were “the final authority,” and that, “We can be collaborators, but we are not equal partners.” The issue that set off Donziger’s tirade is particularly telling: Amazon Watch had wanted to provide Cabrera’s educational credentials in a press release about him. Donziger’s response: “The issue about Cabrera’s qualifications is a good example. He doesn’t have a doctorate. I don’t want to highlight that. So I don’t mention what degree he has in the press release. Obviously if he had a doctorate it would be in there, don’t u think?” In response, the Amazon Watch representative called Donziger’s tactic an “unsubtle and unnecessary obfuscation” and “[b]ombast and hoodwink.”

222. By using Amazon Watch as their proxy, the RICO Defendants and their co-conspirators can also deliver their extortionate threats to Chevron using more direct language than they are willing to use themselves—at least publicly. In “turn[ing] up the heat on Chevron,” the RICO Defendants and their co-conspirators have made their extortionate demands explicit in direct communications with Chevron. For example, on December 17, 2009, Soltani wrote a letter “on behalf of Amazon Watch” to then-incoming Chief Executive Officer John Watson in which she cited the fraudulent \$27 billion damages assessment from the Cabrera Report, and threatened, “Until Chevron takes meaningful steps to resolve this case, it will continue to play

out in the courts of Ecuador, as well as in the global court of opinion.” She went on to state, “We don’t make these suggestions lightly or symbolically.”

223. The RICO Defendants and their co-conspirators use all available means to publish their lies and half-truths in the “global court of opinion.” They regularly disseminate press releases over the Internet, through electronic mail, and on newswires. They appear on television and radio broadcasts. Through various organizations they fund, the conspirators operate or cause to be operated websites that attack Chevron at www.chevrontoxico.com, www.texacotoxico.org, www.amazonwatch.org, www.chevroninecuador.com, truecostofchevron.com, thechevronpit.blogspot.com, and www.changechevron.org. The conspirators also promote their scheme through social media tools, sending messages to supporters through Twitter (@changechevron) and Facebook, and by posting defamatory comments and false statements (frequently using pseudonyms) in response to articles written on the websites of newspapers, blogs and other commentators. They have helped fund at least one book of photography and a documentary film, promoting misleading images of environmental impact and poverty. And the conspirators’ attacks on Chevron have not been limited to words and pictures: They have arranged or threatened marches and demonstrations at Chevron shareholder meetings, places of business, and in front of the homes of individual Chevron employees and board members.

224. The RICO Defendants’ false statements are made in support of appeals for funding, including through a link to make payments directly on their websites, at <http://chevrontoxico.com/take-action/donate.html> and at <https://www.gifttool.com/donations/Donate?ID=38&VER=1&LNG=EN> (via a link from <http://www.amazonwatch.org>). Again, however, the RICO Defendants are careful to use the supposedly independent Amazon Watch as a front for their efforts. At chevrontoxico.com, the statements soliciting donations by mail request that they be sent to Amazon Watch at its address in San Francisco, California. Kohn and Kohn Swift have made substantial donations to Amazon Watch. In 2009, for example, Kohn reported that Kohn Swift had contributed over \$184,000 to

Amazon Watch and that sum did not include the donations he had personally made to Amazon Watch. On information and belief, the conspirators use funds received in this manner to continue to prosecute their unlawful scheme to defraud Chevron. In fact, Amazon Watch's tax returns reveal that it has directed at least \$90,000 in donations to the Front since 2002.

225. The RICO Defendants and their co-conspirators use other proxies besides Amazon Watch to peddle their propoganda. For example, when one documentary filmmaker came to Ecuador to shoot a movie about Lago Agrio, Donziger made sure that the RICO Defendants had a say in how it was made and how it was marketed, telling the filmmaker, "It is critically important I be brought into the strategy because it could affect the legal case." The filmmaker subsequently gave Donziger access to the production plans. The RICO Defendants recruited another filmmaker, Joseph Berlinger, to make *Crude*, a purported documentary about the Lago Agrio Litigation that was released in 2009. The film, according to Donziger, shows how he "manipulate[d] the trial." While Berlinger has claimed that he intended his film to be "fair," he and his team worked closely with Donziger and others in the planning, shooting, editing and distribution of the film, and assured Donziger that he would be favorably presented in the final product, stating, "We will live up to our end of the bargain."

226. Berlinger altered the film before release, at the RICO Defendants' and their co-conspirators' request, to hide the relationship between the conspirators and Carlos Beristain, who was publicly disclosed as the author of a major portion of the Cabrera Report, as discussed in paragraph 305, *infra*. This was a critical change, because public disclosure of the prior relationship between the RICO Defendants and Beristain could have been the visible tip that would alert Chevron and the public to the mammoth iceberg of collusion between the RICO Defendants and Cabrera. Well aware of this risk, Fajardo told the filmmakers that disclosure of that relationship was, "so serious that we could lose everything," and that "the way it is, the entire case will simply fall apart on us." He thus had the changes made even though they were "costly."

227. A few months later, when Fajardo visited the University of Oregon, he expressed alarm at his discovery that students there had obtained copies of the version showing Beristain, and told Donziger that they had a “serious problem,” although he assured Donziger that nobody at Oregon knew that there was a “conflict.” And when the RICO Defendants learned that CNN intended to show clips from *Crude*, they and the filmmaker engaged in a scramble to ensure that the Beristain scenes were not shown, obliquely instructing CNN, “Please do NOT include any footage during Trudie’s visit to the Cofan community that features a man wearing a white t-shirt.” Berlinger has also stated that he expected—as did the RICO Defendants—that the documentary *Crude* could “have some real-life impact on a decision or a potential settlement.” Through Section 1782 discovery proceedings authorized by this Court, Chevron has obtained a substantial volume of outtakes from *Crude*, outtakes that make clear the scope of the RICO Defendants’ lies and stonewalling, and from which many of the direct quotations in this Amended Complaint are taken.

228. Although Donziger and his conspirators were involved in the making of the film *Crude*, they knew that the film would be far more useful to their cause if it appeared independent. Donziger emphasized to Berlinger during filming, “I do not want to be seen as helping [you] . . . in front of the Chevron lawyers.” But behind the scenes, one of *Crude*’s major financial backers was Russell Deleon, a law school friend of Donziger who has also been a major financial supporter of the Lago Agrio Litigation. Upon *Crude*’s completion, the conspirators promoted and relied upon the released version of the film in their pressure campaign against Chevron, and to raise money for that campaign. At <http://chevrontoxico.com/take-action/crude-house-party.html>, they urge readers to hold *Crude* “screening parties” and to ask for donations (for the RICO Defendants) at those events. On that web page, the RICO Defendants assert, “[i]n order to change Chevron, one of the largest and dirtiest oil companies on the planet, we need to build a movement a million times more powerful than them. *Crude* will educate and inspire thousands of people to commit to changing Chevron in the coming weeks and months.”

b. Misrepresenting the “Independent” and “Neutral” Cabrera Report

229. In all of these communications media, the conspirators have repeated their false claims that Cabrera offers an “independent” and scientific perspective which “proves” Chevron’s liability. And in doing so, the conspirators have sought to increase pressure on Chevron and thereby extort a payment from it. For instance, there is a lengthy summary of the Cabrera Report on chevrontoxico.com, which never discloses the RICO Defendants’ role in writing the report, and concludes with the following: “A final decision on Chevron’s liability and damages will be made by the trial judge. However, courts in Ecuador generally give wide deference to reports prepared by independent experts.”

230. When challenged, the RICO Defendants have repeated their claim that Cabrera is independent. For example, on April 3, 2008, Fajardo stated, in a press release issued by Amazon Watch, “Chevron’s claim that Professor Cabrera is cooperating with the plaintiffs is completely false,” and “Chevron is frightened by Cabrera precisely because he is an independent and credible expert.” The RICO Defendants’ guiding principle, as Donziger wrote to Fajardo, is: “If you repeat a lie a thousand times it becomes the truth.”

231. On or about May 31, 2008, shortly after the RICO Defendants caused their own secretly written report to be filed as Cabrera’s, Kohn appeared on Fox News, touting Cabrera’s independence. He not only claimed that Cabrera was an “independent expert appointed by the judge,” but then falsely stated that Cabrera “analyzed all of the evidence from all of the parties from both sides,” to come up with the damages estimate of “between eight and sixteen billion.” Kohn did not reveal that his co-conspirators ghostwrote Cabrera’s report.

232. After the conspirators drafted the update to the Cabrera Report in November 2008, increasing the total damages assessed to \$27 billion, the Front issued a press release on December 1, 2008, falsely extolling the Cabrera Report as an “independent” assessment by the “Special Master” based on the review of the “trial evidence—the vast majority of it provided by Chevron.” Once again, no mention was made of the fact that Cabrera’s report and its update had

actually been written by the RICO Defendants, or that the majority of materials upon which it was based were not “trial evidence” at all, but that enterprise’s files.

233. The RICO Defendants and their co-conspirators, in addition to portraying Cabrera’s report as independent to the media, also used the fraudulent “evaluation” drafted by Stratus to enhance the credibility of the Cabrera Report in the media. For instance, on December 1, 2008, Hinton and Amazon Watch issued a press release about the Stratus report entitled “Chevron’s \$27 Billion Liability in Ecuador’s Amazon Confirmed by Team of Independent Scientists.” That press release states that “[t]he independent expert report was prepared by Richard Cabrera, an Ecuadorian environmental scientist appointed by the court as a Special Master who has worked mostly for oil companies in preparing environmental damage assessments,” and quotes an endorsement from Defendant “Douglas Beltman, a scientist at Stratus Consulting who, along with a team of scientists, reviewed the expert’s report on behalf of the [Lago Agrio] plaintiffs.” It is unsurprising that Stratus employees “endorsed” the report, given that they wrote it.

234. Stratus’s involvement in the media campaign was envisioned as early as the initial August 2007 contract between Kohn Swift and Stratus contemplating that Stratus would engage in “discussions with the media” in addition to performing other tasks to further the conspiracy. As an example, Defendants Beltman and Stratus were involved in orchestrating the RICO Defendants’ response to Chevron’s allegations that Cabrera’s supplemental report showed evidence of collusion between Cabrera and the Lago Agrio Plaintiffs. Indeed, Beltman sent Donziger draft language denying that the Lago Agrio Plaintiffs were in collusion with Cabrera and claiming that “Cabrera’s November response to the plaintiffs is clearly his own.” This response became part of the RICO Defendants’ overall efforts to portray the Cabrera Report as independent.

235. Now, despite the unequivocal evidence that the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ own team of experts ghostwrote Cabrera’s report and its update, the conspirators continue to spread the lie that Cabrera is independent. In May 2010, in response to a court filing

by Chevron alleging collusion between the RICO Defendants and Cabrera, Fajardo again denied any wrongdoing, claiming that Cabrera had worked independently. When asked about the involvement of Stratus, Fajardo told the media, “They are our technical advisers in the United States, and they have worked with us for some years, but they have never interfered in the trial.” Yet the *day before* he made that statement, he had written a review of Chevron’s filing for his co-conspirators in which he conceded that it was “true” that “plaintiffs (that is, us) have worked in collusion with expert Cabrera.” The RICO Defendants and their co-conspirators still continue to use the Cabrera Report as a jumping off point for their most recent claim for \$113 billion in damages.

236. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ far-reaching campaign to portray the fraudulent Cabrera Report as that of an independent court expert has been largely successful, and numerous unsuspecting media outlets have repeated uncritically the RICO Defendants’ false refrain about Cabrera’s independence. An April 3, 2008 Reuters article, for example, stated: “An independent environmental expert told a court in Ecuador that the oil company Chevron should pay \$7 billion to \$16 billion in compensation for environmental damage in the country.” And in a May 2009 broadcast, the television show *60 Minutes* reported on the Lago Agrio Litigation, discussing the Cabrera report in detail, but never suggesting that the RICO Defendants had actually secured Cabrera’s appointment and written his report. This was undoubtedly because the RICO Defendants had never disclosed this to *60 Minutes*. To this day, the RICO Defendants and their co-conspirators maintain a link to the *60 Minutes* broadcast of this misleading report on one of their websites. As the conspirators had hoped, then, the mainstream media has bought the propaganda and played the role the conspirators hoped and intended in the scheme to extort a payment from Chevron. And in fact, their hoodwinking of the mainstream press benefits the conspirators doubly in that it allows them to republish—without correction—the media outlet’s false statements about the Cabrera Report, as they did with the Reuters story described above.

237. The RICO Defendants' and their co-conspirators' deception of the national and international media has gone beyond prompting the republication of lies about Cabrera's independence. For example, Defendants Fajardo and Yanza were awarded the Goldman Environmental Prize, "the world's largest prize program for grassroots environmental activists," and Fajardo was awarded the CNN "Heroes" award. The press release announcing the Goldman Prize echoed the RICO Defendants' misstatements and half-truths, including those regarding Cabrera's independence.

c. The RICO Defendants Make False Statements to U.S. State and Federal Government Officials

238. The conspirators have sought to open as many fronts as possible in their offensive against Chevron, pursuant to their strategy to generate maximum pressure on Chevron to drive it into a coerced settlement. The RICO Defendants and their collaborators have made false and misleading statements in the United States to state and federal officials, seeking to enlist their (unknowing) aid in the fraudulent scheme through investigations and other official acts. Since 2008, the RICO Defendants have continuously touted the findings in the so-called "independent" Cabrera Report as evidence in support of their demands for official action.

239. The conspirators have engaged in a long-running campaign to convince the SEC to investigate Chevron for allegedly violating disclosure obligations. They have attempted to obscure their role in this campaign by using Amazon Watch as their front, but Donziger has admitted that he wrote several of the letters which purportedly came from Amazon Watch. On January 30, 2006, at the RICO Defendants' behest, Amazon Watch wrote Christopher Cox, then Chairman of the SEC, requesting that he "open an investigation into the Chevron Corporation (CVX) for violating SEC regulations governing disclosure obligations to shareholders in reference to litigation against the company over an oil-related environmental catastrophe in Ecuador." Relying on David Russell's \$6 billion damages assessment (which he had already disavowed), Amazon Watch accused Chevron of failing to inform its shareholders of its "staggering potential liability." The letter went on to mischaracterize the lawsuit as a "class

action,” and falsely claimed that Chevron had “been forced to admit at trial that Texaco . . . dumped over 18 billion gallons of toxic water into the rainforest” Although Donziger personally informed Amazon Watch Executive Director Soltani that the Russell report was grossly excessive (*see* paragraph 107, *supra*), Amazon Watch never corrected its false statements to the SEC or Chevron shareholders. In fact, the next month, Soltani and Amazon Watch sent a follow-up letter, accusing Chevron of distorting the report of the “settlement experts” from the then-ongoing “judicial inspection” process—the same proceeding in which the conspirators submitted the false expert report with Dr. Calmbacher’s fraudulently obtained signature. Shortly thereafter, Donziger reported to Lehane that, “The SEC is actively investigating [Chevron’s] failure to disclose this liability in its public filings—I know this for a fact, because I was just interviewed by an SEC investigator last week[.]”

240. On March 18, 2008, Amazon Watch reprised this effort, writing another letter signed by Soltani to the SEC. In this letter, written weeks *before* the fraudulent Cabrera Report was filed but obviously well-aware of its secret contents, Soltani emphasized the forthcoming report, and the independence of its purported author, “an independent special master” that had prepared his report “mak[ing] use of all evidence collected” with “a large team of technical experts under [his] supervision.” The letter demanded an investigation and “the imposition of a penalty on Chevron for failing to comply with its obligations.” Soltani argued “that Cabrera is being attacked by Chevron precisely because he *is qualified* to conduct a credible damages assessment.” Soltani and Amazon Watch made these statements knowing that Cabrera’s report was being ghostwritten by Stratus and the RICO Defendants’ other consultants. Indeed, despite knowing that the Cabrera Report was a fraud, Soltani accused Chevron of “contriv[ing] claims of procedural unfairness” and called Chevron’s position that the process had been unfair “ludicrous.”

241. When Donziger heard that the SEC might actually be investigating Chevron, he wrote that this was a “huge victory for AW [Amazon Watch].” He instructed his team to “keep feeding them [the SEC] stuff,” even though, he wrote, “I sort of feel this is bogus.”

242. The RICO Defendants and their co-conspirators have made these same false statements to other federal agencies. In a letter dated April 29, 2008, to the U.S. Trade Representative, Defendants Yanza and Fajardo called Cabrera “an independent court-appointed special master,” and misstated that “the bulk of the evidence relied on by the special master, Professor Richard Cabrera, was provided by Chevron itself via its own sampling evidence.”

243. And in April 2009, Donziger made false statements concerning Cabrera’s purported “independence” in a statement before the U.S. House of Representatives. Donziger falsely stated that “[t]he best and most recent *independent* estimate available of the human health impact of this contamination is provided by the expert appointed by the court, Richard Cabrera.” (emphasis added). Donziger also testified that “[n]umerous qualified scientists have reviewed this report and found its conclusions reasonable and the damages assessment consistent with the costs of other large environmental cleanups.” At no time did Donziger disclose the fact that the “qualified scientists” were his co-conspirators Stratus, Beltman, Maest, and Chapman, who planned and secretly wrote the “Cabrera” Report.

244. The RICO Defendants have also made false statements to individual members of Congress. On December 19, 2008, Defendant Beltman provided United States Congressman Jim McGovern’s office “some talking points” for an interview with the Los Angeles Times, falsely telling the Congressman’s staff that “[t]he Court Expert reviewed available scientific data and concluded that people in the area suffer from many illnesses caused by the contamination, including cancer.” On January 31, 2009, Beltman forwarded Cabrera’s reports, stating “[t]he Court Expert’s March 2008 report summary is attached,” and that “[a]lso attached is the November 2008 response to the [Lago Agrio] Plaintiff’s questions that was written by the Court Expert.” Beltman failed to disclose that Stratus and the other RICO Defendants actually ghostwrote the responses to the Lago Agrio Plaintiffs along with Cabrera’s initial report.

245. In addition, the RICO Defendants have extended their campaign to state officials. In 2009, the RICO Defendants made fraudulent allegations about Chevron to the New York Attorney General, and provided that office with false information that Cabrera was a neutral

“court-appointed expert” and that the RICO Defendants had played no part in creating the exorbitant \$27 billion figure. Their intention was to generate an official inquiry or investigation, which would itself bring direct pressure on Chevron, and which the RICO Defendants could use to reinforce their own pressure campaign. On May 4, 2009, in reliance upon the RICO Defendants’ false statements, the New York Attorney General did just that, sending Chevron a letter inquiring about Chevron’s disclosures related to the Lago Agrio Litigation and requesting a “written response” to several questions within a week. In the letter’s first paragraph, the New York Attorney General stated, “As I understand the allegations, a technical expert has estimated that if the plaintiffs prevail in the litigation, damages assessed against Chevron may be as high as \$27 billion.” The RICO Defendants seized on this outcome, referring to the letter in multiple press releases as an “investigation.” In a May 25, 2009 letter to Chevron shareholders ostensibly from Atossa Soltani and other members of Amazon Watch, the conspirators claimed that “New York State Attorney General Andrew Cuomo has opened a probe of the company,” and “Chevron is now the target of an official fraud investigation by the New York State Attorney General.” And, precisely as the RICO Defendants had intended, the New York Attorney General’s letter was noted in the press, and it generated media coverage suggesting that Chevron had “mishandled” the matter. Industry publication Oilgram news stated that the campaign was having the intended effect, reporting, in reference to the May 4 letter: “Analysts seem mixed on what the Ecuador fallout ultimately may mean to Chevron but appear to agree there will be at least a short-term knock to the stock price.” It quoted an analyst with OppenheimerFunds, Inc. stating, “I would settle and cut my losses.”

d. The Conspirators Attempt to Manipulate Chevron’s Stock Price to Coerce a Favorable Settlement

246. To increase financial and public pressure on Chevron to pay off the RICO Defendants through an extorted settlement of the Lago Agrio Litigation, the conspirators have sought to manipulate and depress Chevron’s stock price by targeting Chevron’s shareholders, potential investors, and stock analysts with their lies and half-truths. The objective, as expressed

by Donziger, was to cause a “mass sell-off of billions in [Chevron] stock.” In furtherance of their scheme, the conspirators have staged protests at Chevron’s shareholder meetings and at the homes of members of Chevron’s Board of Directors, and have issued false and misleading propaganda to Chevron’s shareholders about its liability in the Lago Agrio Litigation. In each instance, they have argued that the \$27 billion damages assessment is independent and legitimate, and thus represents a major risk to Chevron’s share value. Donziger described these pressure tactics on shareholders as one of the “key cards we can play.”

247. The RICO Defendants’ strategy of targeting Chevron’s shareholders is stated in their public comments and on the websites they operate, which contain material aimed directly at investors. At the website changechevron.org/for-investors, operated by co-conspirator RAN, the conspirators claim “Chevron’s current brand of operations exposes the company (and its investors) to great financial, reputational, and environmental risks.” In reference to the damages assessed in Cabrera’s report, the conspirators refer to “staggering liabilities,” and suggest that Chevron has not “adequately warned shareholders about the financial risks the company faces in the Ecuador lawsuit.” The conspirators describe these activities on their website: “To pressure Chevron to do the right thing in Ecuador, we engage in a variety of tactics. In the past few years we have. . . [a]lerted Chevron’s shareholders to the company’s lies and omissions regarding the case in Ecuador, a case in which a ruling against Chevron would dramatically threaten the value of those shareholders’ investments.” And in August 2008, Donziger commissioned a detailed analysis of “various options for a more proactive and engaged strategy to put pressure on Chevron via public markets.”

248. For example, shortly after Cabrera filed his initial report, on or about May 31, 2008, Kohn appeared on a Fox News segment touting the “independent” Cabrera Report as a reason for Chevron shareholders to be concerned. In that interview, Kohn insinuated that Chevron was hiding information regarding Cabrera’s “independent” damage assessment, stating “shareholders were [recently] informed for the first time of even the existence of the case although the original case was filed in the U.S. in the 90s.” He then warned that “shareholders

should be concerned about the image of Chevron.” At no point did Kohn explain that his co-conspirators had actually ghostwritten Cabrera’s supposedly independent report.

249. In the face of allegations that the RICO Defendants colluded with Cabrera, in a press release issued by the Front on February 13, 2009, Fajardo is quoted as saying that such allegations were “false and defamatory” and claimed that it would “expose Chevron shareholders to additional liability.” And in an April 2008 press release issued by the Amazon Defense Front, Fajardo accused Chevron of failing to disclose to shareholders that Ecuador’s Attorney General had filed a formal complaint to the U.S. Department of Justice, and that “[t]his is part of [a] conscious strategy to try to discredit a trial process that Chevron knows it is losing because of the evidence.” And as recently as December 21, 2010, the Front issued a press release quoting Fajardo as saying, “Chevron’s Board of Directors cannot continue to ignore the mounting evidence of illegal activity and fraud on the part of the company’s legal team in the United States and in Ecuador. . . . We intend to seek full redress of the harm that has been done in the name of Chevron’s shareholders and to hold accountable all individuals in Chevron who have participated in this unlawful scheme.”

250. The conspirators have also communicated directly with Chevron shareholders and influential analysts on numerous occasions. On May 25, 2009, Amazon Watch sent a letter signed by Soltani to Chevron shareholders, asserting that Chevron had made “false, misleading, or incomplete” filings with the SEC, and quoted analysts from Barclays and Potomac Research stating that the litigation was hurting Chevron’s stock price. As with most of the conspirators’ public statements since April 2008, the letter relied upon an “independent court damages assessment,” but did not disclose that the RICO Defendants and their co-conspirators themselves had secretly written that “assessment.”

251. Donziger and his co-conspirators have also personally lobbied analysts, including in personal meetings, and made fraudulent misrepresentations with the intent that their misrepresentations would be reported as fact by these analysts, and that these reports would decrease Chevron’s stock price. On May 11, 2009, for example, Donziger and his co-

conspirators met in New York with the Managing Director of Oil & Gas Equity research at UBS, and provided him with copies of the Cuomo letter, the Cabrera report and supplemental report, and the fraudulent “review” of that report by Stratus, all intended to convey the impression that Cabrera’s report was independent and valid. Also involved in this effort was co-conspirator Daniel Orlow, described by the RICO Defendants as “an investment advisor who works with the legal team that represents the Amazonian communities,” who made repeated public statements shortly after the UBS meeting on behalf of the RICO Defendants such as: “The pressure is increasing on Chevron’s management over the uncertainty surrounding a very significant potential environmental liability in Ecuador,” and “Our team is being contacted repeatedly by shareholders and analysts who are concerned that Chevron management is not fully and honestly disclosing the company’s exposure in Ecuador There is a real concern that Chevron is not playing it straight and that it might have overpaid for Texaco.”

252. In another effort to influence Chevron’s share price, the conspirators have instituted a “Buy Freeze” campaign in which they have contacted investors directly and, relying on false and misleading statements about the results of the site inspections and the criminal prosecutions and government inquiries that the conspirators have instigated, urged the investors not to buy Chevron stock. Amazon Watch describes the campaign as follows:

Amazon Watch is contacting institutional and individual shareholders – in particular, socially responsible investment community (SRIs) and public employees, teachers and university pension funds to urge them to join the buy freeze. The trial court in Lago Agrio, Ecuador, has found shocking levels of life-threatening toxins at dozens of former Chevron production sites in Ecuador

Now Chevron is being accused of fraud in Ecuador for lying about the results of a limited remediation it did in the mid-1990s

As a result, Ecuador’s Attorney General has asked the U.S. Department of Justice to investigate Chevron’s alleged fraud. The Securities and Exchange Commission already is probing the company for failing to disclose the potential liability to shareholders.

Amazon Watch concealed the fact that it was the RICO Defendants and their co-conspirators who actually wrote the Ecuadorian Attorney General’s report.

253. The conspirators have also staged protests at several of Chevron's annual shareholder meetings. As shown in the film *Crude*, these protests, while designed to appear to be grassroots, community events, are actually carefully planned and literally scripted by Donziger and his co-conspirators.

254. In addition, the conspirators have lobbied large institutional investors to support Chevron shareholder resolutions designed to bring support for the conspirators' lies and to add additional pressure on Chevron. For example, Stratus and Amazon Watch were involved in drafting a 2009 shareholder resolution, offered by the Office of the Comptroller of New York City as the custodian and trustee of certain pension funds. On December 1, 2008, Mitchell Anderson of Amazon Watch emailed Beltman of Stratus with the subject line "2009 Shareholder Resolution – Urgent Update" and stated that "[w]e need to make some changes quickly to the below paragraph, given the new figures released by the court appointed expert." Beltman provided the higher numbers from Cabrera's revised report, which were then included verbatim in the shareholder resolution proposed by the funds the next day. That resolution provides that a "court-appointed expert in the Ecuadorian litigation has recommended that Chevron be held liable for up to \$27.3 billion in damages," but fails to explain that Stratus and the other RICO Defendants and their co-conspirators secretly drafted the "court-appointed expert's" report finding Chevron liable.

255. The conspirators have promoted their involvement in drafting shareholder resolutions that seek to draw attention to Cabrera's finding of liability, but, again, without disclosing the RICO Defendants' and their co-conspirators' roles in drafting his report. For example, on April 8, 2009, after the SEC declined to issue a no-action letter to Chevron regarding one of the conspirators' shareholder resolutions, Hinton and Amazon Watch issued a press release describing the resolution as, "a high-profile resolution that threatens to focus attention on the company's record-breaking \$27 billion environmental liability in Ecuador."

256. The Wall Street Journal has reported that the RICO Defendants' statements about the Lago Agrio Litigation, and, specifically, Cabrera's assessment of \$27 billion in

damages has had its desired effect on Chevron's share price: "The possibility that a judge may later this year demand damages as high as \$27.5 billion, roughly one-fifth of Chevron's market capitalization, appears to have spooked some investors."

257. The Front and Hinton have touted negative analyst reports regarding Chevron on the website, chevrontoxico.com. For example, on May 26, 2009, the conspirators published an article stating that "Oppenheimer, in a report dated May 4th [2009], said the \$27 billion claim from Ecuador 'could depress the stock until a settlement is reached . . . the sooner [the case] is removed, the better off shareholders will be'" and that "Barclay's called the Ecuador case a 'drag' on Chevron's stock value."

258. And on August 24, 2010, FOXBusiness reported that, "the oil company has lost much of its gains over the past few weeks as it continues to fight a lawsuit in Ecuador that alleges Texaco, acquired by Chevron in 2001, wrecked portions of a jungle while drilling for oil in the 1970s and 1980s." The conspirators published this article in its entirety the next day at the chevronpit.blogspot.com.

259. Above all, however, the RICO Defendants' and their co-conspirators' false statements, harassing conduct, and lobbying efforts with media, government, shareholders and private individuals are all aimed at one ultimate objective—forcing Chevron to pay the RICO Defendants and their co-conspirators billions of dollars to make them stop.

e. The RICO Defendants Falsely Accuse Chevron of Murder to Generate Outrage and Force Chevron to Pay

260. The conspirators have made numerous public statements stating or implying that Chevron is guilty of murder. This claim is false and has been made intentionally and without any basis whatsoever. The RICO Defendants and their co-conspirators' intent in spreading this lie is to generate great outrage and disgust among the public and activists and in the media, all in furtherance of their extortionate conspiracy.

261. Defendant Fajardo and his co-conspirators have attempted to capitalize on the violent murder of Fajardo's brother, Wilson Fajardo. They have repeatedly implied that Chevron

was responsible and claimed that there has been no police investigation into the crime. Yet Fajardo knows this to be false. In a written statement made to the District Prosecutor as part of the extensive investigation into his brother's murder, Fajardo himself provided the names and addresses of the men he believed to be his brother's murderers, details concerning the place and circumstances of the murder, and, most importantly, a detailed account of the prior bad blood between the alleged murderers and Wilson Fajardo, including prior threats and an attempt by one of the men to stab his brother a few days earlier. There is no mention in this statement of Chevron or Texaco or any connection to the Lago Agrio Litigation.

262. Despite this statement concerning the details of Wilson Fajardo's death and his knowledge that Chevron had nothing to do with it, Fajardo has falsely and intentionally implied that Chevron was responsible. For example, on April 22, 2008, Fajardo made the following statement on Ecuadorian TV: "I can't say that it was Texaco that did it, but I can't say the contrary. This sort of thing was never investigated. In other words, there've been many things, a lot of pressure, a lot of persecution in this case, which leaves a lot to be seen." And on August 24, 2009, Fajardo said to *Publico*, "I have been threatened many times and one of my brothers was killed by hit men, but I don't have evidence that Chevron was behind his killing."

263. Fajardo's co-conspirator Hinton has perpetuated these falsehoods in comments she posted on Politico.com on November 16, 2009, in which she stated that "no one knows who murdered [Fajardo's] brother," and the death happened when Fajardo "and other members of the [Lago Agrio] plaintiffs' legal team had received a number of anonymous death threats connected to the work on the case." These statements are false and Fajardo and Hinton knew at the time that they were false. Fajardo knew that his brother's death had been investigated and he knew that Texaco and Chevron had nothing to do with it. Yet he lied about it on television, and Hinton spread that lie.

264. Even though he identified suspects in his brother's murder and the murderers' motives for killing his brother, Fajardo has falsely implied that the killers mistook Wilson Fajardo for Defendant Fajardo himself to create the impression that Chevron had attempted to

“assassinate” Fajardo. For example, in a May 2007 article in *Vanity Fair* magazine concerning the case against Chevron, Fajardo claimed that he was being followed and that “the killers had made a mistake.” Donziger has taken this outrageous claim all the way to the United States Congress. In a statement before the Tom Lantos Human Rights Commission, Donziger asserted that the “team of lawyers and advocates fighting Chevron in Ecuador’s courts over clean-up responsibility have suffered harm in retaliation for exercising their legal rights[.]” And the first “[e]xample of this retaliation” he offered the committee was: “The lead lawyer for the rainforest communities, Pablo Fajardo, has been subjected to death threats. A brother of Mr. Fajardo was murdered in 2004, about a year after the trial began, under mysterious circumstances that some think was a case of mistaken identity.” Similarly, in a particularly offensive scene in *Crude* set at Wilson Fajardo’s grave, Defendant Fajardo linked his brother’s “assassination” to the “first judicial inspection of the Texaco case” and falsely said that the killers “were looking for me.” In another scene, he “joked” that he kept a gun in his house “[f]or when Texaco comes.” These knowingly false statements are intended to leave the false impression that Chevron is not only responsible for the murder of Wilson Fajardo, but seeks to kill Pablo Fajardo as well.

265. The outrageous attacks on Chevron linking it to murder are just more of the RICO Defendants’ thinly veiled threats to Chevron: Pay up, or we will continue our campaign of lies, fraud, and corruption.

C. The Conspirators’ Campaign of Lies and Obstruction in U.S. Courts

266. Determined to prevent their conspiracy to defraud and extort Chevron from being exposed in the discovery and other proceedings Chevron commenced in U.S. federal courts, the RICO Defendants embarked on a campaign of obstruction and lies, attempting to conceal the true authorship of the Cabrera Report and the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ relationship with the supposedly “independent” Cabrera. Defendants went as far as misrepresenting Cabrera’s independence in a complaint they filed in this Court in related litigation seeking to stay an arbitration proceeding.

267. These obstruction efforts have been managed by Patton Boggs, among others. In 2010, when it appeared to the RICO Defendants that Chevron was going to uncover clear evidence of their collusion with Cabrera, attorneys from Patton Boggs participated in a series of meetings with RICO Defendants and co-conspirators in the United States and in Ecuador, to apprise themselves of the nature of that relationship. They also asserted control over the defense against Chevron's discovery actions behind the scenes, ghostwriting court papers and managing lawyers at other firms. While their investigation was ongoing, and while by their own admission they did not know "what there was to admit," they drafted and caused to be filed briefs and declarations containing false and misleading statements denying the extensive collusion with Cabrera.

268. Once it was clear that the RICO Defendants' earlier statements to U.S. courts had been false and misleading, Patton Boggs doubled down, and not only repeated and reasserted false statements about Cabrera, but also negotiated for itself a stake in the outcome of the Lago Agrio Litigation in an agreement which gave it substantial influence over the future course of the litigation.

269. Furthermore, Donziger, the ringleader of the enterprise, has himself personally interfered with discovery proceedings in this Court and elsewhere, including repeated and sustained violations of multiple orders issued by this Court. In this and other lies and misconduct before various U.S. courts, the RICO Defendants and their co-conspirators, including Patton Boggs and other law firms such as Emery Celli and Motley Rice, have brought their pervasive fraud into the courts of this country and have attempted to hide their criminal scheme from Chevron and the courts.

1. Attempting to Obstruct Chevron's Discovery Proceedings by Making False and Misleading Statements Before U.S. District Courts and Courts of Appeals

270. Faced with denials from the conspirators in Ecuador about the authorship of Cabrera's report, Chevron turned to the United States to pursue discovery from the largely U.S.-based enterprise directly through proceedings under 28 U.S.C. § 1782, which authorizes "[t]he

district court of the district in which a person resides or is found [to] order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal.” Several courts have granted Chevron’s applications for discovery, resulting in the production of more evidence of fraud, collusion, and criminal misconduct, and evidence establishing the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ knowing obstruction of Chevron’s Section 1782 applications. This evidence, and the condemnation by numerous U.S. courts of the conduct it reveals, is detailed below. But co-conspirator Julio Prieto perhaps captured the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ clear knowledge of the wrongfulness of their own conduct in an email to Donziger and Fajardo after Fajardo told him that the RICO Defendants’ correspondence with Stratus was likely to be disclosed in a Section 1782 proceeding in Colorado: “[T]he effects are potentially devastating in Ecuador (apart from destroying the proceeding, all of us, your attorneys, might go to jail)[.]”

271. Accordingly, the RICO Defendants adopted a strategy of obstruction and delay in furtherance of their criminal scheme, seeking to hold off U.S. discovery until they could obtain a judgment in Ecuador and begin their plan to use it to harass and attack Chevron and its subsidiaries around the world. As co-conspirator Ilann Maazel of Emery Celli wrote to Donziger and other co-conspirators, including attorneys at Patton Boggs and Motley Rice, “Unless we want the Stratus/Cabrera revelation to come out in CO [Colorado], which seems like the worst possible place, we need to make our submission in Ecuador and fast. . . . We’ve bought over a month in CO and everywhere else but time is almost certainly about to run out.”

272. Throughout these Section 1782 proceedings, the first of which Chevron initiated on December 18, 2009, the RICO Defendants have sought to impede Chevron’s discovery through lies, procedural abuses, and obstructionist delaying tactics. These efforts notwithstanding, Chevron has obtained additional evidence demonstrating that the conspirators wrote the Cabrera Report and sought to use the so-called “independent” report to their advantage. As this evidence has come to light, the RICO Defendants and their co-conspirators have continued to make statements that are not only false, but inconsistent with their own prior

representations, despite the fact that that this strategy made them look, “coy at best and silly or untrustworthy at worst,” as Jonathan Abady of Emery Celli put it in an email to Donziger and other Emery Celli and Patton Boggs attorneys.

a. The RICO Defendants’ Initial False Representations to U.S. Courts That They Had No Relationship With Cabrera and No Role in Preparing the “Cabrera Report”

273. In opposing Chevron’s discovery efforts, the RICO Defendants’ first tactic was denial of any misconduct whatsoever, despite Prieto’s email making clear that what the RICO Defendants did, if discovered, would “destroy” their case in Ecuador and that, “all of us, your attorneys, might go to jail.” Indeed, as Donziger has recently admitted, even after he received Prieto’s email, the substance of which he discussed with Patton Boggs and Emery Celli lawyers, Emery Celli filed briefs in which it claimed that Cabrera was independent and, in Donziger’s words, “[s]ought to prevent Stratus’ role relative to the Cabrera report from coming out.” And as early as January 2010, Donziger was preparing scripts about the relationship with Cabrera for Stratus and others to rely on in depositions using a consistent, but false, story. By taking these and other actions that served to stonewall the federal court, they hoped to avoid the discovery of their extraordinary misconduct. In multiple filings in Section 1782 proceedings, the conspirators have falsely asserted their lack of relation to Cabrera: “Mr. Cabrera is not even an expert for one party, but a Court-appointed neutral” Additionally, in declarations filed throughout the country, the RICO Defendants and their co-conspirators have perpetuated their false version of events, hiding their relationship with Cabrera and claiming that he was “independent.”

274. The RICO Defendants continued to spread their false version of events in depositions. On April 23, 2010, for example, Chapman falsely testified that he had no reason to think that Stratus had provided work product to Cabrera. The RICO Defendants and their co-conspirators were proud of Chapman’s performance, but realized that the truth was bound to come out. As co-conspirator Andrew Wilson of Emery Celli wrote to Donziger, “Chapman did an excellent job of not remembering anything—but Chevron will be able to do side-by-side comparisons of Stratus work product and [Cabrera’s] report to a judge that will smell bad.” In

fact, as Stratus's own documents make clear, Chapman, who is the head of Stratus's natural resource economics group, was personally involved in and knowledgeable of Stratus's secret authorship of Cabrera's report. Indeed, it was Chapman who provided Donziger with the initial outline and plan for Stratus to write the "damage estimate," and asked Donziger "when a final report would have to be delivered to the Judge" so that Stratus could plan its resources accordingly. Chapman's deposition misconduct, however, is not surprising given that Stratus has remained actively involved in the conspiracy even after the evidence of wrongdoing was made public. For example, Beltman held meetings for Stratus staff after Chevron filed for discovery from Stratus in an attempt to mislead the employees and influence their potential testimony regarding Stratus's authorship of the Cabrera Report. At these meetings, Beltman repeatedly misstated that Cabrera was an independent expert and misrepresented the role of Stratus in ghostwriting the Cabrera Report. Beltman consistently omitted any discussion of Stratus's true involvement.

275. In another blanket denial, Stratus represented through counsel to the District of Colorado on April 27, 2010 that Stratus was "astonish[ed]" to see "similarit[ies]" between their own work product and the Cabrera Report. It assured the court that Stratus did not have "an opportunity to review Cabrera's report in draft form," and that what they provided their co-conspirators was, "intended to assist them in their analysis of data," and in the "mediation," not "to assist Cabrera." These were outright lies; Stratus *ensured* that its work product appeared in the Cabrera Report, and Maest and Beltman both subsequently admitted that neither of them were surprised by the presence of their work in the Cabrera Report, and that nobody at Stratus would have been surprised by it. In a "Status Report" filed three weeks later, counsel for Stratus informed the court that "continued inquiry suggests that there were communications between Mr. Cabrera and two representatives of Stratus."

276. Allegedly before a subpoena issued under the authority of the Southern District of California, co-conspirator and Stratus subcontractor Powers threw out a computer hard drive containing responsive documents and deleted responsive emails. Evidence obtained by Chevron

in other Section 1782 proceedings demonstrated that Powers had been a key participant in the RICO Defendants' scheme. Indeed, one of the RICO Defendants' *own attorneys* had written, that "we are getting an indication from these documents how important a player Bill Powers was in this whole thing. He has substantial knowledge and involvement in the Cabrera Report drafting." Ultimately, Powers confirmed in his deposition that he had drafted the annexes to the initial Cabrera Report and substantial portions of the supplemental Cabrera Report.

277. The RICO Defendants also falsely denied contact with other Cabrera team members. The District of New Jersey granted Chevron's application for discovery from another of the conspirators, UBR, on the basis that while that firm was a paid consultant to the RICO Defendants, one of its employees, Juan Cristobal Villao Yopez, was disclosed as one of the authors of the Cabrera Report. On appeal, the RICO Defendants told the Third Circuit Court of Appeals that it should reverse, because there was no evidence supporting Chevron's claim that Villao had any connection to Cabrera, or that he had worked for UBR when he was supposed to have been working with Cabrera. But several months later, when this District ordered Defendant Donziger to produce his own files, they revealed that Donziger and other RICO Defendants had had direct communications with Villao regarding his contribution to the Cabrera Report. And Donziger himself has now admitted that Villao worked for both Cabrera and the RICO Defendants. Nonetheless, the RICO Defendants have taken no action to remedy their misrepresentations to the Third Circuit. In internal correspondence, they have, however, discussed the situation regarding Villao and whether to publicly acknowledge that the Cabrera Report was ghostwritten by the RICO Defendants and their co-conspirators, commenting on their concern at being accused of "perpetuation of the fraud." Andrew Wilson of Emery Celli, for example, warned Donziger to be "[c]areful" because it is "not clear our relationship with Villao was disclosed."

278. In their internal communications, the RICO Defendants and their co-conspirators have recognized that their denials did not square with the facts. In May 2010, one of the Lago Agrio Plaintiffs' U.S. lawyers wrote that their characterization that Cabrera had "considered"

Stratus's work "seems like way too much of a stretch considering that Cabrera's report, or substantial annexes to it, are in fact the consultant's work. This is far more than 'circumstantial evidence'; this is, indeed, a "hand in glove" showing." Co-conspirator Jonathan Abady of Emery Celli described the relationship between the RICO Defendants and Cabrera as "wholesale adoption of Stratus work product w/o attribution." Co-conspirator Wilson admitted in an internal email that "[t]he more we emphasize [sic] [Cabrera's] neutrality the less sense it makes that we were talking to him outside of school." And in an April 2010 letter from Donziger to his co-conspirators, Donziger referred to the "Colorado 1782 action" as a "major contingency" and warned that "if Chevron succeeds in obtaining discovery from Stratus and deposing the Stratus principals . . . , they will find that Stratus wrote the bulk of the report adopted by Cabrera and submitted to the court." Donziger also admitted that there was "significant back and forth collaboration between local counsel and Cabrera, and separately, via local counsel and Stratus," and discussed the sorts of emails that would be produced, including "numerous emails between Stratus and local counsel documenting how this work was done," "some emails between Stratus and U.S. counsel that show U.S. counsel (relying on guidance of local counsel) approved of this process, encouraged it, and was involved in it from a supervisory perspective," and emails that will "show some effort to keep the extent of this ex parte collaboration between our local counsel and Cabrera from being disclosed."

279. Additionally, in extensive correspondence in June 2010, among Donziger, Motley Rice, Patton Boggs, Emery Celli, and other co-conspirators, Jason Rockwell at Patton Boggs acknowledged that, "the Ann Maest notes suggest more coordination with Cabrera than counsel simply dropping off two sets of documents," and Jonathan Abady of Emery Celli conceded that, "By refusing to admit this now obvious fact, we look coy at best and silly or untrustworthy at worst."

280. Because their position in these proceedings has been so divergent from the facts, the RICO Defendants have had trouble retaining counsel willing to go along with this scheme of falsehoods and obstruction. Donziger has admitted that when first one and then another of the

U.S. law firms that the RICO Defendants retained to represent their interests in opposing Chevron's Section 1782 applications learned of the full scope of the RICO Defendants' relationship with Cabrera, the firms withdrew from the representation.

281. In response to Chevron's initial Section 1782 filings, the RICO Defendants retained a respected New York firm to represent their interests. But when a senior partner with that firm interviewed Stratus employees in Boulder, it was apparent to him that the RICO Defendants' relationship with Cabrera was improper and contrary to the representations made to him by Donziger. His law firm withdrew the next day.

282. Around this time, Donziger prepared a memorandum which he addressed to lawyers from a Colorado firm also retained by the RICO Defendants to block Chevron's discovery from Defendant Stratus. In that memorandum, Donziger misled those attorneys on numerous material facts. For example, in a section of the memo titled "Role of Stratus Consulting," he listed such innocuous activities as "helping Ecuadorian counsel respond to scientific questions," and "giving media interviews," but failed to inform the attorneys that Stratus had in fact written the Cabrera Report, the central allegation of the pending court proceeding. And he listed "Opinions in Cabrera's report were taken directly from Stratus materials," as one of Chevron's "inaccurate" factual assertions.

283. When this second firm was unable to obtain confirmation of any of Donziger's false representations, and after learning from its predecessor about the results of the interviews he had conducted with Stratus, that firm also withdrew. Simultaneously with its withdrawal, it sent Donziger an email citing the "troubling information" that it had learned regarding Stratus's role in preparing the Cabrera Report, and that "we are concerned about our ability to satisfy our obligations to Judge Kane and to the court if we continue in our representation of the Lago Agrio plaintiffs in this case." The attorney concluded, "I'm sorry it has come to this, but I feel if we proceed I may be compromising this firm's reputation and ethical stature and I cannot do that."

284. The conspirators then turned to counsel that they thought "appear[ed] willing to sign anything," but their relationship with that counsel lasted only a month before that firm

withdrew. And when the *fourth* firm retained by the RICO Defendants in the *same* Section 1782 proceeding reviewed the record, and not merely Donziger’s materially misleading memorandum, it concluded that, “it appears not only that Cabrera and plaintiffs can be charged with a ‘fraud’ respecting the former’s report, but that Stratus was an active conspirator.” At this fourth counsel’s request, the second firm retained by the RICO Defendants, who had previously informed Donziger that the RICO Defendants’ position was “untenable,” prepared a brief memorandum summarizing its bases for withdrawal. In that memorandum, that firm stated that “we did not feel that we had a Rule 11 basis to file an opposition to Chevron’s subpoena.” Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure requires that every filing submitted to a federal court must be signed by an attorney who represents that the filing is not for “any improper purpose,” that the “claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law,” and that “the factual contentions have evidentiary support.”

285. When another lawyer, Andrew Woods, who worked for Donziger, grew alarmed that Donziger was using him to make possibly false claims in a declaration filed in federal court, and asked to make a clarifying submission if any of his previous statements were false, Donziger and his co-conspirators talked him into remaining silent. Despite their own recognition of their misconduct, the RICO Defendants continue to deny this evidence and dissemble in sworn statements, in court filings, and in deposition testimony.

b. The RICO Defendants’ Subsequent False and Misleading Statements in an Attempt to Justify and Excuse Their Emerging Misconduct

286. As their strategy of stonewalling and total denial became increasingly impossible to square with the emerging factual record, including the video outtakes from *Crude*, the RICO Defendants and their co-conspirators made a last-ditch effort to cover up their misconduct by attempting to confuse and mislead federal courts regarding the Lago Agrio court orders governing their association with Cabrera. The RICO Defendants distorted the record in several ways as part of their attempt to impede federal court review of Chevron’s discovery applications and thereby allow the Lago Agrio court to march towards judgment.

287. In response to an inquiry from the District of Colorado seeking information about the full relationship between Cabrera and Stratus, Wilson of Emery Celli, appearing as counsel for the Lago Agrio Plaintiffs, assured the court that they would provide the “full picture” in an upcoming filing. Indeed, Wilson assured the court *nine* times at the hearing that the upcoming report would provide the “full picture.” When the conspirators caused that promised “full picture” to be filed, however, it was incomplete and misleading. In a sworn declaration, Defendant Fajardo provided a lengthy description of the relationship between the RICO Defendants and Cabrera, but falsely attested that Cabrera was “independent” and omitted from his declaration the substantial role he and other conspirators had played in securing Cabrera’s appointment, his numerous personal meetings with Cabrera—including the March 2007 meeting captured in the *Crude* outtakes—and the massive, U.S. project to write, translate and submit the fraudulent Cabrera Report. Rather, Fajardo claimed that the RICO Defendants’ contact with Cabrera was pursuant to orders issued by the Lago Agrio court in January and April 2008, requesting that the parties make various submissions to Cabrera. The RICO Defendants and their co-conspirators filed Fajardo’s false declaration not only in the District of Colorado, but also in proceedings before this Court and at least six others courts throughout the country.

288. The RICO Defendants have repeatedly invoked these 2008 Lago Agrio orders, even though much of their extensive recruitment, meeting, and collusion with Cabrera occurred in 2007. They have also sought to explain Cabrera’s various fraudulent statements to the court that he was independent from them, by asserting, in a federal court filing signed by Wilson of Emery Celli, that those statements were “made before the [Lago Agrio] court order authorizing him to get material from the parties,” and argued that “[w]hen the [Lago Agrio] Court ordered Mr. Cabrera to consider whatever submissions were provided by the parties, the landscape changed considerably. Nevertheless, Chevron conflates Mr. Cabrera’s 2007 statements with conduct that occurred *after* Court authorization was given in 2008”

289. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ attempt to excuse their conduct based on these orders is unavailing on its face. These orders were issued a year after

their close relationship with Cabrera began, and they do not authorize anything like what transpired. Indeed, when confronted with the evidence of the RICO Defendants' prior relationship with Cabrera, Donziger himself admitted that he and his co-conspirators "met with and interacted with Mr. Cabrera both before and after" the Lago Agrio court issued its January 2008 order. Their defense is also incompatible with their statements to the Lago Agrio court *after* those orders were issued. On April 25, 2008, Defendant Fajardo asserted in a filing in the Lago Agro court that it was "[a]nother infamy" that the plaintiffs were "accused of having a close relationship with Independent Expert Richard Cabrera." "It is disappointing, your honor, that professionals with such experience have fallen into such childish and absurd arguments." And this defense ignores the fact that the one submission the RICO Defendants made to Cabrera pursuant to court order was expressly limited to documents from "public institutions in the country," which does not include the work of their own consultants—an inconsistency they have conceded in private correspondence.

290. The RICO Defendants' constant refrain, that "materials" were "submitted" to Cabrera, who "reviewed" them, is contradicted by the RICO Defendants' own records. As detailed previously, Stratus was finalizing what would be adopted "whole cloth" by Cabrera just before he filed it, and it is simply impossible that he gave it any meaningful review in the few hours he could have had to do so. Nor is it credible that any revisions he might have made in that brief period were material. The RICO Defendants knew exactly what he would file because it was what they wrote. Indeed, the day *before* Cabrera filed the report, Donziger had in his possession a table of damages amount that matched those in the Cabrera report to the penny for numerous categories, including cancer deaths, ecosystem losses, unjust enrichment, and remediation. In their total estimates, Donziger's table and the Cabrera report differed by less than one tenth of a percent.

291. Nonetheless, the RICO Defendants continue to assert in U.S. federal court that their relationship with Cabrera was pursuant to those orders and fully disclosed to the Lago Agrio court. Before the Third Circuit, for example, the RICO Defendants recently asserted that,

“The Ecuadorian court was and is well aware of the Ecuadorian Plaintiffs’ *ex parte* contacts with Cabrera and submission of materials to him—and indeed, *invited* such contacts and submissions.” Of course, if the court was aware of the RICO Defendants’ collusion with Cabrera, which was roundly denied by the RICO Defendants and Cabrera for years, that merely implicates the court in the fraud. It does not excuse or justify it.

292. In depositions ordered by U.S. courts, the RICO Defendants have continued to obstruct Chevron’s investigation, and maintained untenable positions in the face of overwhelming evidence. For example, Defendant Ann Maest, despite her appearance in the *Crude* outtakes participating in a *meeting* with Cabrera at which the Cabrera Report was planned, denied under oath that she had “any contact with Mr. Cabrera in conjunction with [her] work[.]” When asked about the meeting, she simply asserted, “I don’t recall that,” ignoring the fact that, as she would admit just a few minutes later, she had watched the video of the meeting within the past two weeks. Then, when the video was shown to her, and she was asked about Fajardo’s statement that “the work isn’t going to be the expert’s,” she testified that she “didn’t know what he meant,” and she denied understanding that Chevron would be excluded from that work, despite clearly being shown commenting and laughing about that very subject on the video, and the fact that her own handwritten notes from the meeting contain the following phrase, marked by a large star: “Only plaintiffs are doing Peritaje Global, not Chevron.” Throughout her deposition testimony, nearly every time she was shown evidence—often her own work product—that Stratus had knowingly prepared the Cabrera Report and intended it to be misperceived as independent, she claimed she did not remember, or did not understand, the evidence. When confronted with Cabrera’s repeated denials of assistance from the RICO Defendants, Maest testified that she had discussed this with Beltman, and that their conclusion was simply that “in Latin culture, for men it’s not something that you want to admit, that you are getting help[.]” Among the few things she would admit in her testimony was that the conspirators understood that their meetings with Cabrera had to be kept secret.

293. The RICO Defendants have also made the false claim, first before the District of Colorado and then before other courts, that Cabrera disclosed his contacts with the conspirators in his report. In support of this new position, they specifically referred to a citation in the Cabrera Report which they quoted as, “*Excerpts from . . . Selva Viva 2002-2006*” (emphasis and alteration in original). But the full citation, without the conspirators’ carefully placed ellipses, plainly referred to a specific set of documents related to the judicial inspections, and does not disclose anything resembling the wholesale ghostwriting that actually occurred.

294. The RICO Defendants and their co-conspirators also claimed that their submissions to Cabrera were “privileged,” and that Ecuadorian law permitted parties secretly to submit materials to court officials without disclosing those materials to other parties. In support of this claim, the RICO Defendants and their co-conspirators submitted a declaration that cited no legal authority whatsoever.

295. In another attempt to excuse their conduct, the RICO Defendants and their co-conspirators have falsely asserted that their conduct was no different from Chevron’s relationship with other court experts. But the RICO Defendants know that there is no “real comparison” to be made and that any such comparison would not be “legitimate,” as Eric Westerberger, an attorney at Patton Boggs, wrote to Donziger and others back in July 2010.

296. Indeed, the RICO Defendants’ internal correspondence is replete with admissions that they were relying on unsupportable theories and distinctions to avoid disclosure. In March 2010, Andrew Woods learned from Donziger of the circumstances surrounding the first of several withdrawals by counsel representing the RICO Defendant in the Stratus Section 1782 proceedings. He immediately advised Donziger to seek outside counsel regarding his potential personal liability for the manufacturing of the Cabrera Report. Donziger did so, and immediately thereafter began creating a false record that tried to put the blame for the misconduct on his Ecuadorian colleagues, writing a memo to “file” asserting that he had been misled.

297. But then in an April 2010 letter to his co-conspirators, Donziger bluntly acknowledged that their relationship with Cabrera was “a violation of local court rules,” and

“improper” under a “traditional Ecuadorian law perspective. By working so closely with our local counsel and Stratus, Cabrera violated his duties to the court.” And on May 16, 2010, attorney Ilann Maazel of Emery Celli, conceded in an email to co-counsel that, “the core basis for the 1782 is nevertheless apparently correct: neither Cabrera nor plaintiffs disclosed a submission from plaintiffs that contained drafts of part of the expert report written by Stratus.” Yet the very next day, the RICO Defendants caused to be filed in federal court a brief containing the claim that all contact between Cabrera and the RICO Defendants was disclosed.

298. In response to another suggested defense, in which the conspirators would argue that the only fraud shown by the record was Donziger’s and not the “clients” thus supposedly protecting privilege, Donziger complained that, “you’re throwing me under the bus,” and noted that there was substantial evidence that Yanza was involved in any fraud. Co-conspirator Ilann Maazel of Emery Celli assured him that Yanza was not his client, but Donziger pointed out that Yanza was associated with the Front, which stood to receive 10% of any judgment. These concerns notwithstanding, the RICO Defendants and their co-conspirators have pressed this argument in numerous U.S. courts.

299. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ attempt to whitewash their conduct was insupportable on its face, and Chevron’s subsequent discovery of their true conduct has demonstrated how baseless these attempts were. The RICO Defendants and their co-conspirators did not submit materials to Cabrera so that he could independently review them; rather, they submitted materials for him to sign and submit to the court under his name. Nor did they ever intend to disclose this to Chevron, or to anyone. As Donziger put it, their specific intent with respect to Chevron’s knowledge of the RICO Defendants’ relationship with Cabrera was to make sure “that they don’t know shit.”

300. The RICO Defendants offered these false statements in part because they hoped to avoid discovery of their misconduct, but also in an effort to at least forestall disclosure as long as possible through factual misrepresentations and the obstructive filing of meritless court papers. Through this strategy, they would buy themselves time to allow the Lago Agrio court to

issue its judgment against Chevron under which the only basis for liability would be the fraudulent Cabrera Report. In May 2010, as the conspirators realized that the truth of their relationship would start to come out, Donziger described their strategy: “I think we should appeal on the theory that we gain a greater advantage by fighting them on everything, and tying them up, than in conceding any one thing even if we expect to ultimately lose that one thing down the road.” And another conspirator, Eric Westenberger of Patton Boggs, spelled it out in more specific terms in an email to Donziger and co-conspirators at Emery Celli, Motley Rice, and H5: “What about the following? Appeal; move for stay; if we win with [the District Court Judge] great; if we lose, we produce whatever we want (narrow read); [Gibson Dunn] complains and then we move for clarification. If we lose again, we think about another appeal.”

301. The RICO Defendants have also tried to distract attention from Chevron’s discovery by concocting false allegations against Chevron as a diversionary tactic. For example, they have sought to try to blame the Judge Núñez bribery solicitation scandal on Chevron, even though their own special counsel on the issue concluded that “Chevron is telling the truth” when it claimed not to have “even known about these conversations” at the time they first occurred. When news of the RICO Defendants’ improper relationship with court experts began to become public in 2010, co-conspirator Prieto suggested that they use the bribery solicitation as an excuse for “starting a new action on our own to mitigate and counteract the effects of what might happen in Denver?” He also suggested that this could be a means of getting broader discovery for their pressure campaign: “Chevron must have some skeletons in the closet. Let’s search.” The RICO Defendants eventually followed Prieto’s suggestion, bringing just such an action in federal court in California.

302. The evidence that Chevron has uncovered in the Section 1782 proceedings, in spite of the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ obstructive tactics, has inspired strong language from several federal courts. For example, the District Court in the District of New Jersey held that the conduct in furtherance of the conspiracy could not constitute “anything but a fraud on the judicial proceeding.” And, regarding videotaped evidence of the criminal enterprise

that Chevron has obtained, Judge Kaplan of the Southern District of New York found that “the outtakes contain substantial evidence of misconduct in and relating to the Ecuadorian litigation.” Specifically, Judge Kaplan noted that the outtakes “contain substantial evidence that Donziger and others (1) were involved in *ex parte* contacts with the court to obtain appointment of the expert, (2) met secretly with the supposedly neutral and impartial expert prior to his appointment and outlined a detailed work plan for the plaintiffs’ own consultants, and (3) wrote some or all of the expert’s final report that was submitted to the Lago Agrio court and the Prosecutor General’s Office, supposedly as the neutral and independent product of the expert.” The Western District of North Carolina court also found that “what has blatantly occurred in this matter would in fact be considered fraud by any court,” while the District of New Mexico court concluded, “[t]he release of many hours of the outtakes has sent shockwaves through the nation’s legal communities, primarily because the footage shows, with unflattering frankness, inappropriate, unethical and perhaps illegal conduct.” The District of New Mexico court also found that the RICO Defendants have engaged in “corruption of the judicial process, fraud, attorney collusion with the Special Master, inappropriate *ex parte* communications with the court, and fabrication of reports and evidence.”

303. Numerous courts have also found that the crime-fraud exception to the attorney-client privilege applied and thus did not shield the RICO Defendants’ and their co-conspirators’ pervasive fraud from discovery. The District Court for the Southern District of California, for example, reasoned that there “is ample evidence in the record that the Ecuadorian Plaintiffs secretly provided information to Mr. Cabrera, who was supposedly a neutral court-appointed expert, and colluded with Mr. Cabrera to make it look like the opinions were his own.” That court subsequently found that the crime-fraud exception applied to discovery of co-conspirator William Powers, finding that he was “deeply involved [in the fraud] in that his work product was apparently adopted whole cloth by the allegedly neutral expert Cabrera.” Similarly, the District Court of New Mexico noted that “exchanges” among the RICO Defendants “trigger the crime-fraud exception, because they relate to corruption of the judicial process, the preparation of

fraudulent reports,” and “the fabrication of evidence.” And the Southern District of New York noted that “there is more than a little evidence” that the activities of the RICO Defendants “come within the crime-fraud exception.”

2. Making False Statements to Deceive New York Courts in Connection With Chevron’s Section 1782 Applications and Other Actions

304. The RICO Defendants’ and their co-conspirators’ deliberate misrepresentations to federal courts have not been limited to lies about their relationship with Cabrera and the authorship of the Cabrera Report. Rather, the RICO Defendants and their co-conspirators have made, or caused to be made, a number of false statements before federal courts in New York in connection with their attempt to prevent the discovery of certain *Crude* outtakes in a Section 1782 proceeding and in the case the Lago Agrio Plaintiffs filed, through co-conspirator Emery Celli, to stop Chevron’s arbitration with Ecuador in a bilateral investment treaty proceeding.

305. Before the Southern District of New York, the RICO Defendants and their co-conspirators made a series of false statements regarding *Crude* and the contents of the outtakes from filming sought by Chevron pursuant to Section 1782. When Chevron discovered evidence that a scene in *Crude* had been modified at the RICO Defendants’ request in order to suppress evidence of meetings between the RICO Defendants and Cabrera team member Carlos Beristain, the RICO Defendants told the court that the meeting was “innocuous” and “of no relevance to anything.” Similarly, on appeal of the district court’s order requiring production of the *Crude* outtakes, the RICO Defendants and their co-conspirators claimed that they had requested Berlinger to delete the scene from the DVD version of the film only to “avoid the misimpression, cynically fostered by Chevron below, that [the Lago Agrio] plaintiffs participated in one of Dr. Beristain’s focus groups *after* he was a court expert” (emphasis in original). In fact, however, the meeting from which Beristain was carefully edited out of the picture was a meeting arranged and funded by the RICO Defendants and their co-conspirators as part of their scheme to control the content of the Cabrera Report. Nor was that the only evidence of wrongdoing that disclosure of the video would record. And the attorney who signed the brief in the Second Circuit, Ilann

Maazel of Emery Celli, knew that the Beristain footage would turn out to be much less damaging than what he knew the outtakes would contain: “a meeting with Steve, Pablo, Stratus, and Cabrera,” as he informed his co-counsel when the Second Circuit’s order compelling production was announced.

306. Judge Kaplan noted that Berlinger’s representations regarding the contents of those outtakes, which were adopted by the RICO Defendants through their agent and co-conspirator Emery Celli have “proved inaccurate.” Judge Kaplan observed that “[t]hese and similar instances are worrisome in considering their present claims.”

307. In addition to the false statements concerning *Crude*, the conspirators have made misrepresentations in two other cases before the Southern District of New York. One of those cases was brought by the Republic of Ecuador and Petroecuador and the other was filed by the RICO Defendants (ostensibly on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs), through their agent and co-conspirator Emery Celli, in an attempt to stay the Treaty Arbitration Chevron had commenced as a result of Ecuador’s failure to abide by the terms of the 1998 Final Release. In making false statements about Cabrera in both proceedings in related actions before this Court, the RICO Defendants have attempted to deceive the Court.

308. On January 14, 2010, co-conspirator Emery Celli filed an action ostensibly on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs in the United States District Court for the Southern District of New York, seeking a court order compelling Chevron to stay the bilateral investment treaty proceeding. The complaint alleged that “[t]he best and most recent *independent* estimate available of the human health impact of this contamination is provided by the *neutral Special Master* [Cabrera] appointed by the [Lago Agrio] court to provide advice on damages.” (emphasis added). It further stated that “Dr. Cabrera appointed a team of 14 technical officials,” and that “the final report [was] *produced by the Cabrera team . . .*” (emphasis added).

309. This complaint also alleged that “[e]nvironmental remediation experts from the United States have reviewed the Cabrera report and found its conclusions reasonable and its damages assessment consistent with the costs of other large environmental clean-ups around the

world.” The “environmental remediation experts from the United States” were the RICO Defendants themselves, a fact which was not disclosed by the RICO Defendants to this Court.

310. In previous litigation between Chevron and the Republic of Ecuador, the RICO Defendants prevailed upon counsel for the Republic of Ecuador, Winston & Strawn, to amend the Republic of Ecuador’s pleadings to include allegations that TexPet’s 1998 Release was obtained through fraudulent misrepresentations. Defendant Donziger described the allegation as a “hammer” that he could use in the Lago Agrio Litigation. Donziger was then called upon by senior Ecuadorian officials to coach witness testimony in support of the allegation. But this allegation was made in bad faith and without sufficient evidence, for the improper purpose of gaining “leverage” over Chevron outside of the litigation in which it was asserted, and ultimately could not be sustained. And two months later, the Republic of Ecuador insisted that the allegation be withdrawn because no witness could be found to support a necessary element of the fraud claim and sanctions could therefore be imposed. Donziger nevertheless convinced the Republic of Ecuador to falsely state to the court that “it was being withdrawn not because it was not valid, but for reasons of stringent scheduling set by [the Court].” With the lack of evidence obscured, Donziger continued to represent to Chevron that “we will have a special witness from the government who will testify about fraud during the examination,” a ruse intended to keep a “hammer” over Chevron’s head, which he referred to as “misdirection.” As Donziger wrote, “this backs up my litigation strategy of filing losing motions to create leverage.”

3. Obstructing Judicial Proceedings by Tampering With Witnesses, Withholding Documents, and Making False Statements to This Court

311. Donziger, the mastermind of the RICO Defendants’ fraudulent scheme, has also been a leading actor in the attempted cover-up of the criminal scheme in U.S. courts. He has tampered with the testimony and sworn submissions of at least two other witnesses, Mark Quarles and Dr. Charles Calmbacher, and he has defied multiple discovery orders from this Court commanding him to produce his own documents, and lied to the Court repeatedly about his noncompliance.

312. Donziger has been working to prevent Chevron's discovery of the RICO Defendants' scheme for years. On or before September 17, 2007, the RICO Defendants and their co-conspirators induced one of their consultants, Mark Quarles, to sign a declaration, which was submitted in an action pending in the Southern District of New York, stating that "Mr. Cabrera and his team have acted independently from both the [Lago Agrio] plaintiffs and the defendant" During Quarles's recent deposition in a Section 1782 proceeding, Quarles testified that the statement concerning Cabrera's independence in his declaration was based on several days of observation of the global assessment process in 2007, and also on specific false representations by Donziger that Cabrera had written the work plan upon which the Cabrera Report was based. He further testified that Donziger paid him to conduct his observations and sign the declaration. Quarles testified that had he known that Cabrera was working directly with the lawyers for the Lago Agrio Plaintiffs (i.e., the RICO Defendants), he would not have signed the declaration.

313. Recent document productions from Donziger have further revealed that not only did Donziger push Quarles to swear to Cabrera's independence, he pressed for stronger language, and asked Quarles to remove language that would have hurt the RICO Defendants if the true facts were known. On September 16, 2007, Donziger sent Quarles an email attaching Quarles's draft declaration. Where Quarles had written a paragraph discussing the qualifications of Cabrera's team, Donziger requested that he replace that language with statements that Donziger knew to be utterly false: "Mr. Cabrera has at all times acted independently from both the plaintiffs and the defendant. At no time has Mr. Cabrera entertained suggestions or even met with plaintiffs or their representatives regarding his current work plan." Donziger then told Quarles to delete language suggesting that if any such contacts had taken place, "a degree of biasness would have been introduced into the sampling plan." Quarles accepted Donziger's request to delete the "biasness" passage, and ultimately signed a version containing the core of the false claim of independence.

314. More recently, when the conspirators learned that Chevron would be taking Dr. Calmbacher's deposition in a Section 1782 proceeding, the RICO Defendants attempted to stop

Calmbacher from exposing the truth about the falsified reports that Defendants and their co-conspirators filed in his name.

315. Under the guise of seeking to move to quash the subpoena, Donziger contacted Dr. Calmbacher and attempted to convince him not to testify at his deposition, telling him that testifying could pose “real problems” for him and could result in a “potential law case against” him because “they’re going to go after [him] for unprofessional behavior.” Donziger had no factual basis upon which to make these statements, which were false and misleading. When asked at his deposition whether “Donziger [was] trying to convince [him] not to come and testify,” Calmbacher testified: “Very much so. Very much so.”

316. Dr. Calmbacher disregarded Donziger’s threats and outrageous claims, and testified pursuant to the court-authorized subpoena. Shown copies of the reports filed by Defendants in the Lago Agrio court under his name, Dr. Calmbacher testified, “I did not reach these conclusions and I did not write this report.” Dr. Calmbacher proceeded to explain how the conspirators sent him a version of his expert report that correctly stated his views and blank pages for him to initial so that they could obtain his signature for the falsified reports filed with the Lago Agrio court, as described in paragraphs 117-20, *supra*.

317. In the Section 1782 proceeding directed at Donziger himself, he has disregarded the Federal Rules of Civil Procedure and this Court’s multiple express orders to produce all of his responsive documents. With the approval of the Court, Chevron served a subpoena on Donziger on August 9, 2010, seeking documents and testimony regarding many of the matters described in this Amended Complaint. Donziger moved to quash the subpoena, and this Court denied that motion on October 20, 2010 and ordered Donziger to comply with the subpoena “forthwith.” Further, because Donziger had failed to produce a privilege log, the Court held that any privilege claims over Donziger’s documents were waived. Nonetheless, the Court noted that it would “relieve [Donziger] of the waiver,” if he “file[d] a complete privilege log on or before October 29, 2010.”

318. Donziger did not comply. Instead he produced a fraction of his documents, filed meritless and conflicting papers with the Court, and then, nearly a month later, submitted a facially defective “privilege log.” On November 29, the Court *once again* ordered Donziger to produce his responsive documents, finding that Donziger’s conduct “was a deliberate attempt to structure the response to the subpoenas in a way that would create the maximum possibility for delay.” And Donziger once again failed to comply.

319. At Donziger’s deposition, his conduct was so improper that it prompted the Special Master, appointed by this Court to oversee the deposition, to write to the Court: “From virtually the first day of his deposition, Mr. Donziger gave many unresponsive, self serving answers to questions that should have been answered directly, with no embellishment.” The Special Master went on to describe how he had repeatedly cautioned Donziger and his counsel, but that this “seemed to have little effect.”

320. On January 13, 2011, the Court *yet again*, in response to a motion to compel filed by Chevron, ordered Donziger to produce the documents he had been under orders to produce since October, and held in reserve the possibility of holding Donziger in contempt. Over the next several days, Donziger, without explanation for his prior failure to do so, produced over 87,000 documents, four times as many as he had produced before, the vast majority of which were responsive to Chevron’s requests, and included many of the probative documents that form the basis for this Amended Complaint. Yet, in deposition testimony immediately following this production, Donziger admitted that he had *yet more* responsive documents, such as those in email accounts that the RICO Defendants set up specifically to hide sensitive communications about, among other topics, their authorship of the Cabrera Report.

321. Accordingly, on January 21, the Court ordered Donziger to turn over the computer hard drives in his possession, so that Chevron could test the sufficiency of his production. On these hard drives were *thousands* more documents that were responsive to Chevron’s requests and highly relevant to Chevron’s defense of the Lago Agrio Litigation and its prosecution of the BIT Arbitration but that Donziger had failed to produce. Many of the

documents Donziger had withheld were highly probative and damning materials that revealed the RICO Defendants' scheme in even greater detail, including emails about meetings with the judge in Lago Agrio and with President Correa, memos regarding the obstruction of Chevron's discovery efforts in the United States, and other documents revealing further falsehoods made by the RICO Defendants to the press and to government agencies.

322. This hidden cache of documents is not the end of the story. Donziger produced seven hard drive images in response to the Court's order, and assured Chevron, through counsel, that those were all that he had, and that he was "not aware of any use by him or others of thumb drives or similar devices and, accordingly, does not have any." But analysis of the hard drive images provided by Donziger revealed that at least 79 unique external storage devices, including 7 external hard drives, 1 zip drive, and 59 flash drives had been connected to those hard drives at various times. The analysis also revealed that on August 4, 2010, two different external storage devices were attached to Donziger's computers—that was the day after Chevron made its first public filing containing the outtakes from *Crude* that showed Donziger's March 3, 2007 meeting with Cabrera.

323. Confronted with this analysis, Donziger admitted that he "might have" used a flash drive "once or twice," and that he might have used one in the last six to eight weeks in connection with the Lago Agrio Litigation, but that he does not have it anymore, and does not know where it is or why he does not have it.

D. Chevron Has Suffered Substantial Damages as a Result of the RICO Defendants' Conspiracy, and Enforcement of the Corrupt Judgment in the Lago Agrio Litigation Would Deepen the Harm

324. The RICO Defendants and their co-conspirators have used the corruption and politicization endemic to the Ecuadorian judicial system to their advantage and by colluding with the Ecuadorian government and corrupting the court and its "neutral" expert. Indeed, as Judge Kaplan explained, "there is evidence to support Chevron's claim that the 'global assessment' is a fraud There is evidence too that other expert evidence submitted to the Ecuadorian courts on behalf of those plaintiffs also was fraudulent. Chevron thus stands in jeopardy of a huge

judgment that, if ultimately rendered, could be the result of a fraud practiced by the Lago Agrio plaintiffs.”

325. On February 14, 2011, the Lago Agrio court did just that when it announced its judgment, awarding \$8.65 billion in supposed damages, another \$865 million on top of the damages to the Front as the Lago Agrio plaintiffs’ representative, and \$8.65 billion in punitive damages, all of which are unsupported by law or evidence. In accordance with the conspirators’ longstanding strategy, the award is lower than the amounts the RICO Defendants claimed, so as to allow the RICO Defendants to argue that the judgment was supposedly fair because the court “cut down the largest part.” On its face, the judgment confirms that it was not the product of anything resembling a fair process and instead purports to impose record-breaking liability on Chevron without even the pretense of a finding that Chevron actually caused any harm. While disclaiming reliance on Cabrera, the judgment necessarily relied on Cabrera’s fraudulent report (the only “evidence” of causation in the case) and on the reports of the RICO Defendants’ other “new” experts, such as Allen, Shefftz and Barnthouse, whose reports were designed by the RICO Defendants and their co-conspirators to “whitewash” the Cabrera Report and who themselves have admitted to relying on the Cabrera Report, rather than conducting their own independent analyses. The judgment further imposed another \$8.65 billion as “punitive” damages, although Ecuadorian law does not allow for punitive damages and the Lago Agrio Plaintiffs did not even seek such damages in their complaint. The Lago Agrio court stated that it would relieve Chevron of this “punitive penalty” only if Chevron issued a public “apology” in both the Ecuadorian and United States press, effectively admitting liability, within fifteen days of the judgment. The apparent purpose of this penalty was to coerce an unjustified admission of liability from Chevron by making the cost of an appeal equal to \$8.65 billion so that Chevron could not possibly successfully appeal or challenge enforcement later. In addition, the judgment all but ignored Chevron’s undisputed evidence of the RICO Defendants’ misconduct, including the Calmbacher and Cabrera frauds.

326. The RICO Defendants and/or their co-conspirators were also closely involved in either the actual drafting of portions of the 188-page judgment or providing to Judge Zambrano—or whoever actually wrote the judgment—on an ex parte basis material that is not part of the public record in the Lago Agrio Litigation. For example, portions of the judgment rely on information that was obtained from and exclusive to the “Selva Viva Database”—the same database controlled by the RICO Defendants and their co-conspirators and the source of at least two annexes of the Cabrera Report. The Selva Viva Database, however, is not part of the Lago Agrio Litigation public record. The judgment, for instance, uses an irregular naming convention for samples that is otherwise unique to the Selva Viva Database. The judgment also repeats data errors and other irregularities that are unique to the secret Selva Viva Database. For example, the judgment treats samples that show that no mercury was detected as having detected “alarming levels of mercury” at 7 mg/kg. The reason for this unambiguous error is the fact that the “<” symbol indicating that there was “<7 mg/kg” detected—which was the detection limit for the laboratory’s testing equipment—appears in a separate column in the Selva Viva Database. And whoever wrote the judgment simply transposed the detection limit without the “<” symbol. Another error is that the judgment claims that results for certain samples are in milligrams per kilogram (mg/kg) when they are really in *micrograms* per kilograms ($\mu\text{g}/\text{kg}$) to arrive at contaminant levels a thousand times higher than the samples actually showed. Again, the source of this error is mistakes in the Selva Viva Database in which the results were mislabeled. The judgment contains some the same errors contained in the Cabrera Report, but it also contains additional errors of the same types that are not included in the Cabrera Report but that are included in the secret Selva Viva Database—proving that whoever wrote the judgment relied on the secret Selva Viva database itself, and not the Cabrera Report. In addition, the judgment relies on other internal, non-public documents prepared by the RICO Defendants and their co-conspirators and repeats the exact same errors found in those documents, including citations to the wrong page in the *Lago Agrio* record, grammatical errors, and errors in the description of documents. There is no explanation as to how Judge Zambrano or whoever wrote the judgment

would have had access to this non-public information without the clandestine assistance from the RICO Defendants and their co-conspirators.

327. While both Chevron and the Lago Agrio Plaintiffs have appealed the fraudulent judgment in Ecuador, the systemic weakness of the Ecuadorian judiciary, institutional failings, and the manipulation of the appellate process in this case demonstrate that Judge Zambrano's ruling will not receive an independent and fair review. Instead, there is evidence that the very judge who issued the decision—Judge Zambrano, along with Benjamín Cevallos, the President of the Judicial Council—which has sole power to appoint and remove judges in Ecuador—manipulated the selection process to hand select the three judges who will hear the appeal. Cevallos appeared at a press conference with Judge Zambrano to announce the issuance of the judgment in the Lago Agrio case, praising Zambrano as a “shining star,” and in the months leading up to the constitution of the panel engaged in several unusual actions. The three judges initially assigned to the appeal consisted of Judge Zambrano, Judge Núñez, and Judge Marco Yaguache. Then, weeks before the panel was officially constituted, Judge Yaguache was removed from the panel by Cevallos and replaced by Judge Luis Legña with no justification, except to state that Judge Yaguache's removal was “for the benefit of institutional interests.” Then Judge Zambrano, as the Judicial Council's provincial delegate, allegedly conducted a “lottery” to replace himself and Judge Núñez on the panel. Contrary to Ecuadorian law, this alleged lottery was conducted in secret and with no notice to the parties. As a result, the panel consisted of Judge Legña, whose presence on the panel was engineered by Cevallos; Judge Toral, who was nominated by Judge Zambrano; and Judge Orellana, who was appointed as a substitute judge by the Judicial Council, which is controlled by Cevallos as President, just six weeks before Judge Zambrano issued the judgment against Chevron. The Lago Agrio Plaintiffs themselves noted the procedural irregularities in the constitution of the appellate panel in a brief filed last month with the Lago Agrio Court, requesting that the panel make clear that appropriate procedures were followed “to avoid defects nullifying the proceedings.” Even setting aside the role of the Judicial Council, and specifically Cevallos, in the constitution of

this panel, there are other indications of bias and prejudice against Chevron. For example, Judge Orellana is a part-time judge who also acts as a lawyer and currently represents an individual who recently filed a complaint against Chevron for alleged personal injuries supposedly caused by TexPet's prior operations in Ecuador.

328. The jeopardy that Chevron faces as a result of this fraudulent judgment is compounded by the fact that the RICO Defendants continue to have access to significant funds to carry out their criminal scheme. Until 2010, Kohn had been the primary source of funds for the criminal scheme, supporting it with over \$7 million in less than seven years—"the largest single component" of which, according to Kohn, was over \$1 million provided to Donziger personally. This money was made available by Kohn upon specific requests from Defendants Donziger and Yanza, who worked with Kohn to prepare budgets for the case, and would contact him as often as monthly to request amounts ranging from \$40,000 to \$100,000 each time. These funds were distributed to U.S. consultants, including Defendant Stratus, and to Ecuador, mainly through Selva Viva and the Front, to fund the RICO Defendants' activities in that country.

329. After Donziger, Yanza, and Fajardo had a falling out with Kohn, they secured additional ongoing funding from Burford. The RICO Defendants' relationship with Burford began in October 2009, and by June 2010, Burford had spent hundreds of hours working on issues related to the RICO Defendants' scheme, and had been active in developing strategy. In the summer and fall of 2010, the RICO Defendants, along with co-conspirators H5, Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs discussed a \$15 million investment from Burford, and by December, \$4 million had already been provided to further the RICO Defendants criminal scheme. The relationship with Burford was largely orchestrated by Patton Boggs, which acts as Burford's outside counsel and even shares space in its New York offices with Burford. In exchange, Burford received not only an interest in any money obtained from Chevron, but also approval authority over the use of its funds, which authority is exercised by James Tyrell, a senior Patton Boggs partner. Another substantial source of funds has been Russell DeLeon, an online gambling entrepreneur who was a major source of funding for *Crude*.

330. The RICO Defendants, acting in concert with Burford and Patton Boggs, have further ensured their control over the future of the Lago Agrio Litigation, and secured their own claims on any proceeds, and those of Burford and Patton Boggs, by apparently requiring a number (but not all) of the Lago Agrio Plaintiffs to assign their rights in the litigation to a trust (the “Burford Trust”). The trustee of the Burford Trust, who must be approved by Burford, will be “the sole and only Person entitled to, among other things . . . have the authority and obligation to apply and distribute any proceeds of the Award” held in the Burford Trust, and that distribution apparently is now governed by a contractual agreement between Donziger, Burford, DeLeon, the Front, Patton Boggs, H5 and other U.S. parties. This contractual agreement incorporates a complex “waterfall” that, for any funds placed in the Burford Trust, secures the claims of the RICO Defendants, Burford, Patton Boggs and others, and relegates any actual distribution in Ecuador to the residual. Furthermore, Donziger, Fajardo and Yanza purportedly retain authority over the Burford Trust trustee’s further pursuit of the Lago Agrio Litigation.

331. Defendants already are planning to seek immediate enforcement of the Ecuadorian judgment in U.S. and foreign courts, and to extort a payment from Chevron by using the Ecuadorian judgment to threaten seizure of Chevron’s assets and those of its subsidiaries. The RICO Defendants’ internal blueprint for global enforcement, a memo by co-conspirator Patton Boggs titled “Invictus,” asserts that, “If and when an enforceable judgment is entered in Ecuador, Plaintiffs’ Team expects to be engaged quickly, if not immediately, on multiple enforcement fronts—in the United States and abroad.” They have said as much expressly on multiple occasions, and, in fact, have represented to the Southern District of New York that Chevron’s defense against any Lago Agrio judgment should be restricted to New York’s Recognition Act.

332. Co-conspirator Amazon Watch has reported that the Lago Agrio Plaintiffs’ representatives will quickly “move to collect the judgment by any means necessary in whatever country the company has assets” and that they “will seek to enforce any judgment against the oil giant immediately in U.S. courts.” Co-conspirator Hinton said that “If the [Ecuadorian] courts

were to agree to [force Chevron to post a bond in order to appeal the Lago Agrio judgment], then we would try to start seizing assets in other countries.” According to Donziger, “If we get a judgment out of the trial court, we’re coming back immediately, — soon as we can, —to get that judgment enforced. We are not waiting for the appeals process.” And Donziger has threatened that “Chevron operates in more than 100 countries and has numerous oil tankers that troll the world’s waterways and dock in any number of ports This could end up being one of the biggest forced asset seizures in history and it could have a significant disruptive impact on the company’s operations.” In an interview broadcast as part of a *60 Minutes* segment on the Lago Agrio Litigation, Donziger, in response to the observation that Chevron has no assets in Ecuador, stated, “At the end of the day, it might be a situation where a U.S. court enforces the judgment and the marshals have to go to Chevron and seize their assets.” These threats continue unabated. Just months before this Amended Complaint was filed, Donziger, in a speech to law students, told them that he was assembling a legal team “to execute whatever judgment comes out of Ecuador effectively, in whatever forum might—forum might be appropriate, including multiple places that, you know, you could file suits, you could seize assets, seize boats.”

333. Through statements made to this Court, Defendants have also made clear their intent to enforce the judgment immediately. When asked by Judge Sand of the Southern District of New York whether the Lago Agrio Plaintiffs in their action to stay the Treaty Arbitration were “willing to stipulate that [they would] take no efforts to enforce the judgment until . . . the arbitration is completed,” their counsel refused to agree to stay enforcement: “No, your honor. We would not and cannot do that.”

334. Indeed, since the issuance of the Lago Agrio judgment, Defendants have only accelerated their plan to pressure Chevron by using the fraudulent judgment to institute attachment proceedings and other enforcement actions, in defiance of a temporary restraining order issued by this Court. On February 14, 2011, Fajardo stated that “we’re going to immediately ask any country where Chevron has assets . . . that Chevron’s assets be attached.” And a day later, referring to this Court’s issuance of a temporary restraining order, Fajardo stated

that the order would not prevent Defendants' attempts to enforce and recognize the judgment outside of the United States: "The judge cannot order and require something that is outside of United States territory, as such. *Therefore, that injunction is completely, uh, it's unenforceable, inapplicable for countries other than the United States.*"

335. The judgment of the Lago Agrio court, procured by the RICO Defendants' and their co-conspirators' fraud—in addition to related attachment and enforcement efforts and the specter of billions of dollars in liability—threatens to disrupt Chevron's business operations, sully its reputation, and otherwise cause Chevron to suffer irreparable harm. In the RICO Defendants' "Invictus" memorandum, outlining their plans to use the Lago Agrio judgment to extract payments from Chevron, Patton Boggs also proposes initiating a shareholder derivative action against Chevron in the United States, "as a point of leverage with respect to settlement [and] as a fruitful basis for discovery into the machinations of Chevron management vis à vis the Ecuadorian litigation." And that memo also reveals that the RICO Defendants do not intend to wait for judgments in their proposed enforcement proceedings: "Consistent with their aggressive approach, Plaintiffs' Team will look for ways to proceed against Chevron on a pre-judgment basis, largely as a means of attaining a favorable settlement at an early stage. Various laws and procedures within and outside the United States may permit attachment of Chevron's assets prior to successful recognition of the Ecuadorian judgment."

336. Nor are the RICO Defendants limiting their operations to the Lago Agrio Litigation. Donziger has stated that their intention is to "take legal fees we can earn from this case and, do more cases like this in different places with, you know, the same team, if possible."

337. The RICO Defendants' extensive and wide-ranging scheme to defraud and extort Chevron, as described in this Amended Complaint, has already had a lasting and irreparable effect on Chevron. The RICO Defendants' false and misleading statements have been relied on by the U.S. courts, U.S. state and federal government agencies, Chevron's shareholders, investors, analysts, the media, and by the Lago Agrio court by means of its acceptance of Defendants' and Cabrera's misrepresentations and omissions and its failure to take meaningful

corrective action. Further, the RICO Defendants' false and misleading statements have caused Chevron substantial damages. Chevron has had to expend millions of dollars in attorneys' fees and costs defending itself in the sham litigation the RICO Defendants and their co-conspirators have prosecuted in Ecuador, and exposing the conspirators' pervasive fraud in the Section 1782 proceedings. On top of the attorneys' fees and expenses, Chevron's interest in executed contracts, including the 1995 Settlement Agreement and 1998 Final Release, has also been impaired as a result of the RICO Defendants' and their co-conspirators' collusion with the Republic of Ecuador. In addition, many of the RICO Defendants' extortionate acts have presented unfair and false representations of Chevron's business practices, harming Chevron's reputation and goodwill. As alleged throughout, these harms represent the precise result intended by the RICO Defendants' misconduct. And worse, it is clear from the RICO Defendants' actions and words that they have no intention of stopping until Chevron surrenders to their extortionate demands. Without the Court's intervention, Chevron will continue to suffer significant harm at the hands of the RICO Defendants and their unlawful scheme.

338. The facts and evidence presented in this Amended Complaint are the result of many thousands of hours of work by Chevron, its attorneys, and its investigators, and have been assembled at extraordinary cost. As this Amended Complaint was being prepared for filing, however, new evidence continued to emerge, and the true nature of the RICO Defendants' criminal conduct becomes clearer and clearer. Just a few months ago, considering Chevron's request to obtain discovery directly from the ringleader of this enterprise, Donziger, the United States District Court for the Southern District of New York summarized the case as follows: "[T]he name of the game is, arguably, to put a lot of pressure on the courts to feed them a record in part false for the purpose of getting a big judgment or threatening a big judgment, which conceivably might be enforceable in the U.S. or in Britain or some other such place, in order to persuade Chevron to come up with some money. Now, do the phrases Hobbs Act, extortion, RICO, have any bearing here?"

CLAIMS FOR RELIEF

FIRST CLAIM FOR RELIEF **(Violations of RICO, 18 U.S.C. § 1962(c))** **(Against All RICO Defendants)**

339. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

340. At all relevant times, Chevron is a person within the meaning of 18 U.S.C. §§ 1961(3) and 1962(c).

341. At all relevant times, each RICO Defendant is a person within the meaning of 18 U.S.C. §§ 1961(3) and 1962(c).

The RICO Enterprise

342. The RICO Defendants and their co-conspirators are a group of persons associated together in fact for the common purpose of carrying out an ongoing criminal enterprise, as described in the foregoing paragraphs of this Amended Complaint; namely, through a multi-faceted campaign of lies, fraud, threats and official corruption, to coerce Chevron into paying billions of dollars to the RICO Defendants and their co-conspirators. These RICO Defendants and their co-conspirators have organized their operation into a cohesive group with specific and assigned responsibilities and a command structure, operating in the United States and Ecuador, funded primarily from the United States, and directed mainly from the United States. Over the years they have adapted their scheme to changing circumstances, recruiting new members to their operation, and expanding the scope and nature of their activities. While the organization of the criminal enterprise has changed over time, and its members may have held different roles at different times, the criminal enterprise has generally been structured to operate as a unit in order to accomplish the goals of their criminal scheme:

- a. Defendants Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC have been responsible for oversight of the scheme to defraud and extort Chevron, and have directed other

conspirators to take actions necessary to accomplish the overall aims of the criminal enterprise—namely, manufacturing evidence of Chevron’s liability, procuring sham criminal charges against Chevron’s attorneys, conducting a massive public pressure campaign designed to spread false and misleading information about Chevron and the Lago Agrio Litigation, and obstructing Chevron’s efforts at uncovering the truth in various U.S. court proceedings.

- b. Defendant Fajardo has been primarily responsible for prosecuting the sham litigation in the Ecuadorian courts, has served as one of the heads of the criminal enterprise in the U.S. and Ecuadorian media, and has planned and coordinated the ghostwriting of the Cabrera Report.
- c. Defendants Yanza and the Front have been primarily responsible for managing the RICO Defendants’ “private army,” exerting influence over and colluding with Ecuadorian government and court officials, and serving as media representatives for the criminal enterprise in which they have made false statements to Chevron stockholders, financial analysts, investors, and/or state and federal agencies. Yanza arranged for funding from Kohn and/or Kohn Swift for the RICO Defendants’ activities in Ecuador, and frequently caused money to be transferred out of the United States for this purpose.
- d. Defendant Selva Viva has served as a conduit for funding and otherwise furthering the RICO Defendants’ criminal enterprise.
- e. Defendants Stratus, Beltman, and Maest have been responsible for coordinating the drafting of and actually ghostwriting the Cabrera Report and other submissions to the Lago Agrio court, and for the false promotion of the Cabrera Report as independent in the media and to U.S. courts.

343. The RICO Defendants and their co-conspirators constitute an association-in-fact enterprise within the meaning of 18 U.S.C. §§ 1961(4) and 1962(c), referred to hereinafter as the “Enterprise.” Each of the RICO Defendants participated in the operation or management of the Enterprise.

344. At all relevant times, the Enterprise was engaged in, and its activities affected interstate and foreign commerce within the meaning of 18 U.S.C. § 1962(c).

Pattern of Racketeering Activity

345. The RICO Defendants conducted or participated, directly or indirectly, in the conduct, management, or operation of the Enterprise’s affairs through a “pattern of racketeering activity” within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(5) and in violation of 18 U.S.C. § 1962(c), to wit:

Pattern of Racketeering Activity: Extortion in Violation of Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951

346. At all times material to this Amended Complaint, Chevron was engaged in interstate and foreign commerce and in an industry that affects interstate and foreign commerce.

347. As described herein, the RICO Defendants have engineered a wide-ranging campaign of public attacks based on false and misleading statements, trumped up criminal charges, a threatened and actual fraudulent civil judgment, investigations by government agencies, and ongoing harassment and disruptions of business operations, and have demanded the payment of billions of dollars before these activities will cease, all with the intent and effect of causing a reasonable fear of economic loss on the part of Chevron.

348. As described herein, the RICO Defendants manufactured false evidence against Chevron and are relying on that false evidence in the sham Lago Agrio Litigation with the intent and effect of causing a reasonable fear of economic loss on the part of Chevron.

349. As described herein, the RICO Defendants conspired with the Republic of Ecuador to advance baseless criminal charges against two Chevron lawyers responsible for executing the 1998 Final Release in order to extort a payment from Chevron.

350. The RICO Defendants' actions are intended to induce fear in Chevron that the RICO Defendants will, among other things: (1) continue to pursue a scheme of misrepresentation to the great harm and public denigration of Chevron, unless and until Chevron "settles" the Lago Agrio Litigation; (2) continue to conspire with Ecuadorian officials to have Chevron's attorneys criminally prosecuted on trumped up charges; and (3) secure a fraudulent multi-billion dollar judgment against Chevron and file lawsuits in the United States and in other foreign jurisdictions seeking recognition and enforcement of the judgment. These actions, as described herein, have created a reasonable fear of harm on the part of Chevron, including fear of economic loss.

351. Accordingly, the RICO Defendants have unlawfully obstructed, delayed, and affected—and attempted to obstruct, delay, and affect—commerce as that term is defined in 18 U.S.C. § 1951, and the movement of articles and commodities in such commerce, by extortion, as that term is defined in § 1951, in that the RICO Defendants attempted to induce Chevron to consent to relinquish property through the wrongful use of actual and threatened force, violence, and fear—including fear of economic harm.

Pattern of Racketeering Activity: Extortion in Violation of New York Penal Law §§ 110.00, 155.05(2)(e), 155.42

352. Similarly, the RICO Defendants' wrongful attempts to appropriate Chevron's property by instilling fear that if the property is not delivered the RICO Defendants would perform an act calculated to harm Chevron materially with respect to its business, financial condition, and reputation violates New York Penal Law §§ 110.00, 155.05(2)(e), 155.42.

Pattern of Racketeering Activity: Multiple Instances of Mail Fraud and Wire Fraud in Violation of 18 U.S.C. §§ 1341, 1343

353. As described herein, the RICO Defendants engaged in a wide-ranging scheme or artifice to defraud Chevron, various courts of law, and the greater public concerning Chevron's purported liability for environmental harm in Ecuador by manufacturing evidence, colluding with the court expert Cabrera to submit the RICO Defendants' manufactured evidence,

and then holding out the Cabrera Report as independent and neutral when it decidedly was not. The ultimate objective of the RICO Defendants' scheme or artifice to defraud is to coerce Chevron into making a multi-billion dollar payment that will directly benefit the individual and organizational RICO Defendants.

354. In furtherance of their scheme, and as described herein, the RICO Defendants transmitted, or caused to be transmitted, by means of wire communication in interstate or foreign commerce, writings, signs, signals, pictures, and sounds, and also caused matters and things to be placed in any post office or authorized depository, or deposited or caused to be deposited matters or things to be sent or delivered by a private or commercial interstate carrier, including, but not limited to, the following:

- a. emails and website postings incorporating false and misleading statements regarding the Cabrera Report;
- b. wirings and/or mailings between and among the RICO Defendants concerning the preparation of the report in the United States that was submitted to the Lago Agrio court by Cabrera;
- c. communications directed toward U.S. state and federal government officials and regulators incorporating false and misleading statements regarding Chevron's liability in the Lago Agrio Litigation;
- d. funds transferred by Kohn and/or Kohn Swift to the RICO Defendants, with the intent that those funds be used to promote the carrying on of the RICO Defendants' criminal activities; and,
- e. electronic filing and service of court papers containing false and misleading statements intended to impede the operation of those courts.

355. Chevron incorporates by reference the attached Appendix B, which sets forth particular uses of wire and mail communications in furtherance of the RICO Defendants'

scheme or artifice to defraud that constitute violations of 18 U.S.C. §§ 1341 and 1443, including which individual defendant caused the communication to be mailed or wired, when the communication was made, and how it furthered the fraudulent scheme.

356. The RICO Defendants participated in the scheme or artifice knowingly, willfully, and with the specific intent to deceive and/or defraud Chevron into paying the RICO Defendants and their co-conspirators. The RICO Defendants knowingly and intentionally prepared a self-serving analysis of Chevron's alleged liability in Lago Agrio, and then knowingly and with the intent to deceive the Lago Agrio court, Chevron, and the general public, caused that analysis to be filed under the pretense that it was a report prepared by an independent court expert. The RICO Defendants colluded with the Republic of Ecuador to initiate criminal prosecution of Chevron's attorneys on the basis of this report and other statements the RICO Defendants knew to be false or misleading. The RICO Defendants further caused statements regarding this report, these criminal charges and other matters, which statements the RICO Defendants knew to be false or misleading, to be disseminated to the general public, to the media, and to multiple state and federal agencies and federal courts, with the intent that those statements be believed and that they form the basis for further public attacks on Chevron, investigations of Chevron, and reduction in the value of Chevron's corporate assets. The RICO Defendants knowingly engaged in the aforementioned conduct with the intent to generate fear in Chevron such that Chevron would ultimately pay the RICO Defendants to cease their conduct, under the guise of a settlement of the Lago Agrio Litigation, through satisfaction of a judgment in the Lago Agrio Litigation, or in a subsequent proceeding to recognize and enforce such a judgment.

357. The RICO Defendants' false and misleading statements have been relied on by U.S. courts, U.S. state and federal government agencies, Chevron's shareholders, investors, analysts, the media, and by the Lago Agrio court by means of its acceptance of Defendants' and Cabrera's misrepresentations and omissions and its failure to take meaningful

corrective action. Further, the RICO Defendants' false and misleading statements have caused Chevron substantial damages.

Pattern of Racketeering Activity: Money Laundering in Violation of 18 U.S.C. § 1956(a)(2)(A)

358. Defendants Yanza, Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC, have on multiple occasions, acting in their individual capacities and as agents for Selva Viva and/or the Front have knowingly caused the transportation, transmission, and/or transfer of funds to or from the United States to themselves and to Defendants Selva Viva, the Front, and other entities with the intent that those funds be used to promote the carrying on of unlawful activity, including but not limited to violations of 18 U.S.C. §§ 1341, 1343 and 1951, such as the secret preparation of the Cabrera Report, payment to Cabrera for his complicity and silence as to the report's authorship, the funding of the RICO Defendants' pressure campaigns against the Lago Agrio court and against Chevron, and collusion with the Republic of Ecuador.

Pattern of Racketeering Activity: Obstruction of Justice in Violation of 18 U.S.C. § 1503

359. Faced with implacable denials in Ecuador from Cabrera and the RICO Defendants about the authorship of the Cabrera Report, Chevron turned to U.S. courts to pursue discovery directly from the Enterprise through proceedings under 28 U.S.C. § 1782, which authorizes "[t]he district court of the district in which a person resides or is found [to] order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal."

360. In a concerted effort to thwart Chevron's attempts to uncover the truth and avoid discovery, the RICO Defendants, and their counsel, have habitually filed or caused to be filed documents, including declarations sworn to under penalty of perjury, that falsely represent that Cabrera was an independent expert and that otherwise misrepresent the RICO Defendants' interactions with Cabrera. They have done so with the full knowledge that these statements were false, as evidenced by their own internal correspondence. By making these deliberate and

strategic false representations in various pending federal judicial proceedings, with full awareness of their consequence and with the specific intent to corruptly endeavor to influence, obstruct, and impede the due administration of justice, the RICO Defendants have committed multiple instances of obstruction of justice in violation of 18 U.S.C. § 1503.

Pattern of Racketeering Activity: Witness Tampering in Violation of 18 U.S.C. § 1512

361. Pursuant to a March 2, 2010 order issued by the United States District Court for the Northern District of Georgia granting Chevron's Section 1782 application, Chevron noticed the deposition of Defendants' expert, Charles W. Calmbacher, Ph.D.

362. Fearing that Dr. Calmbacher would expose the truth about the falsified reports filed in his name by the RICO Defendants, Donziger knowingly engaged in intimidation, threats, misleading conduct, and corrupt persuasion toward Dr. Calmbacher, with the specific intent to influence, delay, and prevent Dr. Calmbacher's testimony or cause Dr. Calmbacher to withhold records, objects, documents, and testimony from an official proceeding.

363. As Dr. Calmbacher testified pursuant to the court-authorized subpoena at his March 29, 2010 deposition, Donziger contacted Dr. Calmbacher and emphatically attempted to convince Dr. Calmbacher not to testify at his deposition, warning him that testifying could pose "real problems" for him and could result in a "potential law case against" him because "they're going to go after [him] for unprofessional behavior." When asked at his deposition whether "Donziger [was] trying to convince [him] not to come and testify," Calmbacher testified: "Very much so. Very much so." Donziger tampered with Dr. Calmbacher's testimony in violation of 18 U.S.C. § 1512 in furtherance of the Enterprise's scheme.

364. The RICO Defendants also tampered with the testimony of environmental consultant Mark Quarles in furtherance of the Enterprise's scheme. In 2007, Ecuador submitted a declaration by Quarles regarding the "independence" of the Cabrera Report in a proceeding pending in the Southern District of New York, using that declaration to support the government's contention that the Lago Agrio Litigation "has proceeded in accordance with rules of procedure

under Ecuador law.” Quarles has recently admitted in sworn testimony that Donziger paid him for this affidavit, and that he would not have signed the affidavit if he had known about the RICO Defendants’ involvement with Cabrera. By not disclosing the truth about Donziger’s improper contact with Cabrera and instead deliberately misleading Quarles, Donziger knowingly engaged in misleading conduct and corrupt persuasion toward Quarles with the intent to influence his testimony in an official proceeding.

365. The RICO Defendants and their co-conspirators also tampered with the potential testimony of numerous Stratus employees in furtherance of the Enterprise’s scheme. After Chevron instituted a Section 1782 application in December 2009 seeking discovery from Stratus, Beltman, undoubtedly concerned about potentially damaging future testimony from Stratus employees, knowingly engaged in misleading conduct and corrupt persuasion toward numerous Stratus employees, with the specific intent to influence, delay, and prevent those employees’ truthful testimony or cause the employees to withhold records, objects, documents, and testimony from an official proceeding. Beltman repeatedly misrepresented to Stratus staff members that Cabrera was independent and had authored his own report. Beltman likewise repeatedly misled Stratus employees and omitted the true facts when he misrepresented that Stratus had played a limited role of technical advisor to the Lago Agrio Plaintiffs. Thus, Beltman tampered with the Stratus employees’ potential or expected testimony in violation of 18 U.S.C. § 1512, in furtherance of the Enterprise’s scheme.

Summary of the Pattern of Racketeering Activity Alleged Against Each RICO Defendant

366. Defendant Donziger has committed numerous mail and wire fraud violations, including those identified in Appendix B in which Donziger used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants’ scheme to defraud. Donziger has also engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct through numerous acts, including by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation (including making false statements to the U.S. House of

Representatives), manufacturing false evidence in the form of the Cabrera Report, procuring baseless criminal charges against Chevron's attorneys in Ecuador, colluding with Ecuadorian officials and pressuring the Lago Agrio court to ensure a negative outcome for Chevron in the Lago Agrio Litigation, and threatening and causing threats to be made to Chevron directly and through its shareholders. In addition, Donziger has engaged in obstruction of justice by filing and/or causing to be filed in multiple U.S. courts documents, including declarations sworn under penalty of perjury, falsely representing that Cabrera was an independent expert and otherwise misrepresenting the RICO Defendants' interactions with Cabrera. Donziger has committed wire fraud and engaged in money laundering by knowingly causing funds to be transported, transmitted, or transferred from the United States to Selva Viva, Yanza, the Front, and other parties with the intent that such payments would fund the RICO Defendants' criminal activity. Donziger has also engaged in witness tampering by knowingly engaging in intimidation, threats, misleading conduct, and corrupt persuasion toward Dr. Calmbacher with the specific intent to influence, delay, and prevent Dr. Calmbacher's testimony in the Northern District of Georgia. Donziger also tampered with the testimony of Mark Quarles by paying him for his affidavit and by concealing the RICO Defendants' involvement with Cabrera and the Cabrera Report.

367. Defendants the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC, through the actions of their agent Defendant Donziger, have committed numerous predicate acts, including mail and wire fraud, extortion, obstruction of justice, money laundering, and witness tampering. The mail and wire fraud violations include those identified in Appendix B in which the Law Offices of Steven R. Donziger or Donziger & Associates, PLLC used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. The Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC have also engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct through numerous acts, including by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation (including making false statements to the U.S. House of Representatives), manufacturing false evidence in the form of the Cabrera

Report, procuring baseless criminal charges against Chevron's attorneys in Ecuador, colluding with Ecuadorian officials and pressuring the Lago Agrio court to ensure a negative outcome for Chevron in the Lago Agrio Litigation, and threatening and causing threats to be made to Chevron directly and through its shareholders. In addition, the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC have engaged in obstruction of justice by filing and/or causing to be filed in multiple U.S. courts documents, including declarations sworn under penalty of perjury, falsely representing that Cabrera was an independent expert and otherwise misrepresenting the RICO Defendants' interactions with Cabrera. Also, the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC have committed wire fraud and engaged in money laundering by knowingly causing funds to be transported, transmitted, or transferred from the United States to Selva Viva, Yanza, the Front, and other parties with the intent that such payments would fund the RICO Defendants' criminal activity. The Law Offices of Steven R. Donziger has also engaged in witness tampering through Donziger's knowing intimidation, threats, misleading conduct, and corrupt persuasion toward Dr. Calmbacher with the specific intent to influence, delay, and prevent Dr. Calmbacher's testimony in the Northern District of Georgia. In addition, the Law Offices of Steven R. Donziger also tampered with the testimony of Mark Quarles by paying him for his affidavit and by concealing the RICO Defendants' involvement with Cabrera and the Cabrera Report.

368. Defendant Fajardo has committed numerous mail and wire fraud violations, including those identified in Appendix B in which Fajardo used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. Fajardo has also engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation (including in a letter to the U.S. Trade Representative), by manufacturing and causing to be manufactured false evidence, and by applying pressure to Ecuadorian government officials to procure baseless criminal charges against Chevron's attorneys. In addition, Fajardo has engaged in obstruction of justice by filing or causing to be filed in numerous U.S. courts documents,

including a declaration sworn under penalty of perjury, that falsely represent that Cabrera was an independent expert and that otherwise misrepresent the relationship between Cabrera and the RICO Defendants.

369. Defendant Yanza has committed numerous mail and wire fraud violations, including those identified in Appendix B in which Yanza used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. Yanza has committed wire fraud and engaged in money laundering by knowingly causing funds to be transported, transmitted, or transferred from the United States to Selva Viva, the Front, and other parties with the intent that such payments would fund the RICO Defendants' criminal activity. Yanza has also engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation (including in a letter to the U.S. Trade Representative), by manufacturing and causing to be manufactured false evidence, and by applying pressure to Ecuadorian government officials to procure baseless criminal charges against Chevron's attorneys. In addition, Yanza has engaged in obstruction of justice by filing or causing to be filed in multiple U.S. courts documents, including declarations sworn to under penalty of perjury, that falsely represent that Cabrera was an independent expert and that otherwise misrepresent the RICO Defendants' interactions with Cabrera.

370. Defendant the Front, through the actions of its agents Defendants Fajardo and Yanza, among others, has committed numerous predicate acts, including mail and wire fraud, money laundering, and extortion. The mail and wire fraud violations include those identified in Appendix B in which the Front used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. The Front has also committed several wire fraud violations and multiple acts of money laundering by causing funds to be transferred by Kohn and/or Kohn Swift from the United States to Ecuador, acting as a conduit of those funds, and then distributing those funds to finance the RICO Defendants' illegal scheme. In addition, the Front has engaged in numerous acts of extortion of Chevron and fraudulent conduct

by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation through a website the Front maintains as well as numerous press releases and by manufacturing and causing to be manufactured false evidence.

371. Defendant Selva Viva, through the actions of its agents Defendants Yanza and Donziger, among others, has committed several wire fraud violations and multiple acts of money laundering by causing funds to be transferred by Kohn and/or Kohn Swift from the United States to Ecuador, acting as a conduit of those funds, and then distributing those funds to finance the RICO Defendants' illegal scheme. Through the actions of its agents Defendants Yanza and Donziger, among others, Selva Viva has also engaged in numerous acts of extortion of Chevron and fraudulent conduct by manufacturing and causing to be manufactured false evidence.

372. Defendant Stratus, through the actions of its agents Defendants Beltman, Maest, and other individuals, has committed numerous predicate acts, including mail and wire fraud, extortion, obstruction of justice, and witness tampering. The mail and wire fraud violations include those identified in Appendix B in which Stratus used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. Stratus also has engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by manufacturing false evidence, in the form of the Cabrera Report and its annexes, used extensively by the RICO Defendants in the Lago Agrio Litigation and more generally in furtherance of their illegal scheme. In addition, Stratus has engaged in extortion and fraudulent conduct by disseminating false statements about Chevron through its authorship of the Cabrera Report and through its later "evaluation" of that report. Stratus also has engaged in extortion and fraudulent conduct by participating in a campaign of public attacks based on false and misleading statements about Chevron and the Lago Agrio Litigation. Finally, Stratus has engaged in obstruction of justice by misrepresenting to the United States District Court for the District of Colorado that Cabrera was an independent expert, that it was "astonished" to see "similarities" between its own work product and the Cabrera Report when Stratus actually drafted the majority of the Cabrera Report, and otherwise

misrepresenting the relationship between Cabrera and the RICO Defendants. Finally, Stratus has engaged in witness tampering by repeatedly and intentionally misleading numerous of its employees regarding Cabrera's independence, and omitting facts about its true role in drafting the Cabrera Report, with the intent that its employees would then fail to testify truthfully if called to testify as to these subjects.

373. Defendant Beltman has committed numerous mail and wire fraud violations, including those identified in Appendix B in which Beltman used or caused to be used the mail or wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. Beltman also has engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by manufacturing false evidence, in the form of the Cabrera Report and its annexes, used extensively by the RICO Defendants in the Lago Agrio Litigation and more generally in furtherance of their illegal scheme. In addition, Beltman has engaged in extortion and fraudulent conduct by disseminating false statements about Chevron through his role in drafting both the Cabrera Report and his later "evaluation" of that report. Beltman also has engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by disseminating and causing to be disseminated false statements to the public and to a member of Congress regarding Chevron, the Lago Agrio Litigation, and Cabrera's independence. Beltman also engaged in obstruction of justice by causing misrepresentations to be made to the United States District Court for the District of Colorado that Cabrera was an independent expert, that Stratus was "astonished" to see "similarities" between its own work product and the Cabrera Report when it actually drafted the majority of the Cabrera Report, and otherwise misrepresenting the relationship between Cabrera and the RICO Defendants. Finally, Beltman has engaged in witness tampering by repeatedly and intentionally misleading numerous Stratus employees regarding Cabrera's independence, and omitting facts about Stratus's true role in drafting the Cabrera Report, with the intent that its employees would then fail to testify truthfully if called to testify as to these subjects.

374. Defendant Maest has committed numerous mail and wire fraud violations, including those identified in Appendix B in which Maest used or caused to be used the mail or

wires in furtherance of the RICO Defendants' scheme to defraud. Maest also has engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by manufacturing false evidence, in the form of the Cabrera Report and its annexes, used extensively by the RICO Defendants in the Lago Agrio Litigation and more generally in furtherance of their illegal scheme. In addition, Maest has engaged in extortion and fraudulent conduct by disseminating false statements about Chevron through her role in drafting both the Cabrera Report and Cabrera's later "evaluation" of that report. Maest also has engaged in extortion of Chevron and fraudulent conduct by disseminating and causing to be disseminated false statements to the public regarding Chevron, the Lago Agrio Litigation, and Cabrera's independence. Finally, Maest has engaged in obstruction of justice by causing misrepresentations to be made to the United States District Court for the District of Colorado that Cabrera was an independent expert, that Stratus was "astonished" to see "similarities" between its own work product and the Cabrera Report when it actually drafted the majority of the Cabrera Report, and otherwise misrepresenting the relationship between Cabrera and the RICO Defendants.

375. Each of the RICO Defendants has engaged in multiple predicate acts, as described in paragraphs 366-74, *supra*. The conduct of each of the RICO Defendants described in paragraphs 345-74, *supra*, constitutes a pattern of racketeering activity within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(5).

376. Chevron was injured in its business and property by reason of the RICO Defendants' violations of 18 U.S.C. § 1962(c). The injuries to Chevron caused by reason of the violations of 18 U.S.C. § 1962(c) include but are not limited to damage to Chevron's reputation and goodwill; the impairment of Chevron's interest in executed contracts, including the 1995 Settlement Agreement and 1998 Final Release; and the attorneys' fees and costs to defend itself in objectively baseless, improperly motivated sham litigation in Ecuador and in related litigation in the U.S., including the attorneys' fees and costs associated with exposing the RICO Defendants' pervasive fraud in the Section 1782 proceedings.

377. Further, these injuries to Chevron were a direct, proximate, and reasonably foreseeable result of the violation of 18 U.S.C. § 1962. Chevron is the ultimate victim of the RICO Defendants' unlawful Enterprise. Chevron has been and will continue to be injured in its business and property in an amount to be determined at trial.

378. Pursuant to 18 U.S.C. § 1964(c), Chevron is entitled to recover treble damages plus costs and attorneys' fees from the RICO Defendants.

379. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees, and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

SECOND CLAIM FOR RELIEF
(Conspiracy to Violate RICO, Violation of 18 U.S.C. § 1962(d))
(Against All RICO Defendants)

380. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

381. The RICO Defendants have unlawfully, knowingly and willfully combined, conspired, confederated and agreed together and with others to violate 18 U.S.C. § 1962(c) as described above, in violation of 18 U.S.C. § 1962(d).

382. Upon information and belief, the RICO Defendants knew that they were engaged in a conspiracy to commit the predicate acts, and they knew that the predicate acts were part of such racketeering activity, and the participation and agreement of each of them was necessary to

allow the commission of this pattern of racketeering activity. This conduct constitutes a conspiracy to violate 18 U.S.C. § 1962(c), in violation of 18 U.S.C. § 1962(d).

383. Upon information and belief, the RICO Defendants agreed to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct, management, or operation of the Enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

384. Each RICO Defendant knew about and agreed to facilitate the Enterprise's scheme to obtain property from Chevron. It was part of the conspiracy that the RICO Defendants and their co-conspirators would commit a pattern of racketeering activity in the conduct of the affairs of the Enterprise, including the acts of racketeering set forth in paragraphs 345-74, *supra*.

385. As a direct and proximate result of the RICO Defendants' conspiracy, the acts of racketeering activity of the Enterprise, the overt acts taken in furtherance of that conspiracy, and violations of 18 U.S.C. § 1962(d), Chevron has been injured in its business and property, including damage to Chevron's reputation and goodwill; the impairment of Chevron's interest in executed contracts, including the 1995 Settlement Agreement and 1998 Final Release; and the attorneys' fees and costs to defend itself in objectively baseless, improperly motivated sham litigation in Ecuador and in related litigation in the U.S., including the attorneys' fees and costs associated with exposing the RICO Defendants' pervasive fraud in the Section 1782 proceedings.

386. Pursuant to 18 U.S.C. § 1964(c), Chevron is entitled to recover treble damages plus costs and attorneys' fees from the RICO Defendants.

387. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United

States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

THIRD CLAIM FOR RELIEF
(Fraud)
(Against All Defendants)

388. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

389. Defendants and their agents have knowingly misrepresented, omitted, and/or concealed material facts in their pleadings and representations before U.S. courts and before the Lago Agrio court, in their communications to federal and state government agencies and officials, and in their communications to Chevron, Chevron's shareholders, investors, analysts, and the media. Each and every Defendant has personally engaged in this conduct, or knew or should have known that other Defendants were engaged in it on his or her behalf. These false representations are detailed throughout this Amended Complaint and include the falsified Calmbacher reports, the true authorship of the Cabrera Report, the denial of any improper contact with Cabrera, the supposed independence and neutrality of Cabrera and his liability and damages assessment, the submission of new "expert" reports based on the fraudulent Cabrera Report, and the fraudulent endorsements of the Cabrera Report.

390. Defendants made these false representations while knowing that their misrepresentations were materially false and/or that their omissions were material.

391. Defendants further made these misrepresentations and/or omissions with the intent of obtaining favorable rulings from the U.S. and Lago Agrio courts, pressuring U.S. state and federal agencies to pursue investigations of Chevron, and propagating false information about Chevron to shareholders, investors, analysts, and the media.

392. These material misrepresentations and/or omissions have been reasonably and justifiably relied upon by Chevron, the U.S. courts, state and federal government agencies and

officials, and Chevron's shareholders, investors, analysts, and the media, and by the Lago Agrio court by means of its acceptance of Defendants' and Cabrera's misrepresentations and omissions and its failure to take meaningful corrective action.

393. As a direct, proximate, and foreseeable result of Defendants' fraud, Chevron has been harmed, including significant pecuniary, reputational, and other damages. These injuries include significant damage to Chevron's reputation and goodwill, and the attorneys' fees and costs to defend itself in objectively baseless, improperly motivated sham litigation in Ecuador and in related litigation in the U.S., including the attorneys' fees and costs associated with exposing the Defendants' pervasive fraud in the Section 1782 proceedings.

394. Defendants have engaged in the malicious, willful, and fraudulent commission of wrongful acts and, because of the reprehensible and outrageous nature of these acts, Chevron is entitled to, and should be awarded, punitive damages against each of the Defendants.

395. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—from any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

FOURTH CLAIM FOR RELIEF
(Tortious Interference With Contract)
(Against All Defendants)

396. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

397. Defendants are and have been aware of valid and enforceable contracts between TexPet and the Republic of Ecuador, including the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release. These contracts, in exchange for TexPet's remedial actions, released TexPet, Texaco, and their employees, successors, principals and subsidiaries from liability relating to environmental damage in Ecuador.

398. Defendants have intentionally caused and continued to cause the Republic of Ecuador to repeatedly breach the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release. Defendants have, through improper influence and the fabricated Cabrera Report, persuaded the Republic of Ecuador to refuse to defend Chevron's rights and those of its subsidiaries under the contracts, to improperly dictate to the judiciary that Chevron be held liable in the Lago Agrio Litigation, and to bring criminal charges against Chevron's employees.

399. The judgment from the Lago Agrio court also constitutes a severe and qualitatively different breach of the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release. Defendants have intentionally caused the Republic of Ecuador to take actions necessary to secure this fraudulent judgment.

400. As a direct, proximate, and foreseeable result of Ecuador's breaches of the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release, Chevron has been forced to defend itself against claims for which TexPet had already secured a release, which has caused significant pecuniary, reputational, and other damages. These injuries include significant damage to Chevron's reputation, and attorneys' fees and costs to defend itself and its subsidiaries against previously released claims in Ecuador, in related litigation to attempt to enforce these contracts in international arbitration, and in recognition and enforcement efforts around the world.

401. Defendants have engaged in the malicious, willful, and fraudulent commission of wrongful acts and, because of the reprehensible and outrageous nature of these acts, Chevron is entitled to, and should be awarded, punitive damages against each of the Defendants.

402. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees, and anyone else acting in concert

with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary’s or co-venturer’s assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron’s claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

FIFTH CLAIM FOR RELIEF
(Trespass to Chattels)
(Against All Defendants)

403. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

404. As set forth above, the RICO Defendants have engaged in a pattern of extortion, collusion, wrongdoing, and deceit with an intent to interfere with Chevron’s property, and the Lago Agrio Plaintiffs have benefited and will continue to benefit from the RICO Defendants’ criminal scheme through a fraudulent judgment. Through these actions, and by prosecuting a fraudulent lawsuit, manufacturing false evidence, tampering with testimony, disseminating misleading statements to courts, the public, and U.S. government officials, and otherwise engaging in the pressure campaign described in the foregoing paragraphs of this Amended Complaint, Defendants have intentionally, and without justification or consent, interfered and intermeddled with Chevron’s use and enjoyment of its funds that were intended for Chevron’s business purposes and of its business reputation and goodwill.

405. Chevron has been harmed and the use of its property has been interfered with and disturbed when its property, resources, and funds were necessarily redirected from their intended uses to defend against Defendants’ fraudulent litigation and misleading media campaign. For example, Chevron has been forced by the RICO Defendants’ intentional and wrongful conduct to expend funds and resources defending against fraudulent submissions in the

Lago Agrio Litigation, pursuing relief in the Treaty Arbitration, uncovering the RICO Defendants' fraud through discovery in the United States (discovery with which the RICO Defendants have continually interfered and which they have unduly extended, as described herein), responding to false and misleading reports in major media publications and broadcasts which have been induced by the RICO Defendants, and maintaining an ongoing effort to provide accurate information about the Cabrera Report and other aspects of the RICO Defendants' fraud to the media and directly to the public.

406. Chevron also has been harmed in that Defendants' conduct has damaged Chevron's reputation, thus interfering with Chevron's interest in the public goodwill toward it. Public awareness of and positive associations with the Chevron and Texaco brand names, and Chevron's other brand assets are among Chevron's most valuable assets, and Chevron has invested substantial resources into those brand names. The RICO Defendants have intentionally sought to reduce the value of those assets as part of their extortionate scheme. As Donziger has expressly stated, a key element of the RICO Defendants' strategy is to impose upon Chevron, "the cost of their sullied reputation, you know, in the media."

407. The harms suffered by Chevron are the direct, proximate, and reasonably foreseeable results of the Defendants' acts of intentional interference with Chevron's funds and goodwill.

408. Defendants have engaged in the malicious, willful, and fraudulent commission of wrongful acts and, because of the reprehensible and outrageous nature of these acts, Chevron is entitled to, and should be awarded, punitive damages against each of the Defendants.

409. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees, and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United

States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

SIXTH CLAIM FOR RELIEF
(Unjust Enrichment)
(Against All Defendants)

410. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

411. Defendants seek to obtain billions of dollars from Chevron through a fraudulent judgment in the Lago Agrio Litigation. Defendants have been and will continue to be unjustly enriched by benefits obtained due to the judgment itself.

412. Any property that Defendants obtain from Chevron will be acquired as a result of Defendants' tortious, illegal, and fraudulent conduct, as set forth herein, including the prosecution of the Lago Agrio Litigation itself.

413. Principles of equity and good conscience mandate that this Court prevent Defendants from reaping a multi-billion dollar windfall and any benefits arising out of the fraudulent litigation by, among other things, issuing a preliminary and permanent injunction against Defendants that enjoins Defendants, their assignees, and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

SEVENTH CLAIM FOR RELIEF
(Civil Conspiracy)
(Against All Defendants)

414. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

415. As set forth above, Defendants have committed torts against Chevron, including acts of racketeering giving rise to violations of RICO, fraud, tortious interference with contract, trespass to chattels, and unjust enrichment.

416. Defendants agreed to participate in a common scheme against Chevron. Defendants intentionally participated in the furtherance of a plan or purpose to obtain property from Chevron. In furtherance of this plan or purpose, Defendants committed overt and unlawful acts, including acts of racketeering as alleged herein.

417. As a direct and proximate result of Defendants' conspiracy, the overt acts committed in furtherance of that conspiracy, and the torts committed against Chevron, Chevron has been damaged in its business and property, and further damage to Chevron's business and property is threatened and imminent.

418. Defendants have engaged in the malicious, willful, and fraudulent commission of wrongful acts and, because of the reprehensible and outrageous nature of these acts, Chevron is entitled to, and should be awarded, punitive damages against each of the Defendants.

419. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction that enjoins Defendants, their assignees, and anyone else acting in concert with them—including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

EIGHTH CLAIM FOR RELIEF
(Violations of New York Judiciary Law § 487)
(Against Defendants Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger and Donziger & Associates, PLLC)

420. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

421. New York Judiciary Law § 487 provides, in pertinent part, as follows: “An attorney or counselor who . . . [i]s guilty of any deceit or collusion, or consents to any deceit or collusion, with intent to deceive the court or any party . . . [i]s guilty of a misdemeanor, and in addition to the punishment prescribed therefore by the penal law, he forfeits to the party injured treble damages, to be recovered in a civil action.”

422. As set forth above, Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC engaged in an intentional pattern of collusion, wrongdoing, and deceit with the intent to deceive both Chevron and multiple federal courts, including the United States District Court for the Southern District of New York and the United States Court of Appeals for the Second Circuit.

423. Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC actively participated in the preparation and filing of multiple court submissions to the United States District Court for the Southern District of New York, which included false and misleading statements about the Lago Agrio Litigation and the Cabrera Report. Defendants Donziger and the Law Offices of Steven R. Donziger knowingly caused these misstatements to be filed with the intent of deceiving this Court and Chevron. As described in paragraphs 304-10, *supra*, these misstatements were filed in opposition to Chevron’s requests for discovery under 28 U.S.C. § 1782 and in support of the Lago Agrio Plaintiffs’ and the Republic of Ecuador’s actions against Chevron seeking to terminate arbitration proceedings.

424. Donziger and the Law Offices of Steven R. Donziger tampered with the testimony of environmental consultant Mark Quarles in furtherance of the Enterprise’s scheme.

In 2007, Ecuador submitted a declaration by Quarles regarding the “independence” of the Cabrera Report in a proceeding pending in the Southern District of New York, using that declaration to support Ecuador’s contention that the Lago Agrio Litigation “has proceeded in accordance with rules of procedure under Ecuador law.” Quarles has recently admitted in sworn testimony that Donziger paid him for this affidavit, and that he would not have signed the affidavit if Donziger had told him the truth about the RICO Defendants’ involvement with Cabrera. By not disclosing the truth about the RICO Defendants’ improper contact with Cabrera and instead deliberately misleading Quarles, Donziger knowingly engaged in deceit with the intent to deceive Quarles, this Court, and Chevron.

425. As a result of the deceitful and fraudulent conduct of Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC as described herein, Chevron has been injured in an amount to be established at trial.

426. By reason of the foregoing, Chevron is entitled to monetary damages against Donziger, the Law Offices of Steven R. Donziger, and Donziger & Associates, PLLC, treble damages, and reasonable attorneys’ fees pursuant to Judiciary Law § 487.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

NINTH CLAIM FOR RELIEF
(Request for Declaratory Judgment That the Judgment by the Lago Agrio Court Against Chevron is Unenforceable and Non-Recognizable)
(Against the Front and the “Lago Agrio Plaintiffs”)

427. Chevron realleges and incorporates herein by reference each and every foregoing paragraph of this Amended Complaint as if set forth in full.

428. Chevron is entitled to a declaratory judgment that the judgment from the Lago Agrio court is unenforceable and non-recognizable pursuant to the Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201(a).

429. A declaratory judgment will not improperly increase friction between sovereign legal systems or encroach on the proper domain of a foreign court because no court has a right to impose fraudulent judgments such as the judgment of the Lago Agrio court. And an injunction

against the Defendants named in this claim and all those acting in concert with them would not bind or affect the Ecuadorian courts in any way, and necessarily does not interfere with any proceedings in any other foreign courts because, *inter alia*, no recognition or enforcement proceedings are currently pending in any such courts.

430. By this claim, Chevron seeks a declaratory judgment that the Lago Agrio judgment is unenforceable and non-recognizable, including but not limited to under the United States Constitution, federal common law, New York common law principles of comity, and/or New York's Recognition of Foreign Country Money Judgments Act (New York C.P.L.R. 5301, *et seq.*), on, among others, grounds of fraud, failure to afford procedures compatible with due process, lack of impartial tribunals, lack of personal jurisdiction, contravention of public policy, that the judgment conflicts with another final and conclusive judgment, that the proceeding in the foreign court was contrary to an agreement between the parties under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in that court, and that the judgment is an unenforceable penalty.

431. By reason of the fraudulent acts and fundamentally unfair proceedings described in this Amended Complaint that have given rise to the Lago Agrio judgment, an actual and justiciable controversy has arisen and now exists between Chevron and the Lago Agrio Plaintiffs and the Front as to whether the judgment is unenforceable and non-recognizable in the United States and establishing that Chevron's assets are safe from the Defendants' fraudulent actions and racketeering activity. The actions of the RICO Defendants on behalf of the Lago Agrio Plaintiffs whom they purport to represent have damaged and are threatening to continue damaging Chevron. Unless the controversy between the parties is resolved, the Lago Agrio Plaintiffs and the Front will continue to harm Chevron and will seek recognition and enforcement of the fraudulent judgment that the RICO Defendants have obtained on the Lago Agrio Plaintiffs' behalf.

432. Chevron has no adequate remedy at law. A declaratory action is necessary and useful in resolving and disposing of the question of whether the fraudulent Lago Agrio judgment

is enforceable and recognizable, and is the best and most effective remedy for finalizing the controversy between the parties as to this issue and for relieving Chevron from the expensive and damaging uncertainty surrounding the pending enforcement and recognition of the fraudulent judgment. Chevron is entitled to have the question of whether the Lago Agrio judgment is enforceable and recognizable settled promptly so that it may continue conducting its business without the threat of attachment, asset seizures, or other enforcement actions arising from the massive fraudulent judgment.

433. Chevron is further entitled to, and should be awarded, a preliminary and permanent injunction against the Front and the Lago Agrio Plaintiffs, their assignees and anyone else acting in concert with them from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary’s or co-venturer’s assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron’s claims against the Defendants in this action. Thus, even though they are not named defendants in this Declaratory Judgment claim, the other RICO Defendants and their co-conspirators, including the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon, make themselves subject to any injunction issued by this Court to the extent they act in concert with the defendants named in this claim—the Lago Agrio Plaintiffs and the Front.

WHEREFORE, Chevron prays for judgment as set forth below.

PRAYER FOR RELIEF

On the First and Second Claims for Relief:

1. For general damages according to proof at trial, trebled according to statute, 18 U.S.C. § 1964(c);
2. For pre-judgment interest according to statute; and

3. For Chevron's reasonable attorneys' fees and costs according to statute, 18 U.S.C. § 1964(c).

On the First through Seventh Claims for Relief:

4. For general damages according to proof at trial;

5. For equitable relief as appropriate pursuant to applicable law, including but not limited to issuing a temporary restraining order, a preliminary injunction and a permanent injunction that bars Defendants, their assignees and anyone else acting in concert with them—including potentially the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary's or co-venturer's assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron's claims against the Defendants in this action; and

6. Only for the third, fourth, fifth, and seventh claims for relief, punitive damages in an amount to be proven at trial.

On the Eighth Claim for Relief:

7. For general damages according to proof at trial, trebled according to statute, Judiciary Law § 487; and

8. For Chevron's reasonable attorneys' fees and costs according to statute, Judiciary Law § 487.

On the Ninth Claim for Relief:

9. For a declaration that the judgment against Chevron in the Lago Agrio Litigation is non-recognizable and unenforceable for each and every one of the reasons set forth herein; and

10. For equitable relief as appropriate pursuant to applicable law, including but not limited to issuing a temporary restraining order, a preliminary injunction and a permanent injunction that bars the Front, the Lago Agrio Plaintiffs, their assignees and anyone else acting in

concert with them—including the other RICO Defendants, the law firms of Emery Celli, Motley Rice and Patton Boggs, and H5 and financial backers such as Burford and Russell DeLeon—from commencing, prosecuting, or advancing in any way—directly or indirectly—any attempt to recognize or enforce the Lago Agrio judgment in any court, tribunal, or administrative agency in any jurisdiction, in the United States or abroad, including any attempt to attach or seize any Chevron or Chevron subsidiary’s or co-venturer’s assets, whether pre-judgment or otherwise, until this Court determines the merits and enters judgment on Chevron’s claims against the Defendants in this action, or until such time as this Court deems appropriate.

As to All Causes of Action:

11. For such other legal and equitable relief as the Court may deem Chevron is entitled to receive.

DATED: April 20, 2011

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

By: Randy M. Mastro
Randy M. Mastro

200 Park Avenue
New York, New York 10166-0193
Telephone: 212.351.4000

Scott A. Edelman
2029 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Telephone: 310.552.8500

Andrea E. Neuman
3161 Michelson Drive
Irvine, California 92612
Telephone: 949.451.3800

William E. Thomson
333 South Grand Avenue
Los Angeles, California 90071
Telephone: 213.229.7000

Attorneys for Plaintiff Chevron Corporation